
Una publicación de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en
Guatemala –AVANCSO–

Directora: Clara Arenas

Edición al cuidado de: Helvi Mendizábal Saravia

Diagramación: Sergio Wolford

Fotografías: Derrill Bazy, Paula Worby y Elizabeth Oglesby

Serie Cuadernos de Investigación No. 8. Guatemala, enero de 2008

Primera reimpresión con correcciones de la edición de julio de 1992: 1,000
ejemplares

Impreso en los talleres de Editores Siglo Veintiuno

Se autoriza la reproducción del contenido de esta publicación siempre que se
cite adecuadamente la fuente

ISBN 978-99922-68-55-1

Instituto AVANCSO

6a. av. 2-30 zona 1, Ciudad de Guatemala

Teléfonos 2232-5651 y 2232-4947. Fax 2232-5841

www.avancso.org.gt

Presentación

Ya es tradición que cada cuaderno de investigación de AVANCSO va precedido por una presentación. La de éste tiene necesariamente que ser especial. Quien encabezó la investigación de la que esta obra quiere dar cuenta ya no está entre nosotros. Si nada hubiera pasado, esta publicación hubiera señalado a Myrna Mack como la principal responsable del trabajo. Pero, como todos sabemos, Myrna fue asesinada. Fue de ella, sí, la responsabilidad de idear el trabajo de investigación y de dirigir todo el trabajo de campo. Pero su asesinato ocurrió cuando esta investigación entraba en su segundo período, el redaccional.

En AVANCSO creímos importante, a raíz de la brutal desaparición de Myrna, llevar esta investigación hasta su publicación. Nos parecía que se lo debíamos a Myrna y a su memoria; nos parecía también que publicarlo era hacer justicia a su trabajo y era mostrar públicamente en qué estaba trabajando Myrna cuando fue asesinada, mostrando con ello dos cosas: que Myrna estaba comprometida con una investigación seria sobre un asunto crucial para nuestro país y que esa investigación lo que quería era revelar la verdad sobre la situación de un sector del pueblo guatemalteco, el sector de los desplazados y refugiados retornados, un sector minoritario y sufriente pero un sector donde se concentraban y concentran, paradigmáticamente, las tensiones, los miedos y las esperanzas del guatemalteco de hoy.

En la redacción final participaron varias personas: Elizabeth Oglesby, Paula Worby y Rubio Caballeros, con formación en historia latinoamericana, sociología y economía, respectivamente. Los tres trabajaron junto a Myrna y bajo su dirección en el trabajo de campo. En ausencia de Myrna, el trabajo de coordinación y unificación de criterios le correspondió a Clara Arenas, directora ejecutiva de AVANCSO, con formación en economía y antropología. Otros investigadores de AVANCSO y muchas personas más prestaron apoyo en diferentes etapas del trabajo.

Un año y medio después de lo previsto aparece el Cuaderno. Y aparece en un momento particularmente significativo. Se habla de que

este año va a ser el del retorno masivo de los refugiados de México. Esperamos que la lectura de este cuaderno nos ayude a todos a entender la dificultad de este proceso social y que nunca nos deje olvidar tanto dolor y tanta sangre que precedieron a ese retorno y que impulsaron un día a que miles y miles de guatemaltecos cruzaran la frontera para salvar sus vidas. Todo es posible hoy menos el olvido.

Instituto AVANCSO
junio de 1992

Contenido

Introducción	ix		
A. Del marco inicial del estudio	ix		
1. Antecedentes	ix		
2. Justificación del proyecto	xi		
3. Objetivos del estudio	xi		
4. Método	xii		
B. De los resultados que se presentan	xiii		
1. Riqueza y heterogeneidad de los casos	xiv		
2. La inclusión de elementos de la historia reciente: un estudio sobre la guerra	xiv		
3. El aporte conceptual	xv		
 Pautas iniciales	 1		
A. Definiciones de las categorías principales	1		
1. Definiciones internacionalmente aceptadas de “refugiado” y “desplazado”	1		
2. Categorías especiales de desplazados: el caso de Guatemala	3		
3. Refugiados guatemaltecos en el exterior	4		
4. Definiciones de las poblaciones retornadas	5		
B. ¿De qué reintegración hablamos?	7		
C. Indicadores generales sobre las zonas estudiadas	8		
 Los repatriados	 15		
A. El caso de Ixcán	15		
1. Reconstrucción histórica	15		
<i>El proceso de colonización</i>	16		
<i>Las cooperativas</i>	21		
<i>La violencia y el desplazamiento</i>	24		
<i>Replamamiento de Ixcán</i>	27		
2. Los campamentos y la estancia en México	30		
			36
			43
			43
			46
			48
			52
			56
			59
			60
			63
B. El caso de Nentón	64		
1. Reconstrucción histórica	64		
2. Experiencias de reintegración	72		
<i>Los problemas de la tierra</i>	74		
<i>El ambiente para la reintegración</i>	76		
<i>Aspectos organizacionales y políticos</i>	79		
<i>Proyectos y programas: “facilitando la reintegración”</i>	82		
<i>La guerra en el ambiente de la reintegración</i>	86		
3. Sintetizando: en espera de una repatriación colectiva	87		
			89
Los desplazados	89		
A. El caso del Triángulo Ixil	89		
1. Elementos históricos	89		
<i>Una historia de la tierra</i>	89		
<i>La guerra de exterminio</i>	93		
<i>La guerra de reconstrucción</i>	96		
<i>Un nuevo impulso: 1987-1990</i>	98		
2. Un retorno en medio de la guerra	100		
<i>La recepción: el primer contacto</i>	105		
<i>El reasentamiento</i>	109		
<i>Desarrollo de baja intensidad... con un alto costo social</i>	113		
<i>Estrategias de sobrevivencia y organización social</i>	119		
3. En resumen	124		
B. El caso de Cobán	126		
1. Apuntes de la historia	126		
<i>El contexto de la guerra previo al desplazamiento</i>	130		
<i>La violencia en el municipio de Cobán</i>	134		
2. Retorno y reintegración	136		
<i>Los retornos antes de 1986</i>	136		

<i>El papel de la Iglesia: los retornos a partir de 1986</i>	139
<i>¿A dónde vamos? Ubicación, reubicación y la tierra</i>	142
<i>Divisiones en la comunidad: los que se fueron y los que se quedaron</i>	144
<i>El mundo q'eqchi': factores socio-culturales en la reintegración</i>	145
<i>El “nuevo orden” en la organización social</i>	147
<i>La situación socio-económica y presencia institucional</i>	149
3. En resumen: los retornados en Alta Verapaz	151
Consideraciones finales	155
A. En relación con el concepto de reintegración	155
B. En relación con la problemática específica en las zonas de retorno	156
C. En relación con principios que deben regir el trabajo con poblaciones que retornan	158
Anexo 1: Los acuerdos internacionales y la realidad local	163
Anexo 2: 1965-1980: El nuevo desarrollo y esperanzas en el campo	177
Anexo 3: El entorno económico del retorno	181
Anexo 4: Cronología de eventos clave en los procesos de retorno, enero de 1986-abril de 1992	185
Bibliografía	197
Índice de mapas, gráficas, cuadros y fotos	209
Siglas utilizadas	211
Epílogo: de las cartas de Myrna Mack	213

Introducción

Éste es un trabajo escrito a partir de los datos de campo recogidos por el equipo que Myrna Mack condujo a lo largo de 1989 y buena parte de 1990, dentro del proyecto que en AVANCSO se llamó “Reintegración y Desarrollo Local” en comunidades de repatriados y desplazados internos retornados, y que fue apoyado financieramente por la Fundación Ford. Al momento de su asesinato el 11 de septiembre de 1990, Myrna recién había iniciado el proceso de comentar los primeros borradores preparados por el equipo y de escribir algunas de las secciones cuyos borradores le correspondía elaborar. En otras palabras, el análisis apenas comenzaba a perfilarse.

El esfuerzo posterior ha pretendido ahondar en la interpretación de los datos hasta el punto al que esto ha sido posible, sabiéndose de antemano que no puede sustituirse a quien con el correr del tiempo se había convertido en una verdadera conocedora del tema y quien había ya comenzado a imaginar lo que podría llegar a ser el contenido del informe del proyecto de investigación.

Concluir el trabajo de Myrna ha sido, a pesar de las dificultades de la empresa pero también precisamente por eso, una manera de hacer justicia a quien incansablemente buscó a través de la investigación honesta de fenómenos apremiantes de la realidad de nuestra sociedad, contribuir a la construcción de un futuro más humano.

A. Del marco inicial del estudio

1. Antecedentes

En el contexto de los cambios ocurridos en el régimen político del país a mediados de la década de los '80, AVANCSO surgía como un esfuerzo de investigación en Ciencias Sociales que pretendía por ese medio contribuir a la reconstitución del tejido social guatemalteco. En un primer momento, el interés principal de los esfuerzos de investigación estuvo

centrado en las transformaciones que el Estado guatemalteco sufría, bajo la hipótesis de que estas transformaciones explicaban lo que sucedía en otros sectores de la sociedad.

Identificar aquellos sectores que en este nuevo momento político del país requerían atención especial para que su reconstitución dentro del tejido social fuera posible, era también una búsqueda en AVANCSO. Por eso, en 1987 se inició una primera exploración sobre el tema de los desplazados internos, de cuya situación apenas se tenían indicios. En aquel momento esa población no tenía un “status” en la sociedad civil, aunque sí lo tenía en el contexto militar del enfrentamiento que se venía dando desde 1975.

La inquietud de AVANCSO y de Myrna coincidió con la de otros académicos centroamericanos y estadounidenses que se reunieron en un proyecto regional de investigación sobre el tema en 1988, auspiciado por el Proyecto de Migraciones Hemisféricas del Centro para Políticas de Inmigración y Asistencia a Refugiados, de la Universidad de Georgetown (Washington D.C.). En Guatemala sería ésta la primera vez que los desplazados internos iban a ser considerados desde una perspectiva académica. El estudio realizado se denominó “Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala”, reflejando el eje Estado en el trabajo de AVANCSO.

Las primeras salidas de Myrna al campo para tratar de tomar contacto con la realidad de los desplazados se dieron sin dificultades, aunque también sin muchos antecedentes sobre un tema prácticamente desconocido. En muchas ocasiones, solamente los empleados estatales o de organizaciones no gubernamentales que trabajaban directamente en las zonas de retornados (Quiché, Cobán) podían interpretar las preguntas e inquietudes que un pequeño equipo formulaba, desde la oficina de AVANCSO en la ciudad capital.

Para mayo de 1989, el equipo contaba con un borrador del informe final de la investigación, el que circuló profusamente en el marco de la primera Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, CIREFCA, organizada por las Naciones Unidas y llevada a cabo en Guatemala ese mes. La población desplazada comenzó a ser reconocida en las instancias civiles nacionales e internacionales como resultado de una corriente internacional que lo favoreció, pero también porque existía un trabajo que documentaba algunos aspectos de su problemática y, al

hacerlo, le prestaba consistencia a aquello que de lo contrario pudo haber sido un concepto vacío.

Ese primer trabajo fue publicado formalmente por AVANCSO en marzo de 1990, como su Cuaderno de Investigación No. 6.

2. Justificación del proyecto

Junto con el trabajo en las investigaciones planteadas en 1988 y 1989, el personal de AVANCSO reflexionaba sobre la pertinencia de ampliar el eje principal de investigación hacia la sociedad, para que se enfocara entonces en la relación Estado-sociedad. Entre otras, la investigación sobre desplazados mostraba que la atención a la perspectiva institucional podía ser muy iluminadora, pero que resultaba insuficiente para comprender los complejos procesos sociales que se daban sobre todo en las zonas más aisladas del país.

Por otra parte, ese estudio había también tocado, aunque muy superficialmente, las condiciones críticas en las que se daba el intento de vivir nuevamente en sus comunidades que hacían los desplazados internos que retornaban de las montañas. Asimismo, se había tenido contacto en el contexto del estudio con la igualmente complicada situación de algunas familias repatriadas.

En contraste con lo anterior, desde diversas fuentes se hablaba de un retorno masivo de los refugiados en México, previsto según algunos inclusive para 1989 ó 1990. También parecía probable que continuara el flujo de retorno de las montañas del área Ixil. Se tenía la percepción de que no existía mayor experiencia acumulada por parte de los organismos de gobierno ni de las ONGs, para dar marco al trabajo que se requeriría realizar ante esa posibilidad.

Tanto por esa última posibilidad como por la evolución en el entendimiento teórico de la realidad del país que se daba en AVANCSO, resultaba vital intentar profundizar en una problemática apenas esbozada en el primer estudio: el proceso de reintegración de repatriados y de desplazados internos retornados.

3. Objetivos del estudio

Los objetivos del estudio fueron planteados desde dos perspectivas: una, académica, y otra en relación con el trabajo de organismos de desarrollo.

Desde la perspectiva académica, los objetivos eran tres:

1. Identificar el proceso de reintegración en sus dimensiones económica y social.
2. Explorar los rasgos más sobresalientes de la identidad étnica de los grupos en proceso de reintegración. (La idea era que la información recabada en relación con este objetivo sirviera como punto de partida para un estudio de seguimiento posterior).
3. Comparar la visión y perspectiva del desplazado-retornado y del repatriado con la de las políticas institucionales de los que trabajan con ellos.

El objetivo en relación con el trabajo de organismos de desarrollo fue especificado de la siguiente manera:

- Responder a la demanda de sectores de base de contar con información, análisis e interpretación sistemáticos sobre la problemática de la población repatriada y desplazada interna que ha retornado, que les permitirá trazar con mayor certeza tareas de apoyo y acercamiento con dichas poblaciones.

4. Método

Como es el caso en toda investigación que emprende AVANCSO, el método en este estudio privilegió el trabajo de campo, lo que, además, para el tema que interesaba era absolutamente necesario pues se trataba de una realidad desconocida en el país. Se trazó y llevó a cabo una estrategia de investigación según la cual se constituyeron dos sub-equipos de dos personas cada uno, el primero encargado del trabajo en relación con el tema de desplazados internos retornados, y el segundo encargado del tema de repatriados.

El trabajo de cada sub-equipo se orientó a la exploración de dos zonas de repatriados o retornados, según el tema que correspondiera, y se concentró de manera particular en una comunidad de enfoque en cada zona. La aproximación, por tanto, fue una de estudio de caso.

Para el tema de repatriados se seleccionaron las zonas de Nentón (municipio de Huehuetenango) e Ixcán (municipio de Quiché) y para el de desplazados internos-retornados se escogió trabajar la zona de Chajul (municipio ixil de Quiché) y la de Cobán (municipio de Alta Verapaz).

En total se invirtieron más de 30 semanas en el trabajo de campo, sin que las visitas fueran mayores de quince días cada una. Al regresar a la capital, cada sub-equipo transcribió las entrevistas más relevantes logradas y sus apuntes de campo, para inmediatamente entrar a discusiones de equipo tratando de adelantar análisis preliminares y de preparar la siguiente salida al campo.

Interesaba de manera especial captar en su complejidad lo que significa para estas poblaciones retornar a las zonas de origen, tanto en términos de las vicisitudes del trayecto material como de las del trayecto político-social-ideológico.

Hubo de hacerse constantemente entrevistas con funcionarios de diferente nivel en la administración pública, en ONG y en organismos internacionales. Aquí fueron de vital importancia las respetuosas relaciones profesionales que se habían establecido durante la realización del estudio anterior. También se hicieron revisiones bibliográficas y discusiones teóricas sobre los temas del refugio y el retorno, así como sobre otros temas relacionados.

¿Qué etapas se transitan en el proceso de retorno y reintegración? ¿Qué similitudes y diferencias hay en las experiencias de retornados de distinto origen y en distintas zonas? ¿Cuál es el contenido de dicha reintegración? ¿Cuándo puede considerarse que el retornado se ha reintegrado? ¿Coinciden o contrastan las visiones de las instituciones y las de los retornados sobre lo que se busca lograr a través de los proyectos de apoyo a éstos? En definitiva, ¿cuáles son las perspectivas para estas poblaciones y cómo las perciben los distintos actores involucrados? Éste era el tipo de pregunta que los sub-equipos se planteaban y trataban de responder por diversas vías a lo largo de los 18 meses previstos para completar el estudio.

B. De los resultados que se presentan

Muchas de las preguntas centrales se han mantenido como eje del informe que se presenta; otras no han podido ser abordadas ya sea porque los datos recabados no iluminaban suficiente sobre el asunto o, como sucedió con frecuencia, porque sin Myrna conduciendo el trabajo de análisis se perdió la posibilidad que suponía su experiencia acumulada y las reflexiones que había venido haciendo a lo largo del estudio. Otros asuntos cobraron especial relevancia al entrarse de lleno en la elaboración del informe, hecho que se refleja en las Consideraciones Finales.

1. Riqueza y heterogeneidad de los casos

Si algo era evidente desde las primeras discusiones sobre los resultados del trabajo de campo, era que “cada lugar es un mundo” y, en tal sentido, que la identificación de patrones más generales iba a ser una tarea difícil; el equipo, sin embargo, mantenía tal aspiración. En las circunstancias en las que se ha escrito el informe, sin la guía vital de la investigadora principal, la búsqueda de los patrones generales no siempre ha resultado fructífera. Es por esta razón que el documento se presenta todavía en forma de casos, trabajado cada uno en sus especificidades y lográndose allí, en nuestra opinión, su mayor riqueza.

La elaboración final fue mostrando que se estaba ante lo que podía verse como cuatro modelos distintos, no sólo en términos de la diferente experiencia de desplazamiento y retorno, sino en términos de la estructura social, económica, política e incluso étnica de cada lugar estudiado.

También vale la pena mencionar que, luego de intensas discusiones sobre su contenido, cada caso ha sido redactado por una persona distinta, lo que añade un elemento de heterogeneidad.

2. La inclusión de elementos de la historia reciente: un estudio sobre la guerra

El enfoque histórico fue apenas previsto en el diseño inicial del estudio, orientado, como ha quedado dicho, a lo que sucede cuando las poblaciones que han huido de sus lugares de origen regresan a éstos. Sin embargo, tempranamente en el proceso de acercamiento en el campo al tema, se hizo obvio que el significado del retorno se perdía cuando no se le unía a su antecedente lógico: la huida. Muestra clara de esto era la rapidez con la que muchos informantes pasaban de temas de la realidad presente a otros relacionados con “...cuando la violencia”. Los investigadores entonces hicieron esfuerzos por obtener, en lo posible, los elementos más salientes de la historia reciente de sus zonas de estudio, los que aparecen al inicio de la presentación de cada caso.

Una revisión de los elementos mencionados sitúa al lector rápidamente en el hecho que está, en un sentido, ante un estudio sobre la guerra, y de una guerra no siempre concluida, con lo que se trata también de un estudio dentro de la guerra. Este hecho ayuda a explicar el tipo de dato que se logra recoger, sobre todo en lo que a la experiencia de esa misma guerra se refiere. Es frecuente que el trauma de lo vivido y que la

continuidad de la atmósfera bélica impidan esclarecer todos los detalles de los hechos, o que no se pueda corroborar con otros informantes un escenario nebuloso.

Con todo, al reflexionar sobre lo narrado, debe tenerse en cuenta que, aun cuando un trabajo propiamente histórico sobre el conflicto en las zonas estudiadas está todavía por realizarse, los énfasis recogidos son los percibidos por la población que resultó afectada, con frecuencia por el solo hecho de residir en un determinado territorio.

Por otro lado, es conveniente reconocer en la reflexión que tratándose de un conflicto con características bélicas, los sesgos en tales percepciones son inevitables y que este trabajo en particular podría en algunos momentos acumular sesgos, en una u otra dirección, ya que el trabajo de campo se hizo entre poblaciones retornadas y no incluyó a los no retornados que habitaban aún en las montañas cercanas, o en México, fuera o dentro de los campamentos para refugiados, en este último caso con la excepción de una corta visita a algunos campamentos.

Finalmente, cabe señalar que para complementar la información obtenida en el campo, los sub-equipos recurrieron a fuentes escritas. Las fuentes documentales sobre los hechos de la historia reciente son escasas, en ocasiones contándose solamente con lo elaborado por uno o dos autores, razón por la cual estos autores son la base para buena parte de las reconstrucciones logradas.

3. El aporte conceptual

Desde un principio fue de vital importancia para el equipo aclarar su entendimiento de dos de los temas centrales del estudio: reintegración, por un lado, y la diversa población desplazada y retornada, por otro.

El término reintegración aparecía profusamente en la literatura revisada y, aunque en ningún caso se le definía, era claro que se le utilizaba con una amplia variedad de significados, ninguno de los cuales recogía el asunto que en el fondo quería tratarse en este estudio. Aclarar este concepto y ponerlo por escrito fue tarea ardua, cuyo resultado aún es considerado preliminar. Ha servido, sin embargo, para sistematizar alguna de la información que servía de punto de partida y para guiar la búsqueda en el trabajo de campo.

El tema de la diversidad de modalidades de desplazamiento y de retorno ha sido tratado en estudios de fenómenos semejantes en otros

países, incluso de Centroamérica. No obstante, ninguna de las clasificaciones útiles para esos contextos, resultaba operativa para el caso de Guatemala, donde las características eran otras. El equipo elaboró, entonces, clasificaciones que le permitieron ubicar con precisión la población con la que estaba trabajando y, también, aquélla con la que no estaba trabajando. Si bien, como queda dicho, tales clasificaciones tienen aquí una función operativa, son también un aporte a la discusión sobre los efectos en la sociedad civil del conflicto político-militar que ha vivido el país durante las últimas décadas.

Pautas iniciales

A. Definiciones de las categorías principales

El estudio se centró en los procesos de reintegración de los desplazados retornados, especialmente los provenientes de las montañas, y de los repatriados, en su mayoría provenientes de México. Ello, sin embargo, condujo a abordar las circunstancias del refugiado en su concepción amplia y reconocida, y las variantes que se derivan de los desplazamientos poblacionales ocurridos particularmente a finales de la década de los '70 y principios de los '80.^{1/}

1. Definiciones internacionalmente aceptadas de “refugiado” y “desplazado”

Conforme a la definición oficial y más utilizada de “refugiado,” basada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, éste es definido como la persona que:

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad... (Artículo I).

En el caso de América Latina, esta definición fue ampliada por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados en 1984, que también considera como refugiados:

a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.^{2/}

^{1/} Se ha considerado también la experiencia salvadoreña, recogida especialmente por Segundo Montes, S.J. (1985:3-5 y 119-122; 1989).

^{2/} A pesar de que varios gobiernos latinoamericanos (incluyendo Guatemala y todos los de Centroamérica) son signatarios de dicha declaración, y el concepto es tenido como la “definición regional” por ACNUR, no constituye un instrumento legal

Si bien la aplicación de estas definiciones se ha tornado problemática en la práctica, la comunidad internacional ha tenido aún más dificultad en adoptar términos y definiciones adecuados para los llamados “desplazados internos”, muchas veces más numerosos y en condiciones más difíciles que los refugiados.^{3/}

Aunque la Declaración de Cartagena expresa “*su preocupación por la situación que padecen las personas desplazadas dentro de su propio país,*” no fue sino hasta la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), en mayo de 1989, que se abrió la discusión a nivel de los gobiernos centroamericanos. El comentario del grupo de expertos convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que fue difundido en la Conferencia, refiere:

Aunque no existe una definición generalmente aceptada, se ha considerado desplazados a las personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales debido a que sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada o el conflicto prevaleciente, pero que han permanecido dentro de sus países. (CIREFCA, 1989a: punto 67).^{4/}

Sin embargo, se debe notar que la declaración final de CIREFCA no se amplió ni avanzó las definiciones para ningún grupo, dejando el *status* del

obligatorio para los Estados, sino queda a nivel de recomendación para los gobiernos. Sin embargo, es considerada un avance importante en la protección de refugiados en la región y ha recibido “*mayor prestigio por pronunciamientos de reconocimiento y apoyo*” de la Asamblea General de la ONU y varias instancias multinacionales (CIREFCA, 1989a: punto 14).

^{3/} Otro término utilizado es “Refugiado Interno” para diferenciar estas personas de otros desplazados –por desastres naturales, por ejemplo– y precisamente para destacar que tales personas calificarían como refugiados si hubieran salido de su país. Véase Clark (1989).

^{4/} En este documento se agrega el comentario: “*Las necesidades de protección y asistencia de estas personas son algunas veces tan grandes o más que las de los refugiados que han abandonado el país. Las personas desplazadas tienen derecho a ser protegidas por sus autoridades nacionales y, en particular, deben gozar de los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, seguridad y libertad, protección contra la tortura, y otros. Aun más, en situaciones de conflicto armado no internacional, ellas se benefician también de las disposiciones del artículo 3 de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 puesto que no toman parte activa en las hostilidades*” (puntos 67 y 68). Otros documentos que tratan la problemática especial de la protección y asistencia para desplazados y las leyes que pueden aplicarse son: Payne (1988) y Clark (1989).

documento de expertos, “Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina,” para que pueda “*constituir una fuente de información y orientación para todos los Estados interesados*” (CIREFCA, 1989b: punto 10).

2. Categorías especiales de desplazados: el caso de Guatemala

Uno de los propósitos del presente estudio ha sido elaborar definiciones de los grupos de población estudiados, desde la experiencia del contacto con ellos. Las mismas han de considerarse como provisionales, pues se considera que la experiencia es todavía insuficiente dada la complejidad del fenómeno del desplazamiento derivado de la violencia socio-política. Por otra parte, las definiciones propuestas tienen un carácter operativo dado que responden propiamente al contenido del estudio realizado. Con ello lo que se persigue es lograr un punto de entendimiento con el lector.

Para efectos de este estudio, se sigue sosteniendo que en el caso del desplazamiento masivo en Guatemala durante la década de los ‘80:

Los que se convirtieron en refugiados y los desplazados internos, que constituyen el grueso de los desplazados, son personas que comparten varias características en términos de quiénes son y por qué tuvieron que abandonar las comunidades donde residían: en su gran mayoría son campesinos indígenas del altiplano nor-occidental (AVANCSO, 1990:7).^{5/}

Entonces, el criterio fundamental para definir un refugiado es el mismo que se debe aplicar para determinar a los desplazados internos. En el caso de Guatemala, se puede identificar dos tipos de desplazados internos:

- **Desplazado interno disperso:** Las personas desplazadas por la violencia en Guatemala geográficamente dispersas en todo el territorio nacional. Son individuos, familias o grupos de personas que por lo general se encuentran en áreas relativamente distantes de las

^{5/} Otro término utilizado en Guatemala cubre la población más amplia de los “damnificados” o “afectados por la violencia”. Surgido como producto del proceso del Diálogo Nacional a raíz de Esquipulas II (ver Anexos 1 y 4), incluye todas las personas cuyos sufrimientos por la crisis y la violencia de los años ‘80 son más identificables, por ejemplo: desplazados, refugiados, viudas y huérfanos, familiares de detenidos-desaparecidos. Dentro de esta visión, ser desplazado es una de varias consecuencias y no excluye ser también “damnificado” en más de un sentido (siendo una viuda desplazada, por ejemplo).

comunidades abandonadas. Mientras que se ha identificado dos zonas como áreas receptoras principales de esta población (la ciudad capital y la costa sur), se reconoce también que hay desplazados que salieron de una aldea a un pueblo o cabecera del mismo departamento (AVANCSO, 1990:8).

Una de las características principales es que se resguardan fuertemente en el anonimato, lo que dificulta su ubicación y tiene efectos en el acceso a programas de apoyo, ya sean éstos explícitamente dirigidos a esta población o manejados discrecionalmente por instituciones que trabajan en el área humanitaria.

- **Desplazado interno en la montaña:** Las personas que se desplazaron entre 1980 y 1982 hacia las montañas y selvas cerca de sus lugares de residencia y, por diversas circunstancias, entre ellas el temor, continúan resguardándose en estas zonas aisladas. Con los años, se han agrupado en comunidades (a diferencia de los desplazados “dispersos”); sin embargo, por vivir afuera del ámbito de las estructuras de poder estatal son considerados por el Estado como “ilegales”.

En el período de desplazamientos masivos, hasta 1983, hubo grupos de este tipo principalmente en Quiché, Alta Verapaz, Chimaltenango y Huehuetenango y en menor grado en Baja Verapaz, Sololá, San Marcos y Petén (AVANCSO, 1990:11). A partir de 1986, dado el retorno de la mayoría, se hablaba de estos desplazados casi exclusivamente en Alta Verapaz y Quiché (en las subregiones Ixil e Ixcán).

3. Refugiados guatemaltecos en el exterior

Dada la atención internacional al problema de refugiados, existe mayor información y claridad sobre sus condiciones. Para el presente estudio, se identifican dos experiencias de refugiados, considerando principalmente los que están en México.

- **Refugiado (reconocido):** Los refugiados que han sido documentados y reconocidos por ACNUR, normalmente en un asentamiento especial (campamentos). Han sido atendidos por el programa de ACNUR e instancias nacionales en el país de refugio.
- **Refugiado no reconocido:** Debido a que no todas las personas que salieron del país bajo las mismas circunstancias llegaron a un campamento formal, existen:

aquellas personas que, si bien llenan los criterios para ser considerados como refugiados, no han sido identificadas y, por lo tanto, no se les ha reconocido formalmente dicha condición (CIREFCA, 1989a: punto 40).^{6/}

Estos refugiados no reconocidos, según la terminología utilizada en CIREFCA, se confunden dentro de una población más amplia, los “desplazados externos”, que han sido definidos como:

una... categoría especial, formada por individuos que se encuentran fuera de su país y no tienen estatuto legal o documentos autorizándoles a permanecer en el país receptor. En general, han sido obligados a abandonar su país por razones que no están claramente definidas, algunas de naturaleza económica, mezcladas con consecuencias no inmediatas de conflictos y violencia generalizada (CIREFCA, 1989a: punto 39).

Estos “desplazados externos” han sido llamados también “indocumentados”, pero en el documento de CIREFCA son claramente diferenciados de los “migrantes económicos”.

4. Definiciones de las poblaciones retornadas

- **Desplazado interno retornado:** Al abandonar su lugar de refugio, el desplazado interno en la montaña se vuelve un desplazado interno retornado. Éstas son las personas o grupos de personas que por distintas circunstancias han retornado en el marco de acciones institucionales, incluyendo los desplazados internos que se han reubicado ya sea en su lugar de origen (nacimiento), comunidad donde residían antes del desplazamiento u otro lugar.

En contraste con el desplazado interno disperso, con quien comparte el estar en situación “legal”, el de la montaña que ha retornado puede ser localizado más fácilmente; su grado de anonimato es menor, principalmente por haber retornado en el marco de un programa o con atención institucional.

El retorno del desplazado interno disperso, si bien existe, no ha sido el objeto de este estudio.

- **Repatriado:**^{7/} Según el concepto de repatriación voluntaria del ACNUR, al retornar a su país de origen, todo refugiado se convierte

^{6/} Véase también Salvadó (1988:6-7).

^{7/} El término “repatriado” no es aceptado por algunos sectores. En el caso de Guatemala, algunos de los refugiados en México han explicado que la razón por la cual rechazan el concepto de repatriación es la forma en que lo han utilizado la

en repatriado, a veces a través de mecanismos establecidos por los gobiernos involucrados. Como existen acuerdos tripartitos entre ACNUR y los gobiernos de México y Guatemala bajo los cuales ha sido promovida la repatriación formal y tutelada, los flujos de refugiados que vuelven por este medio son cuantificados. Son atendidos por instituciones especiales y conocidos como **repatriados dentro del programa** (en adelante llamados simplemente “**repatriados**”).

De acuerdo con el término empleado por la Comisión Especial para la Atención de Repatriados (CEAR), a los refugiados quienes han vuelto “por sus propios medios”, es decir, al margen del programa oficial, se les identifica como **repatriados fuera del programa**.

comunidad internacional y el gobierno guatemalteco. En palabras de refugiados entrevistados en un campamento en México: “*Nunca nos vamos a repatriar, sino que vamos a hacer un **retorno**, pues ser repatriado quiere decir que se despidió de su patria y que quiere reconciliarse, pues nosotros no nos salimos así por gusto, sino que nos corrieron*”. Hablan, entonces, de “**retornados**”, en vez de repatriados. Respetando esta posición, algunos sectores dentro de Guatemala también han cambiado su terminología. Véase por ejemplo, COINDE (1990:5).

B. ¿De qué reintegración hablamos?

Se parte de la premisa que hablar de reintegración es también hablar de las expectativas de futuro de la población que se desplazó.

Es posible fijar momentos de cambio en las expectativas del futuro de la población guatemalteca a lo largo de la historia; sin embargo, éstas, en las décadas anteriores al desplazamiento, siempre estuvieron relacionadas, de manera general, con “desarrollo”, “progreso”, “auge económico”, etc., términos todos que se refieren a la búsqueda de metas que tienen que ver con participación plena en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Durante el desplazamiento y en el proceso de retorno, como se verá adelante, las expectativas que las personas explicitan se relacionan con asuntos del momento o del día. Se propone que en la medida en que estas expectativas básicas no se cumplen, se hace menos probable que se pueda desarrollar una visión de largo plazo. Esta preocupación es la que se intenta abordar a través de la pregunta: ¿De qué reintegración hablamos?

En la documentación que existe sobre el tema, tanto la que se refiere a otros casos en América Latina, como la escasa que existe sobre el caso guatemalteco en particular, el término “reintegración” es utilizado sin explicitar su significado, pero relacionándolo con conceptos relativamente simples. Aquí se descarta utilizar el término como equivalente a “reinserción”, pues se considera que éste sugiere más una acción de re-introducción, re-implantación o re-colocación, con lo cual se estaría reduciendo la visión que se persigue trasladar. También se descarta utilizarlo como sinónimo del logro de una base económica mínima para poder funcionar de nuevo en el lugar de origen, pues esto no es más que un aspecto de lo que se quiere abarcar en el concepto.

Por otra parte, también se corre el riesgo de entender “reintegración” como el regreso a las exactas condiciones en las que se estaba inmediatamente antes del momento del desarraigo. En un punto del proceso de retorno, ésta es la meta de muchos: recuperar lo perdido. Nuestra respuesta tampoco quiere ir en esta dirección. Se busca más bien encontrar respuestas que permitan saber cuándo los que regresan dejan de ser repatriados o retornados para ser uno más, como los demás. Pero también que posibiliten la incorporación de esas visiones de largo plazo que se lograron construir en el pasado y cuya maduración se vio abruptamente interrumpida con el enfrentamiento político-militar de la última década.

Desde otra perspectiva, y así como en algunos trabajos el retorno es descrito como el proceso que en efecto es, se propone aquí que la reintegración es también un proceso, no un acto puntual después del cual ya se está reintegrado. Como todo proceso, pueden distinguirse diversas etapas, pero a diferencia de otros, en el terreno de los hechos la culminación, en este caso la reintegración, no se logra necesariamente. En otras palabras, con la decisión de retornar se da el primer paso hacia una posible reintegración, pero no existe de ninguna manera certeza de que esto será así.

En síntesis, entonces, partimos que la reintegración es un proceso que inician los desplazados internos y refugiados cuando deciden regresar a sus áreas de origen o a otras dentro del país por las que puedan optar. El proceso habrá culminado cuando los que lo inician hayan recuperado sus derechos como ciudadanos –es decir, la posibilidad de una participación plena en las esferas social, política, económica y cultural– y logrado un nivel aceptable en su calidad de vida. Obviamente, no se trata de volver al punto en el que se estaba antes del desplazamiento, el punto aquel que justificó para algunos el apoyo a un proyecto contestatario al régimen. Se trata de regresar, ser aceptado como uno más y tener la posibilidad de participar en un proyecto de desarrollo en los propios términos.

C. Indicadores generales sobre las zonas estudiadas

Para efectos de exposición, se tratará de equiparar la situación de los departamentos donde se ubican las zonas que se estudiaron con la prevaleciente en el resto del país. Para algunos indicadores, los datos se presentan por región, al no contarse con información departamental. En general, los datos se ven limitados por la insuficiencia y desactualización de la información estadística, además porque la configuración de las regiones y las especificidades en cada departamento, no permiten inferir o comprender la situación a nivel local.

Las áreas que fueron objeto de estudio están ubicadas en los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz (ver mapa 1). Los dos primeros constituyen, según la actual división político-administrativa del país, la región VII o Nor-occidental, y el tercero, junto con Baja Verapaz, conforman la región II o Norte.^{8/} La extensión territorial es, para la

^{8/} La regionalización y descentralización político-administrativa del país es un precepto que contiene la Constitución de la República emitida en 1985; se empezó a implementar en 1987 bajo el régimen demócrata cristiano.

primera de 15,778 km² (14.5% del territorio nacional) y la segunda 11,810 (10.8%). Corresponden al departamento de Huehuetenango 7,040 km², 8,738 a Quiché y 8,686 a Alta Verapaz.

La mayor parte del territorio de estos departamentos es atravesado por montañas de gran relieve; la sierra de los Cuchumatanes atraviesa Huehuetenango y Quiché,^{9/} y las de Chamá y Chuacús atraviesan Alta Verapaz. Al norte y abarcando secciones de estos departamentos se ubica

una faja extensa que se destaca por ser selvática y con pocas elevaciones: la Franja Transversal del Norte.^{10/} Dadas las características orográficas de los departamentos de estudio, se ha dividido su territorio en cuatro fajas o zonas ecológicas: tropical, subtropical, montaña tropical baja y montaña tropical, y por las diferencias de elevación sobre el nivel del mar se distinguen tres zonas climáticas denominadas: tierra caliente, templada y fría (ver mapa 2) (Messmacher et.al., 1986:301-330).

^{9/} Éste es el macizo montañoso más alto de Centro América y su punto de mayor elevación (3,800 metros s.n.m.) se ubica en Huehuetenango.

^{10/} Bajo este nombre se conoció un programa gubernamental que intentó desarrollar la región norte del país a finales de los años '70.

Por otro lado, estos departamentos presentan una variedad de ríos, destacando el Chixoy o Negro donde se ubica la mayor hidroeléctrica del país; además, en esos departamentos nacen los ríos Motagua y Usumacinta y otros que cruzan la frontera México-Guatemala como el Selegua, Lagartero, Xalbal e Ixcán, todos de gran caudal y que constituyen un recurso económico potencial.

Estos departamentos albergan el porcentaje más alto de población indígena de la República, complejizado por una variedad de idiomas mayences (ver cuadro 1 y mapa 3). Tal heterogeneidad podría apuntar hacia grandes variaciones internas en cuanto a la distribución de recursos, necesidades, actividades económicas y sociales; sin embargo, muchos aspectos les son comunes y los diferencian del resto del país.

Cuadro 1
Indicadores demográficos por región, 1989

	Población total		Población Urbana-Rural		Población según Grupo Étnico	
	Absoluta	%	Urbana %	Rural %	Indígena %	No Indígena %
Total País	8,663,859	100	34.8	65.2	37.2	62.8
II Norte	655,196	7.56	18.4	81.6	84.8	15.2
VII Noroccidente	1,153,965	13.32	15.4	84.6	84.7	15.3

Elaboración: AVANCSO en base a INE (1989b).

Informaciones oficiales dan cuenta que las regiones de estudio (VII y II) ocupan las posiciones sexta y séptima, de las ocho regiones que constituyen el país, con respecto al “desarrollo relativo”, afirmación basada en algunos indicadores socioeconómicos que se presentan en el cuadro 2.

Los datos anteriores se correlacionan con el hecho que el grado de inversión, pública y privada, en esas regiones presenta los índices más bajos del país. Así, en 1987, la región VII concentró el 7.5% de inversión pública y únicamente el 0.6% de la privada, mientras que captó el 1.0% de los préstamos distribuidos; en tanto que la región II concentró el 5.2% de la inversión pública, el 0.4% de la privada y el 12.2% de los préstamos. Para ese mismo año, del total de inversión directa del Estado, correspondió a la región VII un 9.6% y a la región II, el 6.5% del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.

El eje de la problemática de las regiones en estudio gira en torno al uso y la tenencia de la tierra, situación que coincide con la que presenta el país en general, una alta concentración y desigual distribución del recurso, manifiesta en la relación latifundio-minifundio.

El análisis de esta variable adquiere relevancia, además, en razón de que cerca de la cuarta parte del valor agregado generado proviene de la agricultura y más del 74% de la población ocupada se dedica a esta actividad en ambas regiones. El problema agrario nacional ha sido tratado ampliamente en otros documentos, por lo que aquí se presentan

únicamente algunos datos sobre concentración de la tierra, que ilustran lo crítico de la situación agraria (ver gráfica 2).^{11/}

Cuadro 2
Indicadores de nivel de bienestar y empleo por región y departamento, 1989

Región y departamento	Pobreza	Alimentación	Salud	Educación		
	% Extrema	% Desnutrida	% Mortalidad infantil	% Sin acceso *	% Nivel primario **	% Nivel medio **
Pais	59.3	37.4	55.8	42.4	39.4	83.6
II. Norte	77.8			65.3	62.0	94.6
Alta Verapaz		38.2	47.6			
Baja Verapaz		38.3	54.6			
VII. Noroccidente	80.6			63.6	55.8	94.2
Huehuetenango		51.8	37.2			
Quiché		52.9	47.2			

* De población 7 años o más. ** Déficit de cobertura.

Región y departamento	Vivienda		Empleo			
	Déficit acumulado	Con agua potable	PEA	% Desempleo abierto	% Sub empleo	Ingreso *
Pais	700,000	63.9	2,882,898	2.0	63	358.84
II. Norte	86,200	45.8	207,496	0.8	81	174.45
VII. Noroccidente	111,100	48.7	337,725	0.3	85	164.58

* Promedio familiar mensual en quetzales.

Elaboración: AVANCSO en base a SEGEPLAN-PNUD (1989), INE (1989^a) y datos de Dirección General de Servicios de Salud, Unidad de Información, 1988.

A los datos anteriores hay que agregar que hacia 1982 se estimaban 77,900 trabajadores agrícolas (jefes de familia) carentes de tierra en los tres departamentos de estudio, 25.2% del total nacional, lo que representaría para ese año aproximadamente 389,500 personas que requerían tierras.^{12/}

Por último, cabe destacar que las regiones en estudio han sido las más afectadas por la violencia y sufrieron un proceso de desplazamiento

^{11/} La clasificación de las fincas en los departamentos de estudio es de acuerdo al criterio utilizado por Alfredo Guerra Borges (1986), quien adapta la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) a las consideraciones sobre la capacidad de las fincas para absorber la fuerza de trabajo.

^{12/} En base a cifras del estudio USAID (1982), anexo 1, Cuadro 11.A: "Tierra y trabajadores carentes de tierra por departamento".

de casi tres cuartas partes de su población, al menos temporalmente, a principios de la década de los '80, cuando el conflicto armado alcanzó su nivel más alto (AVANCSO, 1990:11). El programa gubernamental de asistencia a viudas y huérfanos menores, víctimas de la violencia (PAVYH), registró sólo en el departamento de Quiché a más de 10,000 viudas y 16 mil huérfanos, y en Alta Verapaz más de 1,200 viudas.^{13/} Es en esos departamentos donde se sucedieron los hechos de violencia política sin precedentes en la historia del país.

^{13/} Secretaría de Asuntos Políticos (1989), cifras a julio de 1989. Según entrevistas realizadas con funcionarios de PAVYH, las cifras no son exactas "porque al principio muchas tenían miedo del Programa y lo veían como una manera del Ejército para tomar represalias contra ellas."

Los repatriados

A. El caso de Ixcán

1. Reconstrucción histórica

“Ixcán” es el área vasta (1,575 km²) y selvática ubicada en la parte norte del departamento de Quiché. Tiene la Selva Lacandona de Chiapas, México, como frontera norte y es bordeada por grandes ríos; al oeste, el Ixcán y el Piedras Blancas o Pescado, que sirven de límite con Huehuetenango, y el Chixoy o Negro al este, es el límite con Alta Verapaz (ver mapa 4).^{1/} Las faldas de la Sierra de Los Cuchumatanes forman su frontera al sur, donde inician las tierras templadas y frías del pueblo ixil. En agosto de 1985, Ixcán fue declarado oficialmente municipio de Quiché, ubicándose la cabecera municipal en Playa Grande.^{2/} Antes de esa fecha, la región en cuestión abarcaba partes de tres municipios: Barillas de Huehuetenango, y Chajul y Uspantán de Quiché.^{3/}

Ixcán tiene un clima caliente y húmedo con lluvias abundantes durante 10 meses del año. La altitud varía entre 50 y 200 metros s.n.m.

Atravesada por ríos caudalosos, la región fue casi deshabitada hasta los años '60; había todo tipo de fauna en un bosque extenso de maderas

^{1/} La superficie citada es del municipio de Ixcán cuando se constituyó en 1985 (Acuerdo Gubernativo No. 722-85, *Diario de Centro América*, 21 de agosto de 1985). Un informe del INTA de 1970, muestra el llamado sector “Ixcán” como parte de la Franja Transversal del Norte con un área total de 2,065 km² (INTA, 1970).

^{2/} Playa Grande actualmente abarca dos sitios: el original, a la orilla del Río Chixoy, donde está ubicada la Zona Militar No. 22, y el poblado nuevo, unos dos km. al oeste, conocido localmente como “Cantabal” por el río de ese nombre que lo atraviesa.

^{3/} Localmente, se dice que el nombre “Ixcán” antes se refería al área entre los ríos Ixcán y Xalbal. Dentro de ésta, a la parte norte se llama “Ixcán Grande” y al sur “Ixcán Chiquito”. El área al este del Río Xalbal se llamaba “Zona Reyna” (por el general Reyna Barrios), nombre todavía utilizado, especialmente en el norte del actual municipio de Uspantán.

preciosas y variedad de plantas.^{4/} En cuanto a minerales, se sabe de la existencia de hierro y cobre, los cuales no han sido explorados ni explotados. En cambio, el petróleo es objeto de atención y explotación, tanto por intereses internacionales como nacionales.

Ixcán, como las otras áreas selváticas de Guatemala, tiene una ecología sumamente delicada. Abarca distintos tipos de suelos y topografía, pero una gran parte es suelo cárstico –terrenos calizos– con una capa fina cultivable. Ésta, sin embargo, depende de la conservación de la cubierta vegetal; al perderla, las tierras dejan rápidamente de ser productivas (USAID, 1982:119-123). Descombrar la selva y sembrar maíz y frijol como se hace en las tierras frías del altiplano, no es un método sostenible en Ixcán.

El proceso de colonización

Desde principios del siglo XX, los q'eqchi' cruzaban a Ixcán desde el lado sur-este del Río Chixoy y, según algunas versiones, los ixiles históricamente consideraban esta región de tierra caliente como de cacería y reserva (Elliot, 1989:6).^{5/} En los años '40 y '50, los q'eqchi' de Alta Verapaz formaron comunidades en las faldas de la Sierra de los Cuchumatanes a inmediaciones del Río Copón.

En 1960, la mayoría de la tierra era baldía o nacional, a pesar de que algunas secciones habían sido otorgadas desde el tiempo de la presidencia de Justo Rufino Barrios (1873-1885) a los campesinos que le habían apoyado en su lucha por el poder: los “milicianos” de Chiantla y Malacatancito (municipios de Huehuetenango).^{6/} Esas tierras, sin embargo, no

^{4/} Incluyendo caoba, cedro, ébano y hule, además de chicle, palos de tinte y cacao silvestre (Gall, 1981:197).

^{5/} Lovell (1985:83) comenta que los lacandones antiguamente invadieron a los ixiles por el valle de Xacbal (Ixcán). La parte de Ixcán que colinda con el río del mismo nombre y el ahora municipio de Barillas, Huehuetenango fue también considerada como parte de la tierra caliente del pueblo q'anjob'al cuya sede histórica es Santa Eulalia (Davis, 1970). El nombre “Ixcán” posiblemente tiene su origen en el idioma q'anjob'al donde quiere decir “lugar donde nace el sol” (Parroquia de San José Ixcán, 1991).

^{6/} Según la versión de los herederos actuales, cuando Rufino Barrios entró al país desde México, encabezando el movimiento previo a la Reforma Liberal de 1871, encontró mayor apoyo entre los pobladores de estos lugares, quienes incluso le ayudaron a esconderse y salir a México después de su fracaso inicial. Su agradecimiento fue evidenciado luego con la dotación de tierras nacionales en Ixcán. Elliot (1989:7) menciona una historia parecida del área de Nebaj en la cual los ixiles, por prestar ayuda a Barrios, recibieron confirmación de la propiedad de sus tierras tradicionales.

fueron ocupadas debido al difícil acceso a la zona, y no fue sino hasta casi un siglo después, a principios de los años '60 que los descendientes de los adjudicatarios formaron las aldeas Valle Candelaria y Santa María de Candelaria (Nueva Comunidad), localizadas entre los Ríos Xalbal e Ixcán, nombradas las dos por la virgen que es patrona tradicional de Chiantla.^{7/}

Después que en 1966 un derrumbe dejó severamente dañada la aldea Chóchal, de Chiantla, Huehuetenango, el gobierno confirmó la disponibilidad de tierra en un parcelamiento en Ixcán. Los campesinos de Chóchal llegarían así a asentarse en Kaibil Balam, nombrado así por la cooperativa de su aldea en Chiantla, en 1973.

Mientras tanto, en el altiplano occidental del país, los proyectos de desarrollo promovidos por la Iglesia Católica e instituciones gubernamentales, algunos financiados por la iniciativa estadounidense “Alianza para el Progreso,” tenían un impacto fuerte en las esferas de organización cooperativa y tecnología agrícola. Los sacerdotes “Maryknoll” en Huehuetenango y Quetzaltenango y los de la orden “Sagrado Corazón” en Quiché venían acompañando su trabajo pastoral con varios proyectos socio-económicos, los que, sin embargo, tuvieron alcance limitado debido fundamentalmente a la escasez de tierra.

Después de una primera experiencia en Petén, los Padres Maryknoll, con la colaboración plena del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), organizaron los proyectos de colonización que después serían cinco grandes asentamientos en la región conocida como “Ixcán Grande,” localizada entre los Ríos Xalbal e Ixcán y que se extiende hasta la frontera con México, (Mayalán, Xalbal, La Resurrección, Selva Reyna-La Unión y Los Angeles). Éstos estaban afiliados a la cooperativa “Ixcán Grande R.L.”^{8/} La mayoría de los participantes

^{7/} Por estos años también se pobló una finca colindante llamada San Luis Ixcán por su dueño, José Luis Arenas.

^{8/} Legalmente la cooperativa empezó como una sola entidad con sede en Mayalán. Cada uno de los cinco asentamientos comprendía varios “centros” donde los cooperativistas tenían sus casas y tierras, y un pueblo central donde se concentraban los servicios comunes. En la práctica entonces, se hablaba de “las cooperativas” en la medida que cada pueblo tenía una junta directiva que fijaba los reglamentos locales y reportaba a la junta directiva central. Posteriormente, fueron inscritas como cooperativas en sí, lo cual genera confusión pues parece que siguieron funcionando al interior de la Cooperativa Ixcán Grande R.L (Parroquia de San José Ixcán, 1991).

fueron indígenas mam y q'anjob'al procedentes de las zonas de tierra fría de Huehuetenango.

Para el gobierno, este proyecto de colonización se enmarcaba dentro del programa de transformación agraria.^{9/} El descontento social en el altiplano, donde los campesinos tenían tierra insuficiente y/o de mala calidad y se veían obligados a migrar todos los años a las plantaciones en la costa sur, estaba aumentando y requería una respuesta gubernamental urgente:

La presión demográfica causada por el aumento de la población y el resultado de un régimen de tenencia de la tierra donde ha proliferado el minifundio, decidieron al Gobierno abrir a la colonización organizada, parte de las pocas extensiones de tierra cultivable que aún queda del dominio del Estado, en el Departamento de El Petén y en la FTN [Franja Transversal del Norte]. (Ministerio de Agricultura, 1979:1).

El éxito inicial del proyecto Maryknoll complementó los planes de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y del gobierno (Fledderjohn, 1982:3).

En 1970, el INTA contemplaba el proyecto de la Franja Transversal del Norte (FTN), del cual Ixcán y la política de colonizarlo formaban

“Cooperativa”	<i>Pueblo Central</i>
Ixcán Grande/Mayalán	Mayalán
Xalbal	Xalbal
La Resurrección	Santa Cruz Pueblo Nuevo (conocido también como Tercer Pueblo)
La Unión/Selva Reyna	La Unión (conocido también como Cuarto Pueblo)
Los Angeles	Los Angeles (conocido también como Quinto Pueblo)

Todos se encontraban bajo la jurisdicción de la diócesis de Huehuetenango aunque sólo Mayalán y Los Angeles y parte de La Unión se encontraban dentro del límite departamental. Después de 1985, el nuevo límite municipal dejó a Mayalán todavía dentro de la jurisdicción de Barillas.

^{9/} El breve período de Reforma Agraria en el país (1952-1954) fue revertido a partir de los gobiernos posteriores a la época revolucionaria. Así, por los años '60, la desigualdad en la tenencia de la tierra, expresada en el binomio minifundio-latifundio, se había agudizado tanto que ya prefiguraba una crisis socio-política inminente. Dada la oposición del sector terrateniente a cualquier reforma agraria, la política gubernamental se centraba en el proceso lento de “transformación agraria” que incluyó la creación de zonas de desarrollo agrario con las que se empujaba la frontera agrícola a las tierras selváticas y ociosas al norte del país. Véase AVANCSO (1988:105-108).

parte.^{10/} El INTA calculaba que cerca de 5,000 personas (868 familias) vivían ya en Ixcán (INTA, 1970) y proyectaba y promovía que la población creciera con la colonización, tanto organizada como espontánea.

Desde Santa Cruz del Quiché y sus municipios vecinos, otro proyecto de la Iglesia Católica llevaba más de 100 familias para asentarse en un parcelamiento del INTA, Santa María Tzejá, sobre el Río Tzejá. Otras comunidades se fueron formando poco a poco: con la Iglesia Católica (como Zunil); otras iglesias (Buen Samaritano); o directamente con el INTA (Santo Tomás y San José La 20, por ejemplo).

Estos primeros colonizadores enfrentaron años difíciles en la conquista de la selva. Se animaron cuando, al botar el bosque, la tierra virgen rendía maíz como nunca se habían imaginado: “*se tira una semilla y sin cuidarla crece rápido, hasta tres y cuatro cosechas de maíz al año se levantan*”.^{11/} La voz corría en las comunidades de Huehuetenango y en otras partes del país sobre la maravilla del lugar. Así, en esa década llegaron inmigrantes en grandes cantidades.^{12/} Narró un refugiado:

Porque como era tierra muy rica y da de todo pues mucha gente de tierra fría bajó a Ixcán ya sea que a agarrar parcela o para trabajar allí. Habían familias que habían agarrado una parcela y llegaron sus tres hermanos o cuatro hermanos y así, se fueron poblando.

En 1976, como parte del proyecto FTN, la USAID asignó fondos (US\$ 8 millones) y un equipo asesor al gobierno para el proyecto de

^{10/} La FTN comprendía una franja de selva virgen que se extendía desde la costa atlántica (Izabal) cubriendo el sur de Petén, hasta Ixcán y el norte de Huehuetenango. El programa contemplaba colonización y comercialización a través de una carretera que cruzara el país de este a oeste. Aunque planteado como de beneficio para los campesinos pobres, algunos militares y políticos obtuvieron extensiones grandes de tierra en el área (Painter, 1989:18 y *Le Monde Diplomatique*, 1979).

^{11/} *La Jornada* (México), “Sólo la Iglesia quedó en pie en Pueblo Nuevo-Resurrección”, 22 de abril de 1988.

^{12/} Las familias que dispusieron salir de los pueblos históricos del altiplano para arriesgarse en el nuevo “paraíso” fueron jóvenes en su mayoría y otras que querían escapar del ciclo de endeudamiento y migración a la costa sur. Después de llegar a Ixcán, varios cuentan que seguían migrando a la costa en los primeros años para avanzar en sus pagos de la parcela en Ixcán. Cuenta un repatriado que en aquel entonces (1970) se ganaban Q.3 a la semana en la costa sur ó 20 centavos diarios en la aldea en Huehuetenango. La parcela y el lote en Ixcán en un parcelamiento del INTA costaban alrededor de Q.160, mientras que en la cooperativa de Ixcán Grande costaba menos (Q.80-90 por parcela).

colonización “520” en la parte noreste de Ixcán, entre el Río Chixoy y la frontera con México, proyectado para 5,000 familias. Hasta 1980 se logró empezar el grueso del proyecto, incorporando familias q'eqchi' que ya habían llegado a la zona y otros colonizadores llevados principalmente desde la costa sur y Jutiapa (USAID, 1984:5).^{13/}

Las cooperativas

Un fenómeno común en las nuevas comunidades de Ixcán fue la implementación del modelo cooperativo. Aunque el cooperativismo guatemalteco tiene sus antecedentes en el decenio 1944-1954, fue impulsado fuertemente en los años '60 y '70 por el gobierno y la USAID (Herrera, 1982:80-81; Davis y Hodson, 1982:14). Algunos colonizadores de Ixcán, por lo tanto, ya tenían una experiencia previa (sea positiva o no) con el cooperativismo. Los sacerdotes y algunos funcionarios gubernamentales, por su parte, vieron en la cooperativa un mecanismo para asentar los elementos de espíritu de comunidad y apoyo mutuo necesarios para sobrevivir en el ambiente inhóspito de la selva virgen.^{14/}

En ese sentido, la Cooperativa Agrícola de Servicios Varios “Ixcán Grande,” fue la más avanzada. El aislamiento geográfico se iba superando con apoyo extranjero canalizado por la Iglesia; había vuelos diarios de avioneta y comunicación por radio entre las comunidades. Cada socio tenía escritura de una “parcela” (trabajadero), pero su calidad de miembro y el derecho de vender su tierra quedaban sujetos a la discreción de la cooperativa y su junta directiva.^{15/} Las tierras en

^{13/} Esta región fue denominada después por CARE y otras organizaciones con presencia allí como “área cuatro”, nombre de uso común ahora.

^{14/} La experiencia israelí de los *kibbutzim* y *moshavim* fue promovida por el INTA y elementos de ella fueron incorporados a las diversas cooperativas de Ixcán. El presidente de esta entidad, ingeniero Leopoldo Sandoval, había visitado Israel y proyectado este modelo como una manera de “conseguir en nuestro medio un desarrollo económico más acelerado y la integración social de todos los guatemaltecos”, a la vez que lo promovió como “una alternativa a la reforma agraria” (Sandoval, 1963:17).

^{15/} Una “parcela” legalmente sólo puede referirse a la tierra otorgado por el INTA en un parcelamiento adjudicado en forma de Patrimonio Familiar Agrario (INTA, 1986:15). En las cooperativas de Ixcán Grande, técnicamente, los terrenos asignados no son parcelas sino trabajaderos. Sin embargo, el término “parcela” es el usado por los campesinos de Ixcán para referirse a sus tierras de cultivo. El patrón, tanto en los

su totalidad estaban amparadas en un solo título, a nombre de la Cooperativa Ixcán Grande R.L.^{16/}

Aunque hasta cierto punto impuestas por el liderazgo de los sacerdotes que trabajaban en el proyecto, la cooperativa y la organización que generó se convirtieron en la base de todas las actividades (Manz, 1988b: 76). La tarea de conquistar la selva y el hacerlo a través de un esfuerzo conjunto es una experiencia que no fácilmente olvidan los participantes. En base al trabajo conjunto, se construyeron centros urbanos y se distribuyeron tareas consideradas comunales. Cada comunidad contenía una mezcla de idiomas y procedencias y todas tuvieron que manejar sus diferencias y dificultades.^{17/}

Los primeros años fueron dedicados a las tareas de crear la infraestructura necesaria para vivir y cosechar los granos básicos mínimos para la sobrevivencia. Experimentando con una variedad de siembras, se vio que el cardamomo daba buen resultado y gozaba en el momento de un buen mercado. En su apogeo, los productores recibían hasta Q.400 o más por quintal por el cardamomo verde, en aquel entonces equivalente a US\$ 400 (*Crónica*, 1987; Stewart, 1988:14). Los productores también secaban el cardamomo en el sol y en 1980, la presencia de secadoras de cardamomo en la región que reducían el peso del cardamomo a una cuarta o quinta parte, facilitó su transporte y aumentó su precio aún más. Aunque complementado por la producción de granos básicos, frutas, cacao, y café, para el consumo o la venta, ese “oro verde” fue el factor que facilitó el progreso económico que se dio en la zona en la década de los '70.^{18/}

parcelamientos como en las cooperativas, era asignar a cada “parcela”, un “lote” para construir la vivienda.

^{16/} Las 682 caballerías de la cooperativa Ixcán Grande comprendían tierras nacionales administradas por el INTA y tierras privadas que la Iglesia compró y entregó al INTA para que los títulos definitivos salieran del Estado (Diócesis de Huehuetenango, s.f.b). La personería jurídica de la Cooperativa Ixcán Grande fue otorgado en 1970; el título definitivo de la tierra en 1974.

^{17/} No significa que no hubiera problemas. Se habla de que existían conflictos entre el sacerdote y sus seguidores, entre los distintos dirigentes, y entre grupos de pobladores sea por “derechos de antigüedad” o por diferencias culturales o religiosas. Sin embargo, ahora la experiencia es recordada por la mayoría como ejemplar por haber comprendido intentos y logros de cooperación.

^{18/} Además de tener tierra que en un inicio producía más que en el altiplano, la mayoría tenía derecho a terrenos de hasta 400 cuerdas (17+ hectáreas). En el proyecto 520, las parcelas eran más pequeñas (10 hectáreas).

El resultado a partir de 1975-1976, especialmente para los campesinos que ya llevaban unos años, fue una prosperidad relativa que nunca antes habían experimentado. El dinero circulaba con más facilidad y la inversión en animales, mejoras de las casas y radios, fue común. Esta nueva situación económica se convertiría en un punto de referencia para los campesinos después de su desplazamiento en los años '80.

El diagnóstico del Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados (PRODERE)^{19/} diría años después:

El sector cooperativo antes de la etapa de la violencia política, se encontraba consolidado orgánicamente, y a nivel económico era un sector dinámico. Las comunidades que tenían cooperativas eran prósperas... quienes contaban con puestos de salud, tiendas de consumo ... secadoras de cardamomo, escuelas, trilladores de arroz, etc. (Gutiérrez, 1989:11).

Y un refugiado:

Ya para el [año] '75 casi todo Ixcán estaba habitada ya, con una organización avanzada en cooperativas. Y todo el producto de las cooperativas se venía a vender hasta la capital, a buen precio (entrevista diciembre de 1989).

La forma de asociación cooperativa proporcionaba a los productores la capacidad de vender los productos directamente a la capital. La idea de concentrar todas las cooperativas de Ixcán además de grupos pre-cooperativos dio como fruto la "Asociación Cooperativa de Ixcán," (ACO-IXCAN) que funcionó entre 1978 y 1980 y agrupó a 36 miembros, si bien no logró su personería jurídica. Según un ex-dirigente de esta asociación, hubo un plan del gobierno para reemplazar el esfuerzo autónomo de las cooperativas por la gubernamental Coordinadora Nacional de Cooperativas (hoy el Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP). Su representante en el área pretendía organizar a las cooperativas, pero "a su manera," y ejerció presión contra los dirigentes para que no participaran en ACO-IXCAN.^{20/}

En el caso del proyecto INTA-AID "520", también hubo la intención de promover el sistema cooperativo. Sin embargo, no se tuvo el mismo éxito. Según el análisis del proyecto presentado por la USAID, en parte fue el Ejército el que obstaculizó su libre desarrollo:

^{19/} Véase Anexo 1 "Los Acuerdos Internacionales y la realidad local", para una explicación sobre esta instancia.

^{20/} Entrevista en campamento de refugiados en México, diciembre de 1989. También véase Painter (1989:149).

Las actividades del INACOP para promover la organización cooperativa en el área del proyecto han sido limitadas debido a las presiones adversas del ejército. Las cooperativas aparentemente son vistas como potencialmente "subversivas" (USAID, 1984:27, traducción nuestra).

Además, según la evaluación, el proyecto "520" no tomaba en cuenta que algunos habitantes llegaron con malas experiencias o impresiones negativas del cooperativismo, lo que reducía su interés en el proyecto. Tampoco, según la evaluación, se hubiera podido anticipar que el Ejército iba a "cerrar" el proyecto por una temporada en 1982 y que se iba a sufrir la "pérdida" de colonizadores durante la ocupación militar, limitándose así los planes de desarrollo y trabajo en comunidad (USAID, 1984:8). La infraestructura que se levantó en el área fue toda realizada por el INTA, bajo un esquema más "paternalista" que participativo (USAID, 1984:17).

La violencia y el desplazamiento

La prosperidad relativa obtenida después de años de trabajo no duró mucho tiempo, ya que en 1982 se abandonaron las comunidades y las riquezas se echaron a perder en la selva. En palabras de la Iglesia: todo "*el proceso iniciado en Ixcán en los años sesenta fue truncado violentamente. Muchas personas fueron muertas y la mayoría se vio obligada a buscar refugio en México para salvar la vida*" (Diócesis de Huehuetenango, 1989:3).

Aunque la huida masiva y el abandono de las comunidades no se dieron sino hasta principios de 1982, los colonizadores de Ixcán recibieron golpes constantes a partir de 1975. En 1972 un núcleo de guerrilleros había penetrado la selva desde México y vivía allí, tomando contacto con la población y esperando construir una base de apoyo popular (Payeras, 1981). A raíz de la muerte del finquero José Luis Arenas, en Chajul, en junio 1975, la primera acción armada por la cual se responsabilizó públicamente el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), el Ejército de Guatemala desplegó su fuerza en la zona. Poco después, unos 30 miembros de las cooperativas de Ixcán fueron secuestrados (Inforpress, No. 175, 1976:14).

Un golpe fuerte para la organización de las cooperativas de Ixcán Grande fue la muerte del Padre Guillermo Woods, sacerdote Maryknoll que llevaba siete años trabajando en el proyecto. Su avioneta explotó en un incidente poco claro en noviembre de 1976, después de haber sufrido amenazas; el otro párroco que radicaba en Ixcán había salido del país dos meses antes temiendo por su vida (Manz, 1988b:77).

En esa época, el Ejército estableció nuevos destacamentos en Ixcán, en varios pueblos incluyendo los de Ixcán Grande y especialmente después de la muerte del Padre Woods, comenzó a ofrecer a las cooperativas ayuda y vuelos aéreos.^{21/} A pesar de esta muestra de voluntad, una serie de hechos violentos seguían afectando la zona. La interpretación de algunos campesinos era que el Ejército quería controlar su desarrollo a través de gestos de apoyo, pero que estaba dispuesto a usar la fuerza cuando lo primero fracasaba. Según un refugiado:

El Ejército empezó a poner un control más fuerte sobre las cooperativas y decía que toda la organización que había alcanzado no era por ser campesinos trabajadores sino porque la guerrilla estaba dando ideas y todo. ...[y luego] viendo el Ejército que no logró su objetivo de esa manera entonces hostigó pues, matando a los líderes de la cooperativa, a los líderes religiosos, a los promotores de educación, o sea a cualquier persona que ya podía formar algún grupo para reclamar su derecho.^{22/}

Entre 1976 y 1980 llegaron a la Ciudad Capital noticias de represión selectiva y militarización generalizada en distintos lugares de Ixcán.^{23/}

^{21/} Según entrevistas con residentes de Ixcán, en 1976 la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) había suspendido las licencias de aviación del Padre Woods y los pilotos asociados con el proyecto, creando así la oportunidad para que la FAG desarrollara esta función.

En *Inforpress Centroamericana* (1977), se señala que a partir de agosto de 1976, la FAG empezó a transportar las cosechas de Ixcán a un precio subsidiado como parte de sus actividades de “Acción Cívica”. Igualmente una publicación del Ejército describe que a partir de mayo de 1976, la FAG recibe “*la orden de colaborar en la Zona Reina [sic]*” (con vuelos, acción cívica, jornadas médicas, etc.), presentando con mucho optimismo la situación de las cooperativas (*Revista Militar*, 1977).

En una explicación posterior, el general Héctor Alejandro Gramajo Morales (ministro de la Defensa entre 1987 y 1990) comentó: “*hemos llegado a la conclusión que eran pueblos (las cooperativas) que vivían artificialmente, porque dependían del Padre Woods, quien con su avión, llevaba y sacaba personas y alimentos de esas comunidades que ensayaban un nuevo tipo de vida. Ese ensayo del Padre Woods despertó los celos del gobierno de esa época y en un acto de demagogia política, empezó a llevar en masa a los campesinos en avión y sacar sus productos por la vía aérea.*” citado en *La Hora*, “Ejército afirma que da apoyo a repatriaciones,” 11 de febrero de 1989.

^{22/} Entrevista en diciembre de 1989.

^{23/} Por ejemplo, en 1977, se observaban “*intensos movimientos de efectivos militares en la selva... Equipados con modernos fusiles ametralladoras... de fabricación israelita y equipos de radio-comunicación*” (*Inforpress Centroamericana*, No. 291, 1977:11). En

Atribuida al Ejército, esta represión se explica por la convergencia de dos hechos. Por un lado, la presencia activa de la guerrilla había atraído aceptación y apoyo entre los pobladores y sus combatientes se movilizaban libremente en las comunidades. Recuerda un repatriado:

De las cosas que pasaron en nuestro pueblo es que la gente empezaron a morir asesinadas por el Ejército después que llegó la guerrilla. Y sí, la guerrilla llegó a nuestro pueblo. Vinieron y hablaron con nosotros. Luego se fueron y ya no volvieron más. Pero a causa de eso nos quisieron acabar.^{24/}

Por otro lado, existía la sospecha histórica del Ejército sobre el movimiento cooperativo por su intento de operar independientemente. El grado de cohesión alcanzado por las cooperativas y las comunidades les permitió defender sus intereses, en la medida de sus posibilidades, actos que de alguna manera fueron interpretados como una amenaza por el Estado. Se oponían, por ejemplo, a los desalojos ilegales de campesinos que se produjeron a raíz del proyecto de la FTN.^{25/}

A finales de 1981, el Ejército se retiró de la zona sin aviso. “*Hubo tres meses de tranquilidad,*” recuerda un repatriado, cuando la gente pensaba que se había acabado la violencia.^{26/} Pero el Ejército regresó en una operación de “limpieza” que devastó el área:

1978, tropas “*pertrechadas con equipo de combate*” reforzaron varios destacamentos militares en Ixcán. La fuerte movilización parecía corresponder a la presencia guerrillera, sin embargo, el Ejército declaró que fue para la “protección” de los cooperativistas (*Inforpress Centroamericana*, No. 234, 1978:8).

^{24/} Repatriado de la cooperativa La Resurrección, entrevistado por *La Jornada* (México), “Sólo la Iglesia quedó en pie en Pueblo Nuevo-Resurrección”, 22 de abril de 1988.

^{25/} Al parecer, la mayoría de estas expulsiones de campesinos fueron de tierras deseadas por altos oficiales del Ejército y gobierno y tuvieron lugar en sectores de la FTN al este de Ixcán. Para un ejemplo, véase Flederjohn (1982:40-41).

Había otros factores por los cuales las posiciones de las cooperativas no fueron bien vistas; en 1980 la cooperativa de Ixcán Grande habría ganado un juicio contra la compañía petrolera estadounidense Petromaya por daños causados por exploraciones en sus tierras, logrando una indemnización según Manz (1988b:76).

^{26/} Actas archivadas en INACOP recogen que: en noviembre de 1981, un capitán llegó a las cooperativas para ordenar la creación de grupos de “auto-defensa.” Poco después se hace constar la llegada por sorpresa de la guerrilla, que hizo un mitin. En diciembre, los parcelarios de Mayalán estaban dejando de ir a sus parcelas y habían avisado de la destrucción del destacamento.

Entre febrero y abril de 1982, el área quedó prácticamente despoblada. Aproximadamente 300 soldados entraron a cada aldea, quedando ahí entre tres días y una semana. En lugares como La Trinitaria y Cuarto Pueblo, donde la población desafortunadamente estaba presente cuando el ejército llegó, todos fueron masacrados. En la mayoría de casos, los habitantes huyeron antes que llegara el ejército, dejando sus aldeas abandonadas para ser quemadas (Manz, 1988a:133).

El movimiento se inició en el sureste y avanzó hacia el Río Ixcán, con lo que aquéllos que inicialmente se habían refugiado en sus parcelas corrían el riesgo de ser descubiertos. En mayo y junio, el Ejército continuaba la quema de aldeas y la captura y/o matanza de personas escondidas. Comunidades enteras huyeron en grupos –familiares o más grandes– saliendo con sólo minutos de aviso; con frecuencia, miembros de una familia se separaban en el momento, pasando luego años sin saber uno del otro. Mientras que unos caminaron entre 8 y 10 días en línea recta hacia la frontera con México, otros permanecieron hasta un año escondidos en la selva antes de cruzar.^{27/}

Entre finales de 1982 y principios de 1983, un buen número de refugiados llegó diariamente a campamentos en la Selva Lacandona. La mayoría de los refugiados provenientes de Ixcán pasó por uno de los tres campamentos grandes establecidos allí: “Puerto Rico”, “Chajul” e “Ixcán”. Los pocos vecinos mexicanos residentes y las autoridades mexicanas e internacionales se vieron sobrecargados con la tarea de apoyo. El aislamiento físico les hacía depender de un abastecimiento por aire.

A pesar del sistema de organización y ayuda mutua puesto en práctica por los refugiados, su estado de salud se deterioró a tal punto que en el campamento “Puerto Rico,” que llegó a tener un máximo de 6,000 ocupantes, se registró entre noviembre de 1982 y enero de 1983 la muerte de 90 niños y 10 adultos (Aguayo, 1985:33).

Replamamiento de Ixcán

Retomaremos adelante el desarrollo de la situación de los refugiados una vez en México; aquí examinaremos qué sucedió en Ixcán durante su larga ausencia.

^{27/} Los detalles de la huida, que varió entre distintas familias y comunidades fueron recopilados a través de entrevistas con repatriados. Véase también Manz (1988a, 1988b) e IGE (1987).

Después del desplazamiento masivo, en 1983-1984, Ixcán era una zona todavía conflictiva. Algunos lugares fueron abandonados en forma temporal, pero rápidamente repoblados, en especial en el área del Proyecto 520 y en Ixcán Chiquito.^{28/} Sus residentes se habían desplazado a otros pueblos o a la selva, pero no habían cruzado la frontera a México. La decisión de no huir del país era explícita, pero para los desplazados en la selva era difícil soportar las condiciones y varios se entregaron al Ejército. Éste estableció un campamento para desplazados en Playa Grande a la orilla del Río Chixoy y mantuvo otros detenidos en la Zona Militar, en la que, según informes de personas que estuvieron allí, las condiciones eran difíciles y de represión (Manz, 1988b:79). Mientras que esperaban regresar a sus aldeas, los desplazados dependían completamente de la ayuda alimentaria distribuida por el Ejército (PAVA, 1984:13).

Con el establecimiento de una zona militar en Playa Grande (mayo de 1983) y la totalidad del área declarada un Polo de Desarrollo, el Ejército y el INTA empezaron a impulsar el repoblamiento, en el que participaron, tanto personas desplazadas del lugar como nuevos colonos llevados desde otras áreas del país.^{29/} En 1983 y 1984, los repobladores fueron acompañados por el Ejército en las etapas de retorno y reconstrucción.

El repoblamiento de las aldeas se dio bajo la lógica de reestructurar los espacios, tanto físicos como socio-políticos, al igual que en los demás Polos de Desarrollo en el país. Hasta hoy persiste la configuración nuclear de las aldeas reconstruidas, así como la ligazón de las patrullas civiles y las autoridades locales con la zona militar.

^{28/} Estas áreas fueron menos afectadas directamente por la violencia. El área “520” la experimentó en el mes de febrero de 1982 cuando unas 400 familias abandonaron el proyecto (USAID, 1982:39). Especialmente afectadas fueron las aldeas Santa Clara, El Quetzal, y La Trinitaria, (que quedaron abandonadas) pero según USAID la situación ya mejoraba a partir de marzo de 1982 (USAID, 1982:39). Ixcán Chiquito fue poco afectado, pues está situado al sur de donde llegó la secuela de una ola de violencia registrada en abril y mayo de 1982.

^{29/} En el marco del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, el gobierno empezó a establecer los Polos de Desarrollo después del golpe de Estado de marzo de 1982. Éstos se concibieron como zonas de prioridad para la reconstrucción en las áreas de conflicto e incluyeron a Playa Grande y el área ixil en Quiché, Chisec en Alta Verapaz y Chacaj en Huehuetenango. En los Polos se concentraban las instituciones estatales y las aldeas, llamadas “modelo”, eran reconstruidas y sus residentes reasentados bajo nuevos patrones de ubicación, organización, movilización etc. Véase AVANCSO (1988:4-5, 1990:19-22). Para el Ejército, los Polos de Desarrollo tuvieron vigencia como tales hasta diciembre de 1985 (Ejército de Guatemala, 1991:6).

El Ejército impulsó el asentamiento de nuevas personas –campesinos pobres sin tierra– en las tierras de quienes estaban en México o escondidos en la selva. Esta política habría de crear un escenario para serios conflictos posteriores.

La mayoría de los nuevos inmigrantes fueron enganchados en otros departamentos por el INTA o directamente por el Ejército. Otros supieron por sus familiares en Ixcán (sea los colonizadores originales o nuevos) que había tierras abandonadas. Creyeron que la tierra iba a ser suya; sin embargo, para muchos quedaba la duda de si los “antiguos dueños” podrían regresar.^{30/}

El primer asentamiento repoblado de los cinco de la cooperativa Ixcán Grande fue Xalbal, en enero de 1984. El Ejército reunió a las familias que habían huido al municipio de Barillas, Huehuetenango, organizándolas para retornar al Ixcán y, en una larga caminata, descendieron de nuevo de la sierra a la selva. En Xalbal, además de nuevas personas traídas de otras áreas del país, se reunieron originarios del lugar (“antiguos”) y desplazados de comunidades cercanas en las que todavía no se permitía su restablecimiento.

Kaibil Balam quedó abandonado hasta 1985, cuando su repoblación fue organizada por el INTA. Se hizo un llamado por radio invitando a los parcelarios a regresar; al no haber mayor respuesta, se organizó un grupo de 70 familias, todas “nuevas” con excepción de unas pocas, para entrar.

En las dos comunidades, la descripción sobre las dificultades de los primeros meses es generalizada: la reconstrucción bajo la supervisión del Ejército, la formación y práctica permanente de la patrulla civil, los ataques de la guerrilla y las innumerables restricciones para movilizarse e incluso, cultivar.^{31/}

La base legal para la repoblación con nuevos ocupantes según el INTA era los artículos 114 y 115 del decreto 15-51, que señala que la tierra bajo su jurisdicción será revertida al Estado si fuera abandonada voluntariamente por más de un año. La defensa de los que salieron de

^{30/} En los campamentos de desplazados en el municipio de Cobán, los militares dijeron que sus ocupantes podrían tener tierra propia en Ixcán. Según la gente misma, se dio una oposición exitosa al traslado, en la que el razonamiento fue lo lejano del lugar y el no querer ocupar tierras cuyos dueños existían.

^{31/} Según entrevistas en Xalbal, en 1984 tuvieron que hacer el servicio de patrulla 24 horas cada tres días, más los “trabajos comunales” (junio de 1989).

su tierra en aquella época siempre ha sido que la salida fue todo, menos voluntaria.^{32/}

2. Los campamentos y la estancia en México ^{33/}

Entre 1981 y 1983, al estado de Chiapas, México, llegó una gran cantidad de guatemaltecos buscando refugio; provenientes no sólo del área de Ixcán, sino de Petén, Huehuetenango y San Marcos –o sea, departamentos de Guatemala fronterizos con México. En un primer momento (1981) el gobierno mexicano rechazó a los guatemaltecos que huyeron a su territorio y la mayoría de los que entraron ese año fue deportada por las autoridades mexicanas (Aguayo, 1985: 91). Después, viendo la escala de los flujos de campesinos que seguían llegando, la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR, ya creada por el gobierno mexicano en julio de 1980 en el marco de los primeros flujos de refugiados salvadoreños) empezó, con el apoyo del ACNUR, a recibir y atender a los refugiados guatemaltecos. Este último abrió una oficina en México D.F., en marzo de 1982. En julio de 1990, fue promulgada nueva legislación aprobada por consenso en la Cámara de Diputados y Senadores para incluir la figura jurídica de “refugiado” en la Ley General de Población, dando por primera vez un reconocimiento legal a esta población.^{34/}

^{32/} El mismo INTA define el “*abandono voluntario o inmotivado*” claramente como “*cuando sin que medien razones o motivos suficientes y comprobados, éste abandona el fundo por más que un año*” (INTA, 1986).

^{33/} En este apartado se habla de la experiencia de los refugiados en general, no sólo de los de Ixcán; las observaciones son también aplicables a la discusión de la experiencia de Nentón, Huehuetenango, que se encuentra adelante.

El resumen histórico que sigue, donde no está anotado, es tomado de las fuentes siguientes: Aguayo (1985); Aguayo y Fagen (1988); Aguayo y O'Dogherty, (1986); y Manz,(1988a).

Muchas de las impresiones de la situación en los campamentos y la perspectiva de los refugiados son citas de una visita que hizo parte del equipo investigador en diciembre de 1989. Se realizaron entrevistas grabadas, que luego fueron transcritas, en cuatro campamentos del estado de Chiapas y tres de Campeche, los dos estados con mayor número de refugiados.

^{34/} (Estados Unidos Mexicanos, 1992). México, a pesar de una tradición larga de apoyo al asilo político, no ha firmado la Convención de la ONU de 1951 y su protocolo sobre el estatus de Refugiado. Entró en contradicción entonces al haber creado una institución de apoyo a refugiados (COMAR) cuando “refugiado” no existía en la ley mexicana (Aguayo, 1985:89).

Como se mencionó en otro apartado, los campamentos establecidos en la Selva Lacandona eran especialmente precarios por falta de asistencia adecuada. Al principio, por la ausencia de programas oficiales, los refugiados, tanto en los campamentos como aquéllos dispersos en comunidades, dependían de la solidaridad y del apoyo amplio otorgado por la Iglesia Católica (a través de la diócesis de San Cristóbal de las Casas) y por los mismos campesinos mexicanos.

Se estima que en 1984 por lo menos 150,000 guatemaltecos habían llegado al territorio mexicano, habiéndose ubicado 46,000 de ellos en campamentos o poblados donde fueron registrados por el ACNUR. En el mismo año, después de repetidas incursiones de las fuerzas armadas de Guatemala en los campamentos fronterizos –las que dieron como resultado muertos y heridos–; COMAR llevó a cabo un plan de reubicación de los refugiados asentados en el estado de Chiapas.^{35/} Otros factores que incidieron en la reubicación fueron las presiones internas en México de no fomentar la estancia de miles y miles de refugiados en el estado eminentemente indígena de Chiapas, considerado el menos estable políticamente, y las tensiones con el gobierno de Guatemala causadas por la presencia de refugiados en la línea fronteriza. (Aguayo y O'Dogherty, 1986:268).

El traslado a nuevos campamentos en los estados de Campeche y Quintana Roo empezó en julio de 1984, en medio de presiones fuertes a los refugiados quienes en general se oponían a trasladarse a áreas lejanas de sus lugares de origen y desconocidas por completo. Al final, en algunos casos después de acciones violentas de desalojo y meses de espera en puntos intermedios, unos 18,000 se asentaron en cinco campamentos nuevos en los Estados mencionados.^{36/}

El miedo y la inseguridad que sentían muchos refugiados frente al traslado a una situación tan distinta, provocó un flujo de retornos a

^{35/} Aun habiendo cruzado la frontera, la violencia no cesaba para los refugiados; entre 1982 y 1984 fueron documentadas más de 60 incursiones de las fuerzas armadas guatemaltecas a las áreas donde los refugiados estaban asentados (Earle, 1988:263). El incidente que coincidió con el anuncio oficial de la reubicación, fue la incursión al campamento “Chupadero” en abril de 1984, en la que murieron siete refugiados procedentes de Nentón.

^{36/} Manz (1984:50-52, 1988a:151-153) documenta el proceso de la reubicación y los abusos por parte de las autoridades mexicanas, que incluyó hasta la quema de las viviendas del campamento “Puerto Rico”. Clay (1984:53-54) describe el traslado y condiciones al llegar a Campeche.

Guatemala en 1984. Un número no conocido simplemente cruzó la frontera de nuevo a sus comunidades, tal vez presentándose ante alguna autoridad local. Ése fue el caso casi exclusivamente de Huehuetenango (ver el caso Nentón adelante); los que habían salido de Ixcán y retornaron en ese momento, optaron por ir a sus pueblos de origen también en Huehuetenango (a Todos Santos, por ejemplo).^{37/}

En 1989, el registro de refugiados de COMAR y ACNUR era de 41,500 en total; la reducción en el número toma en cuenta los repatriados y a otros que salen hacia otras comunidades dentro de México y que dejan de acudir a los programas oficiales. Por otro lado, más de 13,000 niños han nacido en el exilio, como refugiados, pero con derecho a escoger su nacionalidad (mexicana o guatemalteca) al cumplir los 18 años.^{38/}

En 1989, dado que la gran mayoría de refugiados no esperaba repatriarse en un futuro inmediato, el gobierno mexicano extendió la política de promover la “autosuficiencia” de los refugiados reconociendo su “*prolongada situación precaria*” en México. Sin embargo, el énfasis del programa no es en su “integración” definitiva pues, se argumenta, los refugiados todavía “*consideran la hora de la repatriación*” (Estados Unidos Mexicanos, 1990:1-2).

En Chiapas, los refugiados quedaron dispersos en pequeños campamentos y asentamientos (entre 25 y 2,600 personas en cada uno). La lenta dispersión de los refugiados amplió el número de campamentos de 64 “*hace unos años*” hasta 127 “*puntos de distribución y asistencia*” en 1990 (Estados Unidos Mexicanos, 1990:7). El plan gubernamental en 1990 contemplaba su concentración en menos asentamientos, siempre en el estado de Chiapas (ver cuadro 3).

Chiapas, según el mismo gobierno: “*se caracteriza por un problema global de tenencia de tierras... y la degradación de las mismas, en un contexto general de campesinos sin tierra, viviendo en situación de extrema pobreza*” (Estados Unidos Mexicanos, 1990:6). Los refugiados, entonces, no han tenido acceso seguro a la tierra (con excepción de algunos proyectos de la Iglesia Católica) y dependen de la asistencia

^{37/} En Ixcán, la situación del conflicto armado continuaba aguda a 1984 y los refugiados lo sabían. “*No regresamos (en 1984) porque pensábamos por la situación, teníamos el mismo miedo*” (entrevista con un repatriado en Ixcán, junio de 1989).

^{38/} *Excelsior* (México), “Repatriación de guatemaltecos: COMAR”, 3 de abril de 1990.

permanente de las instituciones nacionales e internacionales y de trabajos temporales en ejidos o comunidades vecinas. Los refugiados en Chiapas necesitan un permiso migratorio para salir más allá de las vecindades de sus campamentos.

Cuadro 3
Ubicación de refugiados reconocidos oficialmente en México, 1990

Estado	Refugiados	No. de campamentos
Chiapas	23,000	127
Campeche	12,500	4
Quintana Roo	6,000	4
Total	41,500	135

Elaboración: AVANCSO en base a datos de Estados Unidos Mexicanos (1990). Sin embargo el total más citado es la cifra de 43,000 refugiados.

En Campeche y Quintana Roo la dinámica ha sido distinta, dada la mayor extensión de los campamentos, el acceso a más terreno e insumos subsidiados, y a una libertad relativa para moverse dentro del Estado de residencia. En 1989, se inició la formación de cuatro nuevos asentamientos con condiciones más adecuadas.

Pero las dificultades para la preservación de ciertos aspectos de su cultura han sido mayores en un contexto en el que se hablan cuatro o cinco idiomas, en el que se interpone el sistema educativo mexicano, y en el que el acceso es mayor al mundo mexicano y no indígena. En cambio, varios de los campamentos pequeños en Chiapas son monolingües y, por su aislamiento, menos expuestos a las influencias ajenas.^{39/} Comentó un refugiado en Chiapas:

Yo creo que aquí en Chiapas es diferente, Chiapas y Guatemala están pegaditos, casi tenemos las mismas costumbres, hay mucha continuidad con ellos. Nosotros que estamos en el campamento creo que estamos tratando de recuperar todo lo que allá habíamos perdido. Eso de la ropa ya no mucho se consigue, pero las costumbres y tradiciones las seguimos conservando todas, empezamos a recordar cómo estamos en nuestra tierra, cuál es nuestra cultura, aquí sí lo conservamos en nuestro campamento, no hay problemas aquí en Chiapas. Ahora, en Campeche y Quintana Roo allá todos son

^{39/} Además, Chiapas se caracteriza por tener una población indígena en su mayoría con grupos étnicos que comparten las mismas raíces idiomáticas de los refugiados (Messmacher, et al., 1986:13).

diferentes, no se ve si son refugiados, ya no hablan ni de 'vos' sino puro estilo mexicano y eso sí no sólo los mayores de edad sino también los niños, pero aquí en Chiapas no.

La posición del gobierno mexicano es la de apoyar la opción de repatriación voluntaria como la óptima, especialmente para solucionar los problemas de los refugiados en Chiapas. En los estados de Campeche y Quintana Roo, por otro lado, la poca densidad de población y la escasez relativa de mano de obra hace factible la integración eventual de los guatemaltecos. La esperanza de las autoridades es que los refugiados en Chiapas que no quieren repatriarse en el largo plazo, decidan trasladarse a Campeche.

En todos los casos, la vida en los campamentos es de sobrevivencia, segura pero mínima. Los refugiados enfrentan principalmente el problema de no tener acceso a tierras para cultivar o que la tierra que tienen no es de una calidad adecuada. Lo más común es que, para sostener a sus familias, los refugiados hombres y en muchos casos también las mujeres, se conviertan en mano de obra para los ejidos o pueblos cercanos, en la agricultura o bien en otros oficios. No sólo son estos trabajos escasos e inseguros, sino que normalmente no son bien remunerados y a veces provocan tensiones con vecinos mexicanos.

El problema más serio ha sido el salir a buscar algún trabajo, pues como es mucha la gente, y si se consigue casi quieren que uno les trabaje de regalado. Algunos se atreven a irse más lejos del campamento, pero por parte de la institución [COMAR] tienen algunas normas de que no puede salir uno a trabajar hasta que no venga un patrón a buscar gente, y el que sale sin permiso y si lo agarra Migración entonces lo multan o lo amenazan de que lo van a remitir a Guatemala, con esto hay gente que se detiene y sólo sobrevive con lo que consigue acá cerca (Campeche).

Sentimos que nos pagan menos que el salario mínimo... Los hermanos mexicanos nos han dado algunos consejos, que no se debe de entrar en esta forma pues entran los problemas como la baja en el pago de la mano de obra también de los mexicanos (Campeche).

Algunos programas especializados y la atención internacional a los campamentos han dado a los refugiados oportunidades y experiencias especiales. Proyectos auspiciados por COMAR o la Iglesia Católica capacitaron a centenares de personas como promotores de salud, enfermeros, carpinteros y artesanos. Por un lado, muchos de los proyectos productivos/económicos iniciados no han dado resultados consistentes o dejaron de funcionar, pero por otro, dejaron un conocimiento en los participantes –sea técnico o experiencia sobre las limitaciones de este tipo de proyectos.

En general, las condiciones les han exigido trabajar en muchos oficios a estas personas cuyas experiencias previas eran en trabajo agrícola y/o en el comercio. Especialmente la generación joven hubo de adaptarse a trabajos en los centros urbanos y hasta en las áreas de turismo de México.

El acceso universal a educación en todos los campamentos ha resultado en mayores niveles de alfabetización que no hubieran sido alcanzados en sus pueblos de origen en Guatemala. Los refugiados reconocen la ventaja que representa la escolarización de sus niños y la educación de adultos; *“en la alfabetización allí fuimos aprendiendo un poco, entonces por eso se va creciendo poco a poco, estamos aprendiendo cómo, pues, así desarrollando”* (Campeche).

En varios campamentos, son evidentes los cambios en los estilos de vida y en la construcción de casas: las cocinas están separadas del área de dormir, los fuegos se hacen en alto o en estufas tipo “lorena”, hay letrinas y se dan nuevas prácticas en el ámbito de la salud preventiva.

La medicina es regalada pero también a la gente se le pone un poco de presión, todas aquellas que sólo quieren consulta y consulta y no van a ningún centro de educación no se les atiende, tiene que hacer este hábito de mejorar su casa, usar su letrina, que sus niños estén aseaditos, han mejorado eso. La gente va mejorando y agarran hábitos y van a reuniones y se ha logrado mucho. La gente ha tenido más conciencia de saber por qué es que se enferman. La gente ahora nota que ellos y sus hijos tienen mejor salud (Chiapas).

Una presencia continua de voluntarios y periodistas extranjeros abrió los campamentos hacia el mundo exterior y los refugiados adquirieron gran experiencia en exponer su posición y sus necesidades ante esta nueva audiencia: *“Hasta el momento nuestra gente está aprendiendo un poco más que antes, incluso pues estamos aprendiendo cómo expresarnos...”* Ni la facilidad para plantear sus posiciones ni los contactos establecidos en el ámbito internacional serían olvidados por los refugiados que luego retornarán a Guatemala. Como expresaron dos refugiados:

Lo que ya se aprendió, eso ya no se podría olvidar, y algo más es que está desarrollándose mientras estemos aquí. Con todo lo que ya aprendimos y lo que vamos a aprender de hoy en adelante, de todas maneras eso nunca se volvería a perder (Campeche).

Pero toda nuestra experiencia la queremos desarrollar allá en nuestras tierras, pero no individualmente y para eso necesitamos la libertad, para poder estar y aplicar todo lo que estamos aprendiendo porque sería una

lástima y tristeza de que todo lo que se está aprendiendo en ocho años se vaya a quedar en la nada (Chiapas).

El retorno: motivaciones, recepción y reubicación

El registro de repatriaciones voluntarias de los refugiados empezó a partir de 1984 por parte de la COMAR, asistida por el ACNUR. A partir de septiembre de 1986, cuando se creó la CEAR, ésta se encargó de promover la repatriación y asistir a los refugiados que retornarían al país, provenientes principalmente de territorio mexicano, siempre bajo acuerdos y en coordinación con la COMAR y el ACNUR. Hasta diciembre de 1990, se registraron más de 6,000 personas repatriadas oficialmente, la mayoría proveniente de México y en menor medida de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Bolivia (ver gráfica 3 y cuadro 4).

Cuadro 4
Comparación de cifras oficiales de repatriados dentro de programas
oficiales, Guatemala 1987-1990

Fuente	1987	1988	1989	1990
ACNUR Guatemala	967	1,975	1,017	833
ACNUR Ginebra	855	1,910	993	820
CEAR (1990)	975	1,929	977	770*
OIM/CEAR (1991)	840	1,920	960	740

* Hasta octubre de 1990.

Dado que estas cifras reflejan que el porcentaje de refugiados que ha regresado es pequeño, cabe mencionar algunos de los elementos considerados más importantes en la decisión de la mayoría de no retornar aún.^{40/}

1. El miedo de que la situación político-militar en Guatemala no haya cambiado lo suficiente para garantizar que las dificultades y violencia sufridas antes no se repitan.^{41/}

Pues si algún día decido repatriarme quiere un valor pues allá no vamos a estar igual a como estamos acá, claro aquí estamos sufriendo pero no estamos con ese miedo, pero ya a estar allá salgo a caminar tres horas a mi parcela, salgo con ese miedo de quién sabe si regreso... (Campeche).

Las diferencias [entre Chiapas y Guatemala] son lo difícil de vivir en Guatemala. Aquí nos sentimos más contentos, más adecuado [seguro], más tranquilo. Allá en Guatemala pues se oye los bombazos, los enfrentamientos, la guerra que hay (Chiapas).

2. El factor económico influye en aquellas familias que no tendrán mayores expectativas al regresar, por ejemplo, porque nunca tuvieron

^{40/} Aparte de estos puntos elaborados por el equipo de AVANCSO en base a entrevistas en Guatemala y México, la CEAR ha acusado a la misma COMAR y al gobierno mexicano en general de presionar a los refugiados para no regresar por la supuesta razón de no perder la asistencia internacional para los refugiados. Véase por ejemplo: *La Hora*, "La CEAR denuncia presiones contra refugiados en México", 19 de mayo de 1990 y una entrevista con la presidenta de CEAR en *Siglo Veintiuno*, 21 de agosto de 1990.

^{41/} Esta razón es la expuesta con más frecuencia por los refugiados según entrevistas y numerosos reportajes periodísticos, por ejemplo, *El Gráfico*, "Refugiados tienen temor de regresar: consideran que persiste el fenómeno de la violencia...", 27 de diciembre de 1989.

tierra. Esto, unido a la crisis económica que vive Guatemala, hace parecer su estabilidad en México, aunque precaria, mejor.

3. Relacionado al punto anterior, se observa un cansancio en las familias de haber construido casa tras casa en hasta tres o cuatro lugares o campamentos en México, lo cual hace que la perspectiva del retorno se vea a la luz del temor de "volver a perder".

Ya están cansados de venirse trasladando, pues por mucho trabajo, es que cuando la gente llegó a Chiapas tuvieron que limpiar los lugares y construir casas, luego cuando se vio la necesidad de que se iba a retirar a la gente de la frontera, pues la trajo hasta acá, y empezaron otros trabajos, un montón de trabajos... (Campeche).

4. Planteamientos de otros refugiados y, específicamente, de las Comisiones Permanentes, para demorar el retorno individual hasta que existan mejores condiciones para un retorno colectivo y organizado:^{42/}

Nuestra realidad es que estamos aquí, pero no tenemos tierra donde vivir y trabajar, estamos aquí posando. Entonces vemos que sí hay necesidad de que regresemos, pero vamos a dialogar primero con el gobierno para ver si el gobierno respeta o acepta nuestras condiciones que se están planteando... que respeta todos esos derechos y para no llegar otra vez en nuestra misma situación cuando salimos (Chiapas).

5. Razones psicológicas hacen que algunos refugiados, especialmente los que perdieron muchos familiares y/o fueron testigos de sus muertes, hayan decidido nunca regresar a Guatemala, quizás evitando revivir los recuerdos de la violencia que experimentaron directamente. Los refugiados que expresan su deseo de no regresar parecen ser relativamente pocos, para el resto la cuestión sigue siendo cuándo.

Un elemento a tomar en cuenta desde el inicio es que, a diferencia del caso de los desplazados internos, los refugiados que han decidido volver han tomado su decisión bajo menos presiones derivadas del conflicto armado, y/o de moverse de una situación donde la seguridad

^{42/} Las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México surgieron en los campamentos en los tres estados mexicanos después de un proceso de asambleas y votaciones a finales de 1987. Según los refugiados, esta instancia se creó para responder a dos necesidades fundamentales: (1) unir a todos los campamentos para acordar criterios sobre las condiciones de un posible retorno y (2) negociar las mismas con el gobierno guatemalteco. Desde entonces, las Comisiones Permanentes se han desarrollado bajo el lema de promover el retorno "colectivo y organizado, bajo condiciones de dignidad y seguridad".

económica y social está garantizada a una donde el riesgo de empeorar su situación relativa es grande. Los factores motivacionales son presentados a continuación sin considerar orden de importancia.

1. Algunos repatriados se han enterado de que la intensidad del conflicto armado ha disminuido en el área a donde regresarían y en vista de ese dato han optado por la repatriación; o han sido informados, por ejemplo, de que hay presiones sobre sus parcelas o tierras, y ante la posibilidad de perderlas, han decidido retornar.^{43/} Al retornar, la mayoría de los repatriados conoce algunos aspectos claves de la situación de las comunidades a donde se dirige. Esto lo logran a través del intercambio de correspondencia con sus familiares ya repatriados u otros que permanecen en sus comunidades. Algunos, incluso, han realizado visitas previas a tales comunidades.^{44/}

2. Otro elemento observado, especialmente entre los repatriados que regresaron entre 1986 y 1988, fue la confianza en los ofrecimientos de las delegaciones oficiales guatemaltecas que visitaron los campamentos –especialmente los realizados por la esposa del Presidente de la República en 1986; y, en general, expectativas ante el inicio de un gobierno civil.

3. Aunque en los campamentos, los refugiados tengan asegurada su subsistencia, y como se dijo, ésta puede ser razón para no retornar, también existen motivaciones económicas para la repatriación. Así, muchos manifestaron su deseo de recuperar sus tierras e iniciar actividades productivas que les permitan asegurar el futuro de su familia en el largo plazo, pues esa aspiración difícilmente la pueden satisfacer en un campamento de refugiados.

La tierra aquí no es muy fértil. La situación de acá no es igual como la de allá en donde vivíamos, pues allá hay lluvia todo el tiempo, allá en Ixcán se levantan dos cosechas al año, y aquí apenas una. Pero se echó a perder y ya no puede uno lograr más, pues aquí hay que comprar el maíz y el frijol (Campeche).

^{43/} La introducción a propósito de nuevas personas para ocupar las tierras abandonadas de Ixcán poco después del desplazamiento (1984), produjo la impresión en México que esto sería difícil de revertir, lo que resultó ser un factor desestimulador para un pronto retorno. En cambio, en Nentón la *amenaza* de que llegaran nuevos ocupantes (espontáneos) se convirtió en un acelerador del retorno –ver el caso de Nentón adelante.

^{44/} La CEAR y el ACNUR han fomentado visitas de refugiados a sus comunidades de procedencia en varias oportunidades.

Es dentro de este marco que un religioso expresó: “*el retorno de los refugiados ha sido por factores materiales, los que se quedan (en México), se quedan por bienestar psicológico o social*”.^{45/}

4. Aparte de las motivaciones de carácter económico y político, otro elemento lo constituye el socio-cultural. A pesar de los esfuerzos que han realizado en el refugio, muchas familias indígenas temen que sus hijos pierdan los valores culturales y reconocen que mientras más tiempo permanezcan fuera, los esfuerzos por conservarlos serán menos efectivos. De igual forma, los lazos familiares y el deseo de reunir tanto a la familia dispersa como a la comunidad, es un incentivo fuerte para el retorno. Familiares en Guatemala motivan a los refugiados para que regresen y, en muchos casos, hacen esfuerzos para convencerlos de que las condiciones en el país y en sus comunidades son adecuadas para la repatriación.^{46/}

La mayoría de los repatriados bajo el programa CEAR-ACNUR se ha reubicado en caseríos, aldeas o municipios de los departamentos de Huehuetenango y Quiché y en menor número en comunidades de los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz y otros (ver cuadro 5).

Según lo observado durante 1989, al cruzar la frontera en La Mesilla, Huehuetenango, los refugiados eran recibidos por una variedad de personas; entre ellas, funcionarios de ACNUR, CEAR, Migración, representantes de la Sección de Asuntos Civiles (S-5) del Ejército y a veces algún representante del gobernador de Huehuetenango. En camionetas eran trasladados al centro de recepción de la CEAR, instalado desde marzo de 1987 en las afueras de la cabecera departamental de Huehuetenango. Comparado con la descripción del proceso en años anteriores (Manz, 1988c; WOLA, 1989), para 1989, la CEAR había logrado montar la infraestructura necesaria y adquirido la experiencia suficiente para atender adecuadamente a los grupos de repatriados.

En el centro de recepción, según explicaban los trabajadores de la CEAR, la idea era darles una cordial bienvenida y hacerles sentir que

^{45/} Entrevista a un religioso de la diócesis de Huehuetenango en mayo de 1989.

^{46/} Funcionarios de el ACNUR y la CEAR reconocen el impacto que tiene ese tipo de comunicación y la desconfianza que tiene el refugiado sobre toda información que no provenga de personas conocidas. Por eso se ha fomentado el intercambio de cartas y grabaciones entre refugiados y familiares o amigos en Guatemala (entrevistas con el ACNUR y la CEAR, 1989).

Cuadro 5
Destino declarado de repatriados registrados por el ACNUR, según
departamento, enero de 1985 a diciembre de 1990*

Departamento	Familias	Personas
Huehuetenango**	729	3,245
Quiché***	313	1,552
Alta Verapaz	18	91
San Marcos	16	89
Chiquimula	18	62
Izabal	8	42
Petén	7	43
Otros	15	64
Total	1,124	5,188

* El trabajo de campo permitió verificar que fue frecuente que los repatriados cambiaran su destino después de ingresar al país.

** La mayoría de personas se dirigían a los municipios de Barillas (1,132) o Nentón (1,061).

*** Casi todas las personas tenían como destino el municipio de Ixcán (1,546).

Elaboración: AVANCSO en base a el ACNUR (la CEAR ha ingresado otros repatriados bajo su programa, no registrados por el ACNUR).

están de nuevo en su patria. A veces, la marimba de la Policía Nacional hacía una presentación y se organizaban piñatas u otras actividades para los niños. La CEAR aseguraba que cada persona pasaba por un examen médico y ofrecía atención especial en casos graves.

En esta fase, la presencia de la institución armada (como miembro de la CEAR) era a través de la Sección de Asuntos Civiles. Además de dar charlas de bienvenida, su papel era expedir la boleta de repatriación a los repatriados.^{47/} Dentro de este contexto, las fases de recepción

^{47/} Esta boleta sustituyó al “acta de amnistía” que los repatriados debían firmar hasta 1987, según la cual el retornado se presentaba “*voluntariamente... con el objeto de acogerse al beneficio de la Amnistía vigente en el país... lo hacen con el fin de aclarar su situación a efecto que no se les tome como elementos terroristas...*” La boleta de repatriación actual es usada como documento de identificación personal permanente, pues en los municipios de origen generalmente fueron destruidos los registros civiles y es común que las personas que se desplazaron ya no tengan sus documentos. Se emitió un decreto en enero de 1987, el 3-87, que permite a los alcaldes la reposición de

y reinstalación de los repatriados se realizan bajo criterios básicos similares a los aplicados en el caso de los desplazados, aunque se perfilan otros específicos determinados en gran medida por la presencia de organismos no nacionales (ACNUR y COMAR).

Luego de una estadía de tres días como mínimo en el Centro de Recepción y una primera entrega de asistencia de emergencia, los repatriados eran transportados sin costo hacia las comunidades en las que optan por residir.^{48/}

En el traslado y reinstalación se notaban desfases y acciones que constituyen elementos desfavorables en el proceso. Así, en visitas realizadas a varios alcaldes municipales donde se han reubicados repatriados, éstos indicaron que “*se limitan a recibirlos y con la presencia de empleados de la CEAR se levanta el acta de constancia de entrega de víveres.*” Los alcaldes entrevistados coincidieron en que no se les notificó con anticipación el arribo de repatriados y que, por lo tanto, no realizan ningún trabajo de información orientado a las comunidades receptoras. Al respecto, un funcionario de la CEAR indicó que “*no hay un programa de visitas previas a las comunidades para generar un clima de aceptación hacia los repatriados, por lo esporádico de los retornos y la imprecisión de los lugares a donde se dirigirán.*”^{49/}

partidas y cédulas de identificación, pero venció después de dos años y no se había renovado hasta octubre de 1991. La CEAR ha contado con procuradores jurídicos para asistir a los repatriados en la reposición de sus documentos personales, pero los beneficiarios manifestaron que no les han solventado su situación aún después de varios años de haber retornado. Al igual que en el caso de los desplazados internos, la falta de documentos personales puede provocar obstáculos en la movilización (AVANCSO, 1990:60-61).

^{48/} La asistencia incluye granos básicos, aperos de labranza, láminas, madera y dinero en efectivo. El dinero en efectivo (el equivalente en quetzales a US\$50.00 por cabeza de familia y US\$25.0 por dependiente), es considerado de suma importancia para la obtención de otros elementos imprescindibles para la subsistencia.

^{49/} Entrevistas de abril y mayo de 1989.

3. De nuevo en Ixcán

Al llegar; la recepción^{50/}

En 1990, de los más de 60,000 habitantes que había en Ixcán, los repatriados constituían una pequeña porción. Habitaban Ixcán muchos otros originarios (“antiguos”) que sufrieron un desplazamiento breve en la selva o de hasta varios años en otra zona del país, y pobladores “nuevos” (ver cuadro 6).^{51/}

El primer grupo grande de repatriados con destino a Ixcán entró al país en marzo de 1987 bajo el programa CEAR-ACNUR. Veintiséis familias fueron reubicadas en lo que sería un centro provisional, “Centro Veracruz,” ubicado en tierra que pertenece a La Resurrección, parte de la cooperativa Ixcán Grande R.L.^{52/} El lugar de “transición” pasó a ser “permanente” para casi la mitad de los que llegaron, a pesar del plan de reasentamiento de la CEAR, principalmente porque sus tierras estaban ocupadas y/o en una comunidad que era todavía hostil a su entrada, o bien, porque su antigua comunidad estaba en un lugar conflictivo y abandonado todavía. Se conformó así lo que podría ser un nuevo tipo de “desplazados internos”.

Por ser los primeros que regresaron a Ixcán, los que llegaron en 1987 y a principios de 1988 como repatriados, experimentaron ventajas y desventajas en relación con los que vendrían después. Por un lado, pueden apuntarse los problemas derivados de la falta de coordinación de las instituciones, los problemas logísticos de la CEAR y las diferencias de la política del Ejército a nivel local comparada con la expresada por el

^{50/} El tiempo que ha llevado la elaboración del informe ha sido largo y esto quizás tiene un efecto en la actualidad de algunos datos. En la revisión final del manuscrito se hizo evidente que aparecían en tiempo presente hechos que lo eran efectivamente en 1989-1990, pero que podrían no serlo en 1992. Se ruega al lector tener en cuenta que debe situarse en un trabajo de campo llevado a cabo en aquellos años. Claro está que esta observación es aplicable a detalles y no a asuntos de fondo.

^{51/} La cifra de la población es en base a estimaciones de la Municipalidad en 1989. La cifra oficial sigue siendo 33,000 del censo local de 1985, el último que existe, efectuado por la División de Malaria del Ministerio de Salud Pública que encuestó 110 comunidades.

^{52/} Para una descripción detallada véase Manz (1988c:58-61).

Ministerio de Defensa a nivel nacional.^{53/} Además, los que entraron a comunidades ocupadas por “nuevos,” tuvieron que forjar su entrada en medio de un ambiente de rechazo.

Cuadro 6
Ixcán: repatriados asentados en comunidades de mayor recepción, enero de 1985 a diciembre de 1990, y datos de referencia (cifras aproximadas)

Comunidad	Repatriados		Total familias	
	Personas	Familias	1990*	1980**
Mayalán***	550	110	200	410
Veracruz	291	60	64	608
Kaibil Balam	273	54	122	138
Xalbal	141	27	233	256
Brisas de Tzejá	45	12	ND	****
San Antonio Tzejá	58	13	124	ND
Santa María Tzejá	53	8	130	117
Otras	135	28	---	---
Total	1,546	312	---	---

* Comprenden familias originarias (que no se refugiaron), repatriadas y nuevas (que llegaron después de 1982).

** La cifra representa el número de socios o parcelarios con derechos de propiedad antes del desplazamiento; sin embargo, a veces había otras familias compartiendo tierras o esperando recibir las suyas.

*** Incluye familias en Primer Centro y Centros 2, 3 y 4.

**** Comunidad que no existía en 1980.

ND no disponible

Elaboración: AVANCSO en base a cifras de ACNUR, CEAR y autoridades locales.

Por otro lado, los que llegaron primero, en general, tuvieron mayor oportunidad de recuperar sus tierras, mientras que los que llegaron después no siempre lo han logrado. Esto a su vez provoca en los repatriados, ansia porque sus familiares y amigos regresen pronto, pero también

^{53/} Algunas de estas diferencias salieron a luz en un foro público en Playa Grande el 17 de abril de 1988 que trataba del ingreso de repatriados. Miembros de la CEAR y del Ejército tuvieron que convencer a las autoridades locales para que aceptaran a los retornados.

causa más duda y temor en el lado mexicano sobre si los refugiados van a poder recuperar sus tierras cuando regresen.

Según lo observado en los años 1989 y 1990, al llegar a Ixcán, los repatriados seguían cubiertos principalmente por el programa de la CEAR.^{54/} Se les daba alojamiento inicial en Centro Veracruz donde también vivía personal de la CEAR. Ésta mantenía un médico en la región y ha financiado temporalmente a algunos maestros; la presencia, mayor que en otros lugares de recepción, tenía la intención de facilitar los siguientes pasos de los repatriados, que buscan establecerse nuevamente en sus comunidades.

Un problema inmediato de los repatriados es la aceptación por parte de los residentes de la comunidad de destino. Como se explicó arriba, las comunidades de Ixcán, aun más que los otros casos estudiados, se presentan con una composición social muy distinta a aquella existente antes de la violencia. Una vez asentado en la comunidad que abandonó, el repatriado encuentra una mezcla de personas “nuevas” y “antiguas”, una variedad de idiomas y religiones, diversidad de experiencias con la violencia y desconfianza marcada hacia los repatriados por parte de algunos.^{55/}

Desde un principio, la mayoría de los nuevos residentes expresaban un rechazo fuerte hacia el retorno de los refugiados. Por un lado, el mismo representaba una amenaza contra la seguridad que los “nuevos” tenían sobre las tierras en que se habían asentado. Por otro, los residentes habían adaptado el discurso de las autoridades locales según el cual los refugiados habían “causado” la violencia, eran culpables de su propio destino o que eran todos guerrilleros.

Cuando los primeros repatriados regresaron en 1987 con la intención de entrar nuevamente a Ixcán, tres comunidades (Xalbal, Kaibil Balam y Santo Tomás) levantaron actas rechazando su entrada. El 10 de julio de 1988, mientras un grupo de repatriados originario de Kaibil Balam vivía

^{54/} Si las otras instituciones gubernamentales activas en la zona (ie. INTA, BANDESA, CRN) cubren a algunos repatriados es porque éstos están casualmente ubicados en áreas donde las mismas tienen programas. No existen programas especiales dirigidos a la problemática de los repatriados ni hacia las comunidades nuevamente pobladas por ellos.

^{55/} Los idiomas indígenas más comunes en Ixcán Grande son mam, q'anjob'al y en menor cantidad chuj e ixil. En otras áreas de Ixcán se habla k'iche', pocomchi' y q'eqchi', siendo el último el más frecuente. Hay comunidades donde se hablan hasta 4 ó 5 idiomas, aunque el español es adoptado como la lengua franca. Normalmente, se han establecido como mínimo tres iglesias (Católica, Pentecostés y Asamblea de Dios).

temporalmente en Centro Veracruz, su comunidad levantó un acta refiriéndose a los “señores repatriados,” y expresando que “no queremos esta clase de personas en el parcelamiento... les rogamos a las autoridades del INTA no mandar esta gente a este lugar”.^{56/}

Luego de lograr su entrada en algunas comunidades, los repatriados indican haberse sentido más señalados y controlados que los demás habitantes. Las manifestaciones de suspicacia varían desde la impresión de que “hablan mal de nosotros”, hasta amenazas directas de las autoridades locales. Dado el clima general de desconfianza y tensión (entre antiguos-nuevos-repatriados, distintas religiones, grupos étnicos etc.), es frecuente acusar a un enemigo personal de colaborar o ser simpatizante de “la subversión”. Aunque los casos de abuso serio son pocos, crean un ambiente de sospecha y temor notable.^{57/}

Si hay manifestaciones cercanas del conflicto armado, los recelos contra los repatriados son mayores. Por ejemplo, cuando la guerrilla quemó un vehículo del Ejército en la carretera, un repatriado reaccionó con miedo:

como hay unos que dicen que todos los que vinieron de México son guerrillas... pero ¿Acaso nosotros fuimos a quemar la camión, pues? Mi conciencia está limpia ante Dios...^{58/}

El contexto de la guerra

La región de Ixcán se ha encontrado sumida en una situación de guerra sobre la que no existe mayor difusión periodística.^{59/}

^{56/} Copiado textualmente por investigadores extranjeros presentes en la región, agosto de 1988.

^{57/} Según un reportaje, en agosto de 1988, un repatriado rechazado de Xalbal, posteriormente llegó de visita a la comunidad y fue llevado a la zona militar por tres días, amenazado y golpeado. Sólo con la intervención de la CEAR y del Ministerio de Defensa se logró su libertad (WOLA, 1989:27).

En noviembre de 1989, durante la estancia del equipo investigador, un grupo de refugiados de México, con respaldo del gobierno guatemalteco y ACNUR, visitó a sus familiares en Ixcán, pero la bienvenida que recibió de la mayoría de residentes en las comunidades fue fría.

^{58/} Entrevista en Ixcán, noviembre de 1989.

^{59/} “Playa Grande (es) uno de los municipios en los que frecuentemente se conoce de acciones guerrilleras...” se apuntó en *La Hora*, 28 de noviembre de 1990. Sin embargo, es poca la cobertura que se da en la prensa nacional.

En 1989, la actividad bélica se concentró en la parte norte de la carretera Transversal, donde había una zona donde la población, y hasta el Ejército, “no entraba”. Se trataba prácticamente de la parte norte de lo que se conoce como Ixcán Grande.^{60/} El ruido de las bombas lanzadas desde destacamentos fijos o la presencia de aviones militares ya no despertaban comentarios de los vecinos, dada su frecuencia.

En el sur y en el este de Ixcán (con excepción de algunas aldeas al noroeste de Playa Grande) no se experimentaba la situación de guerra en forma directa, aunque durante 1989 y 1990, el número y la intensidad de los enfrentamientos en todo Ixcán aumentaron significativamente. Una interpretación de pobladores de varias comunidades era que no había guerra allá donde no había construcción de carreteras ni destacamentos, o sea donde no había un objetivo estratégico para la guerrilla.^{61/}

Ha habido una militarización generalizada en el Ixcán, pero en algunas comunidades y sobre ciertas personas (p. e. repatriados) existe más control.^{62/} Aunque no hay un plazo ni mecanismo fijo para vigilar a los repatriados como ha habido en el caso de los retornados en el área Ixil (AVANCSO, 1990:27), los que han estado más tiempo y no han

^{60/} En esta zona también viven en comunidades móviles las llamadas Comunidades de Población en Resistencia de Ixcán (CPR), un grupo que según su versión, se formó a finales de 1983 con el nombre del Comité de Parcelarios de Ixcán. En contraste con la situación de las CPR del área ixil (ver adelante), las de Ixcán no reportan capturas, aunque sí, frecuentemente heridos y aún muertos a raíz del hostigamiento militar. Véase: *Siglo Veintiuno*, “Declaración de las Comunidades en Resistencia del Ixcán ante el gobierno y el pueblo de Guatemala, los gobiernos y los pueblos del mundo” (campo pagado), 31 de enero de 1991. En las áreas pobladas en Ixcán no se habla de la existencia de las CPR a pesar de los escasos kilómetros que las separan.

^{61/} Este “mapa” del conflicto es cambiante y refleja la situación en 1989. Ese año, el Ejército había extendido sus operaciones normales hasta donde anteriormente actuaba la guerrilla, lo que se evidenciaba con el surgimiento de nuevos asentamientos civiles (en Mayalán, p. e). Sin embargo, después de estos avances geográficos del Ejército, la guerrilla había aparecido en áreas nuevas, claramente bajo el control del Ejército (como la carretera principal).

^{62/} El control sobre la población está a cargo de las autoridades locales o del destacamento militar. En Xalbal, según vecinos del lugar, el encargado del destacamento militar reveló a la población que él a escondidas observaba “*quién estaba trabajando bien*” en sus tierras. Para los testigos, hubo una doble implicación: quien no deja limpia su tierra, está dejando “monte” y posible cobertura a la guerrilla y, además, tal vez dedica tiempo a otras actividades aparte del cultivo de la tierra.

causado problemas a los ojos de las autoridades, tienen menos problemas para movilizarse.

En todas las comunidades existen las Patrullas de Autodefensa Civil y el promedio de servicio es de 24 horas cada 8 días por hombre; se empieza a patrullar desde los 14 ó 15 años. De acuerdo con lo observado en 1989, en comunidades situadas en áreas conflictivas, cada patrullero hace servicio de día una vez a la semana, pero patrulla todas las noches durante dos horas (p. e. Mayalán, Mónaco, Primer Centro).

En ocasiones, cuando ha habido patrulleros heridos o muertos durante los rastreos, se ha cuestionado más el papel de las patrullas y la razón por la que los civiles participan en tareas normalmente asignadas a los militares.^{63/}

Aunque formalmente la participación en las patrullas es voluntaria, la presión constante del Ejército para seguir participando la convierte, de hecho, en una obligación. Después de una reunión con la población en una aldea, algunos soldados distribuyeron papeles con la leyenda:

*“Rechaza a los desconocidos de tu comunidad.
Patrulleros y Ejército Unidos. Por la Paz y Desarrollo de Ixcán:
No podemos heredar a nuestros hijos el peligro de la guerrilla.
Terminemos con la amenaza”.*

Igual que en otras áreas del país consideradas conflictivas, la población ha tenido que utilizar pases para movilizarse a lugares distantes o para ausencias prolongadas.

El reto de la tierra

Un problema fundamental es el acceso y la recuperación de la tierra. Aunque en México circulan información y rumores al respecto, en ninguno de los casos observados sabían los repatriados con certeza la

^{63/} En contraste con otras comunidades donde la crítica al sistema de la patrulla civil se centra en el tiempo productivo perdido en un servicio no-pagado, en Ixcán el problema a que se da más importancia es el riesgo a la seguridad personal. En 1989, hubo tres civiles muertos en Tercer Pueblo, dos heridos en Mayalán y cuatro heridos en Santo Tomás, todos los cuales realizaban actividades de patrullaje al momento de ser muertos o heridos. Cuatro de los afectados eran repatriados (entrevistas con funcionarios nacionales e internacionales, y *La Hora*, “CEAR condena asesinato”, 5 de agosto de 1989 y *El Gráfico*, “Otro choque armado”, 18 de agosto de 1989).

situación específica de sus parcelas y si iban a poder recuperarlas. Es su gran preocupación al llegar. En Ixcán, las políticas de distintas instancias gubernamentales sobre la tierra han sido confusas y contradictorias. Mientras que la CEAR apoyaba a los repatriados y sus derechos, el INTA apoyaba a los nuevos ocupantes, a los cuales ofreció una nueva titulación, lo que implicaba la anulación de hecho de los títulos de los refugiados.^{64/} Los nuevos ocupantes, por su parte, también buscaban el apoyo del Ejército, que les había llevado a la región y les instaba a combatir a su lado: *“nosotros hemos estado defendiendo las parcelas con el pecho a la guerrilla, junto al Ejército”*.^{65/}

Según un funcionario del INTA, ellos no podían retractarse en cuanto a la garantía de la tierra para los nuevos ocupantes:

no se puede devolver la tierra a los repatriados porque implicaría un nuevo desplazamiento humano, y lo peor, una nueva guerra entre los repatriados y los nuevos, pues estos últimos no van a devolver sus parcelas fácilmente... sería mejor volver a ubicar a los repatriados en otros sectores y así se solucionaría el problema, borrón y cuenta nueva.^{66/}

En los casos conocidos (1987-1989), la situación se resolvía de una de las siguientes formas:

- 1) Si la comunidad donde antes residían estaba poblada, unos repatriados arreglaron con los nuevos ocupantes el poder vivir allí nuevamente. A veces el repatriado llegó a ocupar su “parcela” de antes o

^{64/} Estas posiciones eran públicas; *“En relación a la tierra, la licenciada De León Escribano (entonces Presidenta de la CEAR), dijo que CEAR asesorará a los repatriados en la recuperación de sus parcelas, ya que en algunos casos otras personas ocuparon estos terrenos...”* (Diario de Centro América, “CEAR dará a repatriados ayuda para recuperar sus tierras,” 30 de marzo de 1988).

“(De los repatriados) muchos perdieron sus tierras, pero el INTA, según el (Presidente) Ingeniero Samayoa, les devolverá algo de lo perdido, aunque no necesariamente en el lugar original.” (La Hora “400 Caballerías de tierra recibirán repatriados,” 17 de diciembre de 1987).

No fue hasta 1990, según la CEAR, que *“el gobierno a través del INTA, anuló la disposición tomada en los gobiernos anteriores de declarar las tierras de los refugiados en abandono voluntario”* (República de Guatemala, 1990:3).

^{65/} Comisionado Militar de “Nuevo Xalbal,” en reunión de autoridades y residentes, Playa Grande, 17 de abril de 1988.

^{66/} Entrevista con Jefe de Área del INTA en Playa Grande, junio de 1989.

tuvo que aceptar la asignación de otra (Xalbal, Primer Centro, Centro 3, Kaibil Balam, Santa María Tzejá).^{67/}

- 2) Si la comunidad donde antes residían estaba abandonada por causa del conflicto, existía la posibilidad de repoblarla con el permiso y el acompañamiento de los militares (Mayalán, Tercer Pueblo).^{68/}
- 3) Si la comunidad estaba abandonada y no existía un número adecuado de originarios y/o el Ejército no consideraba conveniente repoblarla, las familias se asentaron en un lugar nuevo, temporal o permanentemente (los de Los Angeles y Cuarto Pueblo en Mayalán).

En general, la política del INTA en los parcelamientos era la de reconocer como dueños a todos los asentados y exigir que empezaran a hacer pagos sobre las parcelas que ocupaban. Los precios vigentes eran superiores a los establecidos en la primera colonización.^{69/}

En las cooperativas, el problema toma otras dimensiones, ya que aquí el propietario es la cooperativa en sí y el INTA no tiene jurisdicción. Los

^{67/} Después de la época de violencia, las casas han sido levantadas en una forma que ya no respeta la lotificación original. Donde es posible, los repatriados persiguen reclamar sus derechos, tanto a sus lotes como sus parcelas, aunque las segundas son de prioridad.

^{68/} Hasta ahora, el único caso efectivo ha sido el de Mayalán cuyo repoblamiento se inició con unas 100 familias en abril de 1988. Un intento similar en Tercer Pueblo (de la cooperativa “La Resurrección”) fracasó –18 familias llegadas al sitio en abril de 1989 se retiraron en julio de 1990 pues la constante actividad bélica causó muertos y un impacto constante en sus vidas. Cuarenta y cinco familias más, cuyas tierras son parte de La Resurrección, siguieron temporalmente en Centro Veracruz, hasta que escogieron como alternativa crear un nuevo asentamiento a poca distancia del mismo Centro Veracruz, sobre la carretera.

^{69/} La delegación de INTA varias veces prometió otorgar títulos provisionales a todos los “nuevos” en los parcelamientos bajo su jurisdicción. Sin embargo, a principios de 1990, sólo se había otorgado dichos títulos en Kaibil Balam (*Prensa Libre*, 3 de diciembre de 1989). En la mayoría de casos, los parcelarios originales (residentes en Guatemala o México) tienen su papelería y los “nuevos” no tienen nada. Para los refugiados, la entrega de títulos a nuevos ocupantes significaría reducir aún más la posibilidad de su retorno. Sin embargo, como dijo un repatriado: *“si antes (de la violencia) la gente tenía un título provisional y el gobierno no lo respetaba, no hay por qué creer que los que dan ahora valen más que un título provisional que tenga un refugiado todavía en México”*.

nuevos ocupantes que se asentaron en terrenos de las cooperativas en 1984-1986 están sujetos a la autoridad de este dueño.^{70/}

Después de tensiones y debates, en 1988 se logró un entendido inicial aprobado por el Consejo de Administración de la cooperativa de Mayalán: los “nuevos” se quedarían con las tierras “legalizadas” que tenían u otras asignadas por la cooperativa en la medida que permitieran la entrada de los repatriados sin oposición y se asociaran a la cooperativa. Los repatriados, por su parte, aceptaban la permanencia de los “nuevos”.^{71/} Sin embargo, hubo conciencia entre los socios originarios que con ese arreglo los derechos de los antiguos socios aún refugiados en México se verían más debilitados.

A principios de 1990 se formó una “comisión de seguimiento” a la problemática especial de Ixcán Grande con la participación de la CEAR, el INTA, el INACOP, y la Diócesis de Huehuetenango. El acuerdo inicial fue que el gobierno reconocía que los terrenos manejados por el INTA hasta entonces pertenecían a la cooperativa, y que los mismos debían ser devueltos y “readjudicados”.^{72/}

Ha habido intentos de involucrar a los socios refugiados en México por parte del gobierno y de la Iglesia Católica, pero éstos no siempre han sido exitosos. De acuerdo a versiones de refugiados, por ejemplo, los encuestadores del INTA y la CEAR que los visitaron en 1990 fueron recibidos con reservas y no obtuvieron plena colaboración para recopilar la información que buscaban.

Como solución al problema de tierra, el INTA, el Ejército y también la CEAR han declarado que hay mucha tierra disponible en Ixcán para

^{70/} La respuesta sobre quién controla la tierra de los cinco pueblos que fueron parte de la cooperativa “Ixcán Grande,” ha sido tema de debate para varios sectores: El gobierno (que a través del INTA llevó a los nuevos ocupantes), los socios de la cooperativa que han retornado, los socios que permanecen en México y la diócesis de Huehuetenango (que participó originalmente apoyando en la compra y el asentamiento de las tierras). Esta última mantiene que sólo la cooperativa “Ixcán Grande, R.L.” puede disponer de la tierra y que la cooperativa está compuesta por sus socios originales, sea que estén en México o Guatemala.

^{71/} Véase acuerdo de 19 de octubre de 1988 auspiciado por la Comisión Nacional de la Tierra (CONATIERRA) entre Mayalán y Primer Centro, Centro 2 y Centro 3.

^{72/} *La Hora*, “Devuelven tierras a campesinos repatriados de Ixcán Grande”, 16 de enero de 1990. *Prensa Libre*, “Acordaron devolver tierras a campesinos de Ixcán, en A.V”, 15 de enero de 1990. Véase también: República de Guatemala (1990:3).

los refugiados que retornen y otras personas que quieran llegar, aunque las parcelas antiguas de los primeros estén ocupadas. Estas entidades minimizan el problema de que esas tierras disponibles estén en áreas conflictivas y argumentan que las áreas son conflictivas precisamente porque no tienen población residente.^{73/}

En entrevistas, tanto los socios repatriados como el Ejército y el INTA hablaron del patrón de reasentamiento en Ixcán Grande; el mismo comienza con la rehabilitación de las zonas vía las acciones del Ejército y luego sigue el ritmo del avance del tramo de la Carretera Transversal. Los repatriados que van llegando a la zona deben ocupar las parcelas abiertas más cercanas a las comunidades repobladas no importando a quién pertenecían, aunque entre los repatriados mismos sí se reconoce el derecho de reclamar lo suyo.

Una observación final sobre la problemática de la tierra en Ixcán es que los problemas han sido resueltos caso por caso, lo que difícilmente será apropiado en la eventualidad de un retorno masivo de los refugiados. La misma CEAR reconoce que los casos que tocó y en los que se lograron acuerdos eran los “*más agudos*,” pero que ya no pretende seguir con “*el compromiso contraído*” inicialmente de “*devolver tierra al que la poseía*” (República de Guatemala, 1990:3).

El arranque económico; la siguiente etapa

Como se ha referido, a partir del momento más difícil de guerra y desplazamiento, todo Ixcán entró en el proceso de reconstrucción, aunque en un contexto de muchas limitaciones. El diagnóstico de PRODERE señala que:

La violencia política destruyó la infraestructura de salud, educativa y productiva existente, así como los cultivos permanentes de café y cardamomo, base de la economía de las comunidades, lo que generó pobreza... (Gutiérrez, 1989:11).

^{73/} Entrevista con el Jefe de Área del INTA, junio de 1989. También declaraciones públicas recogidas por la prensa nacional. Por ejemplo: *Diario de Centro América* (oficial) “500 caballerías a refugiados”, 22 de diciembre de 1987; *El Gráfico*, “Hay tierra para repatriados -INTA”, 3 de mayo de 1988; *El Gráfico*, “INTA: 200 caballerías para repatriados”, 2 de octubre de 1988. En la reunión de CIREFCA en 1990, el gobierno informó que la tierra disponible eran de 300 caballerías (13,500 has.) (República de Guatemala, 1990:3).

Asimismo, analiza la situación actual de las actividades económicas comentando que la actividad agrícola “se caracteriza por el cultivo de granos básicos para auto-consumo y para la venta, así como de cardamomo y café [cuya] rentabilidad... ha disminuido considerablemente por la baja de los precios... y alto costo del transporte”.^{74/} La actividad pecuaria es “escasa”; el transporte público “se reduce a pick-ups que trasladan a la población en condiciones de riesgo y a precios elevados”; y la de servicios se constituye en “la venta de bienes que requiere la población para su consumo [con] un recargo que va entre un 15% a 30% de los precios normales” (Gutiérrez, 1989:6-7).

En general, aunque los precios obtenidos por los productos agrícolas son bajos y los costos de los insumos y otros bienes, elevados, los residentes del Ixcán logran mayor autoabastecimiento de granos básicos y animales de crianza que los campesinos del altiplano. Aunque los ingresos monetarios de las familias no son constantes durante el año, pueden representar una cantidad significativa cuando se logra vender un cerdo o es la época de vender la cosecha de cardamomo o café. Esta característica, claro está, hace que la economía familiar sea especialmente vulnerable a los desastres y fenómenos naturales.^{75/}

Todos buscan una forma de complementar sus ingresos, pero en general, hay pocas oportunidades de trabajo localmente.^{76/} Algunos trabajan por día en parcelas de vecinos ganando entre 4 y 10 quetzales, dependiendo del lugar. En Xalbal, la referencia de un pago bueno por jornal era la compañía petrolera, AMOCO, que se vio forzada a salir en 1989 por presiones de la guerrilla; la compañía pagaba 10 quetzales.

^{74/} Los precios del cardamomo en 1987, por ejemplo, habían caído 25% en relación con los de 1980 debido a la sobreproducción local y a la saturación de un mercado internacional limitado. *Crónica*, (1987:25-26). Según cálculos, el área de cardamomo cultivada en Guatemala se incrementó de 25 mil a 50 mil manzanas entre 1979 y 1986. El precio promedio de exportación en 1979 fue de Q. 657 por quintal (Q.1=\$US 1) y en 1986, Q. 400 por quintal (Q.2.5=\$US 1) (*Prensa Libre*, “¿Hacia dónde va nuestro cardomomo?”, suplemento Agropecuario, 26 de febrero de 1988).

^{75/} En los últimos años, las fuertes lluvias, especialmente entre noviembre y enero, han causado el desborde de los ríos, dañando infraestructura (puentes, casas) y arruinando cosechas y terrenos de cultivo.

^{76/} Algunos jóvenes, especialmente mujeres, se colocan en Cantabal en servicios domésticos u otros, o bien migran a la capital. La migración temporal hacia afuera de la región parece ser poco significativa; un factor puede ser el alto costo del transporte.

Otros trabajan en acarrear (“jalar”) madera o vender las maderas finas de las parcelas (la explicación dada es que lo hacen como mecanismo de sobrevivencia inmediato). La tala de maderas finas es realizada, en su mayoría, por los nuevos parcelarios, posiblemente porque se sienten inseguros de la tenencia de su parcela dado el posible retorno de refugiados de México. El jalar madera es un trabajo físico exigente que rinde un pago de sólo 4 ó 5 quetzales diarios.^{77/}

La mayoría de servicios y comercio se concentran en Playa Grande y aldeas aledañas. Del área bajo enfoque, en Xalbal funciona una trilladora de arroz que está operando con la cooperativa, mientras que en Kaibil Balam un pequeño grupo de “nuevos” obtuvo un préstamo de BANDESA para instalar una secadora de cardamomo en su aldea.

Los comerciantes obtienen buenas ganancias y algunos se mantienen sólo del negocio. Para los pequeños vendedores, el problema fundamental es el abastecimiento, ya que los precios en Cantabal/Playa Grande son muy altos y Barillas se encuentra demasiado lejos. En las comunidades donde hay destacamento militar, el gasto de los soldados en refrescos y galletas representa una ganancia importante para muchos.

Los repatriados que llegan a Ixcán se insertan en ese contexto. Debido a su experiencia única, primero en el proceso de colonizar la selva y luego en los campamentos en México, tienen una idea clara de lo que quisieran lograr. La reintegración exitosa para ellos comenzaría con la recuperación de las condiciones en que estaban “antes,” para de allí seguir adelante. Y aquí hay que anotar que ese “antes” significa un nivel socio-económico más avanzado que el que tenía la mayoría de la población campesina del país.^{78/}

Al regresar a Ixcán, y después de lograr asentarse en algún sitio con perspectivas de quedarse, cada familia empieza la tarea de establecer su base económica. Tiene que asegurar cuál terreno será suyo y empezar a cultivarlo, una tarea ardua si éste ha estado abandonado desde 1982.

^{77/} Según PRODERE: “La explotación forestal es indiscriminada, por la ausencia de controles. El beneficio de esta explotación mayormente lo tienen empresas aserraderas, que vienen deforestando el área.” (Gutiérrez, 1989:6).

^{78/} Por ejemplo, cuando la población hace estimaciones del costo de lo perdido por familia con la violencia, incluyendo ganado y otros animales, siembras, cosechas, casas, bienes y dinero en efectivo, calculan, en quetzales de 1990, desde Q.6,000 hasta Q.60,000 (entrevistas Ixcán 1989).

Mientras tanto, construye su casa y generalmente tiene que buscar algún trabajo remunerado para alimentarse antes de la primera cosecha y satisfacer las necesidades de la casa.

Este esfuerzo se da en medio de un proceso de diferenciación económica, tanto entre comunidades como al interior de las mismas, que obedece a factores como: acceso a la tierra, tiempo de haber retornado y de estar cultivando, seguridad de la tenencia de la tierra, acceso a canales de comercialización y al crédito, entre otros.

En general, según lo observado en 1989, las comunidades que se reasentaron primero gozaban de ventajas económicas debido a que pudieron rescatar “siembras de raíz” (cultivos permanentes), las que proveyeron un ingreso inicial, y porque para entonces tenían cuatro o cinco años de estar establecidas. De igual manera, entre los residentes con más tiempo de haberse reasentado están quienes han concentrado recursos para invertir en vehículos, bienes para una tienda o un molino de nixtamal, por ejemplo. Los pocos propietarios de dichos servicios o medios necesitados por la comunidad, tienden a dominar económicamente.

Entre los repatriados hay diferencias económicas ligadas al orden de llegada y al lugar donde se asentaron. Por ejemplo, en Kaibil Balam, un grupo de repatriados que regresó a finales de 1988 logró, en su mayoría, la recuperación de sus parcelas originales.^{79/} En cambio, el grupo de repatriados que llegó en 1989 tuvo que aceptar las últimas parcelas disponibles en vez de las suyas y éstas tendían a ser las menos deseadas por encontrarse demasiado lejos y/o por no tener siembras de raíz.^{80/} Muchos han optado por alquilar tierra para la siembra de maíz y frijol en parcelas más céntricas.

Estos últimos están en condiciones notablemente peores y enfrentan problemas para sobrevivir en el corto plazo (porque la ayuda de la CEAR

^{79/} Después de la resistencia inicial por parte de los nuevos en la comunidad, la entrada de los repatriados fue facilitada por la mediación de las autoridades gubernamentales en un acuerdo firmado en octubre de 1988; parte del acuerdo fue el desalojo de solteros y otros individuos no aptos para ser dueños de una parcela bajo el reglamento del INTA. Así es que cuando los repatriados entraron, encontraron sus parcelas libres, o bien la posibilidad de ocupar las mejores parcelas disponibles, aunque antiguamente pertenecieron a personas que estaban en México.

^{80/} La distancia de la parcela juega un papel importante cuando hay restricciones de movilización y se prohíbe posar o vivir permanentemente en las parcelas, lo que antes era costumbre.

no es suficiente, con el agravante que los granos a veces son de mala calidad) aunado a que la mayoría de los que llegaron en 1989 entraron fuera de la temporada de siembra.

Para resumir, es útil la expresión de un repatriado quien lamenta su situación económica, tanto comparada con la que tenía antes como con la que gozan ahora los “nuevos”, quienes ocuparon las tierras de los refugiados en su ausencia:

Yo sembré con mi mano mi palo de naranja y ni siquiera me va a regalar una, nosotros estamos aguantando hambre y si queremos comer una naranja, a comprar icinco centavos vale una naranja y de [nuestras] siembras estamos comprando! Ahorita estamos luchando, estamos luchando para sembrar un poco... ¿Qué vamos a hacer? Ahora estamos triste un poquito por no tener nuestras cosas. Tal vez Dios ayuda más después, dentro de tres, cuatro años, tal vez ya empezamos”.

Los programas estatales de apoyo

Desde el punto de vista de los ejecutores de los programas estatales, un objetivo primordial es lograr la reinserción de los repatriados en el contexto económico. Sin embargo, la población señala abiertamente la falta de dichos programas o las deficiencias de los mismos.^{81/}

Además de la CEAR, existe una presencia de instituciones de gobierno relativamente grande en el Municipio, la que data de cuando se instituyó el polo de desarrollo de Playa Grande.^{82/} Sin embargo, su presencia en Ixcán Grande (occidente del Río Xalbal) es poco visible, pues su trabajo se concentra en el área de Playa Grande.

En el análisis de PRODERE se afirma que:

La presencia del estado en el área de Ixcán, es débil ya sea por número de instituciones públicas presentes, como por el reducido personal asignado... la falta de estímulos al personal, [y] por los escasos recursos destinados al área...

^{81/} Fue común en entrevistas con las autoridades de las aldeas una sensación de desazón porque “vienen para ofrecer ayuda del gobierno, vino el alcalde [del Municipio], han venido de varios países –Italia, Europa– pero nada cambia.” En otros casos señalan directamente a la CEAR: “Los repatriados son mercantilizados por los de la CEAR, pues ellos reciben un sueldo por los repatriados pero no se ve nada de la ayuda” (entrevistas en Ixcán, junio de 1989).

^{82/} Por ejemplo, INTA, DIGESA, DIGESEPE, ICTA, BANDESA, Ministerio de Salud, MALARIA, CRN, INACOP, MINDES e INDECA.

lo que limita significativamente las actividades y servicios de las instituciones ...Muchos de los técnicos y profesionales permanecen poco tiempo [por las condiciones del trabajo]... Lo que no permite una continuidad y seguimiento a los programas que se desarrollan en el área” (Gutiérrez, 1989:8).^{83/}

La prioridad en términos de desarrollo, ha sido crear la infraestructura que no existía en esta zona aislada, especialmente carreteras. Aunque el gobierno cuenta con una institución especializada en construir carreteras, han sido el INTA, una compañía petrolera, y el Batallón de Ingenieros del Ejército, quienes se han responsabilizado de la nueva red de carreteras en Ixcán.^{84/} A pesar del esfuerzo en esta área, hacia 1990 había una mayoría de comunidades sin carretera alguna y sin pista de aterrizaje, a pesar de haber hecho solicitudes específicas al gobierno.

En las aldeas de mayor recepción de repatriados (especialmente en Ixcán Grande) no se desarrolla trabajo de carreteras y no se realizan los programas de capacitación o con visión de largo plazo que, en ocasiones, son planteados. La actividad de las pocas ONG que trabajan allí tiene más impacto a los ojos de la población; *“han hecho pequeñas realidades”*. Según los pobladores en esta zona, los problemas fundamentales –los conflictos alrededor de la tierra, la comercialización, el transporte de los productos y el crédito, por ejemplo– no son atendidos. Y cuando se echan a andar programas, se dan problemas serios de coordinación; es ilustrativo el caso de las varias instituciones que promuevan la salud, viendo tanto capacitación como el aspecto curativo (la ONG francesa Médicos del Mundo, el Ministerio de Salud, la CEAR, Asuntos Civiles del Ejército, más programas de iglesias).

El acceso al crédito es una de las condiciones que los repatriados y la población en general requieren para la reactivación económica.

^{83/} En entrevistas con los encargados de instituciones como INACOP y BANDESA, éstos señalaron una falta grave de personal (funcionaban con dos a cinco personas), de vehículos y de recursos (entrevistas en Ixcán, noviembre de 1989). La excepción era el INTA, que una autoridad de la institución en la capital estimó tenía 300 trabajadores en Ixcán en 1989. El INTA por varios años fue casi la única institución presente en Ixcán: *“está orgulloso de haber hecho todo en Ixcán”*, según la autoridad capitalina, pero *“sería bueno dejar algunas funciones a otras instituciones”* (entrevista INTA, Guatemala, mayo de 1989). De hecho, en 1989 el INTA estaba trabajando con un presupuesto significativamente reducido.

^{84/} Según un teniente destacado en el Río Xalbal: *“Las personas aquí, ni conocen qué es Caminos, ni de otras instituciones, aquí el que les ayuda es el Ejército Nacional”*.

Actualmente, BANDESA es la única institución que extiende crédito en Ixcán, pero su programa es limitado. Según un funcionario de la Agencia de BANDESA en Cantabal, ésta presenta el índice de morosidad más alto a nivel República, debido a los factores sociopolíticos que ha atravesado la zona: los créditos otorgados en los años '70 y '80 no fueron recuperados, debido al desplazamiento masivo de los deudores. El Banco mantiene entonces cierta cautela en su política de crédito. Además, manifestó que las limitantes de carácter nacional (restricción de créditos, tasas de interés y otras específicas del BANDESA) imposibilitan otorgar créditos fácilmente.^{85/} Los pobladores, por su parte, manifiestan que no van a adelantar económicamente a menos que *“nos echen una mano –aquí, la tierra da, pero no hay con qué trabajar”* (Xalbal, junio de 1989).

La institución con mayor presencia en Ixcán es el Ejército. Aparte de sus tropas, la institución castrense tiene hasta 100 especialistas en su compañía de Asuntos Civiles (S-5) que van a todas las comunidades a dar charlas y orientación. El trabajo del Ejército en infraestructura se concentra en el mantenimiento y ampliación de la carretera de la FTN, que hace el Batallón de Ingenieros.

El contacto e interacción del Ejército con la población toma dos formas: la acción puramente militar en las áreas de conflicto más agudo y la influencia ideológica, principalmente a través de Asuntos Civiles (S-5). En un acercamiento que enfatiza lo positivo, los miembros, hombres y mujeres, de la S-5 hablan de los deberes ciudadanos y de cómo el Ejército de hoy quiere ayudar. Un encargado de la S-5 en Ixcán lo plantea de la siguiente manera:

Es nuestra misión darles la seguridad del área, para propiciar un clima de tranquilidad y desarrollo. Asuntos Civiles, su misión radica en trabajar por medio de propaganda escrita y por medio de propaganda hablada, cara a cara y alto parlante y todo, donde dicen cuáles son las ventajas del sistema democrático, que regresen a vivir la vida democrática, que se establezcan en una comunidad y que comiencen a vivir una vida normal. ^{86/}

^{85/} Entrevista en Ixcán, noviembre de 1989. Las parcelas no se pueden hipotecar individualmente según la Ley de Transformación Agraria; sólo es posible hipotecar el parcelamiento en su conjunto y se requiere el consentimiento del INTA y de todos los poseedores.

^{86/} Transcripción de entrevista, noviembre de 1989.

Otros programas e iniciativas presentes

Los estudios y diagnósticos sobre Ixcán coinciden en que la salud, la nutrición, la vivienda, la educación y el acceso a agua potable son áreas con índices negativos importantes. Hasta ahora, el mayor esfuerzo hecho, y el planteado para el futuro inmediato, proviene de fuentes internacionales y/o no gubernamentales.

En Ixcán Grande existen dos misiones internacionales (francesas) con programas de capacitación para promotores de salud y agropecuarios, que han sido aceptadas por las comunidades y las autoridades, aunque se reconoce que sus operaciones son de pequeña escala y sujetas a limitaciones. Su esperanza es abrir espacio para ONG nacionales, pero hasta ahora, pocas han mostrado interés.

Quizás el trabajo más significativo de estas ONG sea el impulso dado a dos asociaciones locales, una de promotores de salud y otra de promotores pecuarios. En la medida en que éstas se vayan fortaleciendo, se pueden convertir en un esfuerzo local importante, tanto en atraer y manejar sus propios recursos (en vez de las ONG o instituciones estatales) como en articular mejor la problemática del área con una perspectiva desde la base.

Otra presencia importante ha sido el programa de la parroquia católica de Ixcán con sede en Cantabal. El párroco que abrió de nuevo el trabajo eclesial en Ixcán en 1985 desarrolló su trabajo de tal manera que ya para 1989 tenía una variedad de proyectos, incluyendo una tienda, una fábrica de block, un aserradero, una secadora de cardamomo y un centro de nutrición materno-infantil. No obstante el alcance amplio de la Iglesia a través de un red de catequistas y promotores, su impacto en muchas aldeas, especialmente las más aisladas, era todavía mínimo.

En 1990, como un proyecto conjunto principalmente entre las diócesis de Huehuetenango y Quiché, se abrió una parroquia específicamente para las 18 comunidades existentes entre los Ríos Ixcán y Xalbal. Aunque, según una encuesta de la Iglesia, sólo 32% de la población en esta área es católica, en 1989 había fuertes expectativas por parte de la población en general de tener de nuevo la presencia directa de la Iglesia, por el apoyo que ésta representaría.

En 1989-1990, el PRODERE (con US\$ 11 millones asignados a Ixcán) llegó para hacer un diagnóstico del área, dialogar con algunas instituciones y elaborar perfiles de proyectos. La mayoría de comunidades llenó

formularios señalando sus prioridades y necesidades. Luego se formularon proyectos por parte del equipo de PRODERE o por instituciones que querían ejecutarlos.^{87/} El fruto de ese proceso, sin embargo, aún no era visible en 1990 y 1991.

Aunque los fondos no irán dirigido en su totalidad hacia comunidades con repatriados, el trabajo que se realice estará basado en el potencial de la zona para ser receptora de repatriaciones masivas provenientes de México: “*El PRODERE... intenta promover el desarrollo local en Ixcán, para estimular el regreso de casi 21 mil refugiados... y para responder a sus necesidades de reintegración en la sociedad*”.^{88/}

La organización social local y los repatriados

En las comunidades estudiadas puede observarse dos patrones de organización social. Una estructura relacionada con las instancias civiles, y otra con la estructura militar.

En lo que se refiere a las estructuras civiles, existen alcaldes auxiliares y una instancia que vigila por el desarrollo de la comunidad. En las cooperativas, esa función está cubierta por la directiva y en los parcelamientos por un comité “pro-mejoramiento”. Adicionalmente, es común que haya comités de educación escolar o de padres de familia y, en el caso de una cooperativa, de educación comunal, administración y fiscalización. Las autoridades civiles se relacionan con el alcalde municipal o su personal y con otras instituciones gubernamentales.

Otras redes civiles son las de promotores capacitados y/o respaldados por instancias fuera de la comunidad y las de líderes religiosos –principalmente catequistas y pastores evangélicos. No existe una organización formal ni fuerte alrededor de las costumbres religiosas de origen maya.

Las autoridades locales ligadas al ejército, son principalmente los comisionados militares y los encargados del sistema de patrulla. Este último era desconocida antes de la década de los ‘80. En general, a estas

^{87/} El diagnóstico identificó como los problemas más urgentes: la falta de integración étnica, la problemática de documentación, la falta de infraestructura –especialmente carreteras, la necesidad de letrización, mejor vivienda y capacitación en varias ramas incluyendo promoción de actividades agropecuarias (Gutiérrez, 1989:16-21).

^{88/} Fabiana Frayssinet, *Excelsior* (México), “Vuelven en porcentaje menor los refugiados a ciudades de Guatemala”, 22 de septiembre de 1990.

autoridades se les atribuye mayor importancia como individuos que a las autoridades estrictamente civiles, lo que en alguna medida refleja el balance de poder entre lo militar y lo civil en Ixcán.

Además, en comunidades donde el Ejército tiene una presencia directa, éste se convierte en una autoridad máxima. En algunas comunidades, la persona de más confianza para los militares durante su estancia, normalmente un comisionado o jefe de patrulla, sigue siendo la más importante en funciones de servicio y control, después del retiro del destacamento.

Sin embargo, es común que se reúnan todos los hombres de la comunidad (las mujeres tienden a participar en menor número) cuando un asunto es considerado de mucha importancia para toda la comunidad.

La dinámica local actual en comunidades de Ixcán cambió con relación a los años '70, cuando la directiva de la cooperativa era la autoridad máxima y, en comunidades respaldadas por la Iglesia Católica, el sacerdote, si estuviera, y los catequistas representaban la institución con un poder moral significativo.

Un tipo de organización "nueva" son grupos formados en base a su calidad de víctimas de la violencia: en varias comunidades se formaron grupos de viudas bajo el impulso del Programa de Asistencia para Viudas y Huérfanos Menores Víctimas de la Violencia (PAVYH), sea para recibir alimentos o para participar en algún otro proyecto. Por otro lado, en comunidades receptoras de repatriados, éstos se habían agrupado a invitación de la CEAR para poder gestionar proyectos. Independientemente de la efectividad o impacto de dichos proyectos (se reportaron muchas limitaciones al respecto), se dio la pauta para que estas personas se agrupen formalmente para tratar de resolver sus necesidades.

Por su lado, los repatriados vivieron bajo nuevas condiciones y formas de organización durante su período de desplazamiento y refugio en México. Esta experiencia se refleja en una actitud de querer reclamar al gobierno y a los vecinos lo que consideran sus derechos. Llegan con la inquietud de aplicar nuevas ideas de cómo trabajar en comunidad basadas en sus experiencias en México. Sin embargo, al llegar, no encuentran que las condiciones estén dadas para aplicar de inmediato sus ideas, y optan por ser cautelosos al expresarse y actuar. Después de comentar su decepción de la recepción al llegar a Ixcán, un repatriado expresó:

Pero como acabamos de llegar, nosotros no tenemos el derecho de hablar todavía, estando un mes, dos meses, así podemos cuestionar, hablar, pero ahora no podemos decir nada.^{89/}

Cabe mencionar que a los ojos de empleados de instituciones estatales, los repatriados vienen muy "acomodados" de su experiencia en México y por eso son exigentes. Después de un incidente en que los repatriados protestaron por los problemas del traslado desde la frontera, un empleado de la CEAR les dijo: "*ustedes están en Guatemala ahora y aquí no hay pisto, ya no es como en México*".

De acuerdo con lo observado, con el tiempo, los repatriados sí van logrando un espacio para actuar. Algunos individuos han llegado a puestos en la directiva de la cooperativa o bien, a ser alcalde auxiliar. Una vez colocados, estos líderes son vistos por los otros repatriados como portavoces que pueden articular sus posiciones y defender sus intereses. No se supo de casos en que los repatriados hubieran asumido uno de los puestos claves en la estructura militar (como comandante de la patrulla o comisionado).

Un obstáculo importante en el ascenso de los repatriados a una participación plena ha sido su pequeño número, que aun junto a sus antiguos vecinos, no superaba la fuerza de los nuevos. Es así que se observaba en el caso de la cooperativa Ixcán Grande que los nuevos vecinos ya no rechazaban la organización, sino que habían empezado a usarla en un intento por asegurar sus intereses en el largo plazo. Por ejemplo, en Mayalán y Xalbal, al reestablecerse la cooperativa, los antiguos y repatriados tomaron el liderazgo por ser los interesados y más experimentados en el cooperativismo. Después de dos años, la junta directiva, que ahora representa a Mayalán, Xalbal, La Resurrección y Mónaco, estaba dominada por nuevos que "*naturalmente actúan como un bloque, buscando inclinar la balanza a su favor...los nuevos están en control del aparato*" según observadores en la región.

Como se ha indicado, comparado con la época previa a la violencia, ha habido cambios significativos en la configuración étnica en Ixcán. Caracterizado desde su colonización por albergar una gama de idiomas e identidades étnicas, los proyectos (como el de la Iglesia) intentaban superar las diferencias. Además, como la mayoría de los residentes eran indígenas, fueron ellos quienes determinaron el desarrollo de sus

^{89/} Entrevista en Ixcán, abril de 1989.

comunidades, obviando así el patrón de subordinación vigente en sus pueblos de origen.

Ahora, en cambio, el alto porcentaje de ladinos entre los nuevos colonizadores y la afinidad entre ellos pone en cuestión el aspecto étnico en el balance del poder local. Su facilidad con el idioma español, la confianza que tienden a compartir con los representantes institucionales, en su mayoría también ladinos, les han dado ciertas ventajas frente a sus vecinos indígenas.

4. A manera de conclusión

En Ixcán, durante el período del estudio, la inseguridad para cualquier residente del lugar era manifiesta. En primer lugar, la naturaleza de la guerra y la polarización que ésta implica, hacía que la posibilidad de tener que huir estuviera siempre presente. En segundo lugar, la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra detenía planes y acciones, las que no solían avanzar más allá del corto plazo.

Las alianzas locales (repatriados-antiguos, antiguos-nuevos, p.e.) representan un equilibrio temporal precario; era frecuente escuchar la preocupación sobre que podría estallar “una guerra social” si algo (como el retorno masivo de México) rompía el balance delicado que existía. Las alianzas que se daban estaban basadas en lealtades de antes (repatriados-antiguos, refugiados-repatriados) o en nuevas convivencias (nuevos-antiguos, nuevos-repatriados), siendo las de esta última base, las más frágiles.

La polarización y las actitudes de los distintos actores locales adquieren su forma y contenido de la historia particular de Ixcán –una guerra que forzó a todos a tomar partido y que dejó muertos y resentimientos. También siguen afectadas por los actores externos que tienden con frecuencia a crear o exacerbar las diferencias en vez de fomentar mayor unidad. Aquí también entra la situación de los distintos grupos étnicos y la nueva posición de los ladinos en algunos casos.

Los repatriados (y refugiados si retornan) representan potencialmente una “semilla”, por su experiencia y porque han tenido más oportunidad de articular su visión; son personas que tienen novedades con qué contribuir a sus comunidades al retornar. Sin embargo, en general son mal vistos y considerados un peligro o una señal de que “*pueden empeorar de nuevo los problemas*”.

A pesar de ese ambiente de rechazo e insuficiente espacio para expresarse, los repatriados han mostrado una gran capacidad para adaptarse a nuevas condiciones y seguir adelante en la tarea de sobrevivir. Aunque ven las divisiones en la comunidad como problemáticas y la militarización con disgusto, éstas son realidades que han aceptado por ahora.

Queda por ver si habrá oportunidades en el futuro para que participen más directamente en sus comunidades y lleguen a tener impacto en la región en su totalidad. Un funcionario de el ACNUR comentó lo siguiente en relación con los repatriados en Ixcán:

Los repatriados vienen muy listos y preparados. Saben bien cómo manejar los asuntos frente a las autoridades y son duros en exigir lo que quieren de las instituciones [estatales]. Si siguen viniendo y organizándose, son capaces de tomar el gobierno local. Eso sería un logro para el área porque serían personas con un interés en invertir los recursos en el desarrollo del área, no de los que llegaron sólo para sacar ganancias de Ixcán (julio de 1989).

B. El caso de Nentón

1. Reconstrucción histórica

El municipio de Nentón se encuentra en el noroeste del departamento de Huehuetenango, compartiendo al norte y al oeste el límite internacional con el estado de Chiapas, México; al sur con los municipios de Jacaltenango, San Miguel Acatán y Santa Ana Huista; y al este con San Sebastián Coatán y San Mateo Ixtatán, todos del mismo departamento (ver mapa 5). La superficie (aproximadamente 787 km²) comprende partes altas en las faldas de la Sierra de los Cuchumatanes (1,500 metros s.n.m.); hacia el noroccidente, partes bajas y cálidas (814 metros s.n.m.) que forman un valle que se extiende hasta territorio mexicano y que de acuerdo a la Clasificación de Zonas de Vida de Guatemala se le ubica en la de “Bosque Seco Subtropical” (Gall, 1981:736-9 y MAGA, 1982:16). La calidad del suelo (rocoso y calizo) y su configuración quebrada, limitan el aprovechamiento agrícola en gran parte del territorio. Este municipio ha sido escasamente poblado; en 1980 contaba con una población total de 16,000 habitantes (20 habitantes/km.²) de la cual aproximadamente el 90% residía en áreas rurales y únicamente la cabecera municipal contaba con una población superior a los 1,000 habitantes (SEGEPLAN, 1983a).

Aldea del municipio de Jacaltenango en el siglo XIX; fue establecido como municipio hacia 1876, y es parte de la denominada “región de los Huista”.^{90/} Antiguamente se conocía a la cabecera como San Benito Nentón, Nentón se caracteriza por la convergencia de habitantes de las etnias chuj, jakalteka y q'anjob'al –inmigrados de los municipios colindantes– y de habitantes ladinos. Por otro lado, al igual que en otros municipios fronterizos del país, varios de los habitantes tienen abuelos o padres de origen mexicano, por lo que las relaciones económicas y sociales han sido constantes y la frontera ha sido un elemento artificial en las mismas.^{91/}

El área de enfoque del presente estudio fue la franja norte del Municipio, donde la población es predominantemente chuj con ascendencia de San Mateo Ixtatán. En ésta dominan tres patrones con referencia a la tenencia de la tierra; el primero lo constituyen las grandes fincas privadas dedicadas a la producción de café y/o a la crianza de ganado.^{92/} El segundo patrón lo constituyen las tierras compradas al Estado o a dueños particulares en forma colectiva por campesinos de comunidades que por generaciones fueron mozos-colonos de esas fincas, y otros campesinos que migraron del altiplano de los Cuchumatanes de donde han sido expulsados por el agotamiento lento de la tierra productiva.^{93/} El tercer patrón lo forman los campesinos que, en forma individual o en pequeños grupos familiares

^{90/} Tradicionalmente se conoce como los “Huista” al conjunto de los municipios de Nentón, Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista y Concepción Huista, en el departamento de Huehuetenango. “Huista” podría ser un apócope de “huitztlán”, que en Náhuatl significa abundancia de espinas o paraje espinoso, (Gressi Camposeco, 1991:11-12).

^{91/} Una encuesta realizada entre los refugiados en Chiapas, por la Diócesis de San Cristobal Las Casas, arrojó que el 37% de los encuestados tenían algún familiar que había migrado antes de la violencia a México o era originario de ese país (Manz, 1988a:152).

^{92/} Estas fincas ocupaban hacia 1979 la mayor parte del territorio del Municipio, pues de un total de 615 fincas registradas, 44 fincas mayores de 1 caballería ocupaban el 80% de la superficie. (Dirección General de Estadística, 1979: 80).

^{93/} Éste es el caso de Yuxquén, El Aguacate y Yalambojoch, que conforman un patrimonio agrario colectivo. Las extensiones que hoy ocupan las comunidades citadas eran fincas privadas que, según testimonios de los pobladores, fueron expropiadas bajo el programa de reforma agraria de 1952 y adjudicadas oficialmente en 1956. En los años '50, un grupo de ladinos de la Cabecera Municipal y q'anjob'ales de San Miguel Acatán, compró a un particular la finca Chacaj, negociación en la que el Estado fue intermediario. Recibieron el título formal de propiedad hasta 1977.

provenientes de las comunidades citadas (en su mayoría chuj), se asentaron en tierras nacionales ubicadas en la faja fronteriza del norte en los años '40 y '50. Supuestamente fueron amparados con documentos de posesión en forma individual antes del desplazamiento masivo.^{94/}

^{94/} Así, personas de la finca Las Palmas se asentaron en Santa Elena y Yalcastán Buena Vista; otras de Yuxquén en La Ciénaga; trabajadores de la finca San Francisco se asentaron en tierra nacional de Yulaurel.

Aunque la mayoría de las comunidades tenía una producción agrícola de subsistencia, las asentadas en algunas fincas o con acceso a tierras situadas en áreas con un mayor grado de fertilidad, lograban obtener algún excedente que les permitía vivir con cierta comodidad. Testimonios recogidos en las aldeas visitadas, dan cuenta que “antes de la violencia”, fueron numerosas las personas que lograron poseer algunas cabezas de ganado, lo que significaba algún grado de acumulación. La emigración económica a las fincas de café ubicadas en el estado de Chiapas, México, en la época de la cosecha fue una constante y constituía –como en la actualidad– una de las principales fuentes de ingresos adicionales para los campesinos pobres del área.^{95/}

La existencia y explotación de minas de plomo, por parte de los propietarios de las fincas o subarrendadas a empresarios particulares desde los años '50, constituía otra fuente de trabajo para algunos pobladores de la región siendo aún una fuente de ingresos, aunque muy limitada.^{96/} El territorio se ve deforestado en muchos lugares, pero existen algunos bosques con maderas finas o comerciales, que actualmente se encuentran bajo reserva municipal.

Por su aislamiento geográfico, Nentón vivió en un abandono casi total en lo que se refiere a la atención estatal. El camino de terracería que conecta al municipio con la Carretera Panamericana se inició apenas a partir de 1978 como una fase del proyecto de la Franja Transversal del Norte (FTN), llegando a la Cabecera Municipal en 1981. Para finales de 1989, el tramo carretero construido por el Batallón de Ingenieros del Ejército, llegaba a la altura de la finca San Francisco (40 Kms. al norte de la Cabecera).^{97/}

^{95/} La economía de los habitantes de la región fronteriza de Nentón ha estado muy vinculada a la mexicana; mejores vías de comunicación y la cercanía de poblaciones con amplias redes de servicios facilitan que gran parte de la población busque en México soluciones a sus problemas de empleo, salud, abastecimiento y otros servicios.

^{96/} En Finca Las Palmas, los habitantes indicaron que existen dos minas de plomo que aún son explotadas. En Yuxquén se localiza otra mina que es explotada por los residentes de la aldea, constituyéndose en la única mina que es aprovechada en forma colectiva con técnicas artesanales; sin embargo, los ingresos son insignificantes, hacia 1990 les pagaban Q.55 por quintal de plomo procesado.

^{97/} Este tramo era la continuación del proyecto de la FTN que conectaría con el área de Ixcán. Sin embargo, por situaciones no aclaradas, la construcción se suspendió en noviembre de 1989 y la maquinaria y equipo fueron retirados del área. Comentarios de la población dan cuenta que la insurgencia efectuó varios ataques a las instalaciones y a la maquinaria, provocando enfrentamientos con el Ejército.

Ese aislamiento del Municipio respecto al resto del país, se reproducía en la relación que las aldeas norteñas tenían con la Cabecera Municipal. Una característica común a la mayor parte de las comunidades ubicadas en la franja fronteriza y en zonas prácticamente inaccesibles ha sido la presencia muy débil o la inexistencia de instituciones estatales. Para los habitantes de estas aldeas fronterizas, la caminata de un día por veredas a la cabecera municipal de Nentón sólo era necesaria una o dos veces al año cuando tenían que recurrir a las autoridades edilicias. Para otros asuntos y trámites con el gobierno central, los interesados salían por otras rutas a la cabecera departamental o directamente a la ciudad capital. Pero para el comercio o trabajo (“la chamba”), las fincas y poblados mexicanos fueron más accesibles y promisorios, como se ha indicado.

Un aspecto peculiar de Nentón es que en la Cabecera Municipal predominan los no-indígenas o “ladinos” (alrededor del 90%), contrastando con el área rural del municipio donde los indígenas constituyen la mayoría, situación que, al igual que en otros municipios con esa característica, era un punto de contradicción entre sus habitantes y que pudo haber sido un elemento desaglutinador entre la población en la década de los '80. La vida cultural de las aldeas se ha mantenido relacionada con los pueblos históricos del altiplano de la Sierra de Los Cuchumatanes, como San Mateo Ixtatán y Jacaltenango.

Otro antecedente en Nentón es que la mayoría de los habitantes del Municipio no atravesó por las actividades y experiencias de organización que vendrían a relacionarse con la “violencia” después, como en otras partes de Huehuetenango y el resto del país. Así, la presencia y la actividad de la Iglesia Católica en la ejecución de proyectos comunitarios se dio en un grado menor que en otras áreas.^{98/} No se observó la misma actividad de organización y demás relacionadas con el cooperativismo; tampoco fue significativa la participación en la migración y colonización que miles de huehuetecos realizaron a la zona de Ixcán, y a la Costa Sur; por lo que la población de Nentón tenía menos conocimiento y/o participación en organizaciones campesinas que a finales de la década de los '70 aglutinaban a un alto porcentaje de la población

^{98/} La mayoría de la población es católica, aunque entre los chuj la práctica de “costumbre” es común. Iglesias protestantes (Asamblea de Dios y Pentecostés) tienen ahora una mayor presencia. A principios de la década de los '60, llegaron algunos misioneros “Testigos de Jehová”, logrando conversiones en dos comunidades, especialmente en El Quetzal y Gracias a Dios.

campesina en el país.^{99/} Y, más ajena aún a esta situación y problemática nacionales fue la franja norte del municipio que posteriormente sería fuertemente golpeada.

Un hecho que influyó en algunos campesinos del Municipio en el decenio de los '70, fue la llegada del partido Democracia Cristiana. Dirigentes del partido visitaron algunas comunidades ofreciendo apoyo organizativo, les prometieron ayuda y un gobierno “para ellos”, y algunos recuerdan a las figuras “históricas” de dicha organización política.^{100/}

Al finalizar los años '70, la insurgencia se hizo manifiesta en la región. Según algunos testimonios, “ellos pasaban” en las comunidades hablando o comprando cosas, algunos les “escuchaban” e incluso hubo casos de reclutamiento. Hacia 1980-81, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) actuaba plenamente en la zona y efectuó varias acciones dirigidas contra los propietarios o administradores de las grandes fincas, una empresa privada e instalaciones del gobierno municipal.^{101/} Las personas con algunas posibilidades empezaron a salir en esos años hacia municipios cercanos o la Cabecera Departamental. Para 1981 el nivel de tensión militar había llegado a su punto crítico.

La población del Municipio sufrió un proceso de desplazamiento masivo durante 1982. Vecinos estiman que más del 90% de la población total se desplazó en ese año. Los escasos documentos y el trabajo de campo realizado permiten ahora describir en dos flujos el desplazamiento de la población del municipio de Nentón y áreas circunvecinas hacia 1982.^{102/}

^{99/} Esto podría deberse en parte a la ya mencionada relación histórica, tanto económica como social, que esta zona ha tenido con el lado mexicano.

^{100/} Según un vecino de la Cabecera, en las elecciones generales de 1974 y 1978, los candidatos de dicho partido resultaron ganadores en los comicios municipales; sin embargo, debido a los fraudes electorales, no tomaron posesión. En las elecciones municipales de 1988 y 1990, el candidato de ese partido resultó electo, no así en 1985.

^{101/} En 1981, la guerrilla dio muerte al administrador de la finca Chaculá. En ese mismo año entraron a la Cabecera Municipal e incendiaron la maquinaria de la compañía privada que construía la carretera de acceso al Municipio. En 1982, dieron muerte al administrador de la finca La Trinidad, quien residía en el lugar y tenía la reputación de extorsionar a los mozos en nombre del propietario de la misma (notas de campo, 1989).

^{102/} Fundamentalmente los de Falla (1983a, 1983b, 1988a). Este autor utilizó fuentes de primera mano (testigos presenciales, vecinos del lugar y el sacerdote norteamericano del área), además de segunda mano como periódicos, entrevistas escritas y otros documentos en la elaboración de sus ponencias.

Estos flujos se dieron después de que en otros municipios de Huehuetenango y departamentos de la región del altiplano central del país, se habían sufrido varias masacres y hechos violentos significativos durante 1981 (Davis y Hodson, 1982:47-52).

El primer movimiento perceptible de desplazamiento afectó la franja suroeste (zona cálida de Huehuetenango) donde se asientan los municipios de La Democracia, Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Jacaltenango e incluyó a la cabecera municipal de Nentón. Este desplazamiento fue el resultado inmediato de una combinación de sucesos violentos de tipo selectivo seguido por masacres y otros actos violentos, entre 1981 y 1982.^{103/} En el caso específico de la cabecera municipal de Nentón, el Ejército (de paso allí) ordenó el desalojo de la misma, quedando abandonada durante siete meses (de enero a agosto de 1982), hasta que la misma institución permitió el retorno. Simultáneamente los pobladores del valle de Chacaj buscaron refugio, producto de la violencia que afectó a algunos de ellos.^{104/}

El autor citado sugiere que los acontecimientos del área fueron producto de su posición geográfica-estratégica y de la posibilidad de que la población hubiera brindado colaboración a la insurgencia. Estas situaciones provocaron el abandono de varias aldeas, de las cuales empezarían a salir los primeros refugiados hacia territorio mexicano.

El segundo flujo sucedió en la parte norte del Municipio (durante el segundo semestre de 1982), en las aldeas chuj colindantes al noroeste con México y al este con la parte montañosa de San Mateo Ixtatán, consecuencia inmediata de una operación militar de las fuerzas gubernamentales provenientes de las cumbres de los Cuchumatanes y que prácticamente vació todas las aldeas del norte de Nentón. En esta franja del territorio, la población no experimentó la misma etapa de militarización y represión

^{103/} Falla (1983b:39-55) describe el proceso violento que afectó durante 1981 y septiembre de 1982 al área sur del municipio de Nentón y municipios colindantes en cuatro etapas: la represión selectiva contra líderes locales se dio en una primera instancia, luego asesinatos de grupos familiares, la tercera de masacres por comunidades y finalmente las acciones en las que participaron miembros de las patrullas civiles.

^{104/} Según testimonio de un repatriado, él huyó hacia México al recibir varias amenazas de la guerrilla por ser supuesto colaborador del Ejército. Por otro lado, refugiados describieron cómo una noche de diciembre de 1981, el Ejército entró a su aldea y ellos, advertidos por otros vecinos, cruzaron la línea fronteriza. Por la mañana regresaron a su aldea y encontraron varios muertos, por lo que optaron por buscar refugio en México (notas de campo, 1989).

selectiva que caracterizó otros lugares, sino que fue bruscamente sacudida por masacres. En cuestión de dos meses (julio-agosto de 1982), se estima que aproximadamente 9,000 campesinos de esta zona fronteriza huyeron hacia México a raíz de la masacre de la finca San Francisco, “ya que la noticia se extendió en toda la región...”.^{105/}

El 15 de julio, jueves, se va preparando la masacre de San Francisco... tropa desde Barillas llega a San Mateo y de ahí baja a Bulej dispuesta en gran número a entrar a la zona baja, hasta ese momento no tocada por la represión... realizando una operación de rastreo y castigo a supuestos colaboradores de la guerrilla...(Falla, 1983b:18). [El 17 del mismo mes,] llegaron [a San Francisco] 600 soldados a pie... frustrados aparentemente de no encontrar un campamento guerrillero situado hacía algún tiempo en las cercanías montañosas y dispuestos, según parece, a terminar con la finca-aldea San Francisco (Falla, 1983a:43-44). Se le dice a la gente que habrá una reunión... A los hombres los congregaron luego en el juzgado (alcaldía auxiliar) y los encerraron allí y a las mujeres con los niños las introdujeron en la iglesia... Al final del día habían asesinado a más de 300 personas. [...] sobrevivientes huyen hacia el lado mexicano... (Falla, 1988a:23-24 y Manz, 1988a:246).

Dado que la zona aledaña a la finca San Francisco no había sido objeto de represión, y donde la guerrilla se movía con suma facilidad y regularmente se abastecía del ganado de aquella, Falla concluye que la presencia directa de la guerrilla y el posible grado de colaboración de la población, fue la justificación inmediata de la masacre (Falla, 1983b:20).^{106/} Se ha sugerido también que la masacre corresponde a la estrategia que el Ejército implementó en julio de 1982, en la zona de Los Cuchumatanes y otras partes del país en el sentido de “limpiar” (despoblar) las zonas fronterizas para cortar cualquier apoyo por parte de la población hacia la insurgencia. El Ejército continuó su operación hacia

^{105/} (Falla, 1988a:23) El suceso de la finca San Francisco fue como un detonante que provocó el éxodo masivo de las aldeas vecinas y el abandono parcial de otras más lejanas. En el área de enfoque del presente estudio, quedaron abandonadas totalmente las aldeas: Yalambojoch, Yuxquén, Santa Elena, Yulaurel, La Ciénaga, Yalcastán Buena Vista, Yaltoyá y El Quetzal. Abandonadas parcialmente: La Trinidad, El Aguacate, Las Palmas, Gracias a Dios y otras, sin contar caseríos (notas de campo, 1989). La encuesta realizada por el Programa de Ayuda para los Vecinos del Altiplano en 1984, arrojó que 46 aldeas o fincas estaban abandonadas en el municipio de Nentón (PAVA, 1984).

^{106/} Según un vecino a finales de 1981 “prácticamente la guerrilla había declarado territorio libre parte de Nentón, Jacaltenango, Santa Ana Huista y otros municipios del nor-oeste...” (notas de campo, 1989).

el noreste, “...quema otros pueblos de la zona y comete otras masacres”, dejando una secuela de violencia nunca antes vivida en esta región (Falla, 1988a:23).

Los sobrevivientes de aldeas cercanas huyeron rumbo a la frontera avisando a otras aldeas y de éstas las personas apenas tuvieron tiempo de tomar a sus niños y refugiarse en territorio mexicano. En una comunidad fronteriza, los repatriados cuentan cómo cantidad de personas pasaban durante la noche atemorizados por los hechos violentos sucedidos en sus comunidades en esa época, buscando cruzar la frontera diciendo: “los ejércitos (refiriéndose a las tropas oficiales) vienen atrás matando a la gente y quemando nuestras casas...”

En México, los habitantes de esas comunidades buscaron refugio en las colonias, ejidos y fincas cercanas donde ya conocían personas o habían trabajado, o formaron campamentos cerca de la frontera. Aunque los campamentos contaban con un apoyo de la Iglesia Católica y/o vecinos solidarios con su situación, sus condiciones de vida, acceso a alimentación y garantías de seguridad eran precarias (véase sección sobre la estancia en México incluida en el caso de Ixcán).

2. Experiencias de reintegración

Desde agosto de 1982, cuando se inició el reasentamiento en la Cabecera Municipal y algunas aldeas del Municipio, hasta los primeros meses de 1986, puede diferenciarse un primer período en el cual los habitantes del Municipio que buscaron refugio en territorio mexicano o se desplazaron internamente iniciaron un esfuerzo de reintegración. El marco en el cual estos retornados debieron afrontar la reconstrucción y el reinicio de sus actividades, fue el de los programas de reasentamiento implementados por los gobiernos militares, estando prácticamente declarada el área como de “emergencia militar” o “zona de conflicto”.

La cabecera municipal de Nentón empezó a ser repoblada en agosto de 1982 con desplazados internos y algunos que buscaron refugio temporal en territorio mexicano.^{107/} Hacia 1984, la encuesta del PAVA encontró que sólo la mitad de los residentes originales de la cabecera había retornado (PAVA, 1984).

^{107/} Según testimonio de un habitante de la Cabecera Municipal, el Ejército instaló primero un destacamento en el poblado y luego llamó a los maestros y hombres del pueblo para iniciar las tareas de reconstrucción.

El 30 de noviembre de 1984 fue inaugurado oficialmente el “Polo de Desarrollo de Chacaj” en el valle de la aldea Chacaj. Este polo constituyó uno de los cinco desarrollados durante el régimen del general Oscar Mejía Víctores durante 1984, y entre otras funciones:

... [Chacaj estaba] destinado a la captación de refugiados en el territorio mexicano,... que están viviendo en condiciones infrahumanas, para que, cuando decidan voluntariamente regresar a Guatemala, encuentren condiciones que les permitan vivir con dignidad.^{108/}

El reasentamiento de las aldeas ubicadas al norte del Municipio se inició a finales de 1984, cuando entraron los primeros repatriados que se vieron afectados por la reubicación de los campamentos de refugiados en el estado mexicano de Chiapas. Algunos intentaron asentarse en sus comunidades, pero no lo lograron, ya sea que por razones estratégicas no se los permitió el Ejército o bien porque algún incidente los obligó a ubicarse en alguna comunidad cercana a la suya.^{109/}

Para estos repatriados, la recepción y reubicación estuvo a cargo exclusivamente de las fuerzas armadas, tocándoles reconstruir sus comunidades en un ambiente altamente militarizado y sin asistencia específica. Esta experiencia vendría a reflejarse, posteriormente, en cierto grado de resentimiento de algunos de los primeros reasentados hacia quienes regresarían bajo el programa oficial de repatriación. Esa actitud fue manifestada por uno de los primeros reasentados así:

...no recibimos ningún apoyo de nadie, sólo la fuerza de Dios y la voluntad de la gente para reconstruir otra vez... ahora, a los que vienen les dan comida, láminas y todo, pero tal vez nosotros sufrimos más pero nadie nos ayudó...

Por otro lado, algunas comunidades se mantuvieron pobladas parcialmente después del desplazamiento masivo.^{110/} Un ejemplo es

^{108/} Ejército de Guatemala (1985). Nuestro estudio no profundizó en este caso por haber sido documentado ampliamente por otros, véase: Manz (1988a y 1988b), CEIDEC (1988 y 1990) y Krueger y Enge (1985).

^{109/} Éste fue el caso de Yuxquén. Los primeros repatriados en 1985 se asentaron en el lugar que ocupaba la antigua comunidad, pero a raíz de un enfrentamiento armado en las proximidades, uno de ellos fue llevado a la zona militar y nunca apareció, ante ese suceso optaron por desplazarse a otra aldea (Manz, 1988a:85).

^{110/} En las comunidades que no fueron afectadas directamente por la violencia, muchos campesinos decidieron no refugiarse, pues salir les podía significar que les acusaran de complicidad con la insurgencia o la pérdida de los bienes que tras largos años de trabajo pudieron acumular.

aldea La Trinidad en la que prácticamente la mitad de la población huyó y el resto hubo de someterse a las nuevas condiciones de vida. Cuando el Ejército formó las patrullas de autodefensa en esta comunidad, según un testimonio recabado, fueron enviados a “*rastreos, sin entrenamiento ni buenas armas*” ocurriendo varios incidentes armados con saldo de muertos y heridos.^{111/}

Esos acontecimientos, junto con las tareas de reconstrucción y apoyo logístico requeridas por el Ejército en varias aldeas, hicieron madurar en algunos una actitud de rechazo hacia la guerrilla y a quienes, según los discursos de la institución armada, fueron los culpables de apoyarlos: los ahora refugiados.

A finales de 1986, con la puesta en marcha del programa oficial de atención a los repatriados por parte del gobierno civil, puede marcarse el inicio de una nueva etapa para los repatriados al municipio de Nentón.^{112/} Las experiencias de reintegración de los repatriados se dieron ya dentro del marco de acciones que implementó el gobierno civil en el Municipio. Paralelamente, se venían dando retornos de refugiados que no fueron registrados en campamentos y que ingresaban fuera del programa oficial. Por otro lado, entre 1985 y 1988, el área experimentó una relativa calma del conflicto armado, lo que varió sustancialmente hacia 1989.

Los problemas de la tierra

Dentro de las motivaciones para retornar, como se ha anotado ya, se encontraba el acceso/recuperación de tierras. A diferencia de otros lugares (Ixcán), en el municipio de Nentón no hubo intención de asentar nuevos parcelarios en las comunidades, a excepción del patrimonio colectivo de Chacaj.^{113/}

^{111/} Notas de campo, 1989. El informe del PAVA (1984) documenta tres incidentes armados entre la patrulla civil y la guerrilla en La Trinidad donde hubo muertos durante 1983.

^{112/} Según los registros del ACNUR, de enero de 1985 a diciembre de 1990, el total de repatriados al municipio de Nentón era de 1,061 personas, lo que representaba aproximadamente 242 familias (véase cuadro adelante).

^{113/} En esa aldea, con la implementación del “Polo de Desarrollo”, se declaró el abandono “voluntario” de las tierras y se adjudicaron las parcelas a los nuevos residentes. Después de varios años y una serie de situaciones tensionales, se llegó a un acuerdo en 1989 en el que se determinó que se quedarían residiendo 64 familias

Hubo algunos casos en los que se asentaron nuevos campesinos en las fincas privadas o en las tierras de propiedad mancomunada, pero estas personas prácticamente constituían desplazados internos por razones de la violencia o económicas, y ellos reconocían públicamente que la tierra no les pertenecía y que estaban dispuestos a abandonarla cuando retornaran sus propietarios.

En el caso de las grandes fincas, después del período violento y en algunos casos antes, los propietarios de las mismas prácticamente las habían dejado en usufructo a los antiguos mozos-colonos que no se desplazaron, junto a las personas que buscaron resguardo en las mismas y algunos repatriados (Las Palmas, La Trinidad, El Quetzal y otras). En estos casos, los repatriados tenían acceso a un terreno donde cultivar, pero la inseguridad en cuanto a la permanencia era manifiesta. Durante 1989, en esas comunidades iniciaron algunos trámites para buscar solución al problema de la tierra a través del mecanismo de la compra-venta, pero ninguna institución les había ofrecido ayuda.^{114/} Por otro lado, el temor de que otras personas lograran comprar dichas fincas les causaba más incertidumbre, al igual que saber que en un momento determinado podía reposesionar el propietario.^{115/}

Esta última situación fue notoria en el caso de los habitantes de la comunidad en la finca El Quetzal, pues la motivación inmediata para el retorno fue que supieron que algunos campesinos de un municipio

a las que el INTA entregó título en 1984 y las 40 familias originarias que se habían repatriado hasta 1989. Las familias a las que el INTA no otorgó ningún título se vieron obligadas a salir con la promesa de que el gobierno los reubicaría en otras tierras. A pesar del acuerdo, la idea de los repatriados era la de seguir presionando al gobierno para que desalojara a los que habían recibido títulos a efecto de contar con tierra disponible para aquellos antiguos poseedores que aún se encontraban refugiados (notas de campo, 1989).

^{114/} En la finca “Las Palmas” (64 caballerías de extensión y yacimientos de plomo), la comunidad inició los trámites para la compra-venta, sin embargo, el propietario les solicitó 1.2 millones de quetzales en 1989. Los vecinos manifestaron que dirigieron memoriales al INTA y a la Comisión Nacional de la Tierra (CONATIERRA), pero no recibieron respuestas. BANDESA no concede créditos para compra de tierras, según entrevista realizada al Jefe de la Agencia de Huehuetenango. La CONATIERRA cesó actividades en 1989 trasladándose todas las funciones al INTA.

^{115/} Según el alcalde de Nentón, “los propietarios de las fincas por compromiso u obligación moral deberían regalar los lugares donde están asentadas las comunidades, pues esas aldeas son más antiguas que la Cabecera Municipal” (entrevista, 1989).

cercano habían iniciado los trámites para comprarla. Ante eso, se comunicaron en los campamentos con todos los refugiados de esa comunidad para que retornaran y en forma colectiva empezar los trámites de adquisición. Esta comunidad entabló comunicación con dos comunidades vecinas (Guaxacaná y La Trinidad), que ya estaban investigando el asunto, con la intención de formar un bloque a efecto de gestionar la posesión de las fincas. Estas comunidades encontraron una serie de dificultades para ubicar al propietario de las fincas y los registros de propiedad.

Por otro lado, en los patrimonios colectivos (Aguacate, Yalambojoch y Yuxquén), algunas familias desplazadas internas se ubicaron en los mismos (campesinos chuj de aldeas cercanas), pero no con el ánimo de despojar a los antiguos poseedores.^{116/} Según los repatriados de estas comunidades:

...toda la gente reconoció el lugar donde tenían su casa, para que no hubiera problema... para los que están refugiados ahí están sus lugares para sus casas y sus siembras...

En relación a las tierras nacionales (La Ciénaga, Yalcastán y Yulaurel) y donde los repatriados no se habían reasentado, éstos cuentan con documentos que los amparan, pero las mismas nunca fueron adjudicadas.^{117/}

El ambiente para la reintegración

Al ingresar a su antigua/nueva comunidad, los repatriados experimentan la receptividad u hostilidad de la población hacia ellos. En las comunidades estudiadas se observó que la receptividad de la población estaba vinculada de alguna manera a la experiencia del desplazamiento. Así, en las comunidades de El Quetzal, Yalambojoch y Yuxquén todos son repatriados, por lo que no hubo problemas en ese sentido; en las

^{116/} Según los habitantes del lugar, la extensión del patrimonio es de 60 caballerías y 8 manzanas, y cuenta con 222 escrituras individuales. Estas comunidades fueron beneficiadas con la reforma agraria de 1952, no fueron afectadas con la contrarreforma de 1954 y el Estado les adjudicó legalmente el patrimonio hacia 1956, a través del mecanismo de la compra-venta (notas de campo, 1989).

^{117/} No se contó con información directa sobre estas comunidades, ya que no fueron visitadas por el equipo de investigación. Se supo que los terrenos estaban ocupados por nuevos colonos.

comunidades donde el desplazamiento fue parcial, existe cierto grado de hostilidad,^{118/} aunque no se ha llegado a los extremos de otros lugares donde los habitantes han manifestado que no aceptarían a los repatriados (ver cuadro 7).^{119/}

El discurso militar a nivel local de asociar al refugiado con la insurgencia ha sido asimilado por una parte de la población, la que se manifiesta poco receptiva hacia los repatriados. Paradójicamente, el incremento del accionar guerrillero en este municipio durante 1989, y el consecuente endurecimiento de las medidas de control y discursos de los militares sobre la población, en cierta forma confirmaban ese supuesto y la población lo manifestaba rotundamente.^{120/}

Se presentaron los casos de cuatro comunidades ubicadas en las tierras nacionales de la parte norte del Municipio, cercanas a la línea fronteriza: Santa Elena, que todavía en 1990 se encontraba totalmente deshabitada habiéndose ubicado los pocos repatriados originarios de ese lugar en una comunidad cercana (Las Palmas);^{121/} y los casos de Yalcastán, la Ciénaga y Yulaurel donde ya en 1989 había nuevos pobladores y los repatriados no habían ingresado a dicho lugar porque manifestaban que podría generarse una situación adversa con aquéllos. Hasta julio de 1990, por lo menos tres aldeas en el área norte de Nentón aún se encontraban deshabitadas, así como un número indeterminado de caseríos.^{122/}

^{118/} El alcalde municipal del lugar manifestó al respecto: “*en la gente existe un celo de que los refugiados fueron los que estaban metidos en algo, pero luego los aceptan*”, entrevista, julio de 1989.

^{119/} Ver sección referente al Ixcán para los casos de Kaibil Balam y Xalbal. Se conoció el caso de algunos repatriados que retornaron a las cabeceras municipales de San Antonio Huista y Santa Ana Huista, donde los jefes y algunos miembros de la patrulla civil les acusaron públicamente de haber participado o ser miembros de la insurgencia y los demás vecinos los trataron con mucha desconfianza.

^{120/} En la cabecera municipal de Nentón circulaba la idea de asociar el flujo de repatriaciones con el incremento de las acciones de la guerrilla (notas de campo, 1989).

^{121/} Hasta septiembre de 1989 eran diez familias. Uno de los repatriados indicó que no habían podido reasentarse en su comunidad por no conformar un número significativo de familias para iniciar el reasentamiento (notas de campo).

^{122/} Entrevista realizada al Jefe de la oficina local del Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDES) de Nentón en julio 1990. Autoridades edilicias de Santa Ana Huista indicaron que varias aldeas de ese municipio aún se encontraban deshabitadas

Cuadro 7
Nentón: repatriados asentados en comunidades de mayor recepción, enero de 1985 a diciembre de 1990 (cifras aproximadas)

Comunidad	Familias	Personas
Gracias a Dios	41	191
El Quetzal	42	184
Chacaj	39	167
El Aguacate	37	160
Yuxquén	23	103
Yalambojoch	15	47
Ojo de Agua	12	52
Chanquejelbé	8	41
Nentón (cabecera)	8	29
Otras	17	87
Total	242	1,061

Elaboración: AVANCSO en base a cifras del ACNUR.

Lo anterior permite sugerir que, aunque la mayoría de repatriados al Municipio solían tener una visión y conocer de antemano ciertos aspectos de la situación que les esperaba (por la proximidad de sus campamentos a la frontera), en el momento del retorno y ya reubicados se daba un ajuste en sus expectativas, en especial en aquellas comunidades que fueron parcialmente abandonadas.

Simultáneamente, iniciaban su esfuerzo de reintegración algunos repatriados fuera de programa. En Nentón se tuvo conocimiento del ingreso de varias familias que se encontraban viviendo fuera de campamentos en territorio mexicano (confundidos como migrantes económicos) y que regresaron al margen del programa oficial. La experiencia en este caso es diferente a la que viven los otros repatriados.

Luego de entrar a su antigua comunidad (que se encontraba cercana a la Cabecera Municipal) se reportaron a la autoridad local (alcalde municipal) quien les levantó un acta, y luego se instalaron en su aldea. Éstos, a diferencia de los repatriados oficiales, no cuentan con asistencia fija. La Iglesia Católica los dotó de enseres para levantar sus viviendas

y que de sus antiguos residentes, algunos se asentaron en la Cabecera Municipal y la mayoría aún se encontraba refugiada en México (entrevista, septiembre de 1989).

(nailons y frazadas) y alimentos.^{123/} Pero esta asistencia era exigua, lo que en parte se debía a la falta de personal en la parroquia que cubría toda el área de los Huistas.^{124/}

La CEAR reporta en sus informes anuales que hasta 1990 había brindado asistencia a este tipo de repatriados; sin embargo, los propios afectados y algunos familiares manifestaron que la institución interponía una serie de trabas burocráticas. Por otro lado, estas personas que regresaron por sus propios medios, sea por desconocimiento del programa oficial o por querer guardar cierto anonimato, generalmente no recurrían a la asistencia oficial.^{125/}

Aspectos organizacionales y políticos

Las condiciones en las que el repatriado debe iniciar su reintegración varían por comunidad; sin embargo, la modificación de algunos aspectos es algo que es común a todas. A diferencia de los casos del área ixil e Ixcán, las aldeas y caseríos de Nentón no sufrieron cambios sustanciales en la etapa de reasentamiento en relación con la ubicación de las viviendas. Dado que se trataba de asentamientos de mozos-colonos de fincas privadas o bien que las viviendas estuvieron edificadas alrededor de un centro urbano, no hubo presiones ni cambios para reasentar las comunidades conforme a un nuevo patrón.^{126/}

El aspecto que el repatriado intuye como el mayor cambio en sus comunidades y el que debe asimilar y en cierta medida enfrentar se

^{123/} La Diócesis de Huehuetenango, a través de la Comisión Diocesana de Pastoral Social, tiene un programa de atención a estos retornados (Diócesis de Huehuetenango, 1988).

^{124/} La parroquia de Nentón no cuenta con sacerdote desde la década de los '70. En esas circunstancias, la parroquia de Jacaltenango cubre toda el área. El agente de Pastoral Social que trata de cubrir todo el municipio brindó asistencia a algunos repatriados, tanto dentro del programa como a los retornados fuera de aquél (entrevista septiembre 1989).

^{125/} La cuantificación de los repatriados fuera de programa resulta difícil. La CEAR proporciona la cifra de 1,253 “ingresados por sus propios medios”, a quienes ha asistido entre enero de 1987 y 1990 en todo el país. En esta cifra incluye también aquellos repatriados que ingresaron al país antes de 1987 (CEAR, 1990).

^{126/} Esto es en la franja objeto de nuestro estudio. La excepción en el municipio de Nentón es la aldea Chacaj, que fue reconstruida en 1984 como “modelo” en un lugar diferente al que estaba ubicada originalmente.

refiere al incremento de la militarización y control en el área, especialmente la conformación de la estructura de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), la instalación de destacamentos militares y las nuevas modalidades organizativas concretizadas en los Comités de Desarrollo Integral.

En relación a las patrullas civiles, se notaron tres situaciones en cuanto al grado de cumplimiento del servicio; así, en las aldeas donde había destacamento militar, el control sobre la patrulla era más fuerte,^{127/} en otras aldeas era más relajado e incluso no se contaba con armas,^{128/} y se daba el caso de una aldea donde la comunidad se reservó el derecho de formar la patrulla civil.^{129/}

En general, la población se ve en la obligación de participar en las patrullas, aunque no se lo exijan directamente, pues es algo que, según ellos, deben cumplir.^{130/} Pero esas situaciones dependían también de la

^{127/} Esto sucedía en la aldea donde estaba acantonado el Batallón de Ingenieros del Ejército, que además era el centro de mando de toda el área. Un oficial del destacamento mantenía reuniones periódicas con los encargados y miembros de la patrulla.

^{128/} Esto se observó en una comunidad que estaba fuera del perímetro donde se construía la carretera y la mayoría eran repatriados, la población se comprometió a patrullar pero sin armas. “Aquí hacemos la patrulla, pero no hay armas... porque así es más tranquilo” (notas de campo, 1989).

^{129/} Esta aldea estaba ubicada en terrenos de una finca privada cerca de la línea fronteriza. Es una comunidad de unas 40 familias, todos repatriados, y la mayor parte son miembros de la Iglesia “Testigos de Jehová”. Su argumento para no conformar la patrulla civil se basó en su religión; “la Biblia dice que nosotros no tenemos que ver con esto [la patrulla], pues no buscamos pleito con ninguno... así también no votamos, porque nuestra religión no nos permite hacer política... pero hay que respetar a las autoridades”. El Ejército aceptó esa situación cuando ingresó el primer grupo de repatriados al Centro de Recepción de Huehuetenango, aunque posteriormente el caso no estuvo exento de presiones, y en la práctica pasó a ser un caso único en la región (notas de campo, 1989).

^{130/} Los turnos eran de 24 horas y la periodicidad dependía de la cantidad de varones en edad de patrullar que residían en la comunidad. La querrela inmediata de los habitantes en relación a la patrulla no variaba de la que han planteado otras comunidades, en el sentido de que les resta tiempo para dedicarse a las labores agrícolas u otras que les permitan la sobrevivencia, además del riesgo personal que representan los rastreos. Otro aspecto observado es que algunos miembros se ofrecían para cubrir turnos de otros a cambio de un pago, muchas veces superior a lo de un jornal de trabajo (notas de campo, 1989).

proximidad o grado de conflicto armado, que varió sustancialmente en la región como se indica más adelante.^{131/}

Otro elemento nuevo y relacionado con las PAC, es la presencia del Ejército, que antes de los '80 tuvo poca influencia en el área. El Ejército tenía contacto con las comunidades y por ende con los repatriados a dos niveles. El primero era –en forma indirecta– a través de los comisionados militares y jefes de las PAC:

el Ejército trabaja a través de los comités promejoramiento y aunque a algunos no les parece, con las Patrullas de Autodefensa Civil, pues las comunidades eligen democráticamente a sus comandantes (de patrulla) y no son impuestos.^{132/}

El otro era con la presencia directa, tanto en acciones “desarrollistas” como cívicas. En el área de Nentón hasta 1989 predominaron el Batallón de Ingenieros, que como se indicó tenía a su cargo la construcción de la carretera, y una serie de destacamentos militares; el campamento principal se encontraba en la aldea Las Palmas, y había destacamentos móviles en aldeas donde se estacionaba la maquinaria utilizada en el trabajo de construcción.

La presencia de estos destacamentos tenía impacto en la vida socioeconómica de las comunidades; así, algunas familias colocaban ventas frente al destacamento, se organizaban juegos de fútbol entre equipos de soldados y las comunidades y otras. La construcción del tramo carretero en alguna medida ejerció influencia “beneficiosa” en las relaciones económicas y sociales, pero generó nuevas necesidades y modificaciones en los patrones de relaciones y consumo (ej. uso de autobuses, ingreso de comerciantes y otros). Además de la construcción del tramo carretero, el Ejército impartía una serie de charlas a los comités de la comunidad a través de la Sección de Asuntos Civiles.^{133/}

^{131/} Como es “normal” en las llamadas “áreas de conflicto”, cuando suceden acciones de la guerrilla en el área, el Ejército endurece las medidas de control y movilización en las comunidades y el costo recae sobre los miembros de la patrulla con señalamientos fuertes, más control e incluso tener que salir a efectuar rastreos.

^{132/} Entrevista a encargado de la Sección de Asuntos Civiles de la Zona Militar de Huehuetenango en el Centro de Recepción de Huehuetenango, abril de 1989.

^{133/} Los oficiales de los destacamentos tenían contacto regular con las autoridades locales, aunque no era tan sistemático y estricto como en el área de Ixcán (notas de campo, 1989).

Por otro lado, las aldeas de la región norte del municipio de Nentón contaban antes de los años '80 con la organización formal de autoridades locales (comisionados militares y alcaldes auxiliares), pero por la ya comentada situación de aislamiento, sus funciones eran débiles. Al mismo tiempo coexistían formas de gobierno propias (consejo de ancianos) y en el caso de las fincas, con los caporales o administradores de las mismas.

Con la implementación de la política nacional de regionalización y descentralización de las funciones estatales, fueron instalados a nivel de cada aldea los Comités de Desarrollo Integral durante 1987, cuya función estaba dirigida a la búsqueda de soluciones a los problemas locales y a canalizar las demandas a las autoridades municipales y/o regionales.^{134/}

Para la población fue peculiar la forma como fueron conformados: “nos enseñaron a hacer el comité... y vamos a recibir cursillos de capacitación” (notas de campo 1989).

El grado de efectividad en las gestiones es difícil de valorar, sin embargo, en aquellas comunidades donde los repatriados eran una mayoría, se observó que estos comités se mostraban ágiles en la gestión de sus demandas, recurriendo directamente a los funcionarios de las instancias que les podían solucionar sus problemas.^{135/}

Con todo, mientras en el pasado para la búsqueda de soluciones a un problema concreto en las comunidades, se acostumbraba reunir a todas las autoridades, ahora los habitantes manifestaban que los de “mayor mando” en cada comunidad eran los jefes de la patrulla y los comisionados militares.

Proyectos y programas: “facilitando la reintegración”

Un proceso de reintegración de los repatriados en Nentón podía, en cierta forma, verse “facilitado” por los programas asistenciales y los que

^{134/} Esta política tiene su antecedente en la implementación de las Coordinadoras Interinstitucionales a nivel nacional, departamental y municipal que se efectuó durante el régimen militar del general Mejía Vítores en 1983. Véase Ejército de Guatemala (1985) y AVANCSO (1988).

^{135/} Estos comités se observaron mucho más activos en este municipio que en las otras regiones visitadas por el equipo, situación ligada en alguna medida a la presencia institucional del MINDES y el programa de la CEE que se comenta más adelante.

pretendían instalar los servicios básicos en el Municipio. Es a partir de 1983 que, con la implementación del polo de desarrollo en el valle de Chacaj, se observa un primer intento de brindar esa atención, pero los programas y proyectos que se ejecutaron fueron de alcance limitado, en cierta medida condicionados por la lógica militar que prevalecía en los programas estatales de esos años.^{136/}

En 1988, como parte del programa oficial de repatriación, se empezó la ejecución de pequeños proyectos de infraestructura en las comunidades donde se instalaba la población repatriada para que *“facilitaran la reintegración del repatriado y que beneficiaran a la comunidad receptora”*.^{137/} Los proyectos ejecutados en el área de Nentón fueron: mejoramiento de agua potable en tres aldeas, drenaje pluvial y escuela en aldea Gracias a Dios y reconstrucción de escuela en aldea La Unión (CEAR, 1990). Pero las obras adolecieron de muchas debilidades, pues se limitaron a mejorar los servicios con que ya contaban las aldeas y los proyectos fueron distribuidos con criterios que divergían de las necesidades reales de la población en general, y de la repatriada en particular. Hubo cierto descontento en aquellas aldeas que no recibieron ninguna atención.^{138/} Esas irregularidades se evidenciaron cuando una comisión de la CEE, después de un período de un año evaluó el programa y concluyó que la CEAR tenía: *“la capacidad de atender lo que se refiere a la recepción y ubicación de los repatriados, no así para llevar adelante los proyectos de desarrollo a mediano y largo plazo”* (Diócesis de Huehuetenango. s.f.a).

^{136/} Para una idea general de los proyectos que se ejecutaron véase: Ejército de Guatemala (1985:90-94), CEIDEC (1988 y 1990), Krueger y Enge (1985), Manz (1988a). En Chacaj, una misión taiwanesa trabajó varios años en un *“programa de desarrollo agrícola integrado”*, incluyendo un sistema de riego, nuevos cultivos y crianza de animales. La misión empezó a raíz de una visita del vice presidente de ese país a Chacaj en septiembre de 1985 (*Prensa Libre*, “Misión técnica china hará una demostración”, 14 de abril de 1988).

^{137/} Los fondos de los proyectos provenían de aportes de la Comunidad Económica Europea (CEE), canalizados y supervisados por el ACNUR a la CEAR, que era el organismo ejecutor (República de Guatemala, 1990 y entrevista al jefe de operaciones, CEAR Huehuetenango, abril de 1989).

^{138/} Así, en la comunidad fronteriza de “Gracias a Dios”, donde se da un alto grado de intercambio comercial, se hizo más inversión que en otras comunidades, a pesar de que contaba con menos cantidad de repatriados. La razón de esa situación fue resumida por un residente de otra aldea: esa comunidad es como un “espejo” hacia México, para que los que están del otro lado (los refugiados) se den cuenta de que se está haciendo obras (notas de campo, julio de 1989).

La CEAR dejó de ejecutar proyectos en el municipio de Nentón en 1989, trasladándose al área de Ixcán. La justificación inmediata era la puesta en marcha del programa auspiciado por la Comunidad Económica Europea (CEE) y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural (MINDES), denominado “Programa de Desarrollo en áreas de Reasentamiento Poblacional del Norte de Huehuetenango”.^{139/}

Dos acciones que el equipo observó, permitían dar elementos sobre el alcance que se perfilaba tendría con la población el programa citado. La primera fue un proyecto de venta a bajo precio de fertilizantes donados por la CEE, en junio de 1989.^{140/} Se distribuyó el fertilizante en la mayoría de aldeas del Municipio, dando prioridad con una mayor cuota a los repatriados y los resultados fueron en general satisfactorios para la entidad gubernamental. Sin embargo, repatriados de tres comunidades (La Trinidad, El Quetzal y Yuxquén) no pagaron, *“por lo que se les negó el abono para el siguiente año”*. Según los trabajadores del centro local del Ministerio, la razón de la mora que los repatriados argumentaron fue que *“como era una donación, entonces no debían pagar”*, agregando los empleados del gobierno *“en los campamentos de refugiados los acostumbraron a que todo se les regalaban y la CEAR les sigue regalando, pero aquí no... [con el programa]”*.^{141/} La razón de la insolvencia, según los repatriados, fue que no lograron buena cosecha pues el fertilizante no era adecuado y no les capacitaron para aplicarlo, de manera que el dinero que utilizarían para pagar, lo destinaron a la compra de granos para su provisión de consumo.

La otra acción observada fue la formulación del diagnóstico de vivienda para la implementación de un proyecto de “viviendas

^{139/} El Programa se empezó a implementar en junio de 1989 y pretendía cubrir seis municipios del norte de Huehuetenango: Nentón, Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa Ana Huista, San Antonio Huista y San Juan Ixcay. El objetivo era buscar la reactivación de la producción y establecer un mínimo de infraestructura social y productiva. El monto del programa ascendería a US\$2.4 millones a ejecutarse en tres años (República de Guatemala, 1990:31).

^{140/} El proyecto consistió en la venta de fertilizante a precio más bajo que el de mercado, pagadero a plazo de cosecha, buscándose crear un fondo rotativo y así financiar el fertilizante para las siguientes épocas de siembra. En las visitas, se constató que la demanda inmediata de los miembros de las comunidades iba, efectivamente, dirigida en ese sentido.

^{141/} Entrevista a Jefe del centro local del MINDES, Nentón, julio de 1990.

adecuadas”.^{142/} Para el efecto se llamó a todas las comunidades a una reunión para presentarles el proyecto y levantar la información; al final, el proyecto no se implementó porque la población lo rechazó. Los habitantes manifestaron su inconformidad desde que les fue presentado el proyecto por dos razones concretas: la primera, el elevado costo de las viviendas, pues muchos veían difícil cancelar el precio de venta de las mismas por la situación de extrema pobreza por la que atraviesan; y la segunda, de más trascendencia, la población manifestaba incertidumbre sobre su futuro y en relación a la tenencia de la tierra, pues la mayor parte de las comunidades están asentadas en fincas privadas.

La Municipalidad de Nentón ejecutó algunas obras de construcción en comunidades receptoras de repatriados (con el aporte del 8% constitucional de fondos del Estado); sin embargo, se invirtió muy poco en comparación con la obra que se efectuó en la cabecera municipal, donde prácticamente se concentró la inversión.^{143/}

En cuanto a servicios de salud, es importante destacar la labor y presencia de la institución francesa “Médicos sin Fronteras”, que con un proyecto de medicina preventiva cubría todas las comunidades del Municipio.^{144/} Aunque su programa no iba dirigido a repatriados específicamente, su presencia constituía un elemento positivo para la situación de esta población pues así contaba, además de la oficina local de la CEAR, con una institución internacional que le podría brindar asistencia en casos emergentes.

^{142/} El plan era la construcción de viviendas en todas las comunidades, empleando materiales y mano de obra locales. Se pretendía capacitar y dotar de maquinaria a cada comunidad para la fabricación de los elementos necesarios y luego se distribuirían los materiales a cada familia. El beneficiado tenía que cancelar en un plazo de 5 a 10 años y con las cuotas se crearía un fondo para cada comunidad que se destinaría a obras de beneficio colectivo (notas de campo, 1989).

^{143/} En la Cabecera Municipal se construyó un edificio de dos niveles para oficinas gubernamentales, se pavimentaron las calles principales, entre otras, mientras que en algunas aldeas se construyeron puentes peatonales y un local para alcaldía auxiliar (notas de campo, 1989).

^{144/} El programa lo desarrollaba en coordinación con el Ministerio de Salud desde 1987, y la impresión en la población era muy positiva. En 1990 implementó un proyecto de introducción de agua potable a la aldea La Unión.

La guerra en el ambiente de la reintegración

Entre 1985 y 1988, el municipio de Nentón experimentó un período de relativa calma de las acciones armadas, pero a mediados de 1989 el accionar guerrillero se incrementó con ataques a objetivos económicos y a unidades militares.^{145/} Por lo lejano del Municipio, los reportes periódicos no daban cuenta de una serie de acciones y enfrentamientos armados sucedidos en aquel lugar; no obstante, los periódicos nacionales informaron de algunos de mayor importancia.^{146/}

Al respecto, un diputado declaró a un periódico nacional: “*el incremento de las acciones de numerosos grupos guerrilleros en el norte de Huehuetenango están limitando el desarrollo agrícola en las comunidades Santiago, Helvetia y Gracias a Dios en Nentón...*”^{147/}

Aunque el accionar de la guerrilla se encontraba focalizado en una faja del municipio colindante con la frontera con México, las acciones se sucedían con más frecuencia en las comunidades donde estaba acantonado el Batallón de Ingenieros del Ejército y que correspondían con el área de reasentamiento de repatriados. El ambiente en las aldeas no era tan tenso como en la otra región de repatriados (Ixcán), pero los repatriados manifestaban temor de tener que volver a desplazarse y de que las entidades estatales no llegaran a brindarles atención o bien que los refugiados aún en México no se repatriaran por la misma situación.

La respuesta del Ejército fue aumentar las medidas de control sobre la movilización de vehículos y peatones hacia las aldeas, e instaló en la Cabecera Municipal –después de muchos años– un destacamento militar durante el primer semestre de 1990, en las antiguas instalaciones de la escuela primaria.

^{145/} Durante las estadías del equipo de investigación en el Municipio se recabó información sobre el derribo de postes de conducción de energía eléctrica; enfrentamientos entre la guerrilla, la patrulla civil de la Cabecera y un destacamento de la Guardia de Hacienda; la colocación de mantas en la carretera y otras (notas de campo, 1989).

^{146/} Entre las más significativas véase: *La Hora*, “En Huehuetenango: ocho soldados mueren en acción guerrillera”, 23 de mayo de 1990; y en el mismo diario: “Tres soldados heridos en ataque de la guerrilla”, 3 de noviembre de 1990.

^{147/} Declaraciones de diputado Marco Antonio Díaz Alva, representante de Huehuetenango al periódico *Siglo Veintiuno*, “Afirman que la guerrilla impide desarrollo agrícola”, 3 de abril de 1990.

3. Sintetizando: en espera de una repatriación colectiva

En alguna medida, la relativa calma que experimentó el Municipio en cuanto a las acciones armadas y la puesta en marcha de programas y proyectos que hasta cierto punto partían de las condiciones de “relajamiento” o “normalidad” que presentaba el área, explicaban, para algunos, el número significativo de repatriados a Nentón. Hasta 1990, el municipio de Nentón era el segundo mayor receptor de repatriados en el departamento de Huehuetenango, después del municipio de Barillas (ver cuadro sobre repatriados por departamento en la sección del retorno).

Así, Nentón presentaba un escenario que, comparado con Ixcán, la otra área de estudio de repatriados, reunía ciertas condiciones y espacios para que los retornados iniciaran un proceso encaminado a recuperar, por lo menos, el nivel de vida que tenían antes del desplazamiento masivo. Un escenario donde, sin embargo, las acciones institucionales dirigidas a establecer la infraestructura mínima que permitiera la incorporación de los repatriados a su región y esta última al conjunto del país eran tibias, y donde el incremento del conflicto armado, en medio de una crítica situación socioeconómica, tendía un manto de incertidumbre sobre el futuro de la región y de la misma población.

Como se ha esbozado, las experiencias de la población repatriada al Municipio pueden verse, en una perspectiva temporal, en dos períodos que presentan características especiales, pero en los cuales los problemas coyunturales no alcanzaron dimensiones críticas. No obstante, el trabajo de campo permitía advertir que los esfuerzos institucionales se verían cortos y los problemas de acceso a tierras, fuentes de trabajo, la demanda de servicios y otros se magnificarían al momento de un proceso de repatriación masiva como lo venía planteando la instancia representativa de los refugiados en México. El número de repatriados en la región era una proporción muy pequeña de los que aún estaban refugiados y podía pensarse que en la medida que no se efectuara un trabajo efectivo de preparación de las condiciones para convertir la zona en una receptora de repatriados, una repatriación mayor generaría una dinámica social con perspectivas desestabilizadoras para el Municipio y su área de influencia.

Los desplazados

A. El caso del Triángulo Ixil

1. Elementos históricos

Una historia de la tierra

“Triángulo Ixil” es un término militar, ahora de uso común, con el que se conoce a los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, del norte del departamento de Quiché, donde radican los ixiles, uno de los grupos mayas relativamente pequeños de Guatemala. Se caracteriza por ser una de las regiones más apartadas del país, con una demarcación geográfica y étnica muy definida que se extiende desde las faldas de los Cuchumatanes en la frontera con Huehuetenango, hasta la sierra más baja de Chamá, por el lado de Alta Verapaz. Es un terreno quebrado, cuyas cordilleras se levantan súbitamente unos pocos kilómetros al norte de Sacapulas en el altiplano de Quiché y descienden con igual brusquedad al borde del bosque tropical del Ixcán. Con altitudes que varían entre 700 y 3,000 metros, la zona abarca múltiples pisos ecológicos, desde la neblina y el frío de las aldeas más altas de Nebaj hasta las tierras más bajas y cálidas que constituyen gran parte de Cotzal y Chajul (ver mapa 6).

Alrededor del 90% de la población del área es de la etnia ixil,^{1/} sobre todo en las aldeas, aunque puede afirmarse que cada uno de los tres municipios constituye un “sub-grupo” ixil, con variaciones de traje y de lenguaje y con distintas relaciones con otras regiones del país. Un denominador común a toda la zona ixil, sin embargo, fue la penetración ladina que se inició a finales del siglo XIX y que produjo cambios profundos que se han dejado sentir a lo largo de su historia reciente.

Los primeros ladinos que se instalaron en el área fueron los contratistas, que llegaban en búsqueda de mano de obra para abastecer a la

^{1/} En el Triángulo Ixil radican también grupos de k'iche' que llegaron a la zona hace una generación o más en búsqueda de tierra, así como otros campesinos indígenas y ladinos que por presión demográfica han emigrado de los municipios colindantes de Huehuetenango.

emergente economía cafetalera de la Costa Sur. Rápidamente descubrieron que la zona ixil contaba con extensas y fértiles tierras baldías al norte y al este de las cabeceras municipales y comenzaron a hacer gestiones, ante el gobierno central, para obtenerlas. Los ixiles consideraban que estas tierras formaban parte de su patrimonio ancestral colectivo (que debía extenderse hasta el Ixcán), por lo que sus autoridades locales empezaron a reclamar que se formalizaran los derechos municipales sobre ellas. No obstante, la región se vio afectada por la política liberal de la época, que buscaba extender la privatización de la tierra.^{2/}

Para los años '30 entonces, los ladinos asentados en las cabeceras municipales del área ixil ya se habían consolidado en una nueva clase comerciante (principalmente en Nebaj, el más importante centro comercial); al mismo tiempo que, alrededor de los cascos urbanos, los cambios en la tenencia de la tierra que el proceso de titulación producía iban cimentándose, dándole a la región muchos de los rasgos que hoy día aún la caracterizan.

De los tres pueblos, sólo Nebaj logró conservar casi todo su antiguo territorio. Chajul y Cotzal perdieron gran parte de su tierra más fértil, en donde empezaron a crearse las dos grandes fincas de café todavía dominantes en la economía de la zona: Finca San Francisco, al este del pueblo de Cotzal, propiedad de la familia Brol y Finca La Perla, de los Arenas, en el área del antiguo pueblo de Ilom al norte de Chajul.^{3/}

Aparte de las fincas, la agricultura de la región sigue basándose en los cultivos tradicionales de maíz y frijol, entremezclándose otros productos de autoconsumo como güisquil, chilacayote, calabaza y, en las partes bajas, plátanos y cítricos. Predomina el minifundio, lo que para la mayoría de las familias ixiles significa verse obligadas a buscar fuentes alternativas de ingresos, ya que la cantidad de tierra con que cuentan

^{2/} Para un resumen de las raíces históricas de los conflictos entre los terratenientes ladinos y los pueblos ixiles, véase Elliot (1989).

^{3/} “En [todo el municipio de] Chajul, sólo un 15% de la tierra pertenece a los finqueros, pero en el área fértil de Ilom, el 95% de la tierra es finca” (Elliot, 1989:7).

La Perla y San Francisco son las principales propiedades de la zona. Existen otras fincas en los tres municipios, algunas mucho más pequeñas y otras, las llamadas “fincas de mozos”, distribuidas en usufructo a colonos aparceros contratados para trabajar cada año en la zafra de la Costa Sur. Tal fue el caso de las 58 caballerías que la familia Herrera (dueña del ingenio Pantaleón en Escuintla) poseía en Cotzal. En 1982, los Herrera entregaron estas propiedades al gobierno (Elliot, 1989:16).

para cultivar no les permite mantenerse. La principal forma de agenciarse de algún dinero en efectivo ha sido la migración estacional a las grandes fincas de café, caña de azúcar o algodón de la costa del Pacífico, por períodos de dos o tres meses que alternan con el ciclo de la siembra y cosecha del maíz en el altiplano. Durante las épocas de migración, ha sido común que aldeas enteras del área ixil se vacíen, principalmente de hombres, aunque con frecuencia participa toda la familia.^{4/}

A lo largo del siglo XX, la combinación volátil de pérdida de tierra y migración laboral dio lugar a casos de choques violentos entre los campesinos y los terratenientes y autoridades locales: en 1925 y 1936, cuando se les exigía trabajar en las fincas bajo el Reglamento de Jornaleros, y otra vez en 1971 (Colby y van der Berge, 1977:160-161 y Berryman, 1984:178-179).^{5/} Impulsó, además, la participación de los ixiles en la Reforma Agraria de 1952 (algunas propiedades del área, incluyendo la Finca La Perla, fueron expropiadas pero restituidas después del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954) y explica en gran parte la simpatía que el Ejército Guerrillero de los Pobres encontró entre la

^{4/} De acuerdo al estudio de Elliot, no fue sino hasta 1950 que la población ixil volvió a alcanzar el nivel demográfico que había tenido antes de la Conquista. Esto implica que durante la primera mitad del siglo, sólo la coerción (o el endeudamiento) aseguraba que los ixiles emigraran a trabajar en las fincas de la Costa Sur, ya que la presión sobre la tierra aún no era tan agobiante como llegaría a ser una generación después.

Hoy día aún se presentan variaciones en el ritmo de migración de los tres municipios. En las aldeas de tierra fría de Nebaj, que sólo obtienen una cosecha de maíz al año, la migración a la Costa Sur se ha generalizado. Es fuerte también en Cotzal, el municipio más pequeño y densamente poblado. En Chajul, con una área más extensa y una “costa oriente y costa norte” de tierra cálida, la migración laboral fuera de la región es más evidente entre la población de la cabecera y en algunas aldeas del municipio que son de tierra fría.

^{5/} De acuerdo a Berryman, el levantamiento de 1971 sólo fue sofocado tras el envío de 2,000 soldados a la zona. Dos años antes, el terrateniente Jorge Brol había sido muerto por un ixil (Elliot, 1989:15). Desde luego, incidentes como éstos no eran hechos insólitos durante la época de la expansión del café en el altiplano. Sin embargo, cabe notar que en la zona ixil, el proceso de desalojo fue más tardío que en otros lugares; en consecuencia, los conflictos de tierra constituyen una historia muy fresca todavía. Ya para los años '70, aparentemente a juicio de las autoridades locales y del régimen militar, esta historia de antagonismos había señalado a los ixiles como un pueblo “revoltoso”, lo que quizás explica en parte la ferocidad con que fue aplicada la estrategia contrainsurgente en el área durante la siguiente década.

población ixil cuando, desde sus bases en la selva de Ixcán, empezó a penetrar el altiplano a mediados de la década de los '70.^{6/}

Ya para los años '70, el Triángulo Ixil se caracterizaba no sólo por el abandono histórico por parte del Estado, sino por un deterioro progresivo en las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes:

[La región ixil] es pobre en el sentido privado y en el sentido público. En el sentido privado porque la tecnología agropecuaria y artesanal es de poca productividad y no permite que la gente gane ingresos convenientes. Es pobre en el sentido público porque estos servicios son casi inexistentes allí: No hay agua potable en los poblados, hay menos del 30% de la población de edad escolar en la educación primaria y los niveles de salud son casi los peores en América Central debido a que los servicios de salud son muy deficientes.

Esta situación desfavorable con relación al resto de Guatemala ha sido acompañada en los últimos 15 a 20 años de un empeoramiento en el bienestar de los habitantes... Hay una fragmentación de las pequeñas fincas que ha aumentado el número de predios que no permiten subsistir a una familia, forzando a muchos a buscar otros trabajos permanentes en las grandes fincas de la región o trabajo estacional como empleados en las fincas de la Costa Sur (INDE, 1981).

El virtual cierre de la frontera agrícola en Ixcán en estos años, como resultado de los proyectos de colonización, tuvo repercusiones en el Triángulo Ixil, sobre todo en las áreas en donde las disputas por tierras aún ardían a fuego lento. Por otra parte, al mismo tiempo que su espacio geográfico se les reducía, los horizontes socio-políticos de los ixiles se ampliaban a través del contacto con otros campesinos en la Costa Sur y por la experiencia que iban adquiriendo con las iniciativas de Acción Católica y con el movimiento cooperativista, que se desarrollaban en la región durante esos años.

La guerra de exterminio

La actividad militar de las fuerzas insurgentes en Quiché empezó en junio de 1975, cuando el EGP dio muerte a José Luis Arenas Barrera, dueño de la Finca La Perla. La respuesta del gobierno no tardó en hacerse

^{6/} En 1982, el Ejército estimó que el EGP contaba con 1,200 combatientes en el Triángulo Ixil y que potencialmente el 50% de la población colaboraba con la insurgencia (*Revista Militar*, 1982:35). Para una historia de los primeros años del EGP, véase Payeras (1981).

sentir: al día siguiente, centenares de tropas paracaidistas llegaron a desplegarse en el Ixcán; en febrero de 1976, el Ejército estableció un destacamento militar en Chajul y un mes después se instaló en Nebaj. Durante los siguientes cuatro años, pequeños grupos de ixiles salieron del Triángulo a denunciar públicamente la desaparición y el asesinato de catequistas, líderes comunitarios y cooperativistas.^{7/}

A finales de 1981, “*se vinieron las cosas más rápido*”, con el inicio de la ofensiva militar “Victoria 82”. Esa ofensiva –diseñada para retomar el control sobre el altiplano noroccidental– se desató de manera más fulminante en el norte de Quiché, en donde la violencia selectiva dio lugar a los operativos de “limpieza” ejecutados a través de las campañas de tierra arrasada: “*En esa época, el Ejército iba y venía, iba y venía, como cuatro veces, de Chajul para Ixcán y de Ixcán para Chajul*”.^{8/}

^{7/} El EGP sindicó a un principal de la cofradía de Nebaj (Sebastián Guzmán), junto con otros principales y contratistas, de haber elaborado las primeras “listas negras” que se entregaron a la zona militar de Santa Cruz del Quiché en febrero de 1976. Guzmán fue muerto por el EGP en 1981 (Ejército Guerrillero de los Pobres, s.f.).

La militarización del Triángulo Ixil a partir de 1976 ha sido ampliamente documentada. Una cronología seleccionada de la violencia de los años 1976-1982 puede encontrarse en Davis y Hodson (1982:47-52). Esta cronología, que cubre los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango y las Verapaces, se basó en recortes de prensa nacional e internacional y en informes de derechos humanos, incluyendo investigaciones realizadas por el Congreso de los Estados Unidos y por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos.

Indica, por ejemplo, que hubo bombardeos en Nebaj y Chajul en 1979. En junio de 1980, el sacerdote español José María Gran Cirera fue asesinado en Chajul. En agosto de 1980 hubo una masacre de 60 hombres en el pueblo de Cotzal y un mes después, el Ejército atacó Chajul, matando, entre otros, al padre Tomás Ramírez. Ya para entonces empieza a salir gente hacia las montañas. También informa que algunos ixiles formaban parte del grupo de campesinos que llegaron a la capital a presentar una protesta pública, y que perecieron en el incendio de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

^{8/} Entrevista con un desplazado retornado de Chajul, agosto 1989.

Según un recuento, la primera masacre en una aldea del área ixil ocurre en Cocob, Nebaj, en abril de 1981. Mueren 68 personas. En septiembre de ese año, llegan hombres armados a las aldeas Xeucalbitz y Sumal, Nebaj. Matan a 35 y queman las casas, los cultivos y los animales (Davis y Hodson: 1982:50-51). En el área de la aldea Salquil, al oeste de Nebaj, la ofensiva vino en 1981 por parte de los destacamentos militares en Huehuetenango (AVANCSO, 1990:51).

Al principio de 1982, hubo varias masacres en el área norte de Chajul: El 23 de marzo, 150 soldados entran a la finca La Estrella Polar. El día siguiente matan a 105

En 1980, el área ixil contaba con 26 aldeas y 145 caseríos;^{9/} para finales de 1982 se estima que prácticamente todos los poblados habían sido destruidos y muchos de sus habitantes muertos. Miles de personas huyeron hacia las áreas remotas y montañosas alrededor de sus aldeas; otros se entregaron en las cabeceras municipales.

A través de testimonios de sobrevivientes y entrevistas con personas que no fueron víctimas directas de masacres se ha logrado establecer que había criterios para llevarlas a cabo. La sistematización de testimonios indica que en la planificación y ejecución de las masacres se contempló el elemento “sorpresa”. Los ejecutores llegaron en horas y/o días en que la población no habría esperado un acontecimiento de carácter fulminante y desgarrador. Las horas de la madrugada; rutas inusuales; días (como los domingos) que significaban concentración de personas de uno o varios poblados para realizar distintas actividades (como el mercado, realización de ceremonias religiosas, transacciones comerciales, visitas familiares, etc.), fueron elementos tomados en cuenta para rodear a la población.

La búsqueda de determinadas personas; la concentración general de la población en un punto; la clasificación y concentración según sexo en determinadas instalaciones (hombres en el juzgado y mujeres y niños en la iglesia, por ejemplo); la matanza misma; la violación de mujeres; la quema de la aldea después de la masacre; la estancia relativamente corta de los ejecutores y otros rasgos más, han aparecido como constantes en los relatos.

Ahora, diez años después, el recuerdo de las masacres de 1981-1982 permanece vivo en la conciencia de los sobrevivientes. La experiencia del desplazamiento violento constituye su mayor punto de referencia, la

hombres; 50 de ellos eran de Xaxmaxán, una aldea colindante. Después, matan a los animales y queman las casas. A las viudas las dan un plazo de 24 horas para abandonar la aldea.

El 3 de abril, 100 soldados entran a la aldea Chel. Reunen a la gente y matan a 95, entre ellos mujeres y niños. Arrojan los cadáveres a un río cercano. Luego, el 22 de abril, regresa el Ejército a la misma aldea, junto con unos patrulleros de Chajul y matan a otras 45 personas.

“En Juá... masacraron a unos 13 y al río los llevaron... Bisich también fue masacrado... la finca Covadonga, donde mataron a 34. Mataron con granada... En la aldea Caxixlá fueron quemados tal vez 10. En Ilom murieron unos 110... con pura bala”.

Fuente: entrevistas con desplazados retornados, agosto y noviembre 1989. Véase también, Amnistía Internacional (1982).

^{9/} Datos de 1980 (SEGEPLAN, 1983b:25).

línea divisoria entre su vida de “antes” y la de ahora. Sobre esa experiencia se recogieron los siguientes testimonios:

Más antes, ¿Por qué se huyó todo el pueblo? Es porque empezó una cosa más grande, una guerra podemos decir. Por eso se fue toda la gente, así entre la montaña. Porque antes estamos viviendo en cada aldea, así tranquilos, cosechando el maíz. Aunque pasan guerrilleros, pero sólo pasan, a visitar la población, porque ya son conocidos entre población y guerrilleros y siempre pasan, ya no hay problema. Ahora, cuando el Ejército llegó, cuando los soldados llegaron, entonces el pueblo se huyó entre la montaña... porque ya sólo puras penas se encuentran, puros miedos.

A finales del ‘81, la guerrilla pasó en la aldea a organizar entre la población, a decir que se retirara más ante los soldados, porque decían que nos matan a la población. Entonces, la gente empezó a salir por grupitos. Algunos no querían ir con la guerrilla y fueron a entregarse en el pueblo. Así todos se fueron de la aldea.^{10/}

Cuando hubo la primera masacre, el 3 de abril, mataron a 95, entre mujeres y niños. Los que ya habíamos salido, estamos todavía en la orilla de la aldea... escondidos como si hemos robado algo... El 22 de abril regresaron los soldados juntos con la patrulla y mataron a 45 más. Cuando nos dimos cuenta de la segunda masacre nos agarramos todos para el monte... fuimos a la montaña con la gente porque pensamos 'esto nunca se acabará'.^{11/}

La guerra de reconstrucción

Al terminar 1982, la región ixil se encontraba en condiciones críticas: los centros urbanos ensanchados por la entrada de desplazados; el ciclo agrícola severamente interrumpido; el área rural en escombros.^{12/} Si bien la insurgencia había sido abatida en las cercanías de las cabeceras, la zona estaba lejos de estabilizarse, como reconocieron fuentes castrenses a finales de 1982:

La acción militar ha sido llevada satisfactoriamente aunque el problema después de cuatro años persiste y como es natural en este tipo de acciones el resentimiento de la población civil se ha extendido en forma alarmante y sin aparente solución pacífica (*Revista Militar*, 1982:28).

^{10/} Entrevista con un desplazado retornado de Nebaj, julio de 1989.

^{11/} Entrevista con un desplazado retornado de Chajul, noviembre de 1989.

^{12/} Por ejemplo, una fuente estimó que a finales de 1982 había 9,000 desplazados en la cabecera de Nebaj. Entrevista a un asesor del Ejército, abril de 1988.

La construcción del polo de desarrollo del Triángulo Ixil se inicia en 1983. Dada su ubicación estratégica (entre Ixcán, Uspantán y el sur de Quiché) y su propia historia conflictiva, la región ixil resulta ser el lugar en donde la tesis desarrollista del alto mando militar intenta aplicarse con mayor coherencia, poniendo los cimientos de un nuevo orden cuyo propósito sería asegurar el control militar e ideológico sobre el área, revirtiendo las condiciones de aislamiento que en el pasado habían nutrido el crecimiento de la guerrilla. La guerra militar, entonces, cede el lugar a una “guerra integral”, una guerra de reconstrucción de los espacios físico, social, militar e ideológico.

Varios miles de desplazados retornan a lo largo de 1983, ya sea por medio de la captura, o a raíz del decreto de amnistía emitido por el régimen de facto de Ríos Montt en mayo de 1982. El primer paso para estos retornados es el reasentamiento en campamentos provisionales establecidos por el Ejército.^{13/}

El 22 de diciembre de 1983, Acul, la primera aldea modelo del Triángulo Ixil, “surge, como el Ave Fénix, de las cenizas”. Acul sería “un nuevo pueblo en todo el sentido de la expresión... con una infraestructura completa: calles, servicios básicos, energía eléctrica y agua potable”. Reunía a 450 familias que anteriormente vivían en 17 comunidades distintas de Nebaj (Ejército de Guatemala, 1985:126).

Un año después, al finalizar la primera ronda de reconstrucción, 12 aldeas constituían la nueva geografía física, social y militar del Triángulo Ixil. Se estima que entre 1982 y 1984, el Ejército atendió a 42,000 desplazados en el área (AVANCSO, 1990:22). El repoblamiento sigue a paso lento durante los próximos dos años; para finales de 1986, según un reportaje, el número de aldeas y caseríos reubicados había aumentado a 10 en Nebaj, 11 en Chajul y aproximadamente 13-15 en Cotzal (WOLA, 1988:41, 50, 56).

El nivel de inversión en el Polo disminuye después de 1984 y la mayoría de los nuevos asentamientos no reciben el mismo “paquete” de infraestructura que recibieron las primeras aldeas modelo. Sin embargo, el paisaje del Triángulo ya había quedado profundamente transformado.

^{13/} El informe de PAVA elaborado en septiembre 1983 indica que en el campamento Las Violetas, ubicado en un cantón de Nebaj, había entre 2,500 y 3,000 personas y en La Pista, otro campamento a seis kilómetros de Nebaj, había 3,500 desplazados (PAVA, 1984, Zone 5:10). Entre 1983 y 1985 más de 1,000 familias desplazadas de Chajul se asentaron en Finca La Perla. Entrevista con autoridades de La Perla, agosto de 1989.

No se trataba sólo del nuevo trazo urbanizado de las aldeas (calles rectilíneas iluminadas con alumbrado público, casas de madera y lámina, construidas sobre lotes de un promedio de 40 por 60 metros), sino también de la sensación de tener –por primera vez y de manera aplastante– la presencia del Estado por todas partes.^{14/}

Un nuevo impulso: 1987-1990

Pero pese a la visible marcha de la reconstrucción, todavía en 1987, en los extremos de un radio de aproximadamente 30 a 40 kilómetros alrededor de las tres cabeceras municipales, aún existía lo que el Ejército llamaba “aldeas ilegales”, las comunidades de los desplazados no retornados.

En septiembre de 1987, se inicia la ofensiva militar “Fin de Año” cuyo objetivo central en el Triángulo Ixil es forzar el retorno de la población desplazada, considerada como base social de la insurgencia. Esta ofensiva, la más intensa en cinco años, involucra a 4,500 soldados y, según declaraciones del entonces ministro de la Defensa, el general Héctor Alejandro Gramajo, consigue restarle a la guerrilla 5,000 desplazados entre septiembre de 1987 y abril de 1988.^{15/}

Los logros tácticos de la ofensiva fueron dos: “desaguar” el área de resguardo alrededor de Nebaj; y penetrar hasta dos reductos rebeldes –Amajchel y Cabá– a 40 kilómetros al noreste de Chajul, convirtiéndolos en plataformas para lanzar otras acciones dentro de esa área “roja” todavía habitada por varios miles de desplazados.^{16/}

^{14/} En Nebaj, el foco de atención de las instituciones del Estado fueron las carreteras que empezaron a penetrar hasta las aldeas más retiradas, eran más anchas y estaban mejor construidas que la que conecta a la Cabecera Municipal con la Departamental. Sobre ellas transitaban los vehículos de un espectro de dependencias gubernamentales. En cada punto elevado, se veía un destacamento o una garita de la patrulla civil.

^{15/} Entrevista al ministro de la Defensa, general Héctor Alejandro Gramajo, *Prensa Libre*, “Lobos con piel de oveja” en Suplemento Domingo, No. 397, p. 5. Guatemala, 4 de septiembre de 1988.

^{16/} Aparentemente, la táctica militar perseguía “pacificar” primero al área de refugio de desplazados alrededor de Nebaj, para seguir con Chajul y luego Cotzal y, por último, continuar hacia el Ixcán y la frontera con México. En 1987 y 1988, la mayoría de los desplazados retornados provinieron de las montañas de Nebaj; en 1989 el 80% de los retornados provinieron de Amajchel y el 20% bajaron en Cabá. A partir de ese año, se han reportado acciones bélicas, tanto en Chajul como en el área de la antigua aldea Cimientos Xeputul, entre Chajul y Cotzal.

Paralelamente a las operaciones militares, se le dio un nuevo impulso a la coordinación inter-institucional para resucitar el trabajo de reconstrucción del polo, el cual había quedado prácticamente estancado desde 1986:

Con la entrada del gobierno demócrata cristiano, la política cambió. El apoyo para el desarrollo de la zona ixil ya fue menor. Pero en el '88 nuevamente nos llamaron para reactivar el trabajo y tuvimos varias reuniones aquí en la zona [militar].^{17/}

En febrero de 1988 se creó para el área ixil una Comisión Multisectorial con la participación nominal de 20 instituciones para coordinar a nivel municipal, departamental y nacional, un plan de atención al Triángulo.^{18/} El propósito, según coincidieron varias fuentes entrevistadas, fue exigir a las dependencias gubernamentales un “trato preferencial” para la zona ixil.^{19/}

El trabajo de la Comisión Multisectorial se conceptualizaba en tres fases:

- I) “Recibir a los desplazados, proporcionándoles ropa, alimentos, vivienda, servicios médicos, orientación y organización y prepararlos para su nueva vida en la comunidad que ellos escojan como su residencia.
- II) “Cuando culmina la fase inicial (en principio estando ya los retornados al mismo nivel de los no desplazados o repatriados), las personas trabajan dentro de los proyectos propios de sus comunidades, con lo cual obtienen un ingreso monetario y alimentos para ellos y sus familiares. Esta fase comprende la ejecución de las obras que cubren sus necesidades básicas: consolidar la organización de la población,

^{17/} Entrevista con un empleado del gobierno que trabajó varios años en el Triángulo Ixil. Santa Cruz del Quiché, enero de 1990.

^{18/} La Comisión Multisectorial estaba presidida por el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas (MCTOP). Según un delegado en la capital, “la ejecución está a cargo de MINDES y CRN y la coordinación la hacen Defensa y MCTOP.” En mayo de 1988, la CEAR abrió un centro de recepción en Nebaj para los desplazados que regresaban a raíz de la ofensiva. Antes de esa fecha, los retornados permanecían en el destacamento militar de Nebaj. En Nebaj, se le conoce a la CEAR como “CEARD”; la “d” es por desplazados.

^{19/} Entrevistas con autoridades civiles departamentales en Santa Cruz del Quiché, enero de 1990 y con funcionarios en la capital, agosto de 1989 y enero de 1990.

construir carreteras, urbanizar los poblados, construir calles, drenajes, agua potable, letrinización, energía eléctrica, telégrafos, viviendas, escuelas, puestos de salud, salones comunales... y todos los servicios inherentes en una comunidad sana.

- III) “Comprende el fortalecimiento de la capacidad de ingreso familiar y la incorporación a la economía nacional” (MCTOP, 1989).

La reintegración de los desplazados involucraría a “una cadena de instituciones”:

El Ejército es la primera. Después, la CEAR les da una asistencia inicial. Luego MINDES viene con un programa de concientización, de promoción de la organización. Finalmente entran las demás instituciones del gobierno para dar los demás servicios.^{20/}

Esa “cadena”, sin embargo, nunca llegó a construirse más allá de los primeros eslabones, dejando una brecha significativa entre los planes desarrollistas y las condiciones reales en las aldeas del área, que no muestran las señales mínimas de una reactivación económica, ni mucho menos de una reconstrucción plena.

2. Un retorno en medio de la guerra

A partir de 1988, el Triángulo Ixil ha sido el único lugar de Guatemala al que siguió llegando un flujo de desplazados internos procedentes de “la montaña”. Asimismo, de una manera aún más directa que en las otras regiones estudiadas, el retorno de los desplazados del área ixil ha sido determinado por los dictados de una guerra con características de permanencia en esa región.

La decisión de un refugiado de repatriarse, por ejemplo, es una decisión bastante autónoma, basada en un cálculo de los riesgos y beneficios del retorno; el refugiado decide “cuándo” y cuenta con una infraestructura adecuada que le permite prepararse para regresar. Varios grupos de desplazados internos de Alta Verapaz escogieron el momento y también la manera de volver. Para los ixiles, en cambio, el retorno tiende a ser más abrupto, caótico y hasta violento; es decir que se trata de un componente más del conflicto bélico.

^{20/} Entrevista con el jefe departamental de MINDES, Santa Cruz del Quiché, enero de 1990.

Los patrones del retorno en el área ixil no variaron mucho en el tiempo (AVANCSO, 1990:50-52). Se observan principalmente tres modalidades. La primera es el retorno claramente forzoso por medio de la captura, llevada a cabo por miembros del Ejército o de las patrullas civiles locales, cuando éstos se encuentran “de comisión” buscando recuperar a la población desplazada, o cuando descubren a un grupo de desplazados durante otro tipo de actividad militar. Al ser capturados, los desplazados no deciden ni el “cuándo” ni el “cómo” del retorno; no hay tiempo para prepararse ni psicológicamente ni en términos materiales, como relatan dos retornados:

Las Patrullas entraron a la aldea como a las 6 de la mañana, estamos desayunando en ranchitos de la población cuando dispararon. No tenemos aviso de que venían las patrullas... de sorpresa nos agarraron. `No se vayan a huir', nos gritaron. Como unas 10 ó 15 familias se escaparon, nosotros, los agarrados, en una esquina estábamos.

Estábamos cultivando abajito del centro de Amajchel cuando fuimos capturados: `no se asusten, que nosotros no les hacemos nada', dijeron, eran militares. Ellos iban en comisión a traer gente y se van escondiendo debajo de la montaña.^{21/}

Las acciones militares tienen, a su vez, un efecto multiplicador. Un segundo patrón del retorno ocurre cuando los desplazados se ven obligados a entregarse porque su base de subsistencia –cultivos, vivienda, herramientas de trabajo– ha sido desmantelada durante los operativos militares:

En enero del '88, empezó el “volanteo” para que regrese el campesino. Cuando la ofensiva empezó en el '88, la gente empezó a entregarse. Hubo bombardeos en Amajchel y la milpa fue toda macheteada y quemada. El sufrimiento en la montaña fue duro; no había sal, ropa, medicinas, ni herramientas para trabajar. En la montaña somos campesinos y estamos cultivando, pero llegaron las Patrullas a destruir el cultivo.^{22/}

Los ixiles que huyeron a la montaña en 1981-1982 reportan haber experimentado varios años de “respiro” a partir de 1984, cuando el nivel de actividad militar en la zona se desaceleró y a la vez comenzó a surgir entre los desplazados una incipiente organización social para asegurar

^{21/} Entrevistas con desplazados retornados de Chajul, agosto de 1989.

^{22/} Entrevista con un desplazado retornado de Chajul, agosto de 1989.

las condiciones mínimas de sobrevivencia. Sembraban, construían viviendas, se organizaron en comunidades.^{23/}

Al reiniciarse las acciones ofensivas en 1987, el Ejército logró perforar y desarticular gran parte de esa red de subsistencia. El incremento de bombardeos y rastreos militares en ese tiempo, recreó de manera viva el trauma de los primeros años en la montaña, cuando entre el caos de estar moviéndose de un lado para otro, “*muchos murieron... de bala, de enfermedad*” (AVANCSO, 1990:51).

Con las nuevas incursiones militares a partir de 1987, que terminaron con los cultivos y obligaron de nuevo a huir, la inseguridad de quedarse en la montaña para muchos desplazados llegó a ser más fuerte que la incertidumbre del retorno, provocando la decisión de “bajar”.

El tercer patrón del retorno, vinculado con los primeros dos pero de carácter quizás más “voluntario”, va relacionado con la búsqueda de la reunificación familiar. Repetidamente se escucha entre los desplazados retornados la versión de que han bajado para encontrarse con el esposo o la esposa, con los hijos y/o los padres. Para la población, el desmembramiento familiar había sido una de las consecuencias más angustiosas de la violencia al principio de la década; el fenómeno se dio por segunda vez a partir de la ofensiva de 1987, cuando varios miles de personas fueron capturadas u obligadas a entregarse. Sería difícil, entonces, sobreestimar la influencia de los vínculos familiares en la decisión de regresar, por las relaciones en sí y porque la unidad familiar sigue siendo el eje de la producción y la sobrevivencia, tanto en la montaña como en los lugares de origen. Durante los rastreos que el Ejército o las patrullas civiles lanzaban a las áreas de refugio, por ejemplo, muchas veces se buscaba capturar primero a las mujeres y a los niños, lo que conducía a que los hombres se entregaran.^{24/} Por otra parte, la visita a la montaña de familiares ya retornados fue permitida

^{23/} Algunos grupos de desplazados lograron huir hasta las tierras cálidas al norte del Triángulo, donde fueron recibidos por “la gente permanente” que habitaba las aldeas más alejadas que no se desplazaron. Los “permanentes” les prestaron tierras a los desplazados y les dieron trabajo y otra asistencia. De esa manera, se crearon nuevas comunidades donde vivían juntos los “permanentes” y los desplazados.

^{24/} Entrevista con un empleado del gobierno que trabajaba con los desplazados en el área ixil, agosto de 1989.

y hasta promovida por el Ejército como parte de la campaña psicológica de inducir el retorno (ver gráfica 4).^{25/}

^{25/} El propósito de estas visitas era convencer a los desplazados de que los que han regresado se encuentran bien y que están esperando a los demás para volver juntos a las comunidades de origen. Además, se trataba de estimular el retorno voluntario a través de varias “operaciones psicológicas” (“ops-psi”), que incluían la grabación de mensajes de familiares llamando a bajar, reproducidos por altoparlantes en los vuelos de reconocimiento sobre los áreas de refugio. Grabados en el idioma ixil, los mensajes consistían en listas de personas que ya se encontraban “abajo”, elogios de la democracia que se vive en el pueblo, súplicas a los desplazados para que depusieran las armas y “dejen de estar sufriendo”, etc. También se hacía uso de volantes tirados desde helicópteros ofreciendo ayuda a todos los que decidieran bajar (AVANCSO, 1990:53).

Aun en los casos en que el retorno es de carácter “voluntario” (el retornado decide “cuándo”), tiende a ser marcado por un alto nivel de aprensión. El hecho de cruzar una “línea de guerra” implica cierto riesgo. Además, por la dificultad del viaje (hasta varios días a pie), son pocos los que llegan con más de lo puesto:

La gente no se dio cuenta... salimos escondidos. Salimos el sábado por la noche... caminamos dos días. No trajimos tortillas, nada, sólo pinol [maíz tostado molido]. Caminamos por la montaña para no encontrar gente... Tenemos seis chompipes, pero unos se quedaron en el camino.^{26/}

Es imposible determinar con exactitud cuántos desplazados fueron capturados y cuántos regresaron por cuenta propia. Lo que sí es evidente es que el flujo del retorno sigue el ritmo de las operaciones militares en la región. Un aumento en las acciones dirigidas a la recuperación de la población desplazada produce dos “olas” de retornados: los que son bajados como consecuencia directa e inmediata de los rastreos (los capturados) y un flujo menor pero de más duración de los que bajan después (los que se entregan).

A pesar de las múltiples presiones para que bajen, varios miles de desplazados han optado por quedarse “en la montaña”.^{27/} En sus declaraciones públicas, el Ejército se refería a esta población como los “secuestrados” de la insurgencia. Sin embargo, sin descontar que también puede haber presiones en contra del retorno, las motivaciones para permanecer son más complejas.^{28/} Elementos innegables son el miedo y la desconfianza que los desplazados sienten hacia el gobierno y hacia el Ejército, el temor de que en un momento dado les vuelva a suceder lo ocurrido en

^{26/} Entrevista con una desplazada recién retornada a su aldea de origen de Chajul, noviembre de 1989.

^{27/} En 1989, una fuente gubernamental estimó que había alrededor de 10,000 desplazados todavía resguardándose en las montañas del área ixil. Entrevista con un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo, Guatemala, junio de 1989.

^{28/} Muchos desplazados que se han entregado cuentan cómo su retorno se efectuó “a escondidas”, evidentemente porque había cierta presión para no abandonar la comunidad. Los retornados han hablado también de casos de castigo (por ejemplo, la confiscación de bienes) contra los que eran descubiertos al momento de salir. Pero por otro lado, se indicó que entre las comunidades de desplazados, se ha manifestado que todos los que deseen regresar pueden hacerlo, siempre y cuando “no se les olvide lo que aprendieron en la montaña”. Entrevista con un desplazado retornado, Nebaj, julio de 1989.

los años cuando “*se descontroló la situación*”. Los recuerdos de la muerte masiva son todavía tan frescos como para imponerse a cualquier mensaje de que “*todo está tranquilo ahora*”.

Por otra parte, aunque las condiciones de vida para los desplazados son arduas (debido a los estragos de la guerra y a los obstáculos que ésta crea para el libre comercio con otras regiones), en las áreas de clima cálido que colindan con la selva de Ixcán, algunos han encontrado lo que no tenían en sus aldeas del altiplano: tierra fértil. Según describen dos desplazados retornados de Chajul:

Allá en la montaña hay más gente que los que han regresado acá. Están sembrando, tienen dos cosechas de milpa [al año]. Tienen frijol, plátanos, naranjas... están tranquilos. No piensan en nada, se quedan, no piensan en regresar.^{29/}

Igual que los refugiados en México, los desplazados en la montaña han formado nuevas comunidades, con un nivel de organización que ellos consideran difícil de trasplantar a las aldeas controladas por el Ejército. Las demandas de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), por ejemplo, giran alrededor de poder mantener a estas poblaciones en las áreas en donde están, sin que acciones ofensivas intenten desalojarlas.^{30/}

La recepción: el primer contacto

El momento de bajar es crítico, desde el punto de vista del desplazado y de quienes lo reciban. Para el que baja, es el momento cuando confronta sus expectativas y temores, como expresó un desplazado al

^{29/} Entrevistados en Chajul, noviembre de 1989.

^{30/} “*Aquí tenemos nuestra propia organización, elegimos democráticamente nuestras autoridades y resolvemos nuestros problemas sin necesidad de cárceles. Nos costó mucho conseguir esto y no renunciaremos a nuestra libertad*”. Declaraciones de un miembro de las CPR ante la Comisión Multipartita, febrero de 1991, publicadas en *Pensamiento Propio*, Managua, abril de 1991, p. 14.

De acuerdo a los representantes de las comunidades en resistencia, por ejemplo, éstas cuentan con promotores de educación y de salud, además de un “comité de área” encargado de supervisar la producción de cada comunidad. Las comunidades de desplazados incluirían a nueve grupos étnicos de Nebaj, Cotzal, Chajul, Uspantán, Chicamán, Sacapulas, Cunén e Ixcán. Véase el informe de la Comisión Multipartita (1991) acerca de la visita realizada a las CPR, y *Siglo Veintiuno*, “Resistir para vivir”, 3 de marzo de 1991, pp. 4-5.

entregarse en Chajul: “*cuando vamos a bajar pensamos: `si nos morimos, morimos*””. Para los agentes locales (el Ejército, la CEAR, o las autoridades a nivel de la comunidad) este primer contacto significa una oportunidad, tanto de recabar información sobre los que todavía están en la montaña como de transmitir las nuevas normas de la vida “abajo”.

La recepción ha tomado varias formas. La primera es el caso de Amajchel, el ejemplo más claro de una “aldea estratégica” –generalmente un antiguo reducto guerrillero que pasa a ser un enclave militar y en donde la población retornada vive concentrada alrededor de un destacamento. A partir de septiembre 1987, Amajchel se convirtió en el trampolín para los operativos de rastreo en esa zona de Chajul; para muchos desplazados, entonces, es el primer punto de contacto con el Ejército. De acuerdo a la CEAR, al retornar de la montaña, algunos desplazados se quedan de una vez en Amajchel, sin pasar por el centro de recepción que el gobierno mantiene en Nebaj. En Amajchel son recibidos y atendidos exclusivamente por el Ejército a través de la sección de Asuntos Civiles de esa institución.^{31/}

Una segunda forma es la de desplazados que retornan directamente a sus aldeas, principalmente en algunas áreas retiradas de Chajul, en donde la comunidad misma asume la responsabilidad de recibirlos y reincorporarlos. En este caso, las autoridades de la patrulla civil local sustituyen al Ejército en la fase inicial de recepción. En general, los desplazados que retornan de esa manera no son registrados ni atendidos por el gobierno.^{32/}

^{31/} Amajchel está ubicado en el centro de lo que sigue siendo uno de los lugares más conflictivos del país, donde el acceso por tierra es difícil. En 1989, diversas fuentes reportaron que aproximadamente 25-50 familias vivían en Amajchel. Sin embargo, no había información muy específica, lo que constituyó en punto de fricción entre el Ejército y algunas autoridades civiles, quienes indicaban que la falta de datos precisos sobre esta área hacía difícil montar un plan de ayuda.

El Ministerio de Desarrollo había mandado alimentos para los retornados y en 1989, el CRN donó Q.25,000 para el techo mínimo. Sin embargo, funcionarios de éstas y de otras instituciones enfatizaron que no pensaban hacer un trabajo más directo en Amajchel “*hasta que lo decida el Ejército*”.

^{32/} El principal ejemplo es la aldea Chel, al norte de Chajul, a donde a lo largo de 1989 más de 100 desplazados fueron llevados durante rastreos de la patrulla civil local. Por la lejanía del lugar, no fueron mandados a Nebaj y por lo tanto no aparecieron en las listas de la CEAR.

En noviembre de 1989, el equipo observó el momento cuando dos desplazados se entregaron en la garita de la patrulla de esta aldea, un caso que ilustra la manera

En la fase de recepción más prolongada, los desplazados son llevados por el Ejército al centro “Xemamatzé”, administrado por CEAR en las afueras de Nebaj. Desde 1989, la estancia de los desplazados en Xemamatzé se institucionalizó, ya que se estableció como norma que todos permanecieran en las instalaciones por un período de tres meses.^{33/} Durante este período, reciben alimentación y se les ayuda a tramitar sus documentos personales. Son sujetos también a un riguroso programa de “reeducación cívica”, como lo describe el comandante militar de Nebaj:

Hacemos investigaciones especiales, porque no vamos a mezclar la manzana podrida con la manzana buena. Los recibimos en el destacamento para que nos cuenten su historia y luego pueden ir a Xemamatzé. Además, los de Asuntos Civiles visitan constantemente a Xemamatzé. Les damos educación cívica, como si fueran niños. Les enseñamos los símbolos de Guatemala, la bandera y el escudo, cómo luchar por su familia. Se les reeduca, les damos una educación colectiva para que se integren al sistema democrático.^{34/}

de recibir a los desplazados en las comunidades. Los dos retornados fueron llevados a la comandancia de la patrulla civil de la aldea, donde sostuvieron una reunión de varias horas con el jefe de patrulla, en la cual se les pidió información sobre su comunidad en la montaña y se les habló sobre aspectos importantes de la aldea, tales como la disponibilidad de tierras y el servicio de patrulla. Pasaron la primera noche en la comandancia. Al día siguiente, se trasladaron a la casa de un pariente, donde de inmediato empezaron a recibir visitas de familiares llevándoles comida y ropa.

Según autoridades de la patrulla civil, la información sobre quienes regresan de esta forma se entrega al destacamento militar en Nebaj. Igual que en el caso de Amajchel, las entidades civiles en Nebaj no contaban con información precisa sobre el número de desplazados que retornan directamente a las comunidades.

^{33/} De acuerdo al comandante militar de Nebaj, “*CEAR no tiene el control total de Xemamatzé. Es un trinomio: Defensa, el equipo de CEAR y MINDES*”. Entrevista agosto de 1989. Entre 1988 y 1989, el período de permanencia de los desplazados en Xemamatzé dependía de factores como el supuesto “cargo” que la persona habría desempeñado en la montaña o las características del retorno. Los “castigos” variaban de 15 días hasta tres meses (AVANCSO, 1990:27). En 1989-1990, funcionarios de la CEAR afirmaron que sólo a los hombres se les obligaba a permanecer en el centro; sin embargo, las mujeres optaban por quedarse con sus esposos.

^{34/} Entrevista agosto de 1989. Durante varios meses, la CEAR contrató a una psicóloga con el objetivo de lograr la “*recuperación psicológica*” de los retornados a través de programas orientados a “*disociar [a la gente] que están en una sociedad militar*”. Entrevista con un funcionario de la CEAR, enero de 1990. Paralelamente a esto, sin embargo, el Ejército comenzaba a llevar a cabo entre los retornados el entrenamiento militar para las patrullas civiles.

El mensaje que el Ejército transmite a los desplazados durante los primeros días después del retorno es uno de “*olvidado el pasado*”:

Algunos participaron en cosas graves; tienen cuentas pendientes con la ley. A saber cuántos mataron. Pero ahora existe una amnistía. Cumplen su tiempo y se les levanta una acta de amnistía. Se les dice que no participen más. Luego, pueden integrarse como familia adonde ellos quieren, es libre, como el Ejército tiene su sistema de inteligencia... Ahora somos más profesionales”.^{35/}

Una de las funciones más importantes de este “paso de transición” es la de poner los cimientos de la nueva estructura social que los desplazados retornados llevarán a sus comunidades, particularmente en los casos en que éstas están por empezar a reconstruirse. Es decir, ahora se hace en tres meses lo que durante la primera etapa de repoblamiento se hacía en tres años en los campamentos de recepción que el Ejército mantenía en cada municipio –identificar o promover a líderes ixiles, para convertirlos luego en los núcleos del poder militar en las comunidades reasentadas.

Se trata a menudo de revertir las funciones de las estructuras de liderazgo existentes entre la población; se anotaron, por ejemplo, varios casos en que desplazados reconocidos como ex-combatientes de la guerrilla o dirigentes de las CPR fueron contratados por el gobierno o fueron “reclutados” por el Ejército para asumir el cargo de comandante de patrulla al llegar a reconstruir su comunidad.^{36/}

El Ejército sigue jugando un papel predominante en el retorno de los desplazados en el área ixil. A la vez, el nivel de intervención militar en el centro de recepción ha variado según el número de desplazados que están entrando, siendo esto, como se ha dicho, un resultado directo de las prioridades bélicas en la región. Hacia 1989-1990, al disminuir el flujo de retornados, se relajó también el control sobre la población interna en el centro (ya no se requería permiso para salir al pueblo, por ejemplo). Al mismo tiempo, la atención que se les dio a los desplazados también disminuyó; se cerró una clínica médica y se redujeron las raciones de alimentos entregadas a los desplazados al abandonar el centro. En general, la ayuda material que reciben los retornados (ropa,

^{35/} Entrevista al comandante militar de Nebaj, agosto de 1989.

^{36/} En base a entrevistas con fuentes de primera y segunda mano, Nebaj y Chajul, 1989.

herramientas de trabajo, piedras de moler) sigue proviniendo de la Iglesia Católica.^{37/}

El reasentamiento

El repoblamiento del área ixil se aceleró tras la ofensiva de 1987-1988. Entre septiembre de 1987 y enero de 1990, según datos del Ejército, fueron reconstruidas 30 aldeas en el Triángulo, la mayoría en Nebaj, considerado el más “limpio” de los tres municipios.^{38/}

Entre las aldeas “fronterizas” (o “estratégicas”), las que penetran en las áreas de mayor conflicto, se observa un patrón de reasentamiento parecido a la primera época de pacificación: un primer núcleo constituido por gente considerada por el Ejército como “segura” (de los que nunca estuvieron en la montaña, por ejemplo); y una segunda fila formada por los grupos de desplazados retornados. Son aldeas que cuentan con una fuerte presencia militar.

En cambio, la mayoría de las comunidades restablecidas que surgen en las áreas consideradas ya más estabilizadas, exhiben menos control directo sobre el proceso de reasentamiento. De la misma manera, a diferencia de los años en que las agencias del Estado se volcaron para levantar las aldeas modelo, son pocas las que ahora reciben algún tipo de ayuda.

Para mediados de 1989, por ejemplo, en varias aldeas reasentadas dentro de una zona que hacía dos años había sido el “área de refugio” de Nebaj, los desplazados retornados vivían en condiciones no muy diferentes a las que habían conocido cuando el lugar era “montaña” –con

^{37/} Al principio de 1990, la CEAR afirmó que se iba a trasladar el centro de recepción de Nebaj a Chajul o a Cotzal, “donde hay más ofensiva y está bajando más gente”. El número reducido de desplazados entrando a Xemamatzé en ese período se atribuyó a dos factores: uno, porque algunos se habían quedado con el Ejército en Amajchel; y dos, porque “los demás no se quieren bajar porque ya la subversión los está atendiendo... los que se vinieron eran los que sobraban a la guerrilla”. Entrevistas en Nebaj, agosto de 1989 y marzo de 1990.

^{38/} De acuerdo a entrevistas con autoridades municipales en marzo de 1990, el municipio de Nebaj se encontraba prácticamente repoblado, sólo faltando unas siete u ocho aldeas que antes eran caseríos. En Chajul, el proceso de reasentamiento también había avanzado; con 20 aldeas reconstruidas y 10 por reubicarse. Cotzal contaba con 17 aldeas reconstruidas, pero aún se encontraban varios grupos de desplazados alojados a la orilla del pueblo.

albergues de techos de plástico y sin ningún servicio. Varios de ellos apuntaron que “nadie nos ha ayudado, ni el Ejército. Cuando regresamos aquí era la misma gente trabajando, haciendo los ranchitos de nailon”.^{39/} Seguían viviendo en el aislamiento. Entre los cambios que habían experimentado al dejar de ser una aldea “ilegal” se encontraban: el cambio de un patrón de asentamiento disperso a uno nucleado; la seguridad de que al volverse una población “legal” se les permitía cultivar sin temor a perder la siembra; y la formación de nuevos “lazos” con la Cabecera, tales como un comité de desarrollo y la patrulla civil.

Al iniciarse la reubicación, el desplazado experimenta la dicotomía de estar “más tranquilo” por un lado, pero, por otro, de sentir mucha incertidumbre sobre su futuro:

Lo primero que sienten es como una seguridad, de que pueden sembrar y nadie les va a machetear la siembra. Ya son reconocidos; ya no se esconden bajo una piedra. Los de CEAR dicen, ‘miren, están contentos’. Pero no ven que la gente está triste porque no tiene donde irse, porque dejaron familiares en la montaña. ¿Están vivos o no están vivos? ¿Vendrán o no vendrán?^{40/}

Esta incertidumbre se vincula con el hecho de tener que “volver a empezar”, con la construcción de su vivienda, la limpieza de la tierra, y hasta con la reconstrucción completa de la aldea, en un nuevo contexto social cuyos contornos el desplazado también tiene que volver a conocer, y sin garantías de una ayuda oportuna.

^{39/} Desplazados retornados entrevistados en una aldea de la cordillera de Sumal, Nebaj, un área que fue “limpiada” a finales de 1987 y repoblada a partir de 1988. Cuando el equipo efectuó una visita en agosto de 1989, las 55 familias de la aldea tenían cinco meses de haberse reasentado. Estaban iniciando la reconstrucción de la comunidad; vivían en “ranchitos de nailon” con un escaso abastecimiento de maíz.

Antes de 1988, la aldea no se había desplazado; su población continuaba cultivando sus mismas parcelas que se encontraban fuera de la periferia del polo de desarrollo. Se organizaron en la CPR de esa zona. Cuando les llegó la ofensiva en 1988, fueron empujados hacia Amajchel, donde empezaron a entregarse. Al recibir permiso del Ejército de regresar a la aldea, “nos vinimos todos juntos, porque nos gusta estar unidos”. Esta comunidad es un ejemplo de lo que podría llamarse una “reconstrucción en espejo”: al estar de nuevo en el mismo sitio en que habían vivido antes de la ofensiva de 1987-1988 (pero que ya se encontraba “pacificado”), el antiguo dirigente de su “comité de área” fue nombrado por el Ejército como el nuevo comandante de patrulla.

^{40/} Entrevista con un miembro de la Iglesia Católica, Nebaj, junio de 1989.

Al salir de Xemamatzé, se le presentan varios escenarios al desplazado: 1) incorporarse a su comunidad ya establecida; 2) en el caso de que ésta se encuentra abandonada, irse a otra comunidad cercana (o quedarse en la Cabecera Municipal), esperando recibir permiso para reasentarse en la comunidad de origen; 3) o bien, si este permiso se logra, regresar junto con otras familias a construir su aldea de nuevo.^{41/} Cada una de estas opciones está marcada por la sensación de tener que comenzar de nuevo bajo condiciones precarias. Cuando los desplazados se dirigen a una comunidad establecida, en donde tienen familiares ya retornados, estas redes de parentesco juegan un papel central en la reubicación inicial. Ayudan a recomponer el hogar y a iniciar las actividades productivas.^{42/} En cambio, cuando les toca a los retornados volver a erigir su aldea, se ven obligados a buscar un mecanismo inmediato de sobrevivencia, que casi siempre significa emigrar a trabajar por una temporada en las fincas de la Costa Sur.^{43/}

Al pasar a fundar una aldea, los desplazados retornados entran, como ya se dijo, con una estructura de poder (la patrulla civil) que para todos los miembros de la comunidad representa una estructura nueva. Cuando se trata de una comunidad ya reubicada, en cambio, los retornados se enfrentan con patrones de organización que ya tienen varios años de haberse enraizado. Aquí incide, entonces, el factor de la aceptación o no de los recién llegados.

A diferencia de Ixcán, las comunidades del Triángulo Ixil han conservado su antigua composición étnica. No hubo aquí una política de asentar a otros campesinos en las tierras de los desplazados.^{44/} En

^{41/} Los dos requisitos para poder reconstruir una aldea son: que se encuentre en un área relativamente pacificada y que haya un grupo lo suficientemente grande, generalmente más de 20 familias, para poder formar una patrulla civil.

^{42/} El comandante militar de Nebaj hizo la observación de que “*un problema que tenemos con los desplazados son los que no tienen familia ni tierra. Tenemos que buscar una solución para esta gente, porque no podemos decirles ‘vayan a ver cómo sobreviven’ porque se nos pueden ir volando otra vez*”. Entrevista agosto de 1989.

^{43/} “*Lo primero que hacen los desplazados es bajarse a la Costa, a ganar sus centavitos para comprar sus cosas*”. Entrevista con personal del Comité de Reconstrucción Nacional, Nebaj, agosto de 1989. El CRN considera que el fenómeno de la migración puede constituirse en uno de los principales obstáculos a la reconstrucción, ya que en un momento dado más de la mitad de la aldea puede estar ausente.

^{44/} En general, las tierras del área ixil son tierras municipales, cuyo derecho de usufructo se da por descendencia. Aunque muchos títulos no hayan sido actualizados o fueron perdidos o destruidos, se señaló que “*entre los mismos vecinos se reconoce*

general, entonces, los que regresan gozan de mayor aceptación y hasta de una acogida por parte de las comunidades de origen: “*cuando los desplazados vienen, la gente corre para ver si vienen parientes*”.^{45/} En parte, esto es un reflejo de que muchos compartieron la misma experiencia, i.e. que “*todos somos desplazados, no sólo los que tienen dos o tres meses de haber regresado*”.^{46/}

Al mismo tiempo, el clima de inseguridad que afecta a toda la zona ixil puede generar un mayor control sobre los retornados, según asevera un jefe de patrulla de Chajul: “*a la persona nueva yo le tengo mucha desconfianza, porque a veces sólo vienen a cubrir sus necesidades y se van otra vez [a la montaña]*”.^{47/} En el centro Xemamatzé, es frecuente escuchar a los desplazados decir que no saben adonde se dirigirán, por estar esperando “*si me van a aceptar en la aldea [tal]*”. Esa aceptación puede lograrse una vez que los retornados hayan demostrado estar dispuestos a adaptarse a los nuevos patrones de conducta de las comunidades. Por ejemplo, en lo que parece una “prueba de lealtad”, es casi una norma en algunas áreas cercanas a los lugares de conflicto, que a los recién retornados se les reclute para servir como guías en las “comisiones” (de las patrullas civiles) mandadas a la montaña a “*recuperar más desplazados*”.^{48/}

El retorno de los desplazados a sus comunidades de origen (o a aldeas cercanas) es sólo un primer paso. Son numerosas las tareas que el desplazado debe emprender antes de lograr una mínima estabilidad, tareas que, para la mayoría, son realizadas al margen de cualquier apoyo institucional. Como apunta un retornado de Chajul, “*después de uno o dos años estamos un poquito más mejor, vamos limpiando la tierra y sembrando, vamos comprando poco a poco nuestras cosas. Ya estamos reubicados y ya casi no somos desplazados*”.^{49/}

el derecho”. Algunos problemas se han originado por falsificación de documentos o porque los familiares de los desplazados deciden vender la tierra “*porque pensamos que ya no venían*”. También, las viudas pueden tener más dificultad en recuperar sus parcelas. CEAR ha atendido varios casos de este tipo.

^{45/} Entrevista con el párroco de Chajul, agosto de 1989.

^{46/} Entrevista con un ixil que regresó de la montaña en 1983, noviembre de 1989.

^{47/} Entrevistado en agosto de 1989.

^{48/} Entrevistas con fuentes de primera y segunda mano, Nebaj y Chajul, julio, agosto y noviembre de 1989.

^{49/} Entrevistado en noviembre de 1989.

El ritmo con que el desplazado puede sentirse “*un poquito más mejor*” depende de la dinámica de cada lugar y la disponibilidad de recursos comunitarios para recibir a los que tienen que “*vivir prestando*” mientras van conformando sus propios hogares. Entre los factores que favorecen una recuperación más rápida, se encuentran la viabilidad de la familia (si el retornado puede contar con el apoyo de hermanos, tíos, compadres, etc.) y el acceso a la tierra. Si muchos familiares han muerto o están todavía en la montaña, o si la tierra se ubica en un área de acceso restringido, por ser de mayor conflicto, entonces la recuperación se vuelve más laboriosa. Del mismo modo, en las aldeas de “tierra caliente”, en las que hay un mejor abastecimiento de alimentos básicos y la posibilidad de contar con otros cultivos que generan ingresos (como el café), lo que reduce la necesidad de emigrar, puede iniciarse el proceso con más facilidad.^{50/}

Desarrollo de baja intensidad... con un alto costo social

Como se propone en el primer capítulo de este estudio, la reintegración de los desplazados (y repatriados) significa algo más que su reubicación física. Debe abarcar un proceso que conduzca a una mejora en sus condiciones de vida, para asegurar que el fenómeno del desplazamiento, principalmente sus causas, no vuelva a producirse. Aquí cabe examinar, por lo tanto, algunos elementos de la política de desarrollo aplicada en el Triángulo Ixil y su relación con la reintegración de los desplazados.

Desde mediados de los '80, varios estudios han detallado los rasgos socioeconómicos de los polos de desarrollo; aquí se hará, entonces, solo una breve reseña de las características más salientes del área ixil.^{51/}

En el Triángulo Ixil, la reorganización de la población dentro del sistema de las aldeas modelo ha dado origen a dos economías paralelas: la economía “oficial” –camino de penetración, proyectos de infraestructura, etc.– y la economía de sobrevivencia de la mayoría de la población:

^{50/} En las áreas de clima cálido, el café fue introducido por los aldeanos para fortalecer su margen de independencia frente a las fincas; en el período de violencia y desplazamiento, ese margen volvió a reducirse. Un retornado relata que: “*Antes, antes, mi papá nos decía ‘trabajen sembrando sus cafetales y cuando ganen dinero, compren ganado, para que no vayan siendo mozos en la finca. Piensen en su futuro mientras que tengan fuerza’. Mi papá tenía 10 cuerdas de café; yo tenía vacas, chivos, cafetales. Ahora apenas dan cosecha porque estuvieron bajo la montaña seis o siete años sin limpieza. Hay que sembrar las matas secas*”. Entrevista en Chajul, noviembre de 1989.

^{51/} Para mayores datos se sugiere ver: Krueger y Enge (1985) y Manz (1988a).

Por un lado, el hecho de que todos viven juntos ha facilitado la extensión de servicios básicos como agua, luz, escuela, caminos. Pero, por otro lado, la gente se siente peor porque para ellos lo normal es sacar sus productos de la tierra y ahora les cuesta más.

La patrulla les quita tiempo y además la forma nucleada de las aldeas les trae una serie de problemas. Pierden mucha milpa por no estar cerca de la parcela para poder protegerla contra los animales del monte. Por falta de espacio alrededor de las viviendas no pueden criar animales domésticos, lo que significa una pérdida de alimentación, dinero y abono para los cultivos.^{52/}

Un defecto de la política estatal, de acuerdo a un empleado del gobierno que ayudó a implementarla, ha sido la falta de una fase de seguimiento:

Para ponerle un ejemplo: en octubre de 1983, se empezó a trabajar Acul. Fue la política del gobierno en aquel entonces de que se tuvieran dos meses para hacer un pueblo determinado. Entonces se metieron todas las instituciones y trabajamos a la carrera. Bueno, el 22 de diciembre Acul ya era un pueblo de casas. Hubo una gran cosa, llegaron los periodistas y todo. Pero el 23 de diciembre en Acul no había ni un solo trabajador de las instituciones. Y en enero, la preocupación fue Tzalbal, en marzo ya no fue Tzalbal, sino Juil, y así... Todo el plan de desarrollo ha sido para crear una imagen, pero es como las imágenes de televisión, que aparecen y desaparecen rápidamente.^{53/}

La política del gobierno demócrata cristiano no se desvió marcadamente de ese modelo:

El plan ha sido reinstalar [a los desplazados], haciendo actividad física que se puede calendarizar en un corto espacio... Pero cuando los desplazados regresan a sus lugares de origen son ‘reubicados’ nada más; no son reintegrados a la vida activa que tenían antes.^{54/}

Entretanto, el costo social de la experiencia por la que ha transitado el Triángulo Ixil se ha manifestado en una zona que, lejos de percibir un desarrollo, se encuentra más debilitada que hace una década. La producción regional de maíz no ha recuperado el nivel de 1980 (cuando tampoco fue suficiente para abastecer a la zona). Desaparecieron los animales de carga, ganado, ovejas, etc., así también se esfumaron los mercados

^{52/} Entrevista con un miembro de la Iglesia Católica en el área ixil, junio de 1989.

^{53/} Entrevista a un funcionario del gobierno que trabajó varios años en el Triángulo Ixil. Santa Cruz del Quiché, enero de 1990.

^{54/} Ibid.

locales y el comercio entre las aldeas. Así, un nebajeño que trabajaba en una oficina del gobierno en su pueblo opinaba que: *“Tal vez en unos 10 ó 15 años, esta zona pueda recuperarse de todo lo que le pasó”*.^{55/}

Con respecto a los programas estatales, ha sido notable la falta de proyectos productivos que ayuden a la población a mejorar sus condiciones de vida y generar ingresos o que conduzca a rehabilitar el comercio e integrar la zona con otras regiones del país. Por otra parte, la recuperación de los desplazados se enmarca ahora dentro de un contexto económico global más adverso, en el que se les hace más arduo el proceso de “superarse”; los ingresos por la venta de café, por ejemplo, son más bajos que hace 10 ó 15 años, a la vez que el costo de vida se ha duplicado o triplicado (véase Anexo 3 para una visión de los cambios en la economía). Todo esto ha despertado entre los ixiles una fuerte sensación de pérdida:

Antes, venían los comerciantes de Nebaj, Chajul y [Santa María] Chiquimula. Había plaza todos los domingos y la gente de otras aldeas venía aquí a comprar. Ahora estamos abandonados. Lo único que hay de antes es el trabajo en La Perla. Antes trabajamos en La Perla igual que hoy.

Queremos volver a hacer lo que hacíamos antes. Antes había más comercio; había un señor que tenía hasta 10 bestias. Íbamos hasta Nebaj, Chajul, La Perla a vender y la gente traía cosas aquí. Había comercio de animales, de café. Ahorita empezando estamos.^{56/}

El proyecto estatal se ha desdibujado en los últimos años. Después del período de intensa reconstrucción (1983-1984), ya no ha habido una fuerte inversión de recursos en el Triángulo Ixil.^{57/} Al contrario: no ha

^{55/} Entrevistado en agosto de 1989.

^{56/} Entrevistas con desplazados retornados, Chajul, noviembre de 1989. Un entrevistado habla de su aldea “antes” y “ahora”: *“...antes había 60 despulpadoras, ahora hay unas 22... antes había 10 ó 15 máquinas de coser, ahora tres o cuatro, antes había trapiches, plaza cada domingo cuando la gente empezaba a ganar más dinero, puesto de salud, dos maestros, ganados, chivos, bestias, casas de adobe, dos molinos de nixtamal, seis hornos... había buenas tiendas que vendían de todo; ahorita sólo hay unas dos tiendas buenas”*.

^{57/} La inversión más evidente en los últimos años ha sido a través del “8%”, un fondo constitucional entregado a las municipalidades. En el Triángulo Ixil, así como en la mayoría de los pueblos del altiplano, los fondos del 8% se han gastado en adoquinamiento, salones municipales y en la mejora de las carreteras locales. En las cabeceras de los municipios ixiles, el fondo municipal ha creado una de las pocas fuentes de trabajo.

sido concluida la reconstrucción de las aldeas seleccionadas en 1988 para recibir una ayuda integral bajo la estructura de la Comisión Multisectorial.^{58/} De acuerdo a un censo de 38 aldeas de Nebaj, realizado a principios de 1990 por la oficina local del CRN, sólo seis comunidades contaban con una serie de servicios (salón comunal, escuela, puesto de salud, agua potable, letrinización), siendo éstas las primeras aldeas modelo erigidas en 1983-1984, en tanto que 23 aldeas no tenían ningún servicio.

El estancamiento del trabajo de la Comisión Multisectorial se atribuye, desde el punto de vista de quienes han participado, a tres factores. Primero, la dificultad de “convencer” a la población para lograr una participación plena en las iniciativas estatales.^{59/} Segundo, los obstáculos creados por celos institucionales y el desfase en los

^{58/} En un primer momento, la tarea de reconstrucción se dividió entre el CRN y el Ministerio de Desarrollo. Al CRN se le asignaron tres aldeas: Janlay, Xepium y Bicalamá, en tanto que el MINDES recibió la responsabilidad de las aldeas Parramos Grande, Parramos Chiquito, Quechip y Xebitx. Luego, el CRN se encargó de otras nueve aldeas: Nuevo Chemal, Visiquichum, Xix, Asich, Xeputul, Namá, Xeó, Canaquil y Bijolom I.

^{59/} Varios funcionarios del gobierno apuntan que *“estamos todavía en un período de convencimiento de la gente”*. Uno agrega: *“Es que la gente quiere ver las cosas rápidas, quiere ver obras; entonces hay que convencerles que las cosas buenas toman su tiempo. En el caso del Triángulo Ixil, este período de convencimiento es muy importante, porque los ixiles saben que los beneficios que tienen, los han conseguido como resultado de la guerra. Entonces hay que convencerles de que existen canales pacíficos de reivindicación. Si no, en tres años estamos en lo mismo”*. “Beneficios” aquí se refiere a las obras de infraestructura de las aldeas modelo. Entrevista con un miembro de la Comisión Multisectorial, Guatemala, julio de 1989.

Desde el punto de vista de las instancias gubernamentales, la dificultad de lograr la participación de la población en los proyectos estatales se debe al hecho que “no hemos escuchado las necesidades de la gente” y al excesivo paternalismo de los programas: *“Se decía que el paraíso del triángulo era Nebaj, pero en realidad la gente de Cotzal está mejor, pienso yo. No le quiero decir que hay una gran diferencia, pero sí se nota algo en la actitud de la gente. Es por no haber recibido tanta ayuda. En Cotzal, la gente está acostumbrada a que ellos mismos pongan los proyectos. En Nebaj, el gobierno simplemente llegaba y decía ‘vamos a hacer esto’ y les daba una ración de alimentos por trabajo. Más bien, era una ración de alimentos por reunión, como el objetivo era reunir a todos. En Nebaj, las personas esperan recibir. En Cotzal, ya se valoran más por sí solos”*. Entrevista al encargado de una institución gubernamental, Santa Cruz del Quiché, enero de 1989.

métodos del trabajo.^{60/} Y tercero, lo que ha sido un factor determinante, el hecho de que las expectativas de recaudación de fondos no se cumplieron.

La severa crisis fiscal que empezó a sentirse a finales de la gestión demócrata cristiana restringió la capacidad del aparato estatal de dar un trato preferencial a alguna región. Al mismo tiempo, las características del Triángulo Ixil como zona de conflicto han dificultado la llegada de ayuda internacional, como afirma un funcionario del gobierno: “*Ningún país quiere trabajar en la zona. COGAAT [una institución gubernamental alemana] está en El Quiché, pero fuera del Triángulo. AID no entra en el Triángulo. A Japón se le solicitó ayuda directa para el área ixil, pero no quiso*”.^{61/}

La brecha entre los planes de desarrollo y su ejecución, entonces, es cada vez mayor, lo que ha provocado frustración entre la población:

Nunca hemos recibido ayuda de alguna institución. Ya estamos acostumbrados a vivir por nuestra cuenta, pero ahora sabemos que hay instituciones, sólo que no hemos sido beneficiados...

Sabemos que hay ayuda, pero se ha quedado en el camino...

Se ve que no hay mayor interés por parte del Ejército. Si de veras hubiera interés en los desplazados, podría venir un helicóptero aquí a traer ayuda. Pero nunca ha venido aunque puede. Ahora Amajchel tiene todas las ayudas... la gente se pone algo envidiosa.^{62/}

La reducción en el alcance del proyecto estatal ha llevado al gobierno a buscar una mayor participación de organizaciones no gubernamentales para cubrir esa brecha e impulsar el desarrollo de la región.

Desde hace una década, el Triángulo Ixil ha sido un ejemplo por excelencia del dilema que las ONGs enfrentan cuando contemplan trabajar

^{60/} Entre el MINDES y el CRN, por ejemplo, el primero tiene la reputación de hacer un trabajo más lento, con un “marco filosófico” que enfatiza la organización comunitaria y el uso de recursos locales, mientras que el CRN responde más a la exigencia inmediata de satisfacer las necesidades de emergencia de la población.

^{61/} Entrevista a un miembro de la Comisión Multisectorial, Guatemala, julio de 1989. El entrevistado agrega que “*como Comisión no podemos conseguir nada. No quieren trabajar con la Comisión porque está la Defensa [referencia al Ministerio de la Defensa] allí. Pero es una posición tonta. Así sólo están ayudando a que la situación siga caminando. Si realmente quieren fortalecer a los civiles, que se metan allí y entonces cuando la cosa se estabilice, el Ejército se irá retirando*”.

^{62/} Entrevistas en varias aldeas de Chajul, 1989.

en un área de conflicto. Muchas ONGs entraron a la zona ixil durante los años '80, la mayoría vinculada con una u otra de las iglesias evangélicas que expandieron su actividad durante el régimen de Ríos Montt.^{63/} Pero a pesar de que en algún momento, el Triángulo Ixil recibió una inyección considerable de ayuda material (la distribución de ropa, medicinas, etc.), son relativamente pocas las ONGs que han establecido una presencia permanente en la región. Su trabajo ha sido dirigido esencialmente a atender las necesidades de emergencia de la población.^{64/}

Los esfuerzos del gobierno de buscar “ONGs socias” para llevar a cabo el trabajo de desarrollo en el área ixil se han visto frustrados por las mismas razones que obstaculizan la entrada de ayuda internacional: el nivel de conflicto presente en la región y la percepción de que, como zona de seguridad, el control ejercido por el Ejército impide la realización de un trabajo fuera del marco contrainsurgente.^{65/}

^{63/} Para mayor información sobre las iglesias evangélicas en el área ixil, se sugiere ver Stoll (1988).

^{64/} Muy brevemente, el panorama de las ONGs que para principios de 1990 hacían un trabajo sostenido en el Triángulo Ixil era el siguiente: Primero, una ONG internacional (Niños Refugiados del Mundo), que trabaja en el área de salud, principalmente en Las Violetas, una colonia de desplazados en Nebaj; segundo, una ONG nacional (Redh Integral) cuyo trabajo en Nebaj es repartir alimentos y mantener dos comedores infantiles y ocho unidades mínimas de salud; tercero, varias fundaciones privadas (NASO, COPRONIHUAC, Fundación Shawcross), que apoyan los proyectos gubernamentales con asesoría técnica y ayuda material; y cuarto, el Instituto Lingüístico de Verano, que aparte de entrenar promotores de educación bilingüe, mantiene proyectos de agua potable y de pequeñas farmacias.

Algunos proyectos que rebasan la fase de emergencia son: dos proyectos de compra de tierras realizados en Nebaj por el Fondo Ixil, una fundación privada con sede en Antigua Guatemala, y en Chajul por la Fundación Agros, vinculada a la Iglesia El Verbo; la reactivación de una cooperativa de apicultura en Nebaj, financiada por la Fundación Interamericana; y una asociación para la comercialización de café, auspiciada por la Iglesia Católica en Chajul.

^{65/} Un funcionario del gobierno explica que “*hemos intentado coordinar con las ONG, pero ellos no se presentan. Hay una falta de información acerca de lo que estamos haciendo. Este año tenemos permiso para visitar algunas ONG con una presentación visual del trabajo en las áreas de conflicto. Porque en general, entre las ONG, hay una cierta desconfianza hacia el gobierno*”. Entrevistado en enero de 1990.

El director de una ONG que trabaja en la zona expresa la problemática así: “*Es cierto que hay una voracidad por parte del gobierno de jalar a las ONG, para favorecerle políticamente. El MINDES, por ejemplo, quiere entregar el trabajo a las ONG, siempre*

A partir de 1990, el programa de PRODERE prometió invertir US\$8 millones en la zona ixil, con énfasis en la construcción de carreteras y en programas de capacitación laboral, asistencia técnica y proyectos de desarrollo integral (vivienda, educación, salud, agricultura).^{66/} Desde su inicio, el proyecto de PRODERE ha sido duramente criticado por lo elevado de los gastos en relación al trabajo producido. Sin embargo, se espera que PRODERE contribuya a sentar las bases para una posterior inversión privada en la región, a través de la industria maquiladora o los productos agrícolas no tradicionales, de acuerdo con el modelo de desarrollo promovido por el gobierno.

Estrategias de sobrevivencia y organización social

Los proyectos de desarrollo en el Triángulo Ixil no han conseguido romper con el ciclo de subsistencia, ni aun reparar el costo de la guerra. Pero la dinámica social no se ha mantenido estática durante los últimos diez años. Aquí no se pretende hacer un análisis exhaustivo de esta dinámica, sino anotar algunos elementos observados.

La guerra devastó al Triángulo Ixil. Pero parece haber producido también otro tipo de cambios. Algo que llama la atención, por ejemplo, es que la expansión de las fincas a expensas de las tierras ixiles parece haber sido frenada y, en algunos casos, revertida. En 1982, un estudio del Ejército abogaba por la compra de las grandes fincas del área y su entrega a los colonos ixiles de las mismas (*Revista Militar*, 1982:40). La propuesta no dio fruto en toda la zona, pero se aplicó en el caso de una finca de Cotzal (de la familia Herrera), entregada a 350 familias ixiles en 1982 y en donde se formaron las tres aldeas modelo de Santa Abelina, San Felipe Chenlá y Bichibalá.^{67/}

que ellos den las pautas del trabajo... Muchos nos critican a nosotros por trabajar en un área de conflicto. Pero nuestra posición es que debe haber una mayor presencia de ONG y una mayor presencia internacional en estas áreas... Sí, tenemos un montón de limitaciones; sabemos, por ejemplo, que nos están controlando todo el tiempo, pero también creemos que podemos hacer un valioso trabajo". Entrevistado en abril de 1990.

^{66/} Varias vías de penetración están en construcción o contempladas. Incluyen dos carreteras que llegarían a las aldeas reasentadas de Nebaj y otra a Finca La Perla, en Chajul. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo, otra meta es "*llegar hasta Amajchel*" (el punto más elevado de la región), y de allí "*unir el Triángulo Ixil con el Ixcán*". Entrevista en junio de 1989.

^{67/} Aparentemente, la decisión de la familia Herrera de abandonar su propiedad en el área ixil se debió al secuestro en 1977 de un miembro de la misma, el ex-ministro de Relaciones Exteriores Roberto Herrera Ibarquén, por parte del EGP, y a la muerte

En 1982, la Finca La Perla estableció una asociación solidarista y vendió el 40% de sus acciones a 500 trabajadores permanentes.^{68/} Ahora en las fincas del área "*se paga un poquito mejor*" (Q.4 diarios en La Perla); también, de acuerdo a los comentarios de la población, los contratistas de mano de obra para las fincas de la Costa Sur "*andan con más cuidado*" en su trato con la gente, se supone por temor a la insurgencia. Por otra parte, el éxodo de ladinos de las cabeceras municipales a raíz de la violencia ha abierto mayores perspectivas para la emergencia de una nueva capa social ixil, que ha expandido su presencia a través de la compra de tierra alrededor de los cascos urbanos, en los cargos políticos municipales y en el comercio a nivel municipal.^{69/}

No obstante, la mayoría de los ixiles encuentran su estado material totalmente deteriorado. En ausencia de una política de desarrollo coherente y sostenida, los últimos diez años han traído algunos cambios con respecto a las estrategias de sobrevivencia de la población. Un cambio evidente es una mayor participación de mujeres ixiles en la economía, muchas de ellas viudas que trabajan en pequeños proyectos introducidos por la Iglesia Católica o el gobierno (panaderías, proyectos de tejidos, hortalizas) y en la comercialización de artesanía.

Quizás el cambio más notable, sin embargo, ha sido el inicio de una "diáspora ixil", un éxodo que, más que una acentuación de los viejos patrones, parece haber tomado nuevos rumbos. Más de 1,000 familias ixiles han llegado a asentarse en la ciudad capital (Lovell, 1990:11); otros grupos menores se desplazan a vender textiles en los centros turísticos de Panajachel y Antigua Guatemala. Durante la época más fuerte de la violencia, además, muchos ixiles salieron para quedarse definitivamente en las fincas de la Costa Sur –de cuánta gente se trata,

violenta de otros finqueros de la región, incluyendo a José Luis Arenas en 1975 y Enrique Brol en 1979.

^{68/} A 1990, los trabajadores de La Perla no habían recibido ganancias, debido a que la finca se encontraba altamente hipotecada (Stoll, 1990:4-9).

^{69/} Stoll (1990) afirma que aunque algunos de los antiguos habitantes ladinos han regresado y otros nuevos han llegado a la zona con los programas estatales, han perdido influencia como mediadores ante las estructuras del poder nacional. Cita como ejemplos que la mayoría de los comisionados militares y jefes de patrulla son ixiles, que hay un número creciente de maestros ixiles y que la mayoría de los pastores evangélicos son ixiles. Algunos ixiles han conseguido trabajo en las oficinas gubernamentales en Nebaj.

es una incógnita. Por otra parte, con respecto a la migración temporal, ésta se realiza ahora no sólo a la Costa Sur, sino a Cobán, al Oriente, a San Marcos y hasta a México.^{70/}

Se mantiene un frágil balance ahora en el Triángulo Ixil. Los niveles de violencia de hace 10 ó 15 años ya no son evidentes, lo que permite reconstruir el hilo de la sobrevivencia diaria. Pero con una regularidad también casi cotidiana, la guerra se entremete e impone su lógica. La recepción favorable que se les da a los desplazados y la percepción de que el Ejército apoya los esfuerzos de reconstrucción proyectan una imagen (“olvidado el pasado”), a la vez que la cercanía del conflicto y la correspondiente militarización de la vida local refuerzan otra: que el “pasado” podría repetirse en cualquier momento.^{71/}

Todo esto lleva a cierta resignación hacia los nuevos patrones de vida, tal como el sistema de las patrullas civiles, que, si no es deseable, “*ya es parte de la necesidad*” para conservar ese equilibrio. Y conduce, lógicamente, a enfriar el surgimiento de iniciativas locales fuera del espacio sancionado, ya que el mensaje inculcado durante los últimos diez años ha sido que “*nosotros pagamos el pato por culpa de unos cuantos*” (los antiguos líderes comunitarios, cooperativistas, catequistas, que habrían provocado la ira de las autoridades).^{72/}

^{70/} La recuperación económica muchas veces se ve obstaculizada por la misma inseguridad de la zona, en que el hecho de contar con algún excedente puede llamar la atención. Por ejemplo, observamos varios casos en que comerciantes ixiles fueron acusados por el Ejército de estar llevando dinero para la guerrilla.

^{71/} Un residente de Nebaj comenta de que al Ejército se le percibe “*dos caras: una de humanismo y la otra de canibalismo*”. La dicotomía seguridad-inseguridad se perpetúa a través de, por ejemplo, la exhibición pública de los cadáveres de guerrilleros, las charlas que se les reparten a los patrulleros, en las que son avisados a mantenerse alertas “porque se acuerdan del ‘82,” y el hecho de que aunque el nivel de violencia en la zona ha disminuido, no ha desaparecido. Por ejemplo, un caso que recibió atención internacional fue la desaparición en septiembre de 1990 de una desplazada, María Tiu Tojín, y su hija, tras ser llevadas por el Ejército de Amajchel a Nebaj. Véase Amnistía Internacional, *Urgent Action*, 15 de octubre de 1990.

^{72/} Por ejemplo, en el caso de una reunión no autorizada en una comunidad de Chajul, el comandante de patrulla responde: “*Reuní a mi gente [los patrulleros], para investigar esa reunión. Les dije: ‘pregunten por la reunión’. Los patrulleros son mi brazo, ven por la comunidad. Yo tuve que informar [al destacamento militar] porque no se pueden tener reuniones pa’ aquí y pa’ allá. Cuando hay una reunión, yo tengo que investigar, infiltrar a mis orejas. Tuve que llevar a dos al hoyo [castigarlos]*”.

El director de una ONG que trabaja en la región opina que “*los ixiles son chispados, quieren organizarse. Lo que no encuentran es la fórmula*”.^{73/} Las formas de organización de antes difícilmente encuentran tierra fértil en el nuevo contexto social del Triángulo, como observa un religioso católico que visitó la zona en 1989:

Antes, la gente de Cotzal era la más despierta, se hacía más trabajo a nivel de cooperativas, Acción Católica. Casi ya no hay cooperativas. Hay personas que quieren organizarse en cooperativas, pero hasta ahora no lo han hecho. Apenas se puede mantener a flote la Acción Católica.^{74/}

El espacio que los ixiles tienen ahora para canalizar sus demandas y necesidades son los comités locales de desarrollo, caracterizados por un funcionario del Ministerio de Desarrollo como la “oferta de organización” por parte del gobierno:

Es delicado en esas zonas de conflicto. Si dices a un ixil que se organice, sale corriendo. Porque en el pasado organizarse era morir. Es por eso que yo he trabajado mucho con Asuntos Civiles del Ejército. Siempre cuando vamos a formar un comité local, entramos con un equipo de la S-5, para que la gente vea que el Ejército está apoyando.^{75/}

Desde el punto de vista del Estado, los comités serían “*el principio de la democracia participativa... un canal de dos vías, para recabar información y para canalizar información, para orientar*”.^{76/} El nivel de actividad de un comité local puede variar de una aldea a otra. En general, sin embargo, sus resultados han sido limitados por dos factores. Primero, porque desde la perspectiva de la población, su propósito se concibe esencialmente como uno de “*hacer solicitudes*”; entonces, al ver que en la mayoría de los casos estas solicitudes “*se quedan engavetadas*”, se frustran las iniciativas. Segundo, resulta difícil, si no imposible, movilizar recursos locales, por la falta de un excedente económico dentro de las comunidades:

El comité es electo entre toda la comunidad. Tiene la responsabilidad de ver por las necesidades de la comunidad: la escuela, el agua potable, el centro de salud, la lámina, y así. De hacer solicitudes a las autoridades. Pero no está

^{73/} Entrevista, Guatemala, abril de 1989.

^{74/} Entrevistado en junio de 1989.

^{75/} Entrevista con el vice ministro de Desarrollo, Mario Alvarez, junio de 1989.

^{76/} Ibid.

trabajando, no hay fondos. Se trató de hacer un acuerdo en que cada patrullero [jefe de familia] iba a contribuir un quetzal cada mes para juntar un fondo para la comunidad, pero la gente decía que no podía, porque ¿Cómo iban a hacer sus necesidades personales? Entonces, del comité no se ha visto nada.

Son nueve miembros del comité. La comunidad los eligió. Es el tercer comité; cuando se reorganizó la aldea, se formó un comité provisional. Luego, en 1988 se formó el segundo comité. Supuestamente ahora el cargo dura cuatro años, pero la comunidad no apoya. Hay quienes quieren disolver el comité. Algunos apoyan sólo para hacer una solicitud. Algunos están de acuerdo en dar mano de obra, o adobe, por ejemplo, para construir el juzgado, pero no apoyan con dinero. Durante los cuatro años quieren juntar un fondo de Q.13,000, cada mes cada familia pondría un quetzal, pero la comunidad no apoya.^{77/}

La autoridad con más peso dentro de las comunidades es el comandante de patrulla. El papel de éste generalmente rebasa las tareas militares, como indica un jefe de patrulla en Chajul: *“Yo soy el comité en esta aldea. Mi deber es controlar e investigar; son las instrucciones que yo tengo... La gente sabe que yo agarro los problemas. Hago la carrera de alcalde y la carrera militar”*. El perfil de un comandante de patrulla depende en parte de la dinámica local y de la importancia estratégica de la aldea; en algunas áreas, el cargo se turna y en otras el líder local recibe instrucciones del Ejército de quedarse en el puesto.

En el Triángulo Ixil, el sistema de las patrullas civiles no se cuestiona abiertamente como en otras áreas del sur de Quiché. Lo que sí se observa, no obstante, es la influencia de algunas estructuras tradicionales que pueden funcionar como un importante contrapeso interno para disputar el poder dominante. Una fuente importante de poder local, especialmente en Chajul, la han constituido los Principales, el Consejo de Ancianos cuya responsabilidad es preservar las antiguas costumbres mayas y velar por la integridad de cada comunidad. A lo largo de la historia reciente de la región, los Principales han actuado como una especie de “escudo” comunitario frente a influencias externas (que hace 20 años en esta región fue la iniciativa de la Acción Católica).

Durante el período de violencia y desplazamiento, esta tradición fue debilitada. Ahora “la costumbre” (los ritos mayas) no se practica como antes porque muchos Principales murieron, por la falta de recursos y porque algunos Principales se volvieron evangélicos. Sin embargo, lo que

se observa ahora es cierta readecuación de la tradición. En una comunidad de Chajul, por ejemplo, los criterios para considerar a alguien “Principal” variaron: si antes eran los ex-alcaldes de cierta edad, ahora se acepta a todos los hombres de más de 55 años (la edad en que ya no se patrulla), más algunos hijos de los Principales. Así, más fortalecido, el Consejo de Principales logra mantener cierto margen de independencia frente a la estructura militar (*“el comandante castiga a los patrulleros que no obedecen, pero no a los Principales, porque no pertenecemos a él”*) y puede influir en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, tales como la elección de un alcalde auxiliar, la lotificación de la aldea, o las normas sobre quién patrulla y quién no.

3. En resumen

El Triángulo Ixil es quizás el lugar donde la estrategia contrainsurgente del Ejército ha sido aplicada de la forma más abrumadora. El entorno físico y social del mismo ha quedado profundamente transformado con el período de fuerte violencia de principios de la década pasada y la posterior construcción de las “aldeas modelo”. El interés que el Estado ha mantenido en el Triángulo Ixil se puede atribuir a dos factores: primero, a que es una región en donde el conflicto armado ha sido candente a lo largo de los últimos diez años, y, segundo, a que es además el área donde la población desplazada ha permanecido más tiempo fuera del control del Ejército y dentro de la esfera del accionar guerrillero.

No obstante, el proyecto estatal de crear un “polo de desarrollo” en el Triángulo Ixil nunca materializó, si por desarrollo se entiende una mejora real en las condiciones de vida de la población. A pesar de las obras de infraestructura (como las carreteras) a través de las cuales el Estado ha buscado fortalecer su presencia en la región, la gran mayoría de los ixiles no cuenta con una base material que les permita ver más allá de la sobrevivencia diaria.

A pesar también de ciertos cambios favorables, como, por ejemplo, el aparente freno de la expansión de las fincas de ladinos a expensas de las tierras ixiles, la mayoría de los entrevistados dijeron estar en condiciones aún más precarias que las que vivían antes de la violencia. Para los desplazados retornados, entonces, el proceso de reintegración va muy vinculado a la recuperación de las condiciones de vida que tenían previas al abandono forzado de sus aldeas. Además de efectuarse una comparación constante del presente con el pasado, se

^{77/} Entrevistas en una aldea de Chajul, noviembre de 1989.

expresa una nostalgia por el pasado, que frente al presente se muestra idealizado, y un deseo de recuperar el “bienestar” de ese pasado. Se percibe también que la vivencia del presente se les hace sumamente difícil, ya que inician una etapa distinta de la vida, que les demanda un extraordinario esfuerzo (reconstruir físicamente la aldea, por ejemplo) en circunstancias inciertas en lo que respecta al tiempo que llevará recuperar aquel “bienestar”. El proceso se hace más arduo por el hecho que, en ausencia de una ayuda institucional sistemática, la carga de recibir y reintegrar a los desplazados recae sobre las mismas comunidades.

Se puede caracterizar al Triángulo Ixil no como un polo de desarrollo, sino como una zona de seguridad, en la que la militarización va mucho más allá de la simple presencia del Ejército. Se basa en la recomposición del poder local, es decir, en el uso de la misma población como un elemento contrainsurgente, a través del sistema de las patrullas civiles.

Aparte de las tareas paramilitares, las patrullas civiles sirven como un canal para la constante difusión del mensaje contrainsurgente, lo que ha conducido a cierta “cotidianidad” del conflicto. La guerra se vuelve lo “normal” a la vez que todo lo importante y no poco de lo secundario requiere el visto bueno del Ejército o de las autoridades militares locales.^{78/} Esta militarización social puede llevar a graves divisiones dentro de las comunidades, no necesariamente en el momento de recibir a los desplazados que regresan, pero sí a la hora de pensar en el sostenimiento y el desarrollo de esas comunidades.

Existen al mismo tiempo indicios de una saturación por la guerra. Todo el entorno de la guerra (las patrullas civiles, los rastreos, el tiempo que hay que dedicar a oír las charlas del Ejército, el riesgo de ir a sembrar tierras lejanas, la pérdida de infraestructura y el riesgo de enfrentamientos militares) constituye un obstáculo para el campesino, especialmente los desplazados que retornan, que carecen de excedente económico. Por otra parte, la aprensión que todavía viven las comunidades impide una participación plena en los programas estatales o internacionales; tampoco permite el libre desarrollo de los mecanismos de sobrevivencia propios.

^{78/} Para un análisis más completo de este tema, véase Martín-Baró (1989).

B. El caso de Cobán

1. Apuntes de la historia

El municipio de Cobán constituye uno de los 15 que integran el departamento de Alta Verapaz y es allí donde se encuentra asentada la cabecera municipal y departamental que lleva el nombre de Santo Domingo de Cobán.^{79/}

El Municipio, que ocupa el 25% del territorio de Alta Verapaz y tiene una extensión de 2,132 km², comprende áreas montañosas y terrenos quebrados y bajos por lo que cuenta con un clima variado que va desde cálido en los terrenos bajos y tropical lluvioso en las montañas bajas, hasta frío/templado en las partes altas como lo son las áreas cercanas a la cabecera departamental, donde llueve con asiduidad (Gall, 1978:442-443). En resumen, cuenta con una naturaleza montañosa cuyos suelos son altamente susceptibles a una erosión acelerada. La parte norte del municipio se encuentra atravesada por la sierra de Chamá, la cual proviene del valle del río Chixoy o Negro para finalizar en Belice.

La mayor parte de la población es indígena (82%) siendo el q'eqchi' el idioma predominante; menos frecuente es el poqomchi'. El 74% de la población del Municipio, por otra parte, vive en el área rural.^{80/}

Las colindancias de este municipio son Chisec, al norte y al este; San Pedro Carchá y San Juan Chamelco, al este; Tamahú, Tactic, San Cristóbal Verapaz y Santa Cruz Verapaz, al sur; todos municipios de Alta Verapaz, y Uspantán e Ixcán, del departamento de Quiché, al oeste; (ver mapa 7).

Por contar con alturas variadas, el municipio de Cobán se caracteriza por el cultivo de granos básicos, café, cacao y cardamomo y, en menor medida, por el cultivo de especias como pimienta, achiote y otras; también es usual observar actividad agropecuaria en las regiones bajas.

No está de más señalar que el nombre de “La Verapaz”, todavía utilizado en el presente para referirse a los departamentos de Alta y Baja Verapaz conjuntamente, proviene de la época en que se asentaron los

^{79/} Cuando se llevó a cabo el asentamiento de Cobán, en 1544, se le denominó Santo Domingo de Cobán como consecuencia de la entrada de los religiosos dominicos (Orden de Predicadores de Santo Domingo, cuyo fundador fue Santo Domingo de Guzmán).

^{80/} De acuerdo al Censo General de Población de 1973, la población de este municipio ascendía a 43,500 habitantes (Gall, 1978:449).

religiosos dominicos allí.^{81/} No fue sino hasta mayo de 1877 que se procedió a dividir el territorio de La Verapaz en dos departamentos.

La Verapaz, y en especial Alta Verapaz, ha sido una región con características peculiares marcadas por la forma en que se han desarrollado distintos sucesos de su historia. Reiteradamente se alude a la persistencia demostrada por la población indígena en mantener su identidad cultural, lo cual se vincula con el aislamiento en que se encontraba aún antes de la conquista de los españoles (King, 1974). En su historia más reciente, por ejemplo, se observa que pese a la fuerte presencia e influencia de alemanes e ingleses, estas colonias de extranjeros –y también los guatemaltecos ladinos– hubieron de aprender el idioma q'eqchi' para poder comunicarse con la población local (Adams, 1970:175-184).

Se considera que en el siglo XIX e inicios del XX dos factores, relacionados con las colonias de europeos, influyeron significativamente en el curso de la historia de La Verapaz: el cultivo del café para la exportación y el establecimiento de los europeos en fincas (King, 1974: 28). Una de las consecuencias para el pueblo q'eqchi' fue la pérdida de sus tierras.

El desarrollo de nuevos cultivos a gran escala como el café se vio acompañado de una intensificación en la explotación de los minifundios, hecho que acentuó la decadencia de las propiedades comunitarias... [Con] el arribo de colonos extranjeros europeos... [p]or medio de leyes, y convenios comerciales internacionales se promovió la expropiación, apropiación y explotación de grandes extensiones de tierras (Pedroni, 1991:14).

Con el ingreso y consolidación de europeos en La Verapaz, los ladinos vieron facilitado su ingreso. Cabe anotar que la expansión de los ladinos en Baja Verapaz fue más viable que en Alta Verapaz.

Ya para los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, de entre los europeos, los alemanes se habían consolidado en La Verapaz –y en el resto del país– mediante el cultivo y control comercial del café. En 1913 por ejemplo, de 1,675 fincas de café, el 25% estaba en manos de extranjeros y de éstos el 40% eran alemanes; y aún más, el 68% de la producción de café provenía de fincas de alemanes.^{82/}

^{81/} En 1825, la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala dividió el territorio del Estado en siete departamentos de los cuales Verapaz fue uno (Gall, 1978:71). Cuando los religiosos dominicos llegaron a ese territorio en el siglo XVI, se le llamaba “Tezulutlán”, Tierra de Guerra.

^{82/} La producción para 1913 se estimaba en unos 525 mil quintales de los cuales 358 mil procedían de propiedades alemanas. Véase King (1974:34).

La fuerza de los alemanes en La Verapaz se hizo sentir considerablemente con el resurgimiento de Alemania en la década de los '30. El Consulado asentado en Cobán asumió una postura política más marcada, la cual se manifestaba, por ejemplo, en el festejo de las conmemoraciones nazis. La situación lograda en esa época fue bastante superior a la alcanzada hasta entonces, de manera que afianzaron jurídicamente sus propiedades, en detrimento de la población indígena que encaró dificultades para acceder al cultivo de tierras que no fueran las de los grandes propietarios (King, 1974:37). Entre otras cosas, cultivar en fincas significaba para los indígenas tener que proporcionar un número de días de trabajo al finquero, o sea asegurarle mano de obra, para pagar el uso de la tierra.

En agosto de 1944, sin embargo, después de la derrota alemana en la guerra, el fugaz gobierno de Ponce emitió una orden de expropiación de las propiedades de los alemanes en todo el país.^{83/} Con este hecho se debilitó el poder y la influencia alemana en la región y en el país. Coincidió además con la década de 1944-1954 durante la cual 15 fincas nacionales que habían pertenecido a alemanes fueron repartidas (Pedroni, 1991:15).

Estas muy breves referencias a la historia de La Verapaz tienen como finalidad destacar algunas características de la población local, que se han ido conformando a lo largo del tiempo y que podrían contribuir a explicar percepciones y actitudes de los grupos desplazados en el marco de la violencia de finales de los años '70 y principios de los años '80.

Un entrevistado para este estudio señaló que:

En Las Verapaces nunca antes en la historia se había tenido una agresión de este tipo. Aquí, la conquista [de los españoles] fue pacífica, se puede decir. Después viene la primera agresión fuerte que fue la de los alemanes en el siglo pasado, donde mucha gente empieza a huir, a espaciarse y se va al norte, oriente y occidente. Y después... no creo que hubiera aquí ninguna memoria histórica de agresión armada, violenta, de matanza como la de la violencia reciente que marcará un paso único en nuestras poblaciones.^{84/}

^{83/} Ponce fue presidente interino de julio a octubre de 1944. Ese año se da la Revolución de Octubre, que terminó con el gobierno de Jorge Ubico quien había gobernado por más de una década.

^{84/} Entrevista a Monseñor Gerardo Flores, Obispo de las Verapaces, Cobán, julio de 1990.

El contexto de la guerra previo al desplazamiento

Los primeros y principales focos de violencia que determinaron los desplazamientos masivos, se localizaron en cuatro municipios de Las Verapaces: Rabinal, en Baja Verapaz; San Cristóbal Verapaz, Cobán, y Chisec en Alta Verapaz; todos de los cuales tienen colindancias con municipios de Quiché, particularmente Uspantán. (Ver mapa 8).

Deben mencionarse dos antecedentes importantes:

- 1) La llamada “masacre” del 6 de enero de 1976 en Chisec. Se trató de la muerte de cuatro campesinos –y un quinto que resultó herido– de la aldea Semococh por varios Guardias de Hacienda, como consecuencia de un conflicto de tierras que existía con campesinos de la cooperativa de Semoxán. De este hecho de violencia tuvo conocimiento rápido la Municipalidad de Chisec y señalan las fuentes que al día siguiente llegaron a la comunidad de Semococh unos 30 soldados de Cobán quienes enterraron a los muertos y se llevaron al herido al hospital de Cobán. El caso fue denunciado en su momento y tuvo como consecuencia un “malestar muy grande” entre la población, que exigía “que se castigara a los culpables”.^{85/}
- 2) La masacre de Panzós, ocurrida el 29 de mayo de 1978 y también producto de conflictos sobre la tierra, según una autoridad entrevistada en la región:

...trajo una serie de consecuencias que se fueron desencadenando poco a poco; hubo más temores en las comunidades pero [que permitían] más o menos [una] actividad normal... meses más tarde empezaron a aparecer mantas en la carretera a Sebol [en el norte de Alta Verapaz, en el área de la FTN] con proclamas subversivas del EGP... En Tucurú, Tamahú [en el camino hacia Panzós] estuvo tensa por lo de Panzós.^{86/}

Estos hechos son manifestaciones de conflictos que en la historia de Las Verapaces se han registrado con bastante frecuencia debido a la estructura de la tenencia de la tierra, que se caracteriza por la existencia marcada del binomio latifundio-minifundio, con la resultante demanda

^{85/} Véase *Prensa Libre*, 16 de enero de 1976 e *Inforpress Centroamericana*, (No.177, 1976). *Le Monde Diplomatique* (1978), documenta éste y otros conflictos por tierra en Alta Verapaz.

^{86/} La organización guerrillera de mayor influencia en Alta y Baja Verapaz fue el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP.

constante de acceso a tierras por parte del campesinado indígena. A este conflicto básico se adicionan aquéllos que provienen de las medidas topográficas de linderos de las tierras, las cuales frecuentemente no coinciden con las que manejan las partes afectadas.

Regresando al punto que nos ocupa, para finales de la década de los '70, en Las Verapaces ya había sectores de población que estaban involucrados o simpatizaban con organizaciones del movimiento popular, razón por la que más adelante serían reprimidos.^{87/} Entre las organizaciones populares que se mencionaron durante las entrevistas estuvo el Comité de Unidad Campesina (CUC). La influencia y presencia del CUC a partir de 1977 se localizó en la cabecera de Rabinal y otras poblaciones de ese municipio, la mayoría de habla k'iche'-achi', donde dicha organización hacía planteamientos reivindicativos demandando tierras y servicios en salud y educación.

Poco después, este tipo de movimientos convergería con el que se derivaría del desalojo de la aldea Río Negro a consecuencia de la construcción del embalse de la presa hidroeléctrica Chixoy, y del incumplimiento de ofrecimientos por parte del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Río Negro y las poblaciones a su alrededor pertenecían al municipio de Rabinal y estaban localizadas muy cerca de las márgenes del Río Chixoy. Esta aldea empezó a ser inundada en 1980, con lo que se agudizó el conflicto de desalojo y algunas familias empezaron a salir hacia la cabecera municipal de Rabinal y hacia San Cristóbal Verapaz. Simultáneamente, corrieron rumores entre las comunidades de que Río Negro colaboraba con la guerrilla. Posteriormente, conforme a lo recabado, la aldea y otras a su alrededor fueron objeto de dos masacres: la primera en 1981 y la segunda en 1982. En ambas masacres habrían muerto cerca de 350 personas.

Relatos de masacres de aldeas cercanas a la de Río Negro se dieron a conocer poco después, destacando la de Agua Fría, aldea que se encuentra del lado de Quiché, separada de la aldea Río Negro sólo por el Río Chixoy.^{88/}

^{87/} Véase Anexo 2 para un recorrido rápido por las experiencias de organización en el área rural a partir de 1960.

^{88/} Para mayores detalles de este caso y de otros en Baja Verapaz, véase Falla (1983b:74-89 y 1988b); y Krueger (1982:25-26).

Estimaciones muy preliminares apuntan que el número de muertos en el municipio de Rabinal entre 1981 y 1983 rebasa los 1,300. Por otra parte, el número de viudas que la Iglesia Católica atendía en Rabinal en ese período se acercaba a 1,500. Para 1982, en el municipio de Rabinal el trabajo de cooperativas, movimiento de catequistas y delegados de la palabra de la Iglesia Católica y de las cofradías, entre otros, había decaído total o significativamente.

En cuanto al municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, sus poblaciones también fueron duramente golpeadas por la violencia.^{89/} Varias de ellas están localizadas en el lado norte del camino que conduce a la aldea Quixal en un área que forma parte del complejo de la hidroeléctrica Chixoy. Ésta fue una zona de constante actividad guerrillera y según declaró el ministro del Interior, coronel Ricardo Méndez Ruiz en junio de 1982, “*está en poder del EGP aunque se combate arduamente para eliminarlos*”.^{90/} El área que comprende las aldeas Las Pacayas, Najtilabaj y Chirrexquiché fue bombardeada el 27 de marzo de 1982 quedando aproximadamente 100 muertos; cientos de personas se desplazaron a la cabecera o a otros lugares.^{91/}

Por otra parte, las viviendas de aldeas cercanas a la aldea Quixal, como Sacataljí, Cruzmax, Samuc y San Isidro, fueron quemadas el 24 de marzo de 1982, al día siguiente del golpe de Estado que dio por terminado el gobierno del general Romeo Lucas García para ser sustituido por una junta de gobierno presidida por el general Efraín Ríos Montt. Para ese momento, la población ya se había desplazado buscando refugio fuera de las comunidades y éstas se encontraban totalmente vacías (Falla,

^{89/} La cabecera municipal lleva el mismo nombre y se encuentra muy cercana a los límites departamentales de tres departamentos: Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz. San Cristóbal es una región de habla pocomchi’.

^{90/} *El Gráfico*, 14 de junio de 1982, p. 15. Para documentación de la violencia y el conflicto militar en esta zona, véase: *Inforpress Centroamericana*, Nos. de 1982: 476 (16 de enero); 479 (4 de febrero); 496 (10 de junio) y Nos. de 1983: 526 (20 de enero) y 527 (27 de enero).

^{91/} En el *New York Times*, “Massacres spread terror in the land of the Maya”, 15 de septiembre de 1982, p. A2, se documenta un ataque a Las Pacayas donde soldados mataron a unos 60 campesinos y provocaron la huida de 300 más, que llegaron desplazados al pueblo de San Cristóbal. De acuerdo con esta versión, el Ejército quiso “limpiar Las Pacayas por estar en una ruta estratégica”. Véase también: *Prensa Libre*, “Trescientos sobrevivientes de una masacre abandonaron la aldea”, 14 de junio de 1982.

1983b:79-80). En muchas otras aldeas de este municipio, no mencionadas en los párrafos anteriores, hubo también víctimas y muchos corrieron también la suerte de los desplazados internos que buscaron resguardo en montañas y lugares fuera de sus comunidades.

Muchos desplazados de esta región se encontrarían luego dentro de los grupos que, entre 1986 y 1988, bajarían de las montañas con la protección de la Iglesia Católica de Las Verapaces.

La violencia en el municipio de Cobán

Otro sector que fue golpeado fuertemente por la violencia fue el municipio de Cobán, principal área de estudio dentro de esta investigación. Este municipio tiene la colindancia más larga con el departamento de Quiché, siendo el Río Chixoy o Negro el límite. Las poblaciones más afectadas están ubicadas en una franja en el noroeste del Municipio a una altura de entre 100 y 600 metros sobre el nivel del mar separadas por dicho río de los municipios de Uspantán e Ixcán.

Para 1981, las poblaciones de este sector ya habían sido señaladas de estar apoyando a la guerrilla –el EGP– por el hecho de que se hacían reclamos de tierra:

...cuando nosotros no sabíamos nada todavía de eso [de la guerrilla] ya teníamos muchas acusaciones de ser guerrilleros y que no sé qué, porque nosotros estábamos solicitando tierras... un día vinieron armados y nos querían matar a nosotros ... La primera vez que el Ejército quiso matarnos a nosotros con toda la comunidad fue el 23 de diciembre del '81... del '81 quiso tomar nuestra comunidad y para matarnos porque hay algunos que ya fueron a decir que con nosotros estaban los guerrilleros y ya tenían rato que nos llevaban mal porque nosotros estábamos solicitando tierras... entonces empezaron a llevar mal y se fueron a dar parte y dar nuestros nombres en la Zona [Militar]... vino el Ejército y quiso tomar nuestra comunidad pero no logró tomar la comunidad y matarnos porque logramos salir...^{92/}

El relato anterior es de una persona del sector e ilustra, en general y muy sucintamente, el inicio de la violencia en el área. Ante las amenazas y el temor que ya se había difundido entre la población, ésta salía de las

^{92/} Entrevista a desplazado-retornado del área, Cobán, mayo de 1988. Una impresión tomada de la investigación de campo es que la guerrilla llegó a esta área de Alta Verapaz hasta finales de los años '70, coincidiendo su presencia con el auge del enfrentamiento militar directo con el Ejército, el cual, entonces, no fue precedido por una larga etapa de organización como se dio en Quiché y otros lugares.

comunidades y regresaba cuando pensaban que la “*situación se había calmado*”, hasta que salieron de una vez cuando el bombardeo se intensificó a partir de marzo de 1982:

Entonces volvimos otro tiempo y en ese tiempo pues hizo un bombardeo... unas grandes bombas y por aquí nosotros le llamamos a una montaña de aquí ‘el hoyo de la bomba’ porque allí cayó, hicieron un hoyón... por aquí arriba bombardeó toda la montaña, en ese tiempo cuando empezamos a salir... al fin llegamos un 11 de marzo del '82 cuando hizo un bombardeo sobre la finca de Las Camelias... entonces [fue] cuando nosotros ya salimos de una vez, abandonamos la casa de una vez y nos venimos para estas montañas... y así estuvimos pues... después nos entró otra vez el Ejército a sacar aquí... salimos de aquí, pasamos huyendo...^{93/}

Entre las aldeas afectadas de esta región se encuentran Sa'tolohox, Peña Blanca, Nimlahacoc, Chinahacoc, Cuxpemech, Chinapemech, San José Pasacoc, San José Río Negro y poblaciones asentadas o que trabajaban en fincas como La Esperanza, Las Conchas, El Rosario y Las Camelias y otros más. Al salir de las comunidades, la población se refugió en la montaña y caminó según la dirección de donde venía el peligro. De acuerdo a los testimonios hubo miles de personas buscando protegerse “*bajo la montaña*” en este período.

Hasta el momento, no hay cifras sobre muertos en la región; sólo se escucha que “*mucha gente murió de bala, de frío, de hambre...*”. Se han rescatado algunos relatos que describen la muerte de personas en números de 10, 15 y 30 a la vez durante su estancia en la montaña como resultado de la combinación del bombardeo y la “*entrada del Ejército*” buscando a los grupos que se habían reunido para protegerse de la persecución.^{94/}

Finalmente, un informe basado en una gira de la Iglesia Católica durante mayo de 1982, dos meses después de haberse producido el golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García, describe la situación en Las Verapaces así:

^{93/} Ibid.

^{94/} Por ejemplo, se reporta una masacre de 14 ó 15 personas desplazadas en la montaña cometido por soldados y patrulleros el 18 de septiembre de 1983.

El 15 de septiembre de 1983 hubo una masacre de 30 personas en áreas de la comunidad de Sajacoc que incluyó la muerte de 20 enfermos, entre ellos niños, en lo que participaron patrulleros y Ejército. Conforme al testimonio, la noticia fue difundida por una radio-difusora en la ciudad capital como un combate en donde habrían muerto “*20 guerrilleros en un campamento*”.

En algunas parroquias (Rabinal, Chisec, Raxrujá, San Cristóbal) hay aldeas que se han quedado sin habitantes, a causa de la violencia. Otras comunidades cuentan con un número muy alto de viudas y huérfanos, sin hombres, sin jóvenes, sea porque han muerto, sea porque han huido, sea porque están en el cuartel... En algunas, hubo aparte de la violencia contra su gente, destrucción de sus templos y ermitas (Cobán, San Cristóbal). Otras, viven bajo una tensión casi insoportable porque han sido acusadas públicamente de que 'todos son guerrilleros'. En muchas comunidades, por estas razones, el quehacer pastoral está paralizado, no pueden hacer celebraciones, ni reuniones, ni recibir visitas de sus pastores... Varias parroquias: Salamá, Rabinal, Calvario Cobán, San Cristóbal, etc. han perdido muchos de sus catequistas o delegados, porque han sido asesinados, a veces son toda su familia... Otras Parroquias, o parte de sus comunidades, no han experimentado la violencia en gran escala, pero viven en un clima de miedo, tensión y desconfianza, causado por algunos secuestros, amenazas –a veces contra los Padres y Catequistas– acusaciones, rumores, prohibiciones y restricciones de actividades religiosas, o por la imposición de las patrullas civiles, lo que ha provocado en algunos casos el alejamiento de los Catequistas, y, el desánimo de la Comunidad. (Panzós, Senahú, La Tinta, Telemán, Tamahú, Purulhá, Cubulco, Chamelco, San Marcos Cobán)...” (Diócesis de La Verapaz, 1982).

Una estimación que ha hecho la Iglesia Católica, basada en sus giras, es que alrededor de 100 poblados en Las Verapaces desaparecieron en tres años. Dicha cifra representa más del 20% del número oficial de aldeas que en el país fueron destruidas durante el período de violencia a principios de la presente década (Ejército de Guatemala, 1984:62).

Para finales de 1982, período en que la violencia militar, la amenaza política y el desplazamiento de poblaciones en el área rural se mantenía, el Obispo de Las Verapaces en una declaración señalaba:

...es de todos conocido que, si los indígenas de numerosas aldeas huyeron a las montañas de Alta Verapaz, no se debió tanto a un motivo ideológico, ni siquiera reivindicativo, sino al terror que se abatió sobre todas estas poblaciones durante los regímenes pasados.^{95/}

2. Retorno y reintegración

Los retornos antes de 1986

La amnistía ofrecida por el gobierno de Ríos Montt en 1982 y la política militar de promover el retorno masivo de los desplazados, tuvo

^{95/} Declaración del Obispo de Verapaz, Cobán, 24 de noviembre de 1982.

resultados en las áreas de mayor población afectada de Alta Verapaz: los municipios de Chisec, Cobán y parte de San Cristóbal Verapaz y Santa Cruz Verapaz. En este período hubo capturas de desplazados por el Ejército, muchas veces actuando conjuntamente con las Patrullas de Autodefensa Civil; también, cientos de personas escucharon por radio que el Ejército les ofrecía amnistía y decidieron retornar y salir de la situación de inseguridad y sufrimiento en que se encontraban en la montaña.

En estos municipios, el Ejército concentró en campamentos a los desplazados que retornaron, instalando un destacamento al lado de cada campamento. Chisec, donde a finales de 1982 se concentraron cerca de 8,000 desplazados retornados, se convirtió luego en un Polo de Desarrollo. Bajo el programa de Polos se reconstruyeron 10 aldeas en el Municipio a principios de 1985 (Ejército de Guatemala, 1985:78). En el noreste de Cobán, dos campamentos de desplazados (Rosario y Las Conchas) albergaban a más de 1,300 personas en 1984 (PAVA, 1984). Cerca de Cobán y en los municipios de San Cristóbal y Santa Cruz, el ejército estableció varios centros de re-educación ideológica (Acamal, Saraxoch, Chituj) donde el trabajo ideológico, presente en todos los campamentos, fue más afinado e intenso.^{96/}

Los miles de desplazados recibidos por el Ejército entre 1982 y 1987, quienes pasaron por los campamentos de desplazados, en términos generales tuvieron la misma experiencia. El proceso se caracterizó por una recepción prolongada, de hasta varios años, durante la cual dependían de la ayuda de emergencia y los “alimentos por trabajo”. Los desplazados en los campamentos de Las Conchas y El Rosario, por ejemplo, tuvieron que construir instalaciones para el Ejército ahí acampado y eran “*completamente dependientes del Ejército*” en materia de alimentos (notas de campo y PAVA, 1984).

La intervención del Ejército se orientaba a producir cambios específicos en los desplazados incluyendo ideología, organización social y aspectos socio-culturales (AVANCSO, 1990:36). En Chisec, un retornado entrevistado en 1986 narró: “*Cuando regresamos tuvimos que vivir en galeras que estaban junto a la base del Ejército. Los soldados querían cambiar nuestras mentes. Ellos decían –no piensen así. Había reuniones*

^{96/} Véase Ejército de Guatemala (1985) y Krueger y Enge (1985). En Saraxoch se concentraron pobladores originarios de allí y de cuatro aldeas más. Acamal se construyó a principios de 1984 y fue poblado por desplazados que habían vivido casi un año en un campamento al lado de la Zona Militar de Cobán.

todo el tiempo” (CEIDEC, 1990:147). En ese sentido, los campamentos de Acamal y Saraxoch, como se dijo, fueron casos un tanto más extremos. Una señora q'eqchi', quien estuvo en Acamal por dos años recuerda:

Casi nos pegaron, era tan duro. Nos hicieron construir casas, marchar y cantar por las mañanas. Estuvieron bien bravos allí, además tuvimos que cargar piedras. Estuvimos en una galera, unas 50 personas, todos juntos, dormíamos juntos. Cuatro [mujeres] molían el maíz para todos, nos turnábamos para hacerlo. Aguantamos y gracias a Dios estamos vivos.^{97/}

En 1985, el acceso a visitantes ajenos a estas aldeas era severamente restringido todavía, igual que el derecho de movilización de sus habitantes. A la entrada a Saraxoch se colocó el letrero: “Aldea antisubversiva –ideológicamente nueva” (Krueger y Enge, 1985:40).

A los pobladores de Las Conchas y El Rosario les dieron permiso para salir a finales de 1984. El campamento de Acamal se desmontó hasta 1987. En el proceso de cerrar estos campamentos, el Ejército también intentó influir en la elección del lugar de destino inmediato. En el caso de los retornados a Las Conchas y El Rosario, las autoridades militares dieron la recomendación de que buscaran terrenos “baldíos” (sin adjudicación legal), donde con el tiempo tendrían la posibilidad de volverse dueños en vez de regresar a la situación de mozos colonos en las fincas (notas de campo y PAVA, 1984). Esto aparentemente se basaba en un análisis según el cual “el problema” (simpatía por la guerrilla) se originaba en una frustración relacionada con el hecho de ser mozo colono. La reubicación preliminar, sin embargo, no era determinada por el Ejército, sino que era dejada al criterio (y limitaciones) de los retornados.

No se dio seguimiento institucional en estos casos y los retornados fueron dejados a su suerte con el retiro de todo apoyo. La explicación de un oficial de Asuntos Civiles (S-5) de Cobán era:

Cuando la gente estuvo en Acamal, las instituciones gubernamentales llegaban y siguieron visitando a la gente al inicio de su reubicación. Pero después ya no llegaron. Ya no llegan porque piensan tal vez que ya la cosa se tranquilizó y que ya no se necesita de ayuda gubernamental, que la gente puede por sí sola.

La percepción de los pobladores de estos lugares era la de haber sido abandonados por el Estado antes de haberse establecido nuevamente en sus comunidades. En Saraxoch, objeto de una fuerte atención estatal

^{97/} Entrevista en mayo de 1988, comunidad en Cobán.

entre 1985-1986, manifestaron los ocupantes: “*nos han dejado solos, no estamos entrando en el desarrollo*”.^{98/}

En los años 1982-1986, cientos de desplazados aún se encontraban en la montaña sin confiar en o sin conocer la amnistía ofrecida. En esa época, los grupos grandes de desplazados se dividieron para poder movilizarse con más facilidad; de esta manera, mientras unas familias perdieron contacto, otras se volvieron a encontrar, “*nos fuimos uno por uno (a la montaña) por miedo, pero en la montaña nos fuimos encontrando*”.^{99/}

El papel de la Iglesia: los retornos a partir de 1986

Si bien, lógicamente, se evitaba la captura, las adversas condiciones en la montaña provocaron el deseo de retornar. A principios de 1986, algunos desplazados mandaron mensajes a Cobán para solicitar el apoyo del Obispo (AVANCSO, 1990:28,52). La noticia de que la Iglesia estaba dispuesta a recibir a los desplazados hizo “*correr la voz*” y se reunieron grupos pequeños para bajar, aunque no sin cierto recelo: “*cuando vino las ideas de bajarnos pensamos que es un regalo de Dios, estamos cansados y los soldados ponían trampas. Decidimos venir pero decíamos si podía ser la muerte o nos salvamos...*”^{100/}

El retorno de estos grupos se llevó a cabo con el respaldo y apoyo logístico de la Iglesia Católica en coordinación con algunas autoridades civiles locales y sin mayor intervención del Ejército (AVANCSO, 1990:28-29). Regresaron seis grupos de entre 13 y más de 100 personas, entre marzo de 1986 y enero de 1988, más otros que retornaron en forma individual (AVANCSO, 1990:49).^{101/} Paralelo a ese proceso, todavía hubo

^{98/} Entrevista con miembro del Comité Pro-Mejoramiento, abril de 1988. Ese año quedaban en Saraxoch 60 familias originarias ya que los habitantes de cuatro aldeas más, concentrados allí cuando estuvo el Ejército, habían regresado a sus lugares. Las familias estaban en proceso de ubicar nuevamente sus casas en forma dispersa como las tenían antes de la violencia.

^{99/} Entrevista con desplazado retornado en aldea de Cobán, octubre de 1989.

^{100/} Entrevista con desplazado retornado, octubre de 1989.

^{101/} El retorno a través de la Iglesia no se dio en un clima completamente libre de la intervención militar. En 1986, dos desplazados retornados fueron desaparecidos y en 1988, un retornado fue secuestrado; éste luego logró escapar (AVANCSO, 1990:30).

Un caso conocido por la prensa internacional fue el de un grupo que notificó su retorno a la Iglesia en 1986, pero que antes de que llegara la fecha acordada, fue

retornos a través del Ejército, incluyendo también áreas de Izabal colindantes con Alta Verapaz, hasta mediados de 1988 (AVANCSO, 1990:49).

El retorno que se dio a través de la Iglesia a partir de 1986 se caracterizó por una etapa de recepción prolongada (de algunos meses hasta más de un año) en las instalaciones de la Iglesia, con ayuda de emergencia (alimentos, cuidado médico, ropa) y actividades de formación, producción artesanal y de hortalizas, entre otras. Los retornados vieron esta experiencia como un alivio después de cinco o seis años de deambular en la montaña.

La reubicación preliminar se dio en la mayoría de los casos con el apoyo de la Iglesia y en el proceso posterior hubo intervención significativa de ésta, tanto en la planificación como en un atento seguimiento (AVANCSO, 1990:62-63).

El proyecto que luego ha venido desarrollando la Iglesia con los desplazados retornados en Alta Verapaz es único y merecería un estudio aparte. Aquí sólo es posible comentarlo a grandes rasgos.

Según la misma Iglesia, ésta ha brindado una asistencia variada que se ha ido afinando y ajustando con el tiempo:

¿Qué es desarrollo? No tenemos conceptos tan duros y metas tan definidas. Hemos pasado de la salvación, dar de comer, a programas de desarrollo. No buscamos ni pretendemos darle una categoría distinta [al desplazado], privilegiada de las otras gentes... [nuestro] planteamiento básico es la defensa del ser humano, no desde la fuerza, sino de un acompañamiento. No se persigue proteger de arriba. Nos enfocamos en la formación humana para que la gente sea autónoma en sus decisiones.^{102/}

Desde 1984, la Diócesis empezó a dar forma a su concepto de Pastoral Social, hoy día desarrollado como una instancia de la Iglesia con el

objeto de un ataque por parte del Ejército que dejó muertos y 16 personas capturadas. En julio, el resto del grupo llegó a Cobán protegido por la Iglesia. Al saber que sus familiares capturados (principalmente mujeres y niños) estaban en el campamento de Acamal, se logró que éstos pudieran visitar por una noche, al grupo que estaba en Cobán. Pero “*una vez lejos del control del Ejército, las mujeres señalaron que no querían regresar a Acamal*,” decisión que fue respaldada por el gobernador y el obispo (*Noticias Aliadas*, “Guatemala: retorno de indígenas pone a prueba reasentamiento pacífico,” Vol. 24, no. 7, 26 de febrero de 1987).

^{102/} Entrevista con Monseñor Flores, Cobán, octubre de 1989.

objetivo general de “...formar al hombre, acompañarle y promoverlo para que sea protagonista de su propia historia según el Plan de Dios en orden a la instauración de una sociedad justa y fraterna”. El trabajo está dividido en cuatro áreas principales: salud, educación, promoción y desarrollo, y ayuda y asistencia (Diócesis de La Verapaz, s.f.). Dentro de este plan, el trabajo con la población desplazada retornada sigue siendo una prioridad.

La Iglesia ha echado a andar una serie de proyectos importantes que buscan la reintegración de los desplazados. Dentro de ésta, se debe mencionar el que se desarrolla en la aldea Chicoj, cerca de la cabecera de Cobán, como sitio de asentamiento para retornados específicamente, en tierras adquiridas para este propósito por la Iglesia. Se han implementado proyectos de crédito para la adquisición de ganado en varias comunidades, se maneja el Centro de Formación II en San Juan Chamelco (de propiedad estatal) y un Centro de Formación Agropecuaria que funciona en Las Conchas, Cobán. A este proyecto le asigna una alta prioridad la Iglesia, pues es parte de un esfuerzo por resolver a largo plazo el problema de la producción agrícola en tierras marginales, en un contexto de caída de precios de los productos, alto costo de los insumos agrícolas (importados), deterioro del medio ambiente (deforestación), competencia de la producción a gran escala, etc.. La idea es que estos obstáculos sólo pueden ser superados con una tecnificación agrícola apropiada a las condiciones locales (culturales, económicas, de recursos naturales y humanos, etc.).^{103/}

Aunque enfocado hacia zonas de recepción de desplazados retornados, el apoyo ha beneficiado también a otros desplazados retornados y a vecinos que no se desplazaron.

Sin embargo, la Iglesia reconoce que hay grandes limitaciones para diseñar y poner en marcha una estrategia de desarrollo viable, sobre todo si se tiene que asumir el papel que correspondería al gobierno y a las ONGs en esto. Por una parte, algunas actividades de la Iglesia han tendido a crear dependencia dentro de la población y, por otra, su trabajo propiamente de desarrollo tiene límites financieros y técnicos. Monseñor Flores lo expresó así: “estas luchas y sufrimientos nos han hecho más conscientes de nuestra propia limitación y papel más específico. No es la panacea que va a curar todas las enfermedades”.

Una respuesta ha sido tratar de desarrollar una capacidad de intermediación entre la población y el aparato estatal. Específicamente el

^{103/} Entrevistas con participantes en programas de la Diócesis, mayo de 1991.

programa de asesoría legal de la Pastoral Social ha brindado servicios legales y apoyo logístico a las comunidades que emprenden trámites ante las instancias del gobierno. En un sentido, se ve a la Iglesia apoyando a la población para obtener del gobierno lo que ella misma nunca podría proporcionar –por ejemplo, la carretera o la titulación de las tierras. “La oficina nace como una necesidad histórica porque la gente sabe poco de las leyes, y del sistema en general. La oficina apoya los trámites que ya tiene la gente”.^{104/}

Tal como los repatriados tienen un “respaldo moral” en la presencia de ACNUR, los desplazados retornados, “psicológicamente se sentirían más seguros cuando hay apoyo de una institución como la Iglesia”.^{105/}

¿A dónde vamos? Ubicación, reubicación y la tierra

Un factor determinante en el caso de Alta Verapaz ha sido la dificultad que tienen los retornados para encontrar un sitio dónde vivir una vez que han bajado de la montaña. Según el Obispo de la región: “Son muy pocos los desplazados que han logrado una reubicación adecuada, que les permita vivir de una forma más humana”.^{106/}

Antes de la “violencia”, como se ha señalado, la sobrevivencia de una gran parte de esta población se desarrollaba dentro del sistema de mozos-colonos de las fincas grandes del Departamento. Otros vivían en aldeas y tenían posibilidades de subsistencia, aunque frecuentemente carecían de títulos sobre la tierra, que, además solía ser de mala calidad. La necesidad de hacer trabajo de jornalero en fincas cercanas o de optar por la migración estacional a otras fincas (siempre dentro del departamento o la zona q'eqchi') era para ellos una salida común.

En 1986-1987, los grupos que bajaron a través de la Iglesia enfrentaron el proceso difícil de ubicarse. Aunque muchas personas regresaron individualmente a sus lugares de origen o a reunirse con familiares, otros buscaban la oportunidad de asentarse en un nuevo lugar manteniéndose

^{104/} Entrevista, Cobán, junio de 1988.

^{105/} Entrevista con Monseñor Flores, octubre de 1989.

^{106/} Al ser preguntado acerca de sus esperanzas sobre el futuro, un retornado contestó: “sólo una cosa, que sean legalizadas las tierras para dejar con nuestros hijos” (notas de campo, mayo de 1988).

como grupo. Para el logro de esto último encontraron dos problemas: la escasez de tierra disponible en Alta Verapaz y el rechazo directo de otros campesinos que no aceptaron a los desplazados como vecinos.^{107/}

Hoy la mayoría está asentada en un nuevo lugar, con mayor acceso a la tierra. Eso a primera vista sería una mejor situación que la de “antes”; sin embargo, hay una serie de limitaciones relacionadas con la reubicación que tiende a neutralizar la ventaja de tener tierra propia. Las comunidades de los retornados enfrentan:

- * Falta de títulos en el caso de tierras baldías o nacionales, que se traduce en inseguridad sobre su posesión definitiva. Hay varias comunidades que están en proceso de tramitar con el INTA la medición de la tierra o la titulación. Además, el costo de la tierra y el proceso de obtener los títulos puede requerir más recursos que los disponibles en la comunidad.
- * Inseguridad por ocupar tierras que no son propias ni baldías, normalmente porque el dueño no aparece o no ocupa el lugar actualmente. El razonamiento de los asentados en una comunidad aislada de carretera alguna es: *“Como ahí está la tierra, sembramos... ¿Quién jodidos va a venir por acá?”*
- * Tierra de mala calidad o en cantidades insuficientes a pesar de ser propias. Dado que la mayor parte de tierras en Alta Verapaz están incorporadas a fincas grandes, la opción para los retornados que buscaron lugares disponibles eran las tierras marginales.

Así, la posición oficial del INTA de apoyar a los desplazados a ubicarse, proporcionándoles información sobre tierras disponibles, asistiéndoles en las mediciones necesarias y proporcionando información acerca de las condiciones agrológicas, en la práctica pierde sentido pues casi no existen tierras no ocupadas, y las que tendrían la capacidad de

^{107/} Un caso conocido fue el de “Sacaniyá”, una comunidad cercana a Cobán donde el entonces Presidente de la República, Vinicio Cerezo, prometió entregar tierras a un grupo de desplazados que bajó de la montaña en julio de 1986. Debido a la oposición de los pobladores del lugar, que se mantuvo a pesar de algunos esfuerzos gubernamentales para convencerlos, los desplazados no pudieron establecerse y tuvieron que esperar más de un año antes de encontrar un sitio alternativo (notas de campo y *El Gráfico*, “Incierto Futuro de Refugiados”, 7 de diciembre de 1987).

sostener a más población no necesariamente están habitadas por personas dispuestas a aceptar como vecinos a desplazados retornados.^{108/}

Divisiones en la comunidad: los que se fueron y los que se quedaron

El desplazamiento a la montaña, aunque masivo, no fue de igual magnitud en todas las comunidades afectadas. En algunas comunidades, una parte de la población nunca salió y en áreas donde el abandono de las comunidades fue total (especialmente en San Cristóbal Verapaz y al sur del municipio de Cobán), una gran parte de la población buscó refugio en las cabeceras municipales y la departamental. La huida o no y a dónde, con frecuencia reflejó divisiones previas relacionadas con las partes en conflicto.^{109/}

En todo caso, esta división inicial dio lugar luego a una división más profunda entre los que *“estuvieron en la montaña”* y los que no. Debe tenerse en cuenta que a veces las comunidades o los individuos que se quedaron, se vieron obligados u optaron por participar al lado del Ejército en sus operaciones contra la población desplazada o sus bienes abandonados, y que estas personas tienden en el presente a respaldar al Ejército y/o a seguir su orientación y actitudes.

Por otra parte, el tratamiento en cierta medida preferencial que la Iglesia ha dado a los desplazados retornados, puede haber contribuido en algunos casos a causar reacciones negativas contra ellos. Relacionado con esto, está el factor religioso; en un área de varias comunidades adonde llegaron a asentarse numerosos desplazados, la percepción de éstos es que los protestantes que predominan en una comunidad vecina les rechazan, tanto por ser católicos como por ser desplazados.^{110/}

^{108/} Entrevista con autoridad regional de INTA, Cobán, enero de 1990. Se reportó que una comunidad interesada en recibir personas reubicadas a cambio de apoyo y mejoras, declaró preferir que fueran repatriados porque, según ellos, éstos cuentan con apoyo y son más beneficiados por la comunidad internacional (entrevista con funcionario de MINDES, Cobán, enero de 1990).

^{109/} Según testimonios, en algunas comunidades la guerrilla pasó avisando que venía el Ejército y que los residentes debían salir. En otras, el Ejército ordenó el traslado.

^{110/} El testimonio de un retornado quien escogió para su reubicación un lugar colindante con esta comunidad protestante, donde tenía familiares, pero que se vio obligado a salir después a otro departamento por las amenazas que recibió, es el siguiente: *“me están diciendo, ‘¿De dónde estás viniendo? isos católico y estás viviendo en la montaña! no vas a caminar de noche’...”* (notas de campo, junio de 1989).

En una comunidad organizada bajo el patrocinio de la Iglesia, por causa también de sospechas de sus vecinos, los retornados se sintieron obligados a reportarse a la zona militar para aclarar la situación y, como una consecuencia no esperada, acordaron hacer por primera vez la patrulla civil. En este caso (entre esta comunidad y una vecina) hay tensiones dado que: 1) algunos desplazados asentados en la primera son originarios del otro lugar pero se sienten inseguros de regresar allá; 2) los de la comunidad vecina que no se desplazaron a la montaña, participaron al lado del Ejército en rastreos que hostigaron a los desplazados; y 3) se disputaban algunas tierras que los desplazados retornados estaban sembrando, dando como resultado denuncias en su contra (notas de campo, 1988).

El mundo q'eqchi': factores socio-culturales en la reintegración

Una característica de las comunidades de desplazados retornados en Cobán es su homogeneidad relativa. Esto haría pensar, en principio, que la probabilidad de una buena cohesión al interior de las comunidades que, además, tienen en común la experiencia del desplazamiento, sería alta.^{111/}

En ese sentido, es un factor a favor el que todas estas comunidades compartan el idioma y la cultura q'eqchi', que valora la cooperación e incluye elementos de colectividad en la vida social y la organización del trabajo. Algunas comunidades están compuestas únicamente por personas que experimentaron el desplazamiento en alguna medida, aunque en distintos períodos. Son católicos en su mayoría o totalidad; esto no sólo ayuda a que se dé mayor comprensión entre la comunidad, sino que también coincide con la institución que más apoyo les ha dado.

Aunque la tendencia en varios grupos fue a dispersarse paulatinamente al retornar, algunos lograron mantenerse como tales. Para los grupos que permanecen unidos, ha sido más importante su “comunidad de la montaña” que su comunidad de origen, aunque cuando coinciden las dos situaciones, los lazos son aún más fuertes. En una comunidad que convivió varios años en la montaña, se mantiene la práctica de cocinar colectivamente tal como lo hacían allá, además de cultivar juntos y distribuirse la cosecha después entre todos. Ellos dan su explicación:

^{111/} Las comunidades visitadas (unas diez) probablemente representan las condiciones socio-culturales más ventajosas de la reintegración en Alta Verapaz; no se estudiaron (precisamente por el difícil acceso) casos en que los retornados intentaron regresar a sus lugares de origen o individualmente se reubicaron en comunidades donde la mayoría no se desplazó.

Aquí todo se comparte porque hemos vivido la tristeza, el sufrimiento. ¡Cuánta hambre y sed hemos aguantado! Por eso todo compartimos. Si nos hace falta algo, nos contamos entre nosotros. Compartimos lo poquito que tenemos. Entonces pensamos que así como hicimos en la montaña así lo hacemos acá.^{112/}

En contraste con estos elementos aglutinadores, existen factores que pesan en contra de la consolidación de las comunidades. En casi todas existe la percepción de estar “revueltos”, por proceder de distintos lugares de origen. En Chicoj, un asentamiento asesorado por la Iglesia, las 50 familias proceden de 11 comunidades distintas, algunas de ellas de otros municipios (Duque, 1990).

En varias comunidades hubo dos olas de asentamientos (primero los que salieron de los campamentos del Ejército en 1984 y, luego, los reasentados con ayuda de la Iglesia en 1988); en otras, la población había disminuido debido a que varias familias se fueron en búsqueda de mejores tierras, otras más, en 1989 seguían recibiendo nuevas familias y todavía no contaban con una población estable. Estos ajustes demográficos y la incertidumbre sobre el destino final hacen más compleja la consolidación de la dinámica local.

El hecho de estar lejos del lugar de origen y, especialmente, lejos o separados de familiares es una carga psicológica para muchos.^{113/} El haber perdido familiares durante la etapa de mayor violencia o no saber dónde están, son aspectos que distraen de o complican la tarea de adaptarse al nuevo ambiente después del retorno.

Junto con la pérdida de familiares, se han producido otras pérdidas de referencias que obligan a nuevas adaptaciones. Las referencias religiosas son un ejemplo.

Algunas prácticas tradicionales relacionadas con la cosmología q'eqchi' se centran en la relación de las comunidades con las deidades de

^{112/} Notas de campo, octubre de 1989. Sin embargo, una autoridad de la Iglesia observa que, en general, “*la experiencia colectiva* (vivida en la montaña) *se deja cuando se vuelven a incorporar. No se mantiene, se diluye*” (ibid).

^{113/} Se encontraron, por ejemplo, casos de originarios de las aldeas de Chisec ubicados ahora en el norte de Cobán y los del norte de Cobán en el sur del mismo municipio. A veces, la misma familia extendida está dispersa entre estas tres subregiones y entre varias aldeas. El viaje de una de estas áreas a otra puede llevar hasta un día entero, primero a pie y luego en transporte, a la vez escaso y caro.

las montañas y valles cercanos (*tzuultaq'a*). En los nuevos lugares, las montañas son distintas, sus *tzuultaq'a* desconocidas, los ancianos que sabían más están ausentes (resistieron menos la estancia en la montaña) y la comunidad procede de distintos lugares, lo que hace difícil lograr un consenso de prácticas religiosas (Wilson, 1990:34).^{114/}

Otro ejemplo viene de la comunidad de Chicoj, donde las prácticas de medicina natural que se acostumbraban antes de la violencia se estaban abandonando, en parte por el desconocimiento de las plantas del nuevo lugar (Duque, 1990).^{115/}

El “nuevo orden” en la organización social

Los cambios en el tipo y la estructura de autoridad a nivel local fueron descritos en entrevistas como se resume a continuación. Mientras “antes” el liderazgo, formal y real, en las comunidades era ejercido por hombres seleccionados por la comunidad en base a su trayectoria y al respeto que se les tenía, el nuevo sistema implica muchas veces autoridades seleccionadas y respaldadas desde afuera, por el Ejército. Mientras que “antes” las decisiones eran tomadas por consenso entre las autoridades, ahora se sigue una lógica vertical cuyo punto más alto reside también en el Ejército. Finalmente, el control social se lograba anteriormente por la vía de la sanción moral, mientras que ahora existe el castigo físico (entrevistas Cobán, 1990; Wilson, 1990:30-31).

^{114/} El estudio de Wilson (1990) del desplazamiento en la región q'eqchi', ilustra cómo los cambios profundos que estaban ya en marcha por la influencia de la Iglesia Católica en la década de los '70, llegan a consolidarse en el contexto de la guerra. Describe que la autoridad de la religión tradicional y las relaciones con los *tzuultaq'a* dominadas por los ancianos, estaban siendo debilitadas por el tipo de catolicismo introducido localmente a través de catequistas jóvenes. El liderazgo de los jóvenes en el desplazamiento junto con la mayor facilidad para llevar a cabo los ritos católicos (requerían sólo una Biblia y conocimiento de los cantos, mientras que para los tradicionales se necesitaban materiales –incienso, candelas etc.– y lugares sagrados no disponibles por la situación del desplazamiento) ayudó a fortalecer a los católicos (Wilson, 1990:4-5,19-21). El trabajo más conocido acerca de la cosmología q'eqchi' y su evolución hasta los años '70 es el de Cabarrús (1979).

La influencia de los evangélicos en Alta Verapaz no se deja sentir sino hasta los años '80 cuando además algunas iglesias gozan de una entrada facilitada por el Ejército (AVANCSO, 1990:36; Wilson, 1990:26).

^{115/} La medicina tradicional frecuentemente se aplica a los casos de “susto”, un mal ahora asociado a la experiencia de la violencia. La alternativa es ir al centro de salud urbano donde la medicina resulta sumamente cara para la población (Duque, 1990).

En las comunidades exploradas en este estudio, la estructura de la autoridad local era similar a la encontrada en otros departamentos. Se han organizado comités “pro-mejoramiento” o de “desarrollo” que actúan como enlace con las instituciones gubernamentales que proveen ayuda. Existen alcaldes auxiliares seleccionados por la comunidad; un ejemplo de sus tareas es “*la limpieza y resolver pleitos personales*”. Están las patrullas, que “*velan por el orden*”, y los comisionados militares, cuya función es principalmente informar cada mes a la zona militar. Algunos de estos puestos son nuevos, producto de “la enseñanza” recibida en los campamentos de desplazados y en todo caso, su establecimiento en las comunidades asentadas fue dirigido por autoridades externas:

Antes no teníamos comisionado militar. Todo lo tenemos desde que estamos en Las Conchas. Cuando vinimos a vivir aquí [en la aldea], ya tenemos tres jefes de patrulla. Después de los jefes, se formó el comité de desarrollo, al venir aquí, como nos dijo el Ejército. Después de un año, cuando se cambiaron los jefes, llegaron a la zona [militar] y allí dijeron que hay que formar el alcalde auxiliar. Entonces dos se fueron a presentar. Así fue el alcalde. En la municipalidad les dijeron que también tenemos que tener dos comisionados militares. Ya tenemos dos años de estar aquí.^{116/}

Aunque se pueden destacar los cambios en la organización local en relación con la de antes, comparadas con las de otras áreas, estas comunidades han mantenido cierto margen de autonomía en la práctica: en 1988, una comunidad (con el desacuerdo de cuatro o cinco familias) pudo retirar de servicio a sus dos comisionados militares. El hecho que inició ese proceso fue el reclutamiento militar por los comisionados de dos jóvenes promotores de educación. La población se oponía al reclutamiento forzoso y planteó su desacuerdo a la zona militar. Aprovechando el momento, la comunidad también pidió que se cambiara a los dos comisionados; al momento del trabajo de campo no habían sido nombrados los sustitutos, lo que era motivo de regocijo pues, “*cortamos la pita con la zona (militar)*”.^{117/}

^{116/} Entrevista en aldea de retornados de Cobán, octubre de 1989.

^{117/} En las comunidades visitadas, el cumplimiento con las patrullas consistía en designar a uno o dos personas para hacer guardia durante el día. Fue común escuchar que la decisión de cumplir era vista como la alternativa más fácil para, por un lado, no atraer la atención de las autoridades y, por otro, dedicar el menor esfuerzo posible a la tarea. Se cumple con la orden de hacerla: “*pero la gente no la tiene en el corazón*” (notas de campo, agosto de 1989).

En las comunidades conocidas, los catequistas también tienen liderazgo en la comunidad. Dado el amplio alcance de la Iglesia Católica, ellos y otros laicos van confiando en la capacitación que han recibido y buscan aplicarla para resolver las dificultades que enfrentan sus comunidades. El orgullo de un catequista por su capacidad para actuar en el caso de los comisionados militares antes citado era obvio:

Nos enseñaron que tenemos derecho de decir lo que querramos, tenemos derechos humanos... yo conozco la ley, ellos no saben. Ya sé todo eso, ya tengo elementos, tengo vitaminas. Piensan ellos que somos gente sin pensar, pero yo ya tengo experiencia en cómo enfrentar los problemas. No me dan pena estos problemas.

En este caso, la capacitación y el respaldo de la Iglesia, combinados con la experiencia de sobrevivencia en la montaña, daban seguridad a la comunidad para actuar en la solución de sus problemas.

En los lugares visitados, las autoridades/figuras de afuera de la comunidad que mayor influencia tienen pertenecen a la Iglesia Católica y a la zona militar. El gobierno civil tiene poca relación con la vida diaria.

Parecería que en las comunidades donde residen retornados, tanto ellos como la Iglesia, tienen más espacio político que en otros lugares para tomar decisiones sobre asuntos locales en base a su propio criterio. Esto resulta así por tratarse de un área de bajo conflicto, que por lo tanto, es menos estratégica para el Estado.

La situación socioeconómica y presencia institucional

Todos los retornados son agricultores. Entonces, su estabilidad y recuperación económica dependen de su acceso a la tierra. Pero aun cuando toda la tierra sea productiva, obtener un nivel económico adecuado depende de los servicios y programas disponibles, especialmente de las redes de abastecimiento y comercialización, del acceso a crédito y de la asistencia técnica. En Alta Verapaz, los esfuerzos en estas áreas por parte del gobierno son muy limitados. La Iglesia ha creado algunos programas mínimos, pero reconoce que no puede (ni le corresponde) resolver la problemática global.

La diferencia con los otros lugares bajo estudio es que el mínimo exigido es mucho menor por la no presencia directa del Ejército y el acuerdo dentro de las comunidades, que les permite manejar su cumplimiento como mejor les parezca.

Aunque los retornados ya no dependen de la ayuda de emergencia, sus necesidades de largo plazo están lejos de satisfacerse. Mientras tanto, sobreviven. Levantan sus cosechas de maíz y frijol y venden productos como cardamomo, café, marranos y, en algunos lugares, arroz. Generalmente suplementan su ingreso con algún trabajo agrícola en las fincas cercanas o con vecinos de mejores posibilidades. En las comunidades en el norte de Cobán donde se asentaron numerosos retornados, se levantan dos cosechas de maíz por año, pero ninguna produce las cantidades esperadas.^{118/}

Hay lugares donde se ha sembrado cardamomo, pero los bajos precios de los últimos años y el depender de los dueños de beneficios y de transportistas, hacen de este cultivo uno de poco rendimiento económico. Un punto de comparación con la situación de “antes” son los animales de crianza que fueron relativamente abundantes y que ahora son escasos. Tener animales nuevamente significaría haber logrado un cierto grado de acumulación. Existe un problema básico de insalubridad de los pocos animales que hay, incluyendo epidemias crónicas de cólera porcina y de varias enfermedades entre las aves de corral.

En las fincas del área, se estaba pagando en 1990 un máximo de Q.4 diarios. Aunque los hombres son mal pagados como “voluntarios”, les agrada ser “libres” de decidir a donde van, en contraste con su experiencia semi-feudal anterior como mozos-colonos (notas de campo, y Wilson, 1990:29).

En las comunidades cercanas a Cobán, las mujeres (jóvenes y señoras viudas) frecuentemente buscan trabajo de “escoger” cardamomo en los beneficios de la Cabecera Departamental.^{119/}

Las necesidades expresadas por las comunidades incluyen escuelas, servicios de salud, fuentes de crédito y asesoría técnica. Aparte de los programas de la Iglesia Católica y algunas ONGs que han participado en proyectos puntuales, estas necesidades básicas no están siendo atendidas en las áreas de desplazados retornados.^{120/}

^{118/} Es de recordar que estas tierras eran baldías precisamente por las desventajas que tienen: terrenos quebrados y rocosos, según sus ocupantes.

^{119/} Esta actividad, al igual que el corte mismo de cardamomo, es realizada típicamente por mujeres y sus hijos; y no es bien remunerada. “Escoger” es clasificar los granos secos por color y clase adentro de las bodegas, en condiciones precarias de trabajo.

^{120/} Entre las ONGs detectadas, cabe mencionar que la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) ha dado capacitación a promotores de salud formados por la Iglesia; el Instituto Guatemalteco de Escuelas Radiofónicas (IGER)

La presencia estatal es poco evidente. Mientras todas las instituciones gubernamentales reconocen que la Iglesia y, en un momento, el gobernador departamental, jugaron un papel importante en asistir a los desplazados, se acusan mutuamente de no estar cumpliendo como debería ser sus responsabilidades en las comunidades rurales del Departamento. Se observa competencia alrededor de los recursos del gobierno central y enfrentamientos políticos entre las instituciones que se convierten en obstáculos a la hora de responder a las peticiones. Las comunidades, entonces, quedan frustradas a la respuesta negativa o la indiferencia frente ante sus solicitudes:

...Nuestra comunidad está integrada por familias que fueron reubicadas en el año 1984, como consecuencia de desplazamiento masivo debido a la violencia que vivimos. Es una comunidad muy aislada –lleva hasta dos días para llegar a la Cabecera Departamental– y por eso ninguna institución nos visita para conocer la situación de pobreza en que vivimos. Quiero informarles que desde que nos reubicamos, no hemos contado nunca con ayuda alguna por parte del gobierno.^{121/}

3. En resumen: los retornados en Alta Verapaz

El retorno y la recepción de los desplazados en Alta Verapaz, entonces, tuvieron características diferentes a las de otras regiones estudiadas (especialmente el área ixil), entre otras razones, porque hubo dos experiencias, una con el Ejército y otra con la Iglesia. Las diferencias podrían resumirse de la siguiente manera:

- * Es el único caso donde el proceso de retorno concluyó desde principios de 1988; a partir de esta fecha prácticamente ya no quedaban desplazados en el lugar de refugio.
- * De los dos casos estudiados, entre los desplazados internos que retornaron después de 1986, los de Alta Verapaz constituyen el caso más “puro” del retorno voluntario por haber escogido el cuándo y cómo de su retorno (AVANCSO, 1990:52).

promueve programas bilingües (q'eqchi'-español) por radio, para que los adultos tengan educación primaria y también capacita a promotores de educación; y el Instituto de Cooperación Social estaba planeando empezar en el área de salud en 1990.

^{121/} Solicitud de Comité Pro-Mejoramiento de Peña Blanca a la municipalidad de Cobán, 28 de marzo de 1990.

- * Alta Verapaz ha sido una región de menos conflicto bélico desde 1986, por lo que ha estado relativamente menos militarizada que las otras regiones estudiadas.
- * Relacionado con lo anterior, si bien hay ajustes demográficos en cada comunidad que han complicado la reintegración, pues las familias evalúan constantemente si buscar o no otros terrenos, en general se trata de una decisión calculada en base a posibilidades económicas o lazos familiares, lo que contrasta con las condiciones de conflicto que, como en el caso de Ixcán, crean una inestabilidad permanente que siempre está afuera del control de los habitantes.
- * La Iglesia Católica ha conservado un espacio de acción más amplio y constante. La Iglesia nunca se vio obligada a dejar la región, como lo fue en Quiché (AVANCSO, 1990:29), y los desplazados, que conocían a los agentes de pastoral de la Iglesia desde antes de “la violencia”, tenían más confianza en esta institución al bajar de la montaña.
- * Siendo todos los desplazados retornados q'eqchi', algunas características de dicho grupo tienden a posibilitar una mayor unidad o cohesión.

Estos puntos podrían llevar a la siguiente conclusión: si los desplazados de Alta Verapaz tienen más tiempo de haber vuelto (tres años o más), y si se encuentran en una zona donde la guerra está ausente, la militarización es menor, hay más espacio para instancias gubernamentales y no gubernamentales, deberían estar transitando más claramente hacia la “reintegración” que los de las otras regiones estudiadas. Cabe preguntarse entonces, ¿Hasta qué punto han dejado de ser “desplazados”?

Durante el trabajo de campo, sin embargo, fue evidente que los desplazados retornados no dejan de sentirse muy diferentes –comparado con su situación de “antes” y comparado con sus vecinos que no se desplazaron.

Se sugiere que hay tres factores básicos que influyen en la persistencia de esta percepción. En primer lugar, las autoridades e instituciones de afuera les perciben como diferentes. Aunque la Iglesia mantiene la política de no dar un tratamiento diferenciado a esta población, y el Ejército dejó de tener el interés que tuvo al principio en ellos, de hecho, por parte de éstas y otras entidades, el tratamiento ha sido y sigue siendo diferenciado.

En segundo lugar, relacionado con, o tal vez causado por lo anterior, otros campesinos de Alta Verapaz tienen prejuicio contra los que estuvieron desplazados:

Los otros nos tienen miedo y dicen: 'a saber quiénes son... estuvieron en el monte, saben mucho.' Nos hacen preguntas y nos duele que nos preguntan porque nosotros sólo vamos a traer nuestros alimentos, a trabajar, pero nos piden nuestro papel...^{122/}

Por último, hay que mencionar la percepción de los mismos desplazados retornados según la cual 'no hay fecha de cierre' para dejar de ser un desplazado. Esto es porque se sigue en una situación ardua, es decir, sin seguridad sobre las tierras o sin buenas tierras, y sin servicios básicos como acceso a escuelas, carreteras y agua potable.

Si en Alta Verapaz, los retornados gozan de ciertas ventajas en comparación con otras áreas –incluso, sus condiciones socioeconómicas podrían superar las de “antes” en algunos aspectos– no se les ha presentado hasta ahora la clave para sentirse completamente bien, con perspectivas seguras para ellos y sus hijos.

^{122/} Notas de campo, conversaciones con desplazados reasentados a través de la Iglesia, octubre de 1989.

Consideraciones finales

A. En relación con el concepto de reintegración

1. Este estudio ha venido a confirmar lo que ya se vislumbraba desde el estudio anterior sobre *Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala*, publicado como Cuaderno de Investigación No. 6 de AVANCSO, en el sentido que el proceso de retorno que inician los desplazados y refugiados no termina necesariamente en una reintegración. Más aún, los casos estudiados han mostrado que, dadas las condiciones a las que se retorna, podría decirse que estas poblaciones se mantienen en una situación de desplazamiento.
2. Ahora bien, los casos también muestran historia de marginalización, no integración o, si se quiere, de desplazamiento estructural en todas las zonas estudiadas. Esto obliga a ligar el desplazamiento persistente de los retornados y repatriados con las características estructurales de la conformación de la sociedad guatemalteca.
3. Lo anterior a su vez determina que se ligue causalmente la reintegración de los que retornan con un proceso nacional que va más allá de los programas o proyectos de apoyo a los grupos que vuelven y a las regiones que los reciben. Se trataría de un proceso de integración de la Nación tal, que asegurara la participación de los diferentes sectores en sus propios términos.
4. A la luz de esto, el concepto de reintegración como ha sido utilizado en el presente trabajo, no es, obviamente, aplicable con exclusividad a las poblaciones de retornados y repatriados, si bien resulta clave para tasar lo que el conflicto político-militar muestra de los procesos más profundos que se dan al interior de la sociedad.
5. Como la historia de la investigación muestra, se partió fundamentalmente de un interés en conocer con detalle las etapas y problemas de la reintegración, y se concluyó, con una especie de sorpresa esperada, en que si algo era común a todos los casos y determinaba cualquier

proceso por el que transitaran los que volvían, eran factores como los siguientes:

- Limitaciones graves en el acceso a la tierra, ya sea en términos de contar con poca tierra y de mala calidad, de no contar con tierra en absoluto o de no poder cultivar por razones del conflicto armado la parcela teóricamente disponible. Esto, obviamente, relacionado con el hecho de la inexistencia casi total de otras alternativas productivas.
- Una organización social severamente debilitada, sobre todo fracturada, la que se manifiesta en la alta frecuencia de disputas sobre ejes ideológicos y en las que el tema de la culpabilización de lo sucedido es recurrente.
- Una militarización que atraviesa casi todos los órdenes de la vida, en la medida en que la sobrevivencia del individuo, de la familia y del grupo está determinada por la capacidad para comprender la lógica militar y de actuar de acuerdo a esa comprensión.

Nuevamente, se presenta el hecho que, en muchos sentidos, lo que se describe como problemática de la reintegración coincide con la realidad del campesinado guatemalteco en general.

B. En relación con la problemática específica en las zonas de retorno

1. Lo anterior no niega, sin embargo, los cambios profundos que el conflicto armado y luego la presencia del Estado, ampliada más allá del Ejército, provocaron en estas regiones largamente marginadas en el escenario social, político y económico del país. Los cambios más evidentes se presentan en lo geográfico, en lo físico, pero de igual o mayor magnitud son los que se dieron en lo social y político; todos éstos tendientes a cortar procesos con potencial transformador del estado de cosas. Quizás con el correr del tiempo lleguen a manifestarse otros cambios, no tan fácilmente discernibles, en los ámbitos de la identidad étnica, de la psicología social, de la estructura de valores, etc.
2. Tres condiciones pueden identificarse en la revisión de los casos como determinantes de un proceso afín a una posible reintegración: seguridad psicológica, cohesión de la comunidad y apoyos adecuados en lo material y organizacional.

- Se entiende por seguridad psicológica aquella atmósfera que permite actuar libremente sin la inminente amenaza de represalia, ya sea ésta real o percibida. Más ampliamente, se estaría hablando de la certeza de que no se repetirá la guerra y que no habrá un nuevo desplazamiento.
 - En cuanto a la cohesión de la comunidad, se trata de la existencia de una comunidad de objetivos y de una visión compartida en relación con la forma de resolver conflictos. El recurrente tema de la reunificación familiar está ligado a ésta.
 - El apoyo adecuado se refiere a aquél que evita que las iniciativas locales terminen en frustración. El logro de objetivos inmediatos como asegurar las condiciones básicas para sobrevivir, pero también la posible construcción de una visión de futuro de más largo aliento, estaría siendo posibilitado.
3. Igualmente, la revisión de los casos permite identificar factores que tienden a coadyuvar a que prevalezcan las condiciones descritas arriba y otros que más bien las impiden. Entre los primeros, hay dos que cobran especial relevancia: la variedad de estrategias de sobrevivencia o de variaciones a las estrategias tradicionales, y el intento de readecuar estructuras sociales internas de las comunidades.
- En lo que se refiere a estrategias de sobrevivencia, una y otra vez se observa que en las comunidades se da una búsqueda activa de soluciones. Entre éstas se ve, por ejemplo, desde lo más obvio como puede ser la réplica de arreglos colectivos de producción y distribución que se utilizaron durante el refugio, hasta la diversificación de fincas destino en las épocas de corte de los productos de agroexportación.
 - En lo concerniente a la readecuación de estructuras sociales, posiblemente lo que más capta la atención es la necesaria adaptación a la estructura militar; pero yendo más al fondo, se identifica toda una serie de modalidades que buscan desde la posibilidad de convivir de la forma menos difícil con la obligación de la patrulla, hasta la que llega a conformar un bloque de Principales, incluso redefiniendo a éstos, para disputar el poder dominante.
4. Por su parte, los factores que tienden a impedir el florecimiento de las condiciones afines a un proceso de reintegración, se relacionan, fundamentalmente con:

- El trabajo del Ejército en dos sentidos contradictorios (hecho más notorio en unas áreas que otras): uno, de corte humanista, que alienta el retorno y recibe a los desplazados o repatriados gustosamente, que da muestras de apoyar los esfuerzos de reconstrucción y que, en general, proyecta el mensaje que el pasado ha sido olvidado; y, otro, de corte bélico, que insiste en reuniones periódicas de orientación de las patrullas, procede a acciones de represión contra la población civil, ejerce control constante y proyecta el mensaje opuesto de que lo pasado podría repetirse. Este segundo rasgo del trabajo del Ejército toca de cerca y en sentido negativo el factor de seguridad psicológica, identificado arriba como uno de suma importancia en la generación de procesos de reintegración.
- La dificultad que las ONGs y las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, han tenido para jugar el importante papel que podrían desempeñar puede visualizarse como otro factor adverso. El potencial de las ONGs en el campo de los recursos humanos apenas se ha utilizado en las áreas de reasentamiento de los desplazados y repatriados debido al clima de inseguridad imperante.
- La crisis económica, en la que fácilmente se diluyen los esfuerzos productivos incipientes de algunos grupos y que hace cada día más difícil la sobrevivencia y menos esperanzador el futuro.

C. En relación con principios que deben regir el trabajo con poblaciones que retornan

1. Como ha quedado dicho, la experiencia de campo mostró al equipo de investigación que la historia reciente de estas regiones del país es todavía presente para sus habitantes. Todo trabajo que se lleve a cabo debe, entonces, asumir este hecho.
2. Relacionado con lo anterior, es fundamental reconocer que algunas zonas de retorno continúan siendo zonas de guerra, y manejar este marco en la preparación de planes y proyectos.
3. Un elemento importante a tomar en cuenta es que a la par de un potencial aglutinador, hay en estas zonas una fuerte tendencia al surgimiento de conflictos relacionados con la ideologización en la interpretación de esa historia reciente, que tiende a colocar en posiciones antagónicas a los que retornan y a los que no salieron o

regresaron tempranamente. El trabajo preparatorio con la población receptora y con la población que se plantea el retorno, es vital.

4. En la búsqueda de construir un ambiente propicio para el desarrollo de una visión de largo plazo son fundamentales dos asuntos: el trabajo –en buena medida político– tendiente a crear las condiciones necesarias para procurar seguridad psicológica, y el abordaje abierto al apoyo de las iniciativas locales y a la búsqueda de modelos o experiencias de la etapa del refugio replicables, adaptables o factibles de continuar desarrollándose.
5. Es recomendable tener en cuenta que las necesidades, por un lado, y las expectativas, por otro, de los que retornan son distintas en diferentes momentos. Una preparación oportuna de las instituciones para los distintos momentos es imprescindible. Los momentos que han resultado clave para los casos estudiados pueden resumirse de la siguiente manera:

El retorno, que de hecho se inicia cuando el refugiado o el desplazado interno deja el lugar donde ha buscado resguardo, puede estar rodeado de distintas circunstancias que se relacionan con la existencia o no de un proceso de decisión, y con las características de éste. Cabe señalar las siguientes circunstancias: (a) que la decisión se haya tomado sin presión alguna, (b) que se opte por regresar debido a la imposibilidad de asegurar la subsistencia o sobrevivencia, y (c) que el retorno se haya producido mediante la captura, como ha sido frecuente en el caso de los desplazados internos en la montaña.

Instalación provisional, en la que ha sido usual que intervengan las instituciones que, como la CEAR, tienen bajo su responsabilidad conducir el retorno. Quienes retornan son por lo general alojados en instalaciones para una estadía provisional y deben recibir con frecuencia asistencia médica y alimentación urgentes. Sobre todo en el caso de los desplazados internos retornados en la zona ixil, ésta es una etapa en la que se da un fuerte contenido ideológico por parte del Ejército.

Reubicación y reconstrucción, que abarca el tiempo que les lleva a los retornados asentarse en la aldea donde residirán permanentemente e incorporarse a las actividades del entorno inmediato. Es un período cuya dinámica se relaciona principalmente con el iniciar las actividades de una comunidad organizada prácticamente en un

contexto nuevo. El retornado ha de identificar el lugar donde levantará su vivienda (con frecuencia un lugar designado por las autoridades), agenciarse los materiales para construirla, participar en la reconstrucción o construcción de la infraestructura comunitaria e iniciar las actividades propiamente productivas.

En esta etapa, el retornado requiere de apoyo en aspectos fundamentales como materiales para el techo mínimo, aperos agrícolas, granos básicos para subsistir en tanto obtiene la primera cosecha, artículos de primera necesidad, dinero en efectivo y otros. En alguna medida, las instituciones involucradas han dado este tipo de apoyo en el caso de los repatriados. Cuando los retornos se dan fuera de programa, la familia y/o la comunidad suele absorber la responsabilidad.

Reincorporación y recuperación, que se inicia una vez que el retornado ha construido una vivienda en una comunidad que cuenta con la infraestructura mínima. Se encamina entonces a incrementar sus actividades productivas, en la búsqueda de ir satisfaciendo las numerosas necesidades básicas que se presentan cuando se “empieza de nuevo”. A este punto comenzaban a llegar los retornados en algunas de las comunidades estudiadas.

Es característico aquí que el retornado tenga puestos sus ojos en el “bienestar perdido”, es decir, que sus esfuerzos vayan dirigidos a recuperar las condiciones en las que vivía previo al desplazamiento.

Finalmente, cabe visualizar una etapa de **reintegración plena y desarrollo comunal**, que sería la culminación del proceso de reintegración y que de acuerdo a lo propuesto en la parte inicial de este capítulo, sería una etapa de desarrollo cualitativo que involucraría un proceso de integración de la Nación, en el que, lógicamente, las poblaciones retornadas serían sólo uno de los sectores optando a participar en el desarrollo en sus propios términos. Se intenta, sin embargo, proponer elementos que podrían ayudar a identificar el umbral de este estadio.

Por una parte, es claro que las condiciones de vida deben ser superiores a las prevalecientes al momento del desplazamiento y que debe darse un “progreso” comunal que va más allá de los servicios básicos (agua, luz eléctrica, caminos). Por otra parte, la participación de la población en las decisiones comunales habrá de ser tangiblemente mayor que en el pasado reciente y debe haberse recuperado el

respeto a las garantías constitucionales, tales como libertad de movilización, de organización y de expresión. El umbral habrá sido traspuesto una vez que se haya erradicado el peligro de un nuevo desplazamiento.

sino que también amenaza los esfuerzos para alcanzar la estabilidad social, la reconciliación nacional y el desarrollo a largo plazo.^{1/}

Anexo 1

Los acuerdos internacionales y la realidad local

La crisis de los refugiados centroamericanos conmovió y preocupaba a la comunidad internacional desde principios de la década de los '80, aunque la misma inestabilidad de la región impedía que este interés se concretara en algo más que acciones de emergencia o medidas inconexas. No fue sino hasta después de agosto de 1987, con la firma del “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” (el Acuerdo de Esquipulas II), que empezaron a perfilarse políticas más amplias y concertadas. El Acuerdo de Esquipulas no llegó a alterar abruptamente el mapa regional de asentamiento de los refugiados, pero abrió perspectivas para la búsqueda de soluciones de más largo plazo.

Una característica de este plan de paz fue el reconocimiento del enorme costo social que supuso una década cargada de violencia y estancada económicamente. Los flujos de desplazamiento han sido una de las heridas más abiertas de la guerra, abarcando entre el 7% y el 10% de la población centroamericana, según algunas estimaciones (PNUD, 1989:11). No es casual, entonces, que el documento de Esquipulas identifique a estos sectores como un área de prioridad y en su punto ocho estipule que se les atienda “*con sentido de urgencia*”.

A partir de 1987, la suerte de los refugiados centroamericanos se convierte en un importante termómetro para medir los avances del proceso de paz. Así, la Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo de Centroamérica (conocida como la Comisión Sanford) recoge una opinión generalizada cuando en su informe de febrero de 1989, afirma que:

la situación sumamente difícil en que se encuentran las personas que han abandonado sus hogares y poblados no sólo pone en peligro su vida,

El PEC y la CIREFCA

Desde 1988, dos iniciativas internacionales han intentado brindar una atención más sistemática al tema de los refugiados y desplazados: el Plan Especial de Cooperación Económica (PEC), una propuesta de asistencia técnica, económica y financiera por un total de US\$ 4,370 millones avalada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 1988; y la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), realizada en Guatemala en mayo de 1989.

El PEC nació del mismo plan de paz en que los cinco mandatarios acordaron “*gestionar conjuntamente un apoyo económico extraordinario de la comunidad internacional*”. Su objetivo era impulsar la reactivación económica de Centroamérica, aunque sin perder de vista la exigencia de satisfacer una gama de demandas sociales impostergables, resaltando entre ellas la asistencia a refugiados, repatriados y desplazados.^{2/}

^{1/} Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo de Centroamérica (1989:27).

La Comisión Sanford fue creada bajo los auspicios del senador estadounidense Terry Sanford, un demócrata del estado de North Carolina. Fue integrada por 47 miembros provenientes de una gama de instituciones de la región e internacionales quienes se dedicaron a diseñar una especie de “Plan Marshall” para Centroamérica. La Comisión Sanford colocó a los refugiados y desplazados centroamericanos como el primer grupo dentro de la categoría de poblaciones indigentes “más vulnerables” que merecen ser la prioridad de un paquete de acción inmediata, a la vez que estimó que el costo de un programa trienal de reasentamiento ascendería a un mínimo de US\$ 2,550 millones. La Comisión concluyó que la reconstrucción general del istmo requeriría de unos US\$ 11,000 millones durante un período de cinco años.

^{2/} El PEC contiene cuatro rubros: 1) **emergencia** que incluye asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados, ayuda alimentaria y apoyo energético; 2) **acción inmediata** que busca resolver la crisis de divisas y comprende los subprogramas de deuda externa y apoyo al Mercado Común Centroamericano y al Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria; 3) **reactivación económica** que busca sentar las bases para la recuperación de la capacidad de crecimiento a través del financiamiento de los programas de rehabilitación y reconversión industrial, el desarrollo agropecuario, las concesiones comerciales, la reconstrucción de la infraestructura física y la inversión de largo plazo en el sector energético; 4) **desarrollo social** orientado a invertir en los sectores más marginados, en áreas de salud,

La ONU brindó su apoyo casi inmediato al PEC, pero el financiamiento del plan quedó en manos de los Estados donantes (principalmente países europeos, Canadá y Japón) y de organismos multilaterales. Es de notar que, tanto el PEC como CIREFCA, partían de un paradigma pos-bélico para Centroamérica, por lo que sufrieron serios tropiezos en la medida en que no avanzaron los objetivos políticos de Esquipulas.^{3/}

En 1989, no obstante, el gobierno demócrata cristiano de Italia acordó financiar, por un monto de US\$ 115 millones, el Programa de Desarrollo para Refugiados, Desplazados y Repatriados (PRODERE), que se enmarcó dentro del PEC y resultó ser su “plan piloto”. De carácter regional y bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), PRODERE tiene subprogramas en todos los países centroamericanos, en donde los proyectos se deben elaborar y ejecutar en estrecha colaboración con una contraparte gubernamental.

En Guatemala, a petición del gobierno, PRODERE empezó en 1990 a trabajar en el área ixil y en el Ixcán, dos regiones de la parte norte de Quiché receptoras de repatriados (Ixcán) y desplazados internos (área ixil). Su plan de trabajo comprendía invertir US\$ 11 millones en el Ixcán y US\$ 8 millones en el área ixil, además de financiar un programa menor, de US\$ 500,000, para refugiados centroamericanos en la ciudad capital. La CIREFCA, por su parte, fue auspiciada por el ACNUR en mayo de 1989. Reunió en Guatemala a representantes de 56 países, más varios organismos internacionales y algunas ONGs. Fue vista por el ACNUR como un evento que alentaría los esfuerzos que esa institución venía haciendo para buscar

educación, vivienda, programas productivos, seguridad alimentaria y fortalecimiento de las cooperativas. Véase *Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica*, Instrumento de la Resolución 42/204 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 de marzo de 1988.

^{3/} En esa dirección, el Secretario General de la ONU, en el discurso de inauguración de la Primera Reunión Internacional de Seguimiento de la CIREFCA, en junio de 1990 en la sede de la organización, reconoció que “los gobiernos centroamericanos tienen derecho de esperar asistencia internacional en proporción a los esfuerzos de paz”. *La Hora*, “Pérez de Cuéllar inaugura reunión sobre refugiados C.A.”, 28 de junio de 1990.

Otro factor preocupante para los países centroamericanos a partir de 1990 era la probabilidad de que los recursos financieros destinados a América Latina se desviarán a las economías nuevamente abiertas de Europa Oriental. También cabe señalar que el principal donante a la región, Estados Unidos, mantiene su preferencia por políticas bilaterales y no ha participado en el PEC.

“soluciones duraderas” a la problemática de los refugiados, a la vez que ofrecería a los gobiernos centroamericanos un foro para solicitar fuertes cantidades de asistencia a la comunidad internacional.^{4/}

El Plan de Acción Concertado aprobado por la Conferencia, comprendía una estrategia “consolidada” de tres años basada en los proyectos que cada gobierno había propuesto para atender a los refugiados, repatriados y desplazados internos (también se hace mención de los “desplazados externos” como otra categoría de población merecedora de apoyo).

Se acordaron, además, mecanismos formales de seguimiento. Cada gobierno signatario del Plan de Acción debía formar un “comité nacional de coordinación” para asegurar un seguimiento con las agencias ejecutoras nacionales o internacionales. Este comité, a su vez, podía convocar a un “grupo de apoyo” con la participación del ACNUR, PNUD y representantes de los países cooperantes, las agencias financieras o las ONG, para hacer consultas periódicas. También, un comité ejecutivo regional se reuniría una vez al año para supervisar la implementación del Plan de Acción.

Sobre el significado del evento, pueden hacerse varias observaciones:

- 1) Tanto CIREFCA como PRODERE se enmarcan dentro del proceso de paz, por lo que ponen énfasis en la repatriación como la “solución preferida” para los refugiados centroamericanos. A la vez, sin embargo, se reconoció la necesidad de buscar otras fórmulas que tomaran en cuenta que la huida de estas poblaciones en muchos casos ha tenido secuelas ya irreversibles. Los gobiernos de México y Costa Rica, por ejemplo, propusieron la implementación de “proyectos integrales” en los países de asilo diseñados para fomentar una mayor integración y autosuficiencia de los refugiados, reconociendo así que muchos no regresarán a sus lugares de origen.
- 2) Dentro de ese contexto de búsqueda de soluciones más globales, las dos iniciativas presentan el desarrollo como el eje de cualquier programa de asistencia. Este enfoque persigue vincular la problemática de los refugiados con la de los desplazados internos y con las necesidades de las comunidades de origen (o de reasentamiento).

^{4/} CIREFCA fue el primer evento en América Latina de proyección internacional relacionado con el tema desde el Coloquio sobre el Asilo y la Protección Internacional de Refugiados en América Central, México y Panamá, realizado en Cartagena, Colombia en 1984 (Declaración de Cartagena, 1984).

3) Por primera vez, entonces, a nivel de programas oficiales internacionales, los desplazados internos de la región se convirtieron en una población meta de atención especial, aunque no gozaron de un *status* definido ni de una protección garantizada (ni de muchas instancias que pudieran articular sus intereses).

Entre las agencias donantes existe consenso sobre que lo que se persigue es una reintegración (o integración) **permanente** de las poblaciones a través de su inserción en programas de desarrollo que se orienten a corregir el contexto socioeconómico para evitar que se produzca otro éxodo (PNUD:1989). Existen temas centrales, sin embargo, que todavía son motivo de debate, tales como ¿en qué consiste la reintegración?, ¿cómo lograr que una reintegración ocurra en un ambiente que conduzca al desarrollo a largo plazo?, y ¿qué características tendrá ese desarrollo?

A grandes rasgos, los enfoques sobre el tipo de atención son dos. Uno es brindar apoyo inmediato y directo a las poblaciones repatriadas y desplazadas-retornadas (asistencia humanitaria, pequeños proyectos comunitarios), intentando cubrir algunas de sus necesidades más apremiantes. Este enfoque se inclina por un trato preferencial temporal para estos grupos reubicados (aunque sin dejar a un lado a las comunidades de recepción) bajo el criterio de que una vez que hayan sido “rehabilitados” (generalmente cuando tengan condiciones mínimas de vivienda o cuando ya pueden cosechar) podrán integrarse a los programas “permanentes” de desarrollo de sus regiones. Se busca dar prioridad adicional a asuntos de protección jurídica y a los derechos humanos. Es el tipo de trabajo que el ACNUR suele preferir por su mandato internacional. También lo prefieren algunas ONGs que evitan trabajar en proyectos de gran escala con el gobierno, por miedo a la corrupción, al manejo político de los fondos, o simplemente porque no quieren que la ayuda (infraestructura, por ejemplo) se pierda como consecuencia del conflicto bélico.

La otra clase de programas, de la que el ejemplo es el PRODERE, tiene un enfoque “microrregional”, es decir, que no trata por separado a los desplazados/repatriados, sino que tiende a verlos como parte de la totalidad de la población “marginada” (o “población víctima de la guerra”) de una cierta región o “sub-región” geográfica. La intervención de estos programas buscaría generar una reactivación económica de la región escogida y su integración a la economía nacional a través de obras de infraestructura (dándole prioridad a la construcción de carreteras), capacitación laboral, asistencia técnica y proyectos de desarrollo integral

(vivienda, educación, salud, agricultura, etc.), que dependen de una coordinación de las instituciones del Estado a todo nivel.

La participación de las ONGs

PRODERE y CIREFCA son resultados de acuerdos entre la comunidad internacional y los gobiernos de la región; como tales reflejan las prioridades que cada Estado ha delineado para el tratamiento de los sectores damnificados por la violencia. Pero a la vez, una importante consecuencia de los procesos de negociación, refiriéndose principalmente a CIREFCA, ha sido la creación de un mayor margen de debate en el que se han involucrado algunas ONGs y –aunque de forma más limitada– las organizaciones propias de las poblaciones afectadas.

Si bien es cierto que la mayoría de estos organismos entraron a CIREFCA por la puerta trasera, lograron compartir criterios sobre el tema y establecerse como participantes legítimos en la búsqueda de soluciones.^{5/} Para algunas ONGs, CIREFCA fue el primer encuentro de tan alto nivel con entidades estatales, lo que representó un cambio significativo para quienes hasta entonces se sentían obligados a trabajar discretamente a favor de las poblaciones más afectadas por la guerra en Centroamérica. Así, un análisis posterior nota que la decisión de participar en CIREFCA “no fue tomada a la ligera... [pero] hizo posible que las ONG comenzaran a buscar un papel más activo en relación a ciertos aspectos del proceso de paz”. (“Informe de CIREFCA...”, 1989:14). Esa participación comenzó a perfilarse en México D.F. en marzo de 1989, con la reunión regional de las organizaciones no gubernamentales previa a CIREFCA, a la que asistieron representantes de ONGs centroamericanas y mexicanas, y observadores de otros países. El propósito de dicha reunión fue abogar por una presencia más directa en el proceso de CIREFCA, así como a considerar de qué manera las entidades de desarrollo podrían servir como interlocutoras de las organizaciones surgidas de la misma población desplazada, refugiada y retornada, que habían manifestado su descontento por sentirse marginadas de las negociaciones oficiales.

^{5/} La participación de las ONGs en CIREFCA fue lograda gracias al respaldo del Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA) y de algunos gobiernos europeos. No obstante, las delegaciones oficiales de Guatemala y Belice no reconocieron a los representantes de las entidades no gubernamentales de sus países (“Documento Resolutivo...”, 1989:10).

El resultado de la reunión de México fue la creación de una “Comisión Permanente” para tratar de desarrollar una postura unitaria ante CIREFCA de una Asociación Regional de ONGs.^{6/} La apertura hacia las ONG fue fortalecida por la preferencia de algunos países donantes de canalizar recursos directamente a instituciones no gubernamentales.

El caso de Guatemala

CIREFCA fue considerada un rotundo éxito diplomático, pero no produjo el financiamiento que se esperaba. Durante la primera reunión de seguimiento, convocada en Nueva York en junio de 1990, de los 59 proyectos prioritarios presentados por los gobiernos, sólo 33 fueron financiados total o parcialmente, lo que representaba una tercera parte de los fondos considerados necesarios para implementar el Plan de Acción (Unidad Conjunta ACNUR/PNUD, 1991:2).^{7/}

Guatemala fue el país que menos financiamiento recibió. El gobierno había presentado un proyecto de unos US\$ 10 millones en la reunión de Nueva York, para cubrir la repatriación y reasentamiento de 42,000 refugiados provenientes de México. Sin embargo, ante las perspectivas inciertas de que el retorno masivo se diera en ese momento, Guatemala recibió sólo US\$ 407,000 (Unidad Conjunta ACNUR/PNUD, 1991:11).^{8/} El gobierno no solicitó apoyo para la atención de los desplazados internos argumentando que PRODERE ya cubría el área ixil.

^{6/} A partir de marzo de 1990, esta instancia fue conocida como la Asociación Regional de ONGs Apoyando Refugiados, Desplazados y Retornados, con sede en El Salvador; después pasó a denominarse Asociación Regional de Migraciones Forzadas (ARMIF).

^{7/} De acuerdo al ACNUR, para marzo de 1991, se habían conseguido US\$ 55.4 millones, de un total de US\$ 170.1 millones. (Unidad Conjunta ACNUR/PNUD, 1991:3).

^{8/} Durante la primera reunión de CIREFCA en 1989, la CEAR había presentado un perfil de proyectos con un costo mucho más alto de US\$38.25 millones. Un año después, la CEAR indicó que sus proyectos propuestos “no fueron objeto de donación alguna”, aunque sí recibió compromisos de financiamiento por parte de Japón (US\$ 40,000), Alemania (US\$ 1.25 millones) y España (US\$ 1 millón) para otros proyectos (República de Guatemala, 1990). Para la reunión de CIREFCA en 1990, la CEAR optó por presentar un solo proyecto con un presupuesto modesto mientras que buscó acercarse a ONGs, embajadas y, por primera vez, los mismos refugiados; una primera reunión oficial entre CEAR y las Comisiones Permanentes de Refugiados tuvo lugar a pocas semanas antes de la CIREFCA de 1990.

En el transcurso del proceso de CIREFCA, Guatemala se convirtió en el único país centroamericano que todavía tenía una gran cantidad de ciudadanos refugiados en campamentos en el exterior, pues se dieron las repatriaciones masivas de los refugiados nicaragüenses y salvadoreños. En Honduras, el país de asilo más importante en la región, a partir de marzo de 1991, quedaban menos de 2,000 refugiados reconocidos (Unidad Conjunta ACNUR/PNUD, 1991:24). Los programas de ACNUR y otras instituciones más bien empezaron a enfocarse en la problemática de los miles de retornados en El Salvador y, especialmente, Nicaragua (ver cuadros 8 y 9).^{9/}

Ahora bien, dado que transcurrieron varios años entre la firma de Esquipulas II y el surgimiento de programas para atender a las poblaciones desarraigadas por la guerra, cabe la pregunta: ¿cómo se concretan estas iniciativas internacionales y regionales a nivel nacional y local en el caso de Guatemala?

Al compararla con la experiencia de otros países centroamericanos, el impacto de las ONGs en las condiciones de vida de la población refugiada y desplazada de Guatemala ha sido muy débil. En El Salvador, por ejemplo, el movimiento pro-retorno de los desplazados organizados (y luego de los refugiados) ha tenido un fuerte apoyo y acompañamiento por parte de grupos eclesíasticos y sectores no gubernamentales desde 1985, cuando se organizó la primera “repoblación” bajo los auspicios de la Arquidiócesis de San Salvador. De esa manera, entre 1986 y 1988, 65 comunidades fueron repobladas.^{10/}

De las cuatro áreas bajo estudio, sólo en el área ixil se da una presencia notable de ONGs, algunas de las cuales llevan varios años en el lugar.

^{9/} A pesar de que hasta 1990 el número de refugiados que se habían repatriado fue relativamente bajo, la CEAR quiso caracterizar a Guatemala en la reunión de CIREFCA como un país receptor y no expulsor de refugiados. Así, cuantificó la población centroamericana refugiada en Guatemala en más de 220,000 personas, mientras que subestimó a los refugiados en “35,000 guatemaltecos en el extranjero”. La entonces presidenta de la CEAR declaró antes de la realización de CIREFCA: “Guatemala se ha convertido de país emisor de refugiados, a un país receptor de refugiados centroamericanos y de guatemaltecos repatriados, como una consecuencia del clima de democracia existente en los últimos dos años”. *Prensa Libre*, “Hay 120,000 nicaragüenses”, Guatemala, 29 de enero de 1989, p. 2.

^{10/} Para antecedentes e historia de ese proceso, véase Edwards y Siebentritt (1991) e *Inforpress Centroamericana* (No. 692, 1986 y No. 968, 1992).

En Huehuetenango e Ixcán, las áreas meta para el financiamiento que quería atraer el gobierno, casi las únicas instancias presentes son internacionales. Con la excepción de unas pocas ONGs nacionales, son las internacionales entonces las que están ejecutando programas con fondos ofrecidos en el marco del proceso de CIREFCA (ver cuadro 10).^{11/}

Cuadro 8
Refugiados y desplazados en Centro América a marzo 1990

País de refugio	Nicaragüenses	Salvadoreños	Guatemaltecos	Indocumentados C.A. estimados
Belice	ND	ND	ND	25,000 a 30,000
Costa Rica	46,000	ND	ND	150,000 a 175,000
El Salvador	600	---	ND	3,000 a 5,000
Guatemala	3,200	2,800	---	200,000
Honduras	23,000	2,800	450	200,000
México	ND	ND	40,500	300,000
Nicaragua	---	7,000	500	ND
Repatriados*	30,000 a 35,000	30,000	5,600	---
Desplazados internos **	350,000	134,000 a 400,000	100,000 a 250,000	---

ND = No disponible.

* Bajo programas oficiales.

** Números más altos son estimaciones extraoficiales.

Elaboración: AVANCSO en base a cifras de ACNUR y los gobiernos centroamericanos presentadas en la reunión de CIREFCA, junio de 1990 en Nueva York.

^{11/} Las entidades internacionales mencionadas han estado operando en las regiones de recepción de desplazados retornados, aunque no necesariamente trabajando exclusivamente con ellos. Empezaron en la época 1985-1988 a trabajar en estas regiones y muchas veces ha sido la única presencia no-gubernamental aparte del trabajo pastoral de las iglesias. Explican su presencia en función de sus fines humanitarios y expresan ser ajenas al conflicto político. No se identifican con ningún proyecto del Estado, pero su naturaleza requiere que tengan convenios de trabajo directamente con alguna institución gubernamental. Su visión de trabajo es de mediano plazo –tres a cinco años– y por eso buscan coordinar con ONGs nacionales para asegurar que su esfuerzo tenga seguimiento.

Cuadro 9
Refugiados y desplazados en Centro América a marzo 1992

País de Refugio	Nicaragüenses	Salvadoreños	Guatemaltecos	Indocumentados C.A. estimados
Belice	500	8,400	3,000	25,000 a 30,000
Costa Rica	25,000	ND	ND	80,000
El Salvador	250	---	ND	ND
Guatemala	4,900	3,400	---	200,000
Honduras	0	0	0	50,000*
México	ND	4,000	43,500	300,000**
Nicaragua	---	3,000	ND	ND
Repatriados***	62,000	26,650	7,000	---
Desplazados internos	350,000	150,000 a 450,000	150,000 a 200,000	---

ND = No disponibles.

* Unidad Conjunta ACNUR/PNUD (1991:13).

** Cifras presentadas en CIREFCA 1990.

*** Bajo programas oficiales; no se explica por qué el gobierno de El Salvador reportó menos repatriados que en 1990.

Elaboración: AVANCSO en base a cifras de los gobiernos centroamericanos presentadas en la reunión de CIREFCA, marzo de 1992 en San Salvador.

Cuadro 10
1991: Proyectos a ejecutarse con fondos internacionales en las áreas de estudio*

Depto.	Área	Ejecutora	Tipo	Proyecto	Monto	Años	Fuentes**	
C	Huehue.	Barillas	Agua del Pueblo	ONG/N	Agua/saneamiento	53,790	1.0	SUECIA/PNUD
C	Huehue.	Barillas	Veterinarios S/F	ONG/I	Pecuario	464,306	3.0	CEE
C	Huehue.	Nentón	Medicos S/F Francia	ONG/I	Salud	238,266	5.0	SUECIA
C	Huehue.	Nentón	Veterinarios S/F	ONG/I	Pecuario	450,000	3.0	CEE
C	Huehue.	San Mateo Ixtatán	Medicos S/F Francia	ONG/I	Salud	787,724	2.0	PAÍSES BAJOS
C	Quiché	Ixil	Veterinarios S/F	ONG/I	Pecuario	650,000	3.0	DIAKONIA (SUECIA)
C	Quiché	Ixcán	Veterinarios S/F	ONG/I	Pecuario	100,000	1.0	DIAKONIA CEE/FRANCIA
C	Quiché	Ixcán	Médicos del Mundo	ONG/I	Salud	550,088	3.0	CRS/PADEL (CANADÁ)
M	A Vera.	Raxruha	Veterinarios S/F	ONG/I	Pecuario	100,000	1.0	CEE
M	A. Vera.	Yalpech	Nuevo Amanecer Iglesia/PRODERE	ONG/N-MULT	Desarrollo	50,000	0.5	PNUD/PRODERE

	Depto.	Área	Ejecutora	Tipo	Proyecto	Monto	Años	Fuentes**
M	Huehue.	Chalhuitz. Ts	Comunidad	LOCAL	Agrícola	33,343	1.0	PADEL (CANADA)
M	Huehue.	Nenton	Cinco Comunidades	LOCAL	Desarrollo	86,956	1.0	PADEL (CANADA)
M	Huehue.	Huehue	Acnur/Procuraduría	MULT-GOB	Asistencia legal	50,000	1.0	PNUD/PRODERE
M	Quiché	Lorena, Ixcán	I Comunidad	LOCAL	Agrícola	60,921	1.0	PADEL/CANADA
M	Quiché	Ixcán	Agua del Pueblo/ Médicos del Pueblo	ONG/N ONG/I	Saneamiento	52,172	1.0	PADEL/CANADA
M	Quiché	Ixcán	Asoc. Promotores	LOCAL	Salud	34,782	1.0	PADEL/CANADA
M	Quiché	Ixcán	Asoc. Promotores de Playa Grande	LOCAL	Salud	23,167	1.0	PADEL (CANADA)
M	Quiché	Ixcán	PRODERE. INTA	MULT-GOB	Agrícola/arroz	261,160	5.0	PNUD/PRODERE
M	Quiché	Ixcán	PRODERE	MULT	Agrícola/especias	94,484	2.0	PNUD/PRODERE
M	Quiché	Ixcán	PRODERE	MULT	Agrícola/maiz	100,000	3.0	PNUD/PRODERE
M	Quiché	Ixcán	CIDR-DIGESA	GOB	Comercialización	335,062	3.0	GUILD EUROP. DU RAID
M	Quiché	Nebaj, Ixil	Niños Refugiados del Mundo	ONG/I	Crédito	15,394	00	FCIL (CANADA)
M	Quiché	Nebaj, Ixil	Niños Refugiados del Mundo	ONG/I	Escuelas	6,457	10	FC1L (CANADA)
M	Quiché	Nebaj, Ixil	Niños Refugiados del Mundo	ONG/I	Artesanía	43,565	1.0	PADEL (CANADA)
M	Quiché	Ixil	ASECSA	ONG/N	Techo mínimo	21,095	1.0	FCIL (CANADA)
M	Quiché	Chajul, Ixil	Asoc. Chajulense	LOCAL	Agrícola/café	355,360	6.0	PNUD/PRODERE
M	Quiché	Nebaj, Ixil	PRODERE/INACOP	MULT-GOB	Agrícola/ajo	139,000	3.0	PNUD/PRODERE
M	General		CEAR	GOB	Inventario tierra	170,000	0.6	PNUD/BIRF
M	General		ACNUR/PRODERE Procuraduría	MULT/GOB	Derechos humanos	60,000	0.5	PNUD/PRODERE
A	General		CEAR	GOB	Reintegración	200,000	1.0	(SIN ESPECIFICAR)
A	General		CEAR	GOB	Reintegración	185,773	0.5	NORUEGA

C = Proyectos incluidos en la presentación del gobierno de Guatemala en la Reunión de CIREFCA, junio de 1990 en Nueva York.

M = Proyectos presentados paralelamente o después de junio de 1990 para financiamiento bilateral. (Proyectos en el marco de CIREFCA).

A = Proyectos de ejecución ACNUR.

* Presentados en la primera Reunión de seguimiento de CIREFCA o posteriormente para financiamiento bilateral.

** No incluyendo fondos propios de la agencia ejecutora (a veces mayoritarios).

ONG-N = Organización no-gubernamental nacional.

ONG-I = Organización no gubernamental internacional.

GOB = Gobierno

MULT= Instancia Multilateral.

Local = Instancia de la Comunidad.

Elaboración: AVANCSO en base a ACNUR (1991).

Es pertinente examinar las razones por las que la mayoría de ONGs no ha podido o no ha querido entrar en estas zonas, aun habiéndose dado la invitación especial del gobierno. Según explican, existen obstáculos, tanto por la situación externa como por sus propias limitaciones internas.

En cuanto a las limitaciones externas que afectan la decisión, en primer lugar se encuentra una desconfianza histórica para trabajar con el gobierno, lo que no cambió necesariamente con la llegada de un civil a la presidencia (AVANCSO-IDESAC, 1990:34). Especialmente en torno a CIREFCA y el papel del Estado en las áreas de recepción de retornados, se mantuvo el temor de que el Estado las pudiera cooptar o utilizara su presencia o proyectos como aval para atraer fondos para sí.^{12/} También existían muchas reservas para hacer trabajo en las regiones propuestas, relacionadas simplemente con el conflicto militar que las caracteriza. El conflicto, para las ONGs, implica una militarización y control que puede interferir en sus operaciones y complicar la participación de las personas. Las ONGs señalan también su temor por la falta de garantías para la seguridad de su programa y del personal.^{13/}

En lo interno, también existen obstáculos para la reorientación del trabajo. A pesar de los avances en la coordinación de los esfuerzos dentro del sector ONG y la posibilidad de nuevas alianzas entre ONG e iglesias u ONG nacionales e internacionales, hay obstáculos derivados de los

^{12/} Evidencia de ese temor fue la controversia entre las ONG y la CEAR en 1990 alrededor de la constitución del “grupo de apoyo” al gobierno, pues las primeras temían ser utilizadas por la CEAR para legitimar su trabajo.

Según las conclusiones de un documento de la Asociación Regional de ONG sobre la reunión de CIREFCA en 1990: “Los proyectos gubernamentales en algunos casos contemplan la relación con las ONG, pero en los planes de acción no se contempla cómo será esa participación. Los organismos implementadores son Ministerios, que generalmente realizan su proyección más desde sus intereses que de las necesidades reales de la población.” Luego dice: “En las ONG..., no existe objeción para establecer mecanismos de coordinación con los esfuerzos gubernamentales, siempre y cuando no se condicione, ni se instrumentalice a las ONG” (Asociación Regional..., 1990:24-25).

^{13/} En este sentido, las ONGs que participaron en una serie de reuniones auspiciadas por la CEAR en 1990, acordaron prestar apoyo al esfuerzo del gobierno a través del Comité Nacional de Coordinación (creada bajo el esquema designado por CIREFCA) “siempre y cuando éste reconozca la autonomía de las ONGs y les brinde garantías para trabajar en función de los requisitos de los grupos de refugiados, desplazados y retornados.” (declaración firmada por 12 ONG el 6 de abril de 1990). Véase también COINDE (1989).

celos institucionales; cada ONG está interesada en mantener su expansión geográfica, de programación y de fuentes financieras, lo que tiende a hacer que cada una continúe trabajando por su lado.

Por otra parte, con frecuencia sucede que aunque hay voluntad para desplazarse a nuevas áreas, las ONGs tienen dificultades para hacer más trabajo del que ya están haciendo. Hay falta de capacidad administrativa, falta de recursos o falta de personal capacitado para llevar adelante programas en los lugares más sensibles o difíciles para trabajar. Adicionalmente, en los lugares donde actualmente están, la crisis económica y, en algunos casos, el recrudecimiento del conflicto, hacen insuficientes incluso los programas que ya existen.

A pesar de no tener una presencia directa debido a una o más de las razones referidas, las ONGs que están al tanto del tema y quisieran seguir participando en la compleja discusión sobre el futuro de las poblaciones desplazadas, han escogido como estrategia seguir participando en la Asociación Regional (ante la cual el Consejo de Instituciones de Desarrollo –COINDE– es el representante por parte de Guatemala) y relacionándose con las organizaciones de la población afectada; han buscado, además, actuar en coalición con iglesias y el movimiento popular.

Anexo 2

1965-1980: El nuevo desarrollo y esperanzas en el campo

Para aproximarse al tema de la reintegración es importante explorarlo desde la perspectiva de las poblaciones desplazadas, y para esto es necesario examinar, tanto los cambios profundos experimentados en las áreas rurales de Guatemala (especialmente el altiplano occidental) en los años previos al desplazamiento como las condiciones del desplazamiento mismo. Estos antecedentes permiten ver cómo la población en estudio transitó por un lapso de auge en el que la visión del futuro estuvo impregnada de la idea de que con organización, capacitación y tecnología, es posible lograr el desarrollo.

En los 15 años que arrancan en 1965, varios factores contribuyeron a una movilización de la población indígena y rural de Guatemala. Aunque las raíces del movimiento son de la época 1944-1954, cuando entraron en la escena política nuevos partidos políticos, ligas campesinas y grupos sindicales, ciertos acontecimientos, especialmente en los años '60, encadenaron cambios significativos en las zonas rurales del noroccidente del país (Davis, 1988:16).^{1/} En los párrafos que siguen se hace una enumeración esquemática de tales acontecimientos.

El programa “Alianza para el Progreso”, auspiciado y financiado por los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), invirtió en programas orientados a zonas rurales que hasta entonces no habían sido contempladas en ninguna acción gubernamental de desarrollo. Entre 1962 y 1969, la USAID canalizó US\$ 54 millones a

^{1/} Paralelo a esta movilización se dio el proceso de agudización de la crisis agraria, ilustrado por el incremento de 25% en el número de familias cuyos terrenos eran insuficientes para sostenerse entre 1950 y 1970; la reducción de una tercera parte en el tamaño del terreno familiar en el mismo período, y el incremento en el número de migrantes indígenas del altiplano a las plantaciones de la costa sur que en 1970 había llegado a 300,000 anuales (Davis, 1988:14-15).

Guatemala, casi todos para el programa de desarrollo rural. En los años '70, esta agencia estimaba que había en el país 510 cooperativas con 132,000 miembros, 57% de las cuales se ubicaba en los altiplanos central y occidental (Davis y Hodson, 1982:14).^{2/} La introducción de fertilizantes subsidiados, de nuevos cultivos y de la cooperativa como forma de organización, despertó grandes expectativas en el altiplano.

Por su lado, dentro de la Iglesia Católica creció el movimiento de Acción Católica, que partió de un impulso de la Iglesia tradicional en contra del “comunismo” y en búsqueda de la consolidación de su base en los años '50, y se convirtió luego en un vehículo que provocó cambios profundos en la dinámica local de las comunidades. A raíz de Acción Católica, por ejemplo, una nueva generación de catequistas jóvenes disputaba el liderazgo de la comunidad con los poderes tradicionales.^{3/} Más adelante, respondiendo a nuevas líneas de trabajo en toda América Latina, la Iglesia aumentó su presencia directa en las áreas más lejanas del país. Los religiosos, muchos de ellos extranjeros, reaccionaron ante la pobreza y las condiciones difíciles en que su feligresía vivía. Una respuesta fue involucrarse más en proyectos de desarrollo y formación y, en un momento dado, impulsar proyectos de colonización a las tierras selváticas en el norte. Algunos de estos proyectos fueron desarrollados con fondos disponibles de la USAID y de las congregaciones religiosas que respaldaban a los misioneros en el país (Adams, 1970:290-292).

A principios de los años '70, partidos políticos de oposición, especialmente la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), buscaron consolidar una base social entre la población campesina e indígena del país. Se inició así un proceso gradual en el que líderes indígenas accedieron a cargos locales de elección en una cantidad significativa de municipios en donde las posiciones de poder formal habían sido ocupadas por la minoría ladina (Davis, 1988:16).^{4/}

Finalmente, el terremoto de 1976 hizo que la atención internacional se dirigiera a Guatemala y se diera una confluencia de gran número de

^{2/} La Alianza para el Progreso fue un programa diseñado para los países de América Latina, según su propia definición, “*para hacerlos menos receptivos al comunismo*”, implementado en 1961 por el Presidente John F. Kennedy.

^{3/} Para la historia y riqueza de este proceso, véase Falla (1980); Adams (1970:Cap. 5); y Samandú (1990).

^{4/} Para los antecedentes de la DCG, véase AVANCSO (1988) y Painter (1989).

instituciones de desarrollo que, aparte de atender la emergencia de la catástrofe, iniciaron diversos proyectos de más largo plazo y trabajaron conceptos de desarrollo con la población.

Las políticas de desarrollo tuvieron dos rasgos sobresalientes en aquellos años. Por un lado, la promoción intensiva del cooperativismo tejió una extensa organización campesina que generó diversas experiencias de trabajo asociado e inserción en el mercado. No obstante que hoy día se considera que los modelos cooperativos adolecieron de enormes limitaciones, todavía está pendiente establecer su incidencia en la estratificación social campesina. Por otro lado, los proyectos de expansión de la frontera agrícola en la zona norte de Quiché, la Franja Transversal del Norte y las márgenes de los ríos La Pasión y Usumacinta en Petén, tuvieron un enorme significado en términos de movilización de poblaciones con gran diversidad étnica, experiencias de formas cooperativas de trabajo y diferenciación social por la vía de la introducción de sistemas productivos para el mercado (ganado, cardamomo y otras especias).

Las nuevas experiencias con proyectos de desarrollo y organización política, a pesar de los fracasos que hubo (el alza en el costo del fertilizante, por ejemplo), dieron a muchos campesinos una visión de las posibilidades que aparentemente estaban a su alcance. Esta visión (esperanza) se centró en obtener más o mejor tierra (proyectos de colonización), hacer más productiva la que se tenía (insumos agrícolas, semillas mejoradas, etc.), avanzar a nuevas formas de organización (de producción, comercialización, consumo) y obtener más poder en la comunidad. Aunque el impacto de los programas no alcanzó a modificar los índices históricos de desnutrición y analfabetismo, ni las desventajas en el mercado, sí se introdujeron nuevos esquemas en el mundo campesino.

Anexo 3

El entorno económico del retorno

El desplazamiento forzoso de decenas de miles de campesinos guatemaltecos, en su mayoría indígenas, coincidió con la crisis económica más severa del último siglo en el país. En realidad, en el decenio de 1980 confluyeron tres corrientes críticas de carácter amplio. Por un lado, el conflicto armado interno se expandió a casi tres cuartas partes del territorio nacional y el agudo enfrentamiento provocó episodios dramáticos como los que se reseñan en este estudio. Por otro lado, el sistema económico fundado en la agroexportación tradicional (café, algodón, caña de azúcar) y en una planta industrial liviana experimentó un notable desajuste. Y la asociación de estas dos crisis expuso las dificultades estructurales para la reproducción de todo el sistema social.

En medio de esta compleja dinámica de desestructuración y reestructuración, ocurrió el desgarre humano del desplazamiento masivo en las zonas rurales de Guatemala. El propósito de este Anexo es ofrecer un panorama general de las condiciones económicas y sociales que rodearon el fenómeno del desplazamiento y el nuevo paisaje que se va configurando como marco del proceso del nuevo asentamiento de las poblaciones.

El “shock” del decenio 1980

Aunque los volúmenes de la producción agrícola para exportación comenzaron a disminuir consistentemente desde 1977-1978, no fue sino hasta 1980 que el impacto fue sensible en la economía general. Ello se debió básicamente a la baja elasticidad de la demanda en el mercado internacional, lo cual se reflejó en la apertura de una amplia brecha en el sector externo, que provocó efectos negativos en cadena sobre la inversión para los sectores agrícola e industrial, la disponibilidad de empleos y los ingresos fiscales, entre otros.

Las exportaciones totales cayeron a una tasa del 4.5% anual entre 1980 y 1987. El monto alcanzado en este último año fue equivalente a

dos tercios del que correspondió a 1980. Las bajas más severas se localizaron en el sector industrial con mercado centroamericano, cuyas ventas disminuyeron casi a la mitad; y en el algodón, cuyo valor de venta se contrajo de US\$165 millones en 1980 a sólo US\$16 millones en 1987.

Durante este período, las inversiones agrícolas disminuyeron a un ritmo de 6.7% cada año. En algunas áreas específicas de formación de capital como maquinaria, equipo y herramientas, los cambios fueron más drásticos. Las inversiones en habilitación de tierras también bajaron ligeramente (2.6% anual). El ritmo de los préstamos bancarios a la agricultura, durante el mismo período, fue bastante lento; mientras éstos aumentaron a una tasa del 3.5% anual, los préstamos totales registraron una expansión del 11.4% cada año. El gasto público real destinado al sector agrícola se contrajo un 11.1% cada año, mientras el índice de gastos por persona en términos reales cayó de 134.9 en 1980 a sólo 67.9 en 1987.

Pero sin duda lo que reflejó de manera más nítida las dificultades de reproducción del sistema agroexportador e industrial sustitutivo de importaciones, fue su baja capacidad para absorber fuerza de trabajo. De cada 70 mil jóvenes que anualmente se incorporaban a la Población Económicamente Activa (PEA), apenas un 20% encontró una colocación segura.

En el mercado laboral agrícola ocurrieron cambios significativos. La PEA agrícola creció un 3.5% anual entre 1980 y 1987, lo cual representa casi el doble del observado entre 1950 y 1980 y supera holgadamente el crecimiento demográfico nacional. Por un lado, ocurrió que la participación de la mujer, registrada en las estadísticas oficiales, aumentó casi un 100%. Y por otro, se observó una “recampesinización”, en particular hasta 1987. A partir de ese año se notó una caída abrupta de la producción de granos básicos en el minifundio.

En las plantaciones agroexportadoras, el trabajo estacional bajó notablemente. Esto se debió a la disminución de la superficie del cultivo de algodón, a la introducción de algunas innovaciones tecnológicas en el cultivo de la caña (especialmente en el corte) y a las variaciones en el patrón tecnológico del café (cambio en el cuidado de las plantaciones). Estos cambios se reflejaron en los registros de cotizantes al seguro social. Entre 1981 y 1987 los empleados en el sector agrícola disminuyeron a una tasa anual del 6.8%, lo cual provocó una caída en la proporción de la PEA agrícola registrada por el seguro de 34.7% a sólo 18.0%.

Esto indica variaciones importantes en la estructura ocupacional, que tiene una relación directa con el perfil de pobreza acentuado en el país durante estos años. Según la Encuesta Sociodemográfica de 1989, levantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la categoría ocupacional “familiares no remunerados” absorbía el 25% de la PEA agrícola, lo que se compara con un 18% en 1980. Tradicionalmente en esta categoría se ha ubicado más de un 80% de las familias pobres y muy pobres. También los trabajadores “por cuenta propia” aumentaron su importancia relativa durante este período, llegando a representar más del 35% de la PEA total. Aunque el desempleo abierto no mostró mayor cambio, el deterioro en el nivel de vida se observa a través del incremento del subempleo, que afectó hacia 1989 a dos tercios de la PEA.

Los salarios reales, entre 1983 y 1987, sufrieron una caída del 27.5%. En el sector agrícola, la contracción fue equivalente a una tasa del 8.6% anual durante ese período.

Una nueva geografía económica

Los guatemaltecos repatriados y los desplazados internos se enfrentan a una dinámica social y económica muy diferente de la que abandonaron a principios del decenio de 1980. La costa sur y la bocacosta ya no son la fuente de empleo por excelencia. Al contrario, se están convirtiendo en regiones expulsoras de fuerza de trabajo. Ciertos bolsones de los altiplanos central y occidental, así como del oriente y suroriente del país son los nuevos focos dinámicos de la economía.

Esta nueva economía tiene, cuando menos, dos rasgos distintivos. En las áreas urbanas, es notable el aumento fuera de toda proporción del sector de servicios, sobre todo aquéllos vinculados al comercio y más recientemente a la construcción. En las áreas rurales, una porción de los campesinos, que se situaría entre un 10% y un 20%, estaría ajustando su economía, aun en medio de condiciones adversas, con la introducción de cultivos no tradicionales para exportación y el sistema de maquila domiciliar y a escala.

En este caso, se observa el efecto de una mayor monetarización de la economía campesina que, en un balance global, alcanza sólo el nivel de la sobrevivencia, aun cuando puedan observarse cambios notables en los patrones de consumo. El ajuste de la economía general está caminando por dos carriles. Por un lado, hay un traslado del anterior capital productivo

agrícola e industrial a los sectores financiero e industrial. Con las políticas de estabilización y ajuste estructural –asociado con la baja rentabilidad de los capitales en el exterior, particularmente en los Estados Unidos– ha habido un retorno de capitales que busca reproducirse en la esfera “simbólica” de la economía. Desde luego, éste es un ajuste muy vulnerable y frágil, sin garantías de estabilización, pues su retorno es de muy corto plazo.

Por otro lado, el sector real de la economía está descansando en la pequeña producción agrícola e industrial con un alto control de las empresas comercializadoras. Se puede concluir que en este nivel de la economía se está implantando de hecho un nuevo régimen de relaciones productivas basado en la intensificación del uso de mano de obra familiar y en el control estricto de las entradas y salidas del sistema de producción, es decir, el crédito, los insumos, por una parte, y la comercialización, por la otra. Es un nuevo régimen de trabajo respecto al cual el Estado acusa un notable rezago para regular.

Fuera de los “bolsones” productivos mencionados, existe una extensa zona de población sobreviviendo en condiciones muy difíciles. En particular, las poblaciones desplazadas y reasentadas sobreviven en zonas ecológicas muy frágiles, que soportan no más de tres ciclos de cultivos anuales antes de perder su capacidad de fertilidad. La inversión pública, hasta ahora, está basada en proyectos de emergencia con alta inversión de capital, pero poco beneficio social y sin características claras de sostenibilidad. La inversión privada no ve mayores atractivos de rentabilidad, a no ser la mano de obra barata. Sólo la creación de ciertas condiciones de infraestructura (carreteras, riego, agua potable, comunicaciones) podría abrir algunas perspectivas de habilitación de estas zonas.

El reasentamiento, bajo estas condiciones, resultará frágil cuando no conflictivo. La ausencia de fuentes de empleo locales obligará a estas poblaciones a una migración cuasi permanente a los centros dinámicos descritos, o bien a retornos temporales a las unidades productivas en México y a nuevas emigraciones a los Estados Unidos.

Anexo 4

Cronología de eventos clave en los procesos de retorno: enero de 1986 - 2000

1986

14 de enero

Toma posesión de la Presidencia de la República, el Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, del partido Democracia Cristiana Guatemalteca, es el primer presidente civil desde 1966-1970.

marzo, junio y julio

En Alta Verapaz, la Iglesia Católica recibe los primeros grupos de desplazados provenientes de la montaña.

septiembre

El gobierno crea la Comisión Especial de Atención a Repatriados (CEAR) con el objetivo de *“atender el retorno de refugiados guatemaltecos en el extranjero...”*, la cual queda conformada por delegados *“al más alto nivel”* de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo Urbano y Rural y Defensa Nacional, y del Comité de Reconstrucción Nacional. El acuerdo gubernativo 765-86 se publicó en el diario oficial el 16 de octubre.

noviembre

Por primera vez una delegación gubernamental visita los campamentos de refugiados en México. La misma es presidida por la esposa del Presidente de la República, Raquel Blandón de Cerezo.

1987

enero, febrero y marzo

Ingresa al país los primeros grupos numerosos de repatriados que son recibidos conjuntamente por el ACNUR y la CEAR, la mayor parte de los

mismos se dirigen a municipios en Huehuetenango e Ixcán, Quiché. La CEAR establece dos centros de recepción para repatriados; uno en las afueras de la cabecera departamental de Huehuetenango y otro en el municipio de Ixcán, denominado Centro de Recepción Veracruz.

marzo

La Declaración de Amnistía que hasta entonces han debido firmar los repatriados es sustituida por una boleta de repatriación.

junio

Se abre formalmente la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Guatemala para atender directamente las repatriaciones y a refugiados en el país.

agosto

Los presidentes centroamericanos firman en Esquipulas, Guatemala, el *Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera* (conocido como los Acuerdos de “Esquipulas II”) que incluye un punto (el número 8) donde se comprometen a *“atender con sentido de urgencia”* a las poblaciones desplazadas.

septiembre

El Ejército inicia una gran ofensiva militar en áreas de la zona ixil e Ixcán (conocida posteriormente como “Ofensiva de fin de año”), dando como resultado el retorno de miles de desplazados en la primera.

septiembre-octubre

En cumplimiento de los Acuerdos de Esquipulas II, que requieren de cada país una Comisión Nacional de Reconciliación para *“la verificación del cumplimiento de los compromisos... en materia de amnistía, cese de fuego, democratización y elecciones libres...”*, se conforma ésta con representación del poder ejecutivo, la Conferencia Episcopal, los partidos políticos más un “ciudadano notable”.

diciembre

Surgen en México las “Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México”.

1988

enero

En los campamentos de México quedan oficialmente conformadas las Comisiones Permanentes de Representantes de Refugiados Guatemaltecos, lo que abre la posibilidad de negociar con el gobierno guatemalteco un “*retorno colectivo y organizado*”.

febrero

Como respuesta a los flujos de desplazados que retornan en el área ixil, Quiché, el gobierno anuncia la implementación del “Plan de Apoyo a los Pobladores del Triángulo Ixil”, y la CEAR (llamándose en esta área CEARD) inicia operaciones, atendiendo a desplazados en el Centro de Recepción Xemamatzé ubicado en Nebaj, Quiché.

mayo

En la resolución 42/231 de la ONU se aprueba el Plan Especial de Cooperación para Centroamérica (PEC), que recomienda para el caso de refugiados, repatriados y desplazados una “*actividad prioritaria*”. Dentro del marco del PEC, el gobierno demócrata cristiano de Italia acordó financiar el Programa Regional de Desarrollo para Refugiados Desplazados y Repatriados (PRODERE), con subprogramas en todos los países centroamericanos; a Guatemala se le asignó el monto de US\$ 23 millones, de los cuales se destinarían 11 a Ixcán y 8 al área ixil.

agosto

El mandato de la CEAR se amplía oficialmente al asignársele la función de brindar “*asistencia a los refugiados extranjeros que se encuentran ubicados en nuestro territorio, así como a los desplazados de sus lugares de origen...*” a través del decreto gubernativo 422-88 publicado en el diario oficial el 13 de agosto del mismo año.

octubre

La CONATIERRA y otros organismos del Estado inician las negociaciones en busca de acuerdos para resolver los problemas de tierra, derivados del desplazamiento en comunidades con repatriados en el área de Ixcán.

diciembre

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/118 apoya la realización de la “Conferencia Internacional sobre los Refugiados

Centroamericanos” (CIREFCA), acordada por los gobiernos de Centroamérica y México en el “Comunicado de San Salvador”.

1989

enero

Se instala el Diálogo Nacional, convocado por la Comisión Nacional de Reconciliación e inscrito en el marco de los Acuerdos Esquipulas II, logrando la participación de varios sectores de la sociedad (gobierno, organizaciones populares, iglesias, partidos políticos y otras, excluyendo al Ejército y a la URNG).

Dentro del mismo se conformó la Comisión de “Sectores Damnificados por la Violencia” donde se conoce públicamente la situación de las poblaciones desplazadas, refugiadas y retornadas. Las Comisiones Permanentes de México presentan una ponencia en la que plantean sus demandas para el retorno:

- 1) Que el retorno sea una decisión voluntaria, expresada individualmente.
- 2) Garantía de que no se les impedirá retornar a sus tierras y tomar posesión de ellas.
- 3) Reconocimiento de su derecho a organizarse y asociarse libremente.
- 4) Derecho a la vida e integridad personal y comunitaria.
- 5) Que el Gobierno de la República permita que su retorno esté acompañado de delegaciones internacionales, de organizaciones no gubernamentales y de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
- 6) La libre movilización nacional e internacional de las Comisiones Permanentes.

marzo

En la ciudad de México, ONGs de Centro América y México llevan a cabo una reunión preparatoria previo a la CIREFCA, dando como resultado la conformación de una instancia regional de coordinación de ONGs que trabajan con poblaciones desplazadas (posteriormente se llamará la Asociación Regional de Migraciones Forzadas, ARMIF).

29-31 de mayo

Se lleva a cabo en la Ciudad de Guatemala la “Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos” (CIREFCA), convocada por los gobiernos centroamericanos y México, con la participación de representantes de cerca de 60 gobiernos, organismos de Naciones Unidas y de ONGs internacionales. Al final se aprueba un “Plan de Acción Concertado en Favor de los

Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos”, para guiar las acciones de los gobiernos centroamericanos (incluido Belice) y México.

junio

Se inicia el “Proyecto de Desarrollo en Area de Reasentamiento Poblacional del norte de Huehuetenango” acordado entre la CEE y MINDES (Proyecto NA/AR/8/88) a ejecutarse en seis municipios del departamento, incluyendo Nentón y Barillas, en un plazo de tres años y con un monto asignado de ECU 2.3 millones.

septiembre

Se conforma el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) primera organización de desplazados internos de Guatemala. En un comunicado formula cuatro planteamientos: 1) Que se garanticen las máximas condiciones de seguridad en sus comunidades de origen, para retornar a ellas y dedicarse de nuevo a sus labores agrícolas; 2) Que cese la represión e intimidación contra los desplazados; 3) Que se les repongan sus documentos destruidos o extraviados cuando se vieron precisados a abandonar sus hogares por las condiciones de represión y violencia; y 4) Que se respeten los derechos humanos y civiles de los desplazados.

1990

abril

En cumplimiento del Plan de Acción Concertado de CIREFCA, el gobierno decreta la creación del Comité Nacional de Coordinación, conformado por los mismos miembros de la CEAR con las atribuciones de solicitar cooperación externa para proyectos en apoyo a poblaciones desplazadas y elaborar informes sobre el avance del proceso en Guatemala.

mayo

Por primera vez, la CEAR tiene pláticas directas con las Comisiones Permanentes de Refugiados (CCPP) en la ciudad de Campeche, México, llegándose a la suscripción de un acuerdo marco para futuras conversaciones con agencias de cooperación y ONGs, así como instituciones de gobierno y otros sectores.

27-28 de junio

En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, tiene lugar la Primera Reunión del Comité de Seguimiento de CIREFCA, realizada de acuerdo

al “Plan de Acción Concertado”, donde los siete gobiernos presentarían proyectos que requerían el financiamiento externo y los países cooperantes anunciarían las contribuciones para los mismos.

septiembre

Las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), a través de un comunicado de prensa, dan a conocer públicamente por primera vez su situación y plantean una serie de demandas al gobierno. En síntesis sus demandas eran: 1) reconocimiento por parte del gobierno como “*población civil campesina en resistencia*”; 2) el derecho de retornar a sus comunidades libremente, recuperar sus tierras y reunirse con sus familiares; 3) la desmilitarización de sus comunidades de origen y el cese de la represión en su lugar de refugio; 4) la reafirmación de los derechos humanos y civiles básicos incluyendo los derechos a la vida, a la organización, a la libre movilización, etc. 5) al acceso por parte de organizaciones no-gubernamentales y religiosas a su lugar de refugio.

octubre

Organizaciones religiosas, de ONG y otros, incluyendo la oficina de la Procuraduría de los Derechos Humanos, forman una Comisión Multipartita para enfrentar la situación de las CPR.

1991

15 de enero

El ingeniero Jorge Serrano Elías, del partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS), toma posesión como Presidente de la República de Guatemala.

enero

Aparece en los periódicos del país la “Declaración de las Comunidades de Población en Resistencia del Ixcán”; dando a conocer públicamente su situación, sus exigencias y demandas al gobierno, y solicitando apoyo a “*organismos nacionales e internacionales y gobiernos y pueblos del mundo*”.

febrero

El nuevo gobierno efectúa una reorganización de la CEAR que, mediante el Acuerdo Gubernativo 68-91, pasa a formar parte de la presidencia de la República. Queda presidida por el Vicepresidente de la República e

integrada por los ministros de Gobernación, Agricultura y la Defensa, además por la Secretaría de Planificación Económica. Desde esa fecha se le conoce como Comisión Nacional para la Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados.

La Comisión Multipartita y un grupo de diplomáticos y funcionarios de gobierno efectúan la primera visita a las CPR del área ixil.

Un total de 200 repatriados provenientes del campamento El Tesoro en Honduras, son asentados en la finca nacional Yalpemech en Chisec, Alta Verapaz, conformando prácticamente la primera experiencia de un retorno colectivo de refugiados que optan por mantenerse como grupo y asentarse en tierras distintas de aquéllas de donde salieron al refugio.

marzo

Queda integrada la “Comisión Mediadora” entre el gobierno de Guatemala y los refugiados guatemaltecos en México. La Comisión quedó presidida por monseñor Rodolfo Quezada Toruño, presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, y conformada además por el Procurador de los Derechos Humanos, el ACNUR y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG).

El Procurador de los Derechos Humanos presenta a la opinión pública el “Proyecto de Paz y Desarrollo en El Quiché”.

abril

El nuevo gobierno inicia pláticas directas con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en el marco de un plan de “Paz Total” presentado por el gobierno.

mayo

Regresan los últimos 150 refugiados asentados en el campamento El Tesoro en Honduras con destino a la finca Yalpemech. El Tesoro es cerrado como campamento de refugiados.

Delegados de las Comisiones Permanentes de Refugiados y de la Vicepresidencia de la República de Guatemala firman en Chiapas, México, los “Acuerdos de la Nueva Libertad”, donde ambas partes manifiestan su beneplácito a la Comisión Mediadora por el proceso de negociaciones, y la decisión de iniciar la negociación de los seis puntos que las CCPP presentaron ante el Diálogo Nacional en relación al retorno.

julio

La Presidencia de la República, a través de un comunicado de prensa, define la “Política del Gobierno de la República para la Atención de Refugiados, Repatriados y Desplazados dentro del Plan de Paz Total”, donde reafirma el respeto al principio de la repatriación voluntaria, ratifica su interés porque esas poblaciones puedan reintegrarse a la vida plena del país, ofreciendo búsqueda de solución al problema de las tierras y otorgando a las poblaciones refugiadas o desplazadas las garantías contempladas en la Constitución Política de Guatemala. En cuanto al retorno de los refugiados, refiere que se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados y otros mecanismos previstos en la CIREFCA.

Se realiza la “Primera Conferencia de Sectores Damnificados por la Represión y la Impunidad”, convocada por CONDEG, CPR, Comisiones Permanentes y otras instancias de viudas, de familiares de detenidos-desaparecidos y de derechos humanos. Es la primera vez que los diferentes sectores surgidos por la violencia logran un acercamiento, conformando una instancia de Coordinación y efectúan una declaración de prensa donde plantean una serie de demandas conjuntas que incluyen, entre otros aspectos: fin de la impunidad; desaparecimiento de los mecanismos de control militar; que el Fondo para la Paz (FONAPAZ) sea utilizado para indemnizar a las familias perjudicadas por la violencia; que sus demandas sean tomadas en cuenta en el diálogo para la paz entre el gobierno, el Ejército y la URNG; el compromiso formal y público del gobierno y el Ejército de proporcionar las garantías en materia de derechos humanos a las “*organizaciones surgidas por la represión*”; recuperación de sus tierras y que el gobierno cumpla con la entrega de las tierras ofrecidas a los refugiados.

agosto

Se publica en la edición del 2 de agosto del diario oficial, el Acuerdo Gubernativo No. 408-91 que crea el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). En dicho acuerdo “*se declara de necesidad y urgencia nacional la orientación, formulación, ejecución, supervisión y seguimiento de los programas y proyectos dirigidos a la atención inmediata de la población refugiada, repatriada, desplazada, desmovilizada y asentada, así como a los demás grupos o sectores de población afectados por la lucha armada interna, y las medidas de apoyo a las acciones en los lugares donde se llevarán a cabo trabajos de reubicación y asentamiento...*” El Consejo

Directivo del FONAPAZ estará integrado por el Presidente de la República, el Presidente de la CEAR, el ministro de Finanzas Públicas, el ministro de Desarrollo Urbano y Rural, el Secretario General del Consejo Nacional de Planificación Económica y dos Consejeros específicos de la Presidencia de la República.

Una misión de obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, realiza una visita a varios campamentos de refugiados en México y al retornar a Guatemala emiten una declaración de prensa donde presentan una serie de consideraciones sobre las condiciones para el retorno.

octubre

El proceso de negociación entre las CCPP y el gobierno de Guatemala es reanudado en México, después de cuatro meses de estancamiento, participando como observador un miembro del ACNUR.

Con un comunicado dirigido a la Comunidad Nacional e Internacional, aparecen públicamente las Comunidades de Población en Resistencia del Petén (CPRP), planteando su situación y una serie de demandas y solicitudes de apoyo.

noviembre

Con la visita a Guatemala de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sadako Ogata, se suscribe una “Carta de Entendimiento entre el Gobierno de Guatemala y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, relativa a la Repatriación Voluntaria de los Refugiados Guatemaltecos”.

diciembre

La CEAR emite un comunicado de prensa donde presenta las acciones y avances del proceso de negociación para el retorno de los refugiados en México y declara el año de 1992 como “año del retorno voluntario, organizado y colectivo de la población desarraigada”. Por otro lado, la CEAR anuncia haber cerrado el centro de atención para desplazados “Xemamatzé” (en Nebaj, Quiché), que venía operando desde 1987.

1992

febrero

Se conforma la “Coordinadora de Organismos No Gubernamentales y Cooperativas para el Acompañamiento de la Población Damnificada por

el Conflicto Armado Interno”, donde se involucran 20 ONGs y diez cooperativas.

En la Ciudad de Guatemala se celebra el Primer Foro Regional “Enfoque de Género en el Trabajo con Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas” (FOREFEM), convocado por el ACNUR y el PNUD.

marzo

En Ciudad de Guatemala, las Comisiones Permanentes de Refugiados y el gobierno de la República llegan a la suscripción de un acuerdo sobre dos de las seis demandas planteadas por los refugiados en el Diálogo Nacional.

abril

En San Salvador, República de El Salvador, se lleva a cabo la “Segunda Reunión del Comité de Seguimiento de CIREFCA”, de acuerdo al Plan de Acción Concertado adoptado en la Ciudad de Guatemala en mayo de 1989.

octubre ^{1/}

Se firman acuerdos bilaterales entre las Comisiones Permanentes de Refugiados y el gobierno de la República, enfatizando seguridad y garantías constitucionales, además de un mecanismo para la adquisición de tierras.

1993

Se inicia el año con el primer movimiento de una nueva forma de repatriación: el retorno “colectivo y organizado”. En enero, 2,500 personas retornan a nuevas tierras en Ixcán en un movimiento políticamente visible con apoyo internacional, el cual llama la atención sobre la desolación de la Guatemala rural. En mayo, el proceso de retorno se ve afectado por la crisis del gobierno que termina la presidencia de Serrano Elías e inicia el gobierno de Ramiro de León Carpio –quien tiene antecedentes de incidir a favor de la población refugiada. En diciembre llega otro grupo masivo a Ixcán, para reclamar sus tierras que estaban tomadas

^{1/} La cronología que se incluye a partir de este punto, fue elaborada por Paula Worby como parte de su libro *Los refugiados, desplazados y retornados de Guatemala, una bibliografía anotada 1982-2000*, que fue publicada por AVANCSO en la serie Autores Invitados, en 2001,

por nuevos ocupantes y donde las condiciones del conflicto armado seguían vigentes.

1994

Las negociaciones entre el gobierno de Guatemala y la organización insurgente (URNG) cobran más fuerza. Este año se firman varios acuerdos “parciales”, incluyendo el relacionado con el reasentamiento de la población desarraigada a causa del conflicto (junio). Este acuerdo estimula la formación de la Comisión Técnica (CTEAR), un cuerpo multipartito para efectos de adelantar las condiciones necesarias para la eventual implementación del mismo acuerdo. Con el propósito de representar en dicha comisión a varias agrupaciones de personas afectadas por el desarraigo, se crea la Asamblea consultiva de las Poblaciones Desarraigadas (ACPD). En el marco de las negociaciones de paz, se inicia la presencia de verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA), en varios puntos del país.

1995

En el año de mayor repatriación (tanto de forma colectiva y organizada, como de otros movimientos) regresan unos 9,500 refugiados desde México. En octubre, en la comunidad conocida como Xamán, una patrulla militar dispara en contra de la población retornada con el saldo de 11 muertos. En diciembre se desarrollan las elecciones que resultan en la gestión del presidente Álvaro Arzú. Por las mismas fechas, el gobierno mexicano anuncia la formalización de un proceso de posible naturalización para refugiados guatemaltecos quienes no optan por regresar a Guatemala.

1996

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera se firma entre el gobierno y la URNG en diciembre. Todos los demás acuerdos parciales entran en vigor y la Comisión Técnica se convierte en un ente operacional en función de conducir la ejecución del Acuerdo sobre el reasentamiento de la población desarraigada.

1997

En diciembre, los líderes de los refugiados negocian una lista delimitada de grupos para la obtención de tierras, de acuerdo con los términos de los

Acuerdos de Octubre de 1992 y de ese momento en adelante, los retornados adicionales tendrían que utilizar, en el futuro, el nuevo Fondo de Tierras para tener acceso a la tierra.

1999

En marzo retorna el último grupo de refugiados llamándose “colectivo y organizado”. Familias refugiadas siguen llegando con apoyo mayor y acompañamiento formal hasta junio, después de lo cual su repatriación es reconocida pero en condiciones de menor apoyo. También durante junio, se termina formalmente la gestión de CEAR. Cerca de 22,000 refugiados en México (la mitad de ellos nacidos en campamentos con la nacionalidad dual) se inscriben para ser integrados de forma permanente. El año termina con elecciones, como resultado llega a la presidencia Alfonso Portillo. En las mismas elecciones hay candidatos a alcalde surgidos de la población retornada y otros que eran anteriormente desplazados dentro del país.

2000

El ACNUR da por concluido su programa de apoyo a la reintegración dentro de Guatemala y se retira, con excepción de la reserva de intervenir a favor de los refugiados extranjeros radicados en Guatemala. Las organizaciones de refugiados se retiran formalmente de sus sedes en México, quedándose en Guatemala (con algunos cambios de nombre y función) como entes ligados a las comunidades de retornados.

Bibliografía

- ACNUR. "Proyectos en Áreas de Refugiados, Repatriados y Desplazados". Documento borrador. Guatemala: octubre de 1991.
- Adams, Richard. *Crucifixion by Power: Essays on Guatemalan National Social Structure, 1944-1966*. Austin y Londres: University of Austin Press, 1970.
- Aguayo, Sergio. *El Éxodo Centroamericano: Consecuencias de un Conflicto*. México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 1985.
- _____. y Laura O'Dogherty. "Los Refugiados Guatemaltecos en Campeche y Quintano Roo," en: *Foro Internacional* (El Colegio de México). Vol. XXVII, No. 6, México: octubre-diciembre 1986.
- _____. y Patricia Weiss Fagen. *Central Americans in Mexico and the United States*. Washington D.C.: CIPRA, 1988.
- Amnesty International. *Massive Extrajudicial Executions in Rural Areas under Rios Montt*. Londres: 1982.
- Asociación Regional de ONG Apoyando a Refugiados, Desplazados y Retornados. "Planteamiento de las Organizaciones No Gubernamentales coordinadas de la región ante la Primera Reunión Internacional del Comité de Seguimiento de la CIREFCA". Junio de 1990.
- AVANCSO. *La política de desarrollo del Estado guatemalteco 1986-1987*. Cuadernos de Investigación No. 2, Guatemala: 1988.
- _____. *Política exterior y estabilidad estatal*. Cuadernos de Investigación No. 5, Guatemala: 1989.
- _____. *Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala*. Cuadernos de Investigación No. 6, Guatemala: 1990.
- _____. e IDESAC. *ONGs, sociedad civil y Estado en Guatemala: Elementos para el debate*. Guatemala: 1990.
- Berryman, Phillip. *The Religious Roots of Rebellion*. Maryknoll, Nueva York: Orbis Books, 1984.
- Cabarús, Carlos Rafael. *La cosmovisión k'ekchi' en proceso de cambio*. San Salvador: Universidad Centroamericana, 1979.
- CAICA (Colectivo de Análisis de Iglesias en Centroamérica). *La Iglesia en Centroamérica: Información y análisis*. México D.F.: Centro de Estudios Ecuménicos, 1990.
- CEAR (Comisión Especial de Asistencia a Repatriados). "Informe de actividades de enero de 1987 a octubre de 1990". Guatemala: 1990.
- CEIDEC (Centro de Estudios Integrados de Desarrollo Comunal). *Guatemala: Polos de Desarrollo*. México: Editorial Praxis, 1988.
- _____. *Guatemala: Polos de Desarrollo, Vol. II*. México: Editorial Praxis, 1990.
- CIREFCA (a). "Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina," documento CIREFCA/89/9, abril de 1989.
- _____. (b). "Plan de Acción Concertada", documento CIREFCA/89/13, mayo de 1989.
- Clark, Lance. "Internal Refugees –The Hidden Half," en: *World Refugee Survey–1988 in Review*. U.S. Committee for Refugees, 1989.
- Clay, Jason W. "The Campeche Camps," *Cultural Survival Quarterly*. Vol. 8. Boston: Otoño 1984, pp. 53-54.
- Cohen, Roberta. "Human Rights at the UN: Internally Displaced People need Human Rights Protection". Serie *In Brief*, No. 33. Nueva York: International League for Human Rights, octubre de 1990.
- COINDE (Consejo de Instituciones de Desarrollo de Guatemala). "Presentación de COINDE ante Representantes de los Ministerios de Cooperación de Gobiernos Europeos y Canadá en el Marco de la Celebración de CIREFCA". Guatemala: mayo de 1989.
- _____. "Planteamiento ante la Primera Reunión Internacional del Comité de Seguimiento de CIREFCA". Presentado por el COINDE, Nueva York: 27 de junio de 1990.

Colby, Benjamin N. y Pierre L. van der Berge. *Ixiles y ladinos: el pluralismo social en el altiplano de Guatemala*. Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación, 1977.

COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). "Los refugiados guatemaltecos en México: Memoria de la COMAR (1982-1988)". México D.F.: noviembre de 1988.

Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo de Centroamérica (Comisión Sanford). *Pobreza, Conflicto y Esperanza: Un Momento Crítico para Centroamérica*. Durham y San José: Duke University. 1989.

Comisión Multipartita. "CPR de la Sierra: Informe de la Comisión Multipartita acerca de la visita realizada a las Comunidades de Población en Resistencia". Guatemala: abril de 1991.

Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos. "El Retorno de los Refugiados en el Extranjero". Ponencia presentada en el Diálogo Nacional, Guatemala: 1989.

Crónica. "El Oro Verde: un mito que agoniza", 17 de diciembre de 1987, pp. 25-26.

Davis, Shelton H. y Julie Hodson. *Witnesses to Political Violence in Guatemala: the suppression of a rural development movement*. Boston: Oxfam America, 1982.

Davis, Shelton H. "Introduction: Sowing the Seeds of Violence," en: *Harvest of Violence: The Maya Indians and the Guatemalan Crisis*. Ed. Robert M. Carmack. Norman and London: University of Oklahoma Press, 1988.

_____. "Land of our Ancestors: a Study of Land Tenure in Guatemala", (tesis). Harvard University, 1970. Citado en Elliot (1989).

"Declaración de Cartagena del Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios". Cartagena, Colombia: 19-22 de noviembre de 1984.

Diócesis de Huehuetenango. "La Diócesis y el Proceso de Repatriación 1987". Huehuetenango, Guatemala: 1987.

_____. "Proyecto Diocesano de Ayuda a Repatriados, 1988". Huehuetenango, Guatemala: 1988.

_____. (a). "Repatriación: una Incógnita". Huehuetenango, Guatemala: sin fecha.

_____. (b). "Ixcán: una Esperanza". Huehuetenango: sin fecha.

Diócesis de La Verapaz. "Informe sobre la situación de las parroquias, sus comunidades y sus catequistas o delegados". Cobán, Guatemala: mayo de 1982.

_____. "La Pastoral Social en la Diócesis de La Verapaz". Cobán, Guatemala: sin fecha.

Dirección General de Estadística. *VIII Censo de Población 1973, Cifras Definitivas*. Serie III, Tomo I. Guatemala: 1973.

_____. *III Censo Nacional Agropecuario*. Volumen I, Tomo I. Guatemala: 1979.

"Documento Resolutivo de la Primera Conferencia Internacional de Organizaciones No Gubernamentales sobre Refugiados, Desplazados y Retornados Centroamericanos". México D.F: marzo de 1989, pp. 8-9.

Duque, Vilma. "Diagnóstico de la Comunidad de Desplazados de Chicoj, Cobán, Alta Verapaz". Guatemala: Instituto de Cooperación Social, noviembre de 1990.

Earle, Duncan M. "Mayans Aiding Mayans: Guatemalan Refugees in Chiapas, Mexico," en: *Harvest of Violence: The Maya Indians and the Guatemalan Crisis*. Editado por Robert M. Carmack. Norman and London: University of Oklahoma Press, 1988.

Edwards, Beatrice y Gretta Tovar Siebentritt. *Places of Origen: The Repopulation of Rural El Salvador*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1991.

EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres). "Sebastián Guzmán, principal de principales", sin fecha, citado en "Movimiento indígena en Guatemala: 1970-1983", por Arturo Arias, *Movimientos Populares en Centroamérica*. Costa Rica: EDUCA, 1985.

Ejército de Guatemala. *Polos de Desarrollo y Servicios: Filosofía Desarrollista*. Guatemala: Editorial del Ejército, febrero de 1985.

_____. "El Retorno de los Refugiados", documento elaborado por la Zona Militar No. 19, Huehuetenango, marzo de 1987.

- _____. "Foro: 27 años de lucha por la libertad." Transcripción publicada en Inforpress Centroamericana, *Centro América 1988*. Guatemala: 1988.
- _____. "Suplemento Especial". Publicado en periódicos nacionales el 30 de junio de 1991. Guatemala: Departamento de Información y Divulgación del Ejército, junio 1991.
- Elliot, Elaine D. "History of Land Tenure in the Ixil Triangle". Antigua, Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), borrador no publicado, noviembre de 1989.
- Estados Unidos Mexicanos. "Informe sobre los Avances en la Ejecución del Plan de Acción Concertado en Favor de Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos". Presentado en la Primera Reunión del Comité Internacional de Seguimiento de CIREFCA, Nueva York: junio de 1990.
- _____. "Poblaciones Desarraigadas en México: Evolución de la Problemática, Políticas, Prioridades, Estrategias y Proyectos Propuestos por el Gobierno". Presentado en la Segunda Reunión del Comité Internacional de Seguimiento de CIREFCA, San Salvador, abril de 1992.
- Falla, Ricardo. *Quiché Rebelde*. Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala, 1980.
- _____. (a). "The Massacre at the Rural Estate of San Francisco -July, 1982". *Cultural Survival Quarterly*. Vol. 7, No. 1. Boston: 1983.
- _____. (b). "Genocidio en Guatemala: Proceso de masacres e interpretación indígena durante los primeros nueve meses del régimen de Ríos Montt". Trabajo presentado al Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid: 27-31 de enero de 1983.
- _____. (a). "El sábado 17 de julio de 1982," en *TRACE (Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre)*, No. 13. México: CEMCA (Centre d'Etudes Mexicaines et Centraméricaines), junio de 1988.
- _____. (b). "Struggle for Survival in the Mountains: Hunger and Other Privations Inflicted on Internal Refugees from the Central Highlands," en: *Harvest of Violence: The Maya Indians and the Guatemalan Crisis*. Editado por Robert M. Carmack, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1988.

- Fernández Fernández, José Manuel. *El Comité de Unidad Campesina: Origen y desarrollo*. Guatemala: Centro de Estudios Rurales Centroamericanos (CERCA), Cuaderno No. 2, 1988.
- Fledderjohn, David C. y David C. Thompson. *Final Report: Northern Transversal Strip Land Resettlement Project (AID Project No. 520-0233)*. preparado por *Agricultural Cooperative Development International*, bajo contrato con USAID, 1982.
- Gall, Francis, comp. *Diccionario Geográfico de Guatemala*, Tomo I. Guatemala: Instituto Geográfico Nacional, 1978.
- _____. *Diccionario Geográfico de Guatemala*, Tomo II. Guatemala: Instituto Geográfico Nacional, 1981.
- _____. *Diccionario Geográfico de Guatemala*, Tomos III y IV. Guatemala: Instituto Geográfico Nacional, 1983.
- Gallagher, Dennis y Janelle M. Diller. *CIREFCA: At the Crossroads between Uprooted People and Development in Central America*. Working Papers, No. 27, Washington D.C.: Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development. Marzo de 1990.
- Gramajo Morales, Héctor Alejandro. *La Tesis de la Estabilidad Nacional*. Guatemala: Editorial del Ejército, septiembre de 1987.
- Gressi Camposeco, Osbelí. "Necesidades educativas básicas de los niños repatriados a la región de los Huista del departamento de Huehuetenango", (tesis). Guatemala: USAC Facultad de Humanidades, Departamento de Pedagogía y Ciencias de la Educación, 1991.
- Guerra Borges, Alfredo. *Compendio de Geografía Económica y Humana de Guatemala*. 2a. Edición. Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala, 1986.
- Gurriarán, Javier. *La resistencia en Guatemala*. México: Editorial Nuestro Tiempo, 1989.
- Gutiérrez, Félix León. "Informe de consultoría, realizada en el marco de PRODERE para el área de Ixcán". Guatemala: octubre de 1989.
- Herrera, Neftalí Aldana. "El Cooperativismo". (Tesis), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1982.

IDESAC, SERJUS, y SOJUGMA. *El Fenómeno de las ONGs en Guatemala*. Guatemala, febrero de 1989.

IGE (Iglesia Guatemalteca en Exilio). *Nosotros conocemos nuestra historia*. México: IGE, 1987.

INE (Instituto Nacional de Estadística) (a). *Encuesta Sociodemográfica*, Vol. I. Guatemala: INE, agosto de 1989.

_____. (b). *Encuesta Sociodemográfica*, Vol. III. Guatemala: INE, agosto de 1989.

“Informe de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos elaborado por una ONG Internacional”. 1989.

Inforpress Centroamericana. “Campesinos Desaparecidos”. No. 175. 15 de enero de 1976, p. 14.

_____. “Conflicto Agrario en Alta Verapaz”. No. 177. 29 de enero de 1976, pp. 14-15.

_____. “Franja Transversal del Norte, ¿La Guatemala del futuro?” No. 203. 5 de agosto de 1976, pp. 10-11.

_____. “Puente aéreo a la Zona Reina”. No. 234. 17 de marzo de 1978, p. 8.

_____. “Movilización de tropas a Ixcán”. No. 291. 11 de mayo de 1977, p.11.

_____. *Guatemala Elecciones 1985*. Guatemala: Inforpress Centroamericana, 1985.

_____. “Informe Especial: Los Desplazados Salvadoreños”. No. 692, 5 de junio de 1986.

_____. “Creada Comisión para atender retorno de refugiados”. No. 712, 23 de octubre de 1986, p. 10.

_____. *Guatemala 1986: El año de las promesas*. Guatemala: Inforpress Centroamericana, 1987.

_____. “Esquipulas II: la guerra política,” en: *Centro América 1988*. Guatemala: Inforpress Centroamericana, 1988.

_____. “El Ejército recupera espacios”. No. 795, 7 de julio de 1988, pp. 11-13.

_____. “Desplazados buscan reconocimiento”. No. 908. 18 de octubre de 1990, pp. 7-10.

_____. “Informe Especial: Refugiados, desplazados y repatriados: los nuevos agentes de la guerra”. No. 968, 30 de enero de 1992.

INDE (Instituto Nacional de Electrificación). “Proyecto de Desarrollo Rural Integrado en los Municipios de San Juan Cotzal y Chajul, Estudio de Desarrollo del Río Chixoy, Segunda Etapa”. Vol. 1, Guatemala, junio de 1981.

INTA (Instituto de Transformación Agraria). “Programa de Desarrollo Integral de la Zona Norte de la República”. Guatemala: 1970.

_____. “Glosario de Términos de Uso Agrario”. Unidad de Planeamiento y Programación. Guatemala: 1986.

King, Arden R. *Cobán and the Verapaz, History and Cultural Process in Northern Guatemala*. Nueva Orleans: Middle American Research Institute, Tulane University, 1974.

Krueger, Christine (editora). *Guatemala: Government against the People: Witnesses of Indian Massacres, March-September, 1982*. Documento preparado para conferencia “Human Rights in Guatemala” auspiciado por Johns Hopkins School for Advanced International Studies and the Washington Office on Latin America, Washington D.C.: 1982.

_____. y Kjell Enge. *Security and Development Conditions in the Guatemalan Highlands*. Washington D.C.: Washington Office on Latin America, 1985.

Le Monde Diplomatique en Español. “Guatemala: ¿Un país que se construye en la guerra?” América Latina, octubre de 1979.

Lovell, George W. *Conquest and Survival in Colonial Guatemala: A Historical Geography of the Cuchumatán Highlands 1500-1821*. Kingston y Montreal: Queen's University Press, 1985. Citado en Elliot, 1989.

_____. “Mayan Survival in Ixil Country”. *Cultural Survival Quarterly*. Vol. 14, No. 4. Boston: 1990, pp. 10-12.

MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación). “Anexo 1, Plan Maestro de Desarrollo Integral Agrícola de la Franja Transversal del Norte.” Unidad Sectorial de Planificación Agrícola. Guatemala: 1979.

_____. "Clasificación de Zonas de Vida de Guatemala, a Nivel de Reconocimiento." Guatemala: 1982.

_____ y USPADA (Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria y de Alimentación). "Caracterización Sectorial y Regional de la Agricultura en Guatemala". Guatemala, 1989.

Manz, Beatriz. "The Forest Camps in Eastern Chiapas, Mexico", *Cultural Survival Quarterly*. Vol 8. Boston: 1984, pp. 50-52.

_____ (a). *Refugees of a Hidden War: The Aftermath of Counterinsurgency in Guatemala*. Albany: SUNY Press, 1988.

_____ (b). "The transformation of La Esperanza, an Ixcán Village," en *Harvest of Violence*. Editado por Robert M. Carmack, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1988.

_____ (c). *Repatriation and Return: An Arduous Process in Guatemala*. Washington DC: HMP/CIPRA, 1988.

Martín-Baró, Ignacio (S.J.+). "La institucionalización de la guerra." Conferencia pronunciada en el XXII Congreso Interamericano de Psicología celebrado en Buenos Aires, del 25 al 30 de 1989.

MCTOP (Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas). "Desarrollo Integral Triángulo Ixil: Marco General 1989". Guatemala: 1989.

Mérida Vasquez, César. *Monografía de Huehuetenango*. Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra, 1984.

Messmacher, Genovés, Nolasco et. al. *La Dinámica Maya*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Montes, Segundo (S.J. +). *Desplazados y refugiados salvadoreños*. San Salvador, El Salvador: Instituto de Investigaciones de la Universidad Centroamericana de El Salvador "José Simeón Cañas" (UCA), mayo de 1984 a junio de 1985.

_____. *Refugiados y repatriados. El Salvador y Honduras*. San Salvador, El Salvador: Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), mayo de 1989.

Morrissey, James. "A Missionary Directed Resettlement Project among the Highland Maya of Western Guatemala." Tesis de Postgrado, Departamento de Antropología, Stanford University, 1978.

Noticias de Guatemala. "El caso de Ixcán". Año 11, No. 160, México: enero de 1989, pp. 3-9.

OIM/CEAR (Organización Internacional de Migraciones/Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados). "Caracterización de la Población Repatriada en Guatemala: Período Enero 1987-Diciembre 1991". Volumen II. Guatemala: 1992.

ONU (Organización de las Naciones Unidas), Comisión de Derechos Humanos. "Resolution 1991/25, Internally Displaced Persons". Nueva York: 26 de febrero de 1991.

Painter, James. *Guatemala: False Hope, False Freedom*. Londres: Latin American Bureau Ltd, Segunda Edición, 1989.

Parroquia de San José, Ixcán. "Ixcán, Resurrección 2000". Xalbal, Quiché: abril de 1991.

PAVA (Programa de Ayuda para los Vecinos del Altiplano). *Final Report*. Washington D.C.: USAID Project No. DR-520-84-04, 1984.

Payeras, Mario. *Días de la Selva*. México D.F.: Editorial Nuestro Tiempo, 1981.

Payne, Beth. "The Protection of Internally Displaced" borrador distribuido por Refugee Policy Group, Washington D.C., enero de 1988.

Pedroni, Guillermo. *Territorialidad Kekchí, una aproximación al acceso a la tierra: la migración y la titulación*. Debate No. 8. Guatemala: FLACSO, enero de 1991.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). "Los desplazados, refugiados y repatriados en el marco del desarrollo económico y social de Centroamérica". Ponencia ante la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), mayo de 1989.

PNUD/PRODERE (Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo/Programa de Desarrollo para Refugiados, Desplazados y Repatriados). "Plan Operativo del Sub-programa Guatemala". Vols. I, II, III. Guatemala: 1990.

Presidentes de Centroamérica. "Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centro América". Reproducido en *Inforpress Centroamericana*, No. 751. Guatemala: 13 de agosto 1987.

República de Guatemala. "Diagnósticos, Estrategia y Propuestas de Proyecto". Presentado en CIREFCA, Guatemala: mayo de 1989.

_____. "Informe sobre los Avances en la Ejecución del Plan de Acción Concertado en Favor de Refugiados, Repatriados, y Desplazados Centroamericanos". Presentado en Primera Reunión de Seguimiento de CIREFCA, junio de 1990.

Revista Militar. "Operación Ixcán". Guatemala, Vol. 13, julio-agosto 1977. pp. 25-42.

_____. "Operación Ixil: Una apreciación de Asuntos Civiles para la Región Ixil". Guatemala, No. 27, septiembre-diciembre, 1982.

Samandú, Luis et al. *Guatemala: Retos de la Iglesia Católica en una sociedad en crisis*. Costa Rica: Editorial DEI, 1990.

Salvadó, Luis Raúl. *The other refugees: a study of non-recognized Guatemalan refugees in Chiapas, Mexico*. Washington D.C.: CIPRA, 1988.

Sandoval, Leopoldo. "Dos tipos de finca cooperativa como alternativas para la Reforma Agraria en Guatemala", (tesis). Guatemala: Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos, 1963.

Secretaría de Asuntos Políticos de la Presidencia de la República. "Programa de Asistencia a Viudas y Huérfanos Menores, Víctimas de la Violencia". Guatemala: 1979.

SEGEPLAN (Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica). "Plan Regional de Huehuetenango". Guatemala: 1983.

_____. "Plan de Desarrollo del Departamento de El Quiché, 1983" citado en Ejército de Guatemala, *Polos de Desarrollo*. Guatemala: Editorial del Ejército, 1985.

_____. "Diagnósticos Regionales Preliminares". Guatemala: 1987.

SEGEPLAN-PNUD (Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). "Apoyo a la Planificación del Desarrollo Regional". Proyecto GUA-87-010, Documentos Preliminares. Guatemala: septiembre de 1989.

Simons, Marlise. "Massacres spread terror in the land of the Mayas". *New York Times*, 15 de septiembre de 1982, p. A2.

Shawcross, Michael. "Investigation of reported massacre of Finca San Francisco Nentón". fotocopia, 1983.

Stewart, Stephen O. et al. "Evaluation of the CARE administered Cardamom Cultivation and Comercialization Project, Playa Grande, Ixcán, 1984-87". Guatemala: marzo de 1988.

Stoll, David. "Evangelicals, Guerrillas and the Army: The Ixil Triangle under Rios Montt," en: *Harvest of Violence: The Maya Indians and the Guatemalan Crisis*. Editado por Robert M. Carmack, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1988.

_____. "The Land no Longer Gives: Land Reform in Nebaj, Guatemala". *Cultural Survival Quarterly*. Vol. 14, No. 4. Boston: 1990, pp. 4-9.

Unidad Conjunta ACNUR/PNUD de Apoya a CIREFCA. "Informe de Avance de la Ejecución del Plan de Acción Concertado de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)". San José, Costa Rica: marzo de 1991.

Universidad Rafael Landívar, Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología Agrícola (ICATA). *Perfil Ambiental de la Republica de Guatemala*, Tomo II. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, mayo de 1987.

USAID/Washington and Development Associates. *Tierra y Trabajo en Guatemala: Una Evaluación*. Guatemala: Ediciones Papiro, 1982.

USAID Misión en Guatemala, basada en un reporte preliminar elaborado por Philip A. Dennis, et al. de Texas Tech University. *Evaluation of the Ixcán Colonization Project (520-T-026) Guatemala*. Oficina de Desarrollo Rural AID/Guatemala, enero de 1984.

Veterinarios Sin Fronteras. "Proyecto de Desarrollo Pecuario en Ixcán Grande, Informe de fin de proyecto." Guatemala, octubre de 1988.

Wilson, Richard. "Machine Guns and Mountain Spirits: the Cultural Effects of State Repression among the Q'eqchi' of Guatemala". Borrador no publicado, junio de 1990.

WOLA (Washington Office on Latin America). *Who pays the Price: The Cost of War in the Guatemala Highlands*. Washington D.C.: abril de 1988.

_____. *Uncertain Return: Refugees and Reconciliation in Guatemala*. Washington D.C.: mayo de 1989.

Índice de mapas, gráficas, cuadros y fotos

Mapas			
1.	Ubicación de los departamentos bajo estudio	9	
2.	Guatemala: Elevación sobre el nivel del mar	10	
3.	Áreas lingüísticas en los departamentos bajo estudio	12	
4.	Municipio de Ixcán y colindancias: algunas comunidades, vías y ríos principales	17	
5.	Comunidades en el norte del municipio de Nentón	66	
6.	Algunas comunidades en los municipios ixiles: Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal	91	
7.	Municipio de Cobán y colindancias: vías principales y puntos de referencia	127	
8.	Municipios de los departamentos de Alta y Baja Verapaz	131	
Gráficas			
1.	Guatemala: Categorías de poblaciones desplazadas y retornadas	6	
2.	Concentración de la tierra: Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango	14	
3.	Repatriados dentro de programas oficiales, Guatemala: 1984-1990	36	
4.	Área Ixil: desplazados retornados, 1985-1991	103	
Cuadros			
1.	Indicadores demográficos por región, 1989	11	
2.	Indicadores de nivel de bienestar y empleo por región y departamento, 1989	13	
3.	Ubicación de refugiados guatemaltecos reconocidos oficialmente en México, 1990	33	
4.	Comparación de cifras oficiales de repatriados dentro de programas oficiales, Guatemala: 1987-1990	37	
5.	Destino declarado de repatriados registrados por ACNUR, según departamento, enero de 1985 a diciembre de 1990	41	
6.	Ixcán: repatriados asentados en comunidades de mayor recepción, enero de 1985 a diciembre de 1990, y datos de referencia	44	
7.	Nentón: repatriados asentados en comunidades de mayor recepción, enero de 1985 a diciembre de 1990	78	
8.	Refugiados y desplazados en Centro América a marzo de 1990	171	
9.	Refugiados y desplazados en Centro América a marzo de 1992	172	
10.	1991: Proyectos a ejecutarse con fondos internacionales en las áreas de estudio	172	
Fotos:			
	Patrulleros en la puerta de la iglesia de Xix, Nebaj		viii
	Niños refugiados en la escuela del campamento San Caralampio, Chiapas, México.		88
	Grupo de refugiados regresando a Guatemala desde México		88
	Mujer q'eqchi' desplazada interna bajo la protección de la Iglesia Católica en Cobán, Alta Verapaz (de los grupos que "bajaron" con la protección de la Iglesia)		154
	Familia ixil desplazada-retornada regresando a Bicalamá		154
	San Antonio Tzeja, Ixcán: desplazados retornados originarios de San Antonio, junto con repatriados cuyas tierras en otras aldeas estaban ocupadas. El gobierno mandó a estos últimos a tomar tierras en San Antonio, creando así las bases para otro conflicto cuando los originarios de allí también quisieran regresar		162
	Siembra de maíz en Bicalamá, Nebaj, Quiché		162

Siglas utilizadas

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
BANDESA	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
CAMINOS	División General de Caminos del MCTOP
CCPP	Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México
CEAR	Comisión Especial para la Atención de Repatriados ^{1/}
CIREFCA	Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos
CNR	Comisión Nacional de Reconciliación
COMAR	Comisión Mexicana de Atención a Refugiados
CONATIERRA	Comisión Nacional de la Tierra
CPR	Comunidades de Población en Resistencia
CRN	Comité de Reconstrucción Nacional
CUC	Comité de Unidad Campesina
DIGESA	Dirección General de Servicios Agrícolas
DIGESEPE	Dirección General de Servicios Pecuarios
ICTA	Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola
INACOP	Instituto Nacional de Cooperativas
INDECA	Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
INE	Instituto Nacional de Estadística
INTA	Instituto Nacional de Transformación Agraria
FTN	Franja Transversal del Norte
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MCTOP	Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas
MINDES	Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural
ONG	Organización No Gubernamental
PAC	Patrullas de Autodefensa Civil ^{2/}
PAVYH	Programa de Asistencia para Viudas y Huérfanos Menores Víctimas de la Violencia
PEC	Programa Especial para Centroamérica (de las Naciones Unidas)
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRODERE	Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados
SEGEPLAN	Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica
USAID	Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos

^{1/} A partir de febrero de 1992, CEAR cambió a la Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados conservando las mismas siglas.

^{2/} Conocidos oficialmente como Comités Voluntarios de Defensa Civil a partir de 1986.

Epílogo:

De las cartas de Myrna Mack

La muerte de Myrna ocurrió escasamente un mes después de que había dado por terminada la etapa de investigación de campo de este proyecto. En el ínterin, apenas había empezado a discutir con su equipo y asociados el enfoque metodológico y la estructura que daría al informe final. En ausencia de la mayor parte de elementos y criterios que podían haber procedido de su comprensión y percepción del alcance del material que había acumulado, el esfuerzo de sus colegas y colaboradores por producir este informe ha sido extremo, ha tomado una gran cantidad de tiempo y, sobre todo, ha significado una gran carga emocional. Ningún trabajo póstumo es fácil o liviano.

Puesto que nunca sabremos si este informe de investigación hubiera sido satisfactorio para nuestra inquieta y acuciosa amiga y compañera, pensamos en incluir en el frontispicio de esta publicación una inscripción inicial que fuera, en efecto, una cita textual de Myrna en relación con su trabajo. Recurrimos a una de las personas, amigo y colega a su vez, con los que sabíamos que Myrna mantuvo correspondencia durante ese período, con la esperanza de encontrar entre sus comunicaciones personales algún fragmento que validara y pusiera en contexto, al menos, su experiencia en esta investigación.

La respuesta de su corresponsal sobrepasó nuestras expectativas. No recibimos una cita, sino una selección de fragmentos de sus cartas que abarcan desde mayo de 1988 hasta diciembre de 1989 y que revelan, más allá de las dificultades y condiciones de su trabajo de antropóloga, dimensiones humanas, íntimas, conflictivas de la confrontación entre sus sentimientos y su responsabilidad profesional.

El rigor de la investigación científica exige de todo investigador un profundo esfuerzo por mantener un alto grado de objetividad con respecto al tema de estudio. El esfuerzo parece aceptable cuando este tema tiene que ver con abstracciones o con materias inertes, pero es parte de la

tragedia implícita en la opción de la investigación social, el hecho de tener como objeto de estudio al ser humano mismo. Uno se debate constantemente entre la humanidad del objeto y la objetividad con que debe ser analizado. Cuando triunfa la responsabilidad profesional del investigador, la fría redacción del informe final da fe de su rigor teórico y metodológico y su impersonalidad se convierte en garante de seriedad y mesura.

Lo que esa objetividad y esa impersonalidad no revelan ni reconocen es la dimensión humana del investigador, su íntimo cansancio producto de ese esfuerzo por disociar el hecho del sentimiento, los almacigos de nuevas dudas que han germinado en su interior.

Estos breves fragmentos de las cartas de Myrna a un amigo hablan de esta otra cara del investigador. Proviene de cartas que nunca fueron pensadas para ser leídas por alguien más que el destinatario. Están escritos en un lenguaje directo, sin pretensiones. Y marcan, espaciadamente, distintos momentos en sus dos últimos proyectos de investigación. Incapaces de seleccionar una sola frase, hemos preferido incluir todos los fragmentos en este epílogo a manera de notas al margen. Un margen en el que, de muchas formas, estuvimos también sus colegas, sus colaboradores y sus amigos.

29 de mayo de 1988

Lo que me molesta es eso de sólo platicar con la gente, sacarle su triste experiencia y hasta allí... Veo mi trabajo reducido a la extracción.

24 de junio de 1988

Estas idas han sido una experiencia riquísima de todo. Estoy bastante agradecida por la oportunidad que se me ha dado de viajar pero a ver cómo retorno algo que valga la pena. Realmente me siento bien con la gente campesina. Me produce algo bueno –no sé qué con precisión– el hecho de estar con ellos, escucharlos y acompañarlos un rato con la conversación. Duele mucho el dolor de ellos, su tristeza, frustración, impotencia... ¿Será que no habrá una luz para ellos?

Pero siempre salen cosas interesantes en estos lugares. Estuve todo el día siguiente en el destacamento y pude entrevistar a las autoridades de allá. Conversé también con una muchacha que trabaja en Asuntos Civiles,

y como nos agarró la lluvia nos quedamos platicando de asuntos libres. Me sacudió la parte de su vida que pudo contarme y no pude dejar de reconocer que sufre y tiene tanto dolor como el resto de su pueblo. Está enamorada de un ladino del pueblo y 4 años más joven que ella. Está herida porque el papá de él ya la insultó por ser “india” y acusarla de que lo que quiere es “el dinero de mi hijo”. Pero “yo lo quiero” dijo, “tiene ojos verdes y parece gringuito...”. Ella también ha sufrido los azotes de los años pasados con la muerte de su papá y dos hermanos, pero dice que quiere ayudar a su gente y por eso se fue a trabajar con ellos. Es complejo todo y me di cuenta que independientemente de dónde se esté, la gente del pueblo, sobre todo de ese pueblo, tiene una gran necesidad de hablar, de contar, de llorar su vida con alguien que ofrezca un poco de compañía. Al día siguiente, cuando me vio por la calle, corrió y me abrazó y me dijo que se le había olvidado decirme que necesitaba juegos para los niños y algo que les quitara los piojos... ¿Cómo procesar todo esto? Alguna idea tengo pero no sé si suficiente.

1 de noviembre de 1988

La verdad es que nunca me imaginé el trabajo que representa eso de poner todo en limpio y en orden. Apenas te da un respiro para pensar un poco antes de escribir, aunque creo que ha sido al ir escribiendo que nos hemos puesto a analizar más profundamente. La experiencia ha sido enorme y estoy, relativamente, bastante satisfecha por todo lo que aprendí. Lo que es una lata es el espacio que nos dieron como margen. Prácticamente no puedes poner nada de la riqueza de los testimonios que has recogido...

El otro año de todos modos ya habíamos pensado en hacer un “seguimiento”. Pero al estructurar ese “seguimiento” resultó ser un proyecto mucho más grande que el actual. Vamos a tomar ya no sólo a los desplazados sino también a los repatriados, que a su vez significa visitar a los refugiados. De tal manera que estaríamos tomando Alta Verapaz, el Triángulo, Ixcán, Huehuetenango, y campamentos en México, sin descartar el D.F. Lo bueno es que hemos encontrado interés para el financiamiento. Ojalá se consiga para el proyecto pues el presupuesto es alto, aunque ahora es con duración de 15 meses. Incluye dos trabajos preliminares a ser publicados como “avances de investigación”. Me da bastante miedo este proyecto porque no sé hasta dónde nos vamos a dar abasto. Hemos pensado en 4 personas pero el problema es quién(es)...

Hasta hace poco, yo no había pensado en seguir con el tema... Así, había decidido hacer algo en el área cakchiquel para explorar los cambios en la economía campesina, centrándome en la producción de exportación no tradicional (por qué ya no milpa y sí endivias, okra, bruselitas, apio, etc.). Pero la atracción del otro tema rebasó mis intenciones y aquí estoy, preparándome un poco para el otro año.

7 de abril de 1989

Pasando a otras cosas. Te cuento que también, hace como 15 días me fui de gira por las aldeas de las Verapaces. Están bien bien aisladas. Ahí ver clavos ya es “alta tecnología”. Acompañé al Padre y de una vez me sirvió para el estudio. Fue una jornada algo bastante dura no sólo por la caminata (subidas y bajadas) sino también por el ritmo diario de visitas a las aldeas. Visitamos alrededor de 9 en cinco días. Hubo días en que el Padre daba dos misas al día. Fue una gira preciosa por todo lo que uno aprende y, por otra parte, te inundás de tristeza al ver la miseria que se desborda por todos lados. Sumale también la impotencia de hacer algo. Hubo un caso trágico: se trataba de un niño (3 años pero que parecía de 1) que tenía ya como tres meses de estar enfermo. Empezó con diarrea pero ya nunca se recuperó. Cuando lo vimos estimamos que se moriría ese día o al día siguiente y lo único que hizo el Padre fue rezarle unas oraciones... Los padres desesperados habían tratado de bajarle la fiebre con hojas calientes; pero las hojas, nos imaginamos, habían estado tan calientes que le habían quemado todo su cuellito y tenía todavía las marcas. Ha de haber tenido quemaduras de tercer grado... ¿Qué hacer? Si lo llevábamos al hospital de la cabecera departamental, lo más probable es que no aguantara el viaje y se muriera en el camino. Así que se decidió que mejor, si ya se iba a morir pues que se muriera con su familia... Y los llantos de la mamá, abuela, etc. ya te imaginás cómo lo pone a uno. Eso era nada más uno de los tristes cuadros que tenemos por acá.

Este año me ha tocado viajar mucho. A México y Centro América y, por supuesto, al interior del país. Tienes razón, me dan mucha fuerza los viajes al interior. Porque me siento más cerca de la gente, y en estos momentos, porque me hacen olvidar otras cosas que me hieren. He conocido nuevos lugares y en todos, se entremezcla la belleza y la tristeza. Se ve que hay una lucha silenciosa por no dejarse vencer, por no dejarse dominar por el dolor y la desesperanza. Pero los pequeños cambios van a un ritmo de suma “baja intensidad” y con un costo social demasiado alto...

4 de julio de 1989

Me gusta cuando siento que entran en mis venas las montañas vivas, completas con sus ríos, su frío, su calor. Y me dan fuerzas cuando entran juntamente con sus pueblos que cargan miseria, dolor y tristeza. Por supuesto que todo esto es sólo parte del episodio mientras no llegue el sentimiento de frustración sobre el qué hacer.

16 de diciembre de 1989

Mi último viaje, ahora a finales de noviembre y principios de diciembre fue a una aldea de Chajul. Estuvimos ocho días y fue una experiencia muy rica. Al final la gente nos agarró afecto (ya habíamos ido antes) y ya nos buscaba para que fuéramos a visitarlos. Hay una enorme necesidad de ser escuchados. No deja de seguir frustrándome la incapacidad de brindar una ayuda más concreta.